

Revista Foro

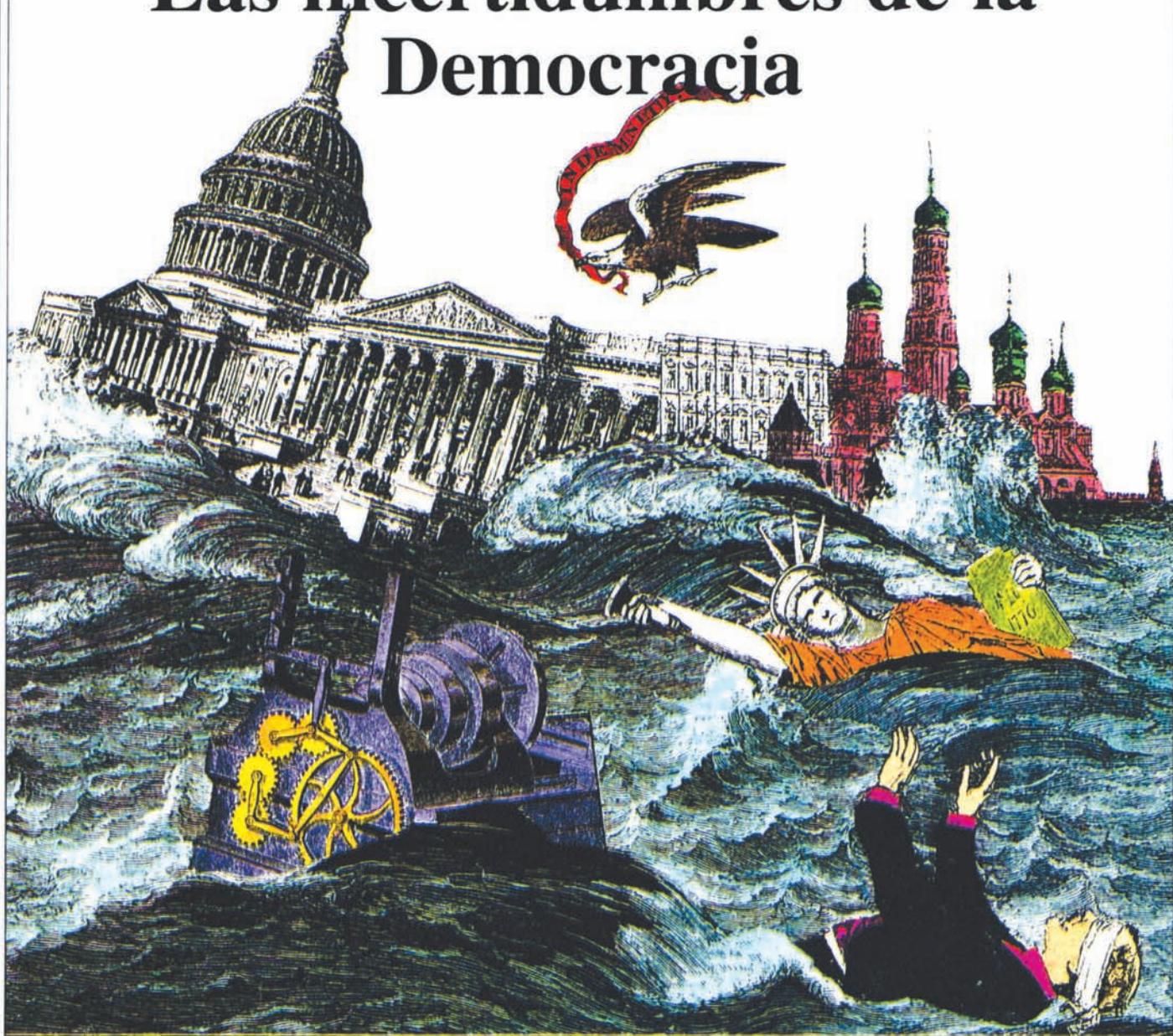
Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia

No. 24

Septiembre de 1994

Valor \$3.500.00

Las incertidumbres de la Democracia



**Revista Trimestral de la Fundación
Foro Nacional por Colombia**

No. 24 \$3.500 Septiembre 1994

Director:
Pedro Santana Rodríguez

Editores:
Hernán Suárez J.
Luz Eugenia Sierra M.

Comité Editorial:
Eduardo Pizarro Leongómez
Orlando Fals Borda
Ricardo García Duarte
Rocío Londoño Botero
Jorge Bernal Medina

Colaboradores Internacionales:
Eduardo Galeano (Uruguay), Jorge Enrique Hardoy†, Hilda Herzer, Mario Dos Santos (Argentina), Edison Nunes (Brasil), Alfredo Rodríguez, Alex Rosenfelt (Chile), Gustavo Riofrío, Federico Arnillas (Perú), Fernando Carrión, Jorge García (Ecuador), John Turner (Inglaterra), David Slater (Holanda), Juan Díaz A. (España).

Junta de Socios: Humberto Arboleda, Francisco Mejía, Eduardo Pizarro, Pedro Santana, Fabio Velásquez, Enrique Vera, Edgar Velásquez, Wilson Roca, Marfa Clara Echeverría, Ro-
cio Londoño, Marco Toro.

Gerente:

Diagramación:

Carátula e ilustraciones:

Impresión:
Gente Nueva Editorial

Distribución y suscripciones:
Cra. 3A No. 26-52
Teléfonos: 2840582 - 2433
Fax: 2861299
Apartado Aéreo 10141
Santa Fe de Bogotá - Colombia

Licencia:

Tarifa Postal Reducida: N° 662

ISSN: 0121-2559

Contenido

Editorial

- ## 1 El tiempo de los derechos humanos en Colombia

Ideología y Sociedad

- 4 Entrevista con Gianni Vattimo:
Interrogantes al *pensamiento débil* **Ramón Pérez Mantilla**
Rocío Londoño Botero

Las incertidumbres de la democracia

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 13 | La democracia radical
¿moderna o posmoderna? | <i>Chantal Mouffe</i> |
| 24 | Nuevas democracias:
¿qué democracias? | <i>Francisco Weffort</i> |
| 39 | Las apuestas de la democracia
en Sudamérica | <i>Juan Carlos Portantiero</i> |
| 53 | La democracia contemporánea y
la crisis de los partidos | <i>Rubén Sánchez David</i> |

Partidos Políticos

- 57 Entrevista con Antonio Navarro:
¿Qué pasó con la ADM-19? "Nos disolvimos políticamente"

63 La Alianza Democrática M-19:
¿una tercera fuerza frustrada? *Adolfo Álvarez*
Hernando Urdaneta

Unbalance electoral

- Un balance electoral
76 Franja electoral y opinión crítica
en Colombia *Oscar Delgado*
Miguel Eduardo Cárdenas

Cultura y Sociedad

- 90 Los conceptos de imagen y de política en Lezama Lima *Germán Vargas Guillén*

En Memoria

- 98 El futuro de la ciudad
de América Latina *Jorge Enrique Hardoy*

Editorial

El tiempo de los derechos humanos en Colombia

“...el tema de los derechos humanos ha estado presente constantemente en la retórica de la administración del presidente Gaviria, pero no en la práctica. La lectura de las cifras arrojadas por este informe sobre el comportamiento de los agentes del Estado y particularmente el de los cuerpos de seguridad, permite afirmar que los esfuerzos gubernamentales por mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia han sido o bien insuficientes o bien poco efectivos. Las actuaciones de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, denunciadas ante la Procuraduría General de Nación, no reflejan la preocupación del ejecutivo por ceñir su comportamiento al pleno respeto por los derechos humanos”.

Procuraduría General de la Nación, III Informe sobre derechos humanos en Colombia 1993-1994, Santafé de Bogotá, 1994.

La Procuraduría General de la Nación acaba de publicar su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia que sólo incluye las denuncias por violación de los derechos humanos dirigidas contra funcionarios públicos, que por atribución legal corresponde a este organismo. Como bien lo señala el informe, “La Procuraduría trabaja con base en las quejas que le llegan y sólo en algunos casos en razón del conocimiento propio de los hechos. Esto genera lo que para efectos de estos informes, hemos dado en llamar una subfacturación de los datos. La reducción –para 1993– es de aproximadamente un 16% sobre el total de las quejas reportadas durante 1992” (p. 9).

Esto quiere decir que la situación es peor de la que describe el informe, ya de por sí suficientemente grave. En términos concretos el informe no describe la situación global, dado que no todas las violaciones que se presentan son denunciadas por las víctimas o por allegados a las mismas y en segundo lugar, el informe no contempla –pues no es del resorte de la Procuraduría– la violación de los derechos humanos que realizan otros agentes tales, como por ejemplo, la guerrilla o los grupos de delincuencia ligados con el narcotráfico o con la delincuencia común. El informe sólo registra violaciones cometidas por funcionarios públicos y denunciadas por las víctimas o por sus allegados.

En el informe se describe de manera muy objetiva el aumento de las violaciones de los derechos humanos durante el año de 1993. Si bien disminuyó en las detenciones y lesiones en un 6%, se incrementaron de manera alarmante las denuncias por torturas –los hechos reportados aumentan por lo menos en un 23% con respecto al año anterior–, los homicidios aumentaron un 18% y los malos tratos, se multiplicaron de un año a otro, siete veces. Lo más impresionante de los datos es el hecho de que estos aumentos son evidentes a pesar de la reducción numérica de las quejas. También aumentaron porcentualmente los allanamientos. Las masacres (14) y la práctica de la desaparición forzada (234) están lejos de desaparecer aunque, según el informe, disminuyeron durante el último año.

En los últimos tres años fueron víctimas de la desaparición forzada 785 personas y se denunciaron 992 crímenes por agentes del Estado. 635 ciudadanos denunciaron torturas y tratos crueles. También el informe describe el aumento preocupante de las



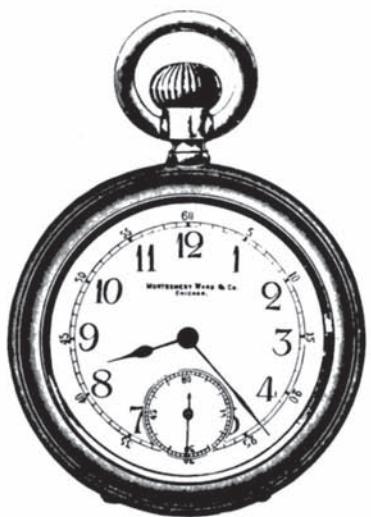
violaciones graves a los derechos humanos (masacres, homicidios, desapariciones forzadas y torturas). La principal institución denunciada por abusos contra la población y por violación manifiesta a los derechos humanos es la Policía Nacional y en segundo lugar, las Fuerzas Militares. Contra el primer organismo se dirigieron el 45% de las quejas y contra el Fuerzas Militares el 30% del total. Las violaciones más graves contra los derechos humanos las realizan las Fuerzas Militares y ocurren principalmente contra la población campesina.

Resulta por demás desconsolador para la realidad de los derechos humanos en el país las respuestas que, año tras año, dan los altos mandos tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares ante los informes de la Procuraduría. Ya estamos cansados—y hasta un tanto irritados— los colombianos de bien y los demócratas con esta terrible situación. Se cuestiona de los informes de la Procuraduría que no incluya las violaciones realizadas por la guerrilla o el narcotráfico, cuando bien saben estos mandos militares y policiales que constitucional y legalmente no corresponde esta labor a la Procuraduría. Con esto se trata de demostrar que los informes de este organismo son parcializados. Desde la perspectiva de los altos mandos militares, los organismos que se ocupan de la defensa de los derechos humanos aun siendo estatales como es el caso de la Procuraduría, son aliados o idiotas útiles de la subversión.

El segundo argumento es que la violación se produce por parte de elementos aislados y que se trata de brotes de indisciplina que se superarán. Año tras año se responde a las denuncias y los informes con medidas simbólicas. En esta ocasión se entregó a los miembros del ejército una tarjeta de normas sobre los derechos humanos que deben portar permanentemente todos los miembros de la institución y que contienen los principios de respeto a los derechos de las personas. Lo que el país está demandando no son medidas simbólicas, sino que cesen las prácticas ilegales y el irrespeto que miembros de las instituciones armadas del Estado, es decir, los organismos que hacen uso legítimo de la fuerza, cometan contra ciudadanos, las más de las veces ajenos al conflicto armado que se registra en el país. No nos cansaremos de repetir en estas mismas columnas lo que hemos dicho ya a lo largo de los últimos siete años: las fuerzas armadas y de policía son los depositarios legítimos del uso de la fuerza, pero, para que lo sean, sus actuaciones deben sujetarse al Estado Social de Derecho en el que precisamente descansa esa legitimidad. Insistimos también que la impunidad en que quedan la mayor parte de los crímenes cometidos por miembros de las instituciones armadas del Estado se convierte en el principal estímulo a las prácticas ilegales que practican miembros de estas instituciones.

El reciente informe de la Procuraduría menciona los principales factores de esa impunidad. En primer lugar, la inoperancia, lentitud y laxitud de la Justicia Penal Militar que es proclive a calificar la violación de los derechos humanos como actos que se registran en la prestación del servicio. En segundo lugar, la no tipificación de esas conductas delictivas e ilegales como delitos, tal es el caso de la desaparición forzada. Como se conoce, el Congreso de la República aprobó recientemente una ley que tipifica el delito de la desaparición forzada tal como lo manda la Constitución Nacional de 1991. Pero, pese a la gravedad de este delito, como lo registran las cifras que suministra el informe de la Procuraduría, el presidente César Gaviria objetó la ley y se abstuvo de sancionarla. Esta actitud del gobierno confirma que en materia de derechos humanos no existe voluntad política para encarar el problema estructural y de fondo.

Las objeciones del presidente Gaviria a la ley de desaparición forzada se refieren a tres de sus conceptos fundamentales: la investigación y sanción judicial en los tribunales de la justicia ordinaria, esto es, la no procedencia para este delito—cuando sea cometido por uniformados— de la llamada Justicia Penal Militar; el proyecto de ley establece que



no es causal que exima de responsabilidad a quien cometa el delito, la aceptación del principio de obediencia debida, dado que éste es un delito de lesa humanidad que atenta contra el principio básico sobre el que se levanta el Estado Social de Derecho, cual es el derecho a la vida, y finalmente, el proyecto establece drásticas sanciones de carácter penal a los funcionarios oficiales a quienes se compruebe su participación en la desaparición de personas en Colombia.

Este abominable delito ha tomado fuerza en Colombia debido a la impunidad reinante. Cada dos días se desaparece una persona en el país. En la mayoría de los casos denunciados no hay detenidos, los procesos no avanzan y la Justicia Penal Militar alega siempre que el delito se cometió en "actos en relación con el servicio" como si la seguridad del Estado fuera una patente de corzo para "llevarse las personas" y asesinarlas a sangre fría. Precisamente este delito ha sido calificado como de lesa humanidad porque no hay mayor arbitrariedad que aquella que comete un Estado o los funcionarios que actúan en su nombre de detener ilegalmente a personas de las que nunca más se vuelve a saber, y que esto lo hagan agentes del Estado le da una mayor gravedad al delito. En buena parte la deslegitimación de las autoridades y de nuestras fuerzas armadas tiene que ver con esta repudiable práctica.

La grave situación que registra el país en materia de derechos humanos requiere con urgencia medidas efectivas para superarlas. No habrá democracia real y efectiva en Colombia mientras sean los propios organismos de seguridad del Estado uno de los factores principales de violación de los mismos. Bajo ninguna circunstancia los organismos armados del Estado deben ser encubiertos por delitos contra los ciudadanos. La legitimidad de las instituciones armadas del Estado descansa en la sujeción a las normas y a los derechos de los ciudadanos. Prevalen en un Estado democrático los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre consideraciones de orden público o la seguridad de las instituciones. A lo sumo, en cualesquiera de los estados de excepción podrán restringirse sólo algunos derechos, como lo señalan la Constitución y la ley estatutaria que los regula. Bajo ningún argumento son permitidos los tratos crueles e inhumanos y, mucho menos, el asesinato o la desaparición forzada. Así como hay que condenar los desmanes de la guerrilla o del narcotráfico que violan los derechos de las personas, con mayor énfasis hay que hacerlo cuando estas violaciones son ejecutadas por los organismos de seguridad del Estado, cuya función es precisamente, garantizar los derechos de las personas y fundamentalmente el derecho a la vida. La legitimidad del uso de la fuerza se sustenta en la vigencia de este principio básico.

Para mejorar la situación de los derechos humanos hay que ir mucho más allá de las tarjetas entregadas a los militares. Por lo menos hay que emprender cinco acciones: 1) Ratificar por parte del Congreso la tipificación del delito de desaparición forzada. La legislación debe garantizar los derechos de los denunciantes y testigos de los delitos que violen manifiestamente los derechos humanos. 2) Reformar a fondo la Justicia Penal Militar y excluir de ella todos aquellos delitos de lesa humanidad. 3) Hay que responsabilizar a los altos mandos militares de las conductas de sus subordinados, como acertadamente lo señala el informe de la Procuraduría. 4) Dar efectivos medios de protección a los denunciantes y testigos de estas violaciones a los derechos humanos. Sólo así podemos combatir la impunidad y avanzar en la prevención del delito. 5) Hay que renovar esfuerzos en la educación de soldados y policías, pero también de los altos mandos militares, sobre lo que significa la defensa de los derechos humanos como fuente y base de la legitimidad del Estado de Derecho.

Los colombianos militantes de la democracia deberíamos emprender acciones decididas para garantizar estas reformas. La modernidad y la democracia son sólo posibles sobre la base del respeto por la vida●



Gianni Vattimo

Nacido en Turín en 1936, profesor de Filosofía Teórica en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma ciudad, Vattimo es hoy, sin lugar a dudas, una de las figuras más sugestivas de la filosofía contemporánea, de amplio renombre no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos y América del Sur.

Discípulo de Gadamer en Heidelberg y traductor al italiano de su libro *Verdad y método*, la orientación hermenéutica del maestro alemán, de enorme importancia en la filosofía de nuestro tiempo, marcó profundamente su pensamiento como lo demuestra el título de una de sus últimas obras: *Ética de la interpretación*. Posteriormente, surgen dos autores claves en su evolución intelectual: Nietzsche y Heidegger, que son una referencia constante en su trabajo. La interpretación que Vattimo hace de ellos, por su originalidad y atrevimiento, es probablemente una de las razones principales de la atracción que su obra suscita en los más diversos círculos intelectuales.

La nueva influencia de Nietzsche y de Heidegger en el pensamiento de Vattimo lo llevará a radicalizar la hermenéutica de Gadamer, conduciéndola hacia lo que él ha denominado *una ontología de la declinación*, a la que corresponde la noción de *pensamiento débil*. Esta noción fue elaborada, a finales de la década de los 70, por un grupo importante de pensadores italianos, encabezado por Vattimo y Rovatti, del cual también forma parte Umberto Eco. En el tomo segundo de sus ensayos filosóficos, Richard Rorty tam-

bién utiliza la noción de *pensamiento débil* para referirse a sus propuestas.

La idea fundamental de Vattimo es la de que tenemos que despedirnos de todas las categorías fuertes del ser y la verdad, que pretendían acceder a puntos de vista absolutos y a certidumbres totales. En una situación histórica como la actual, de fragmentación y pluralismo, lejos de retroceder ante el nihilismo anunciado por Nietzsche, habría que ser capaces de cumplirlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, sin que eso signifique algo catastrófico.

Es evidente que dentro de este orden de ideas Vattimo toma partido por la Posmodernidad, considerada en el sentido que le da Lyotard, es decir, como crisis de los grandes relatos. Entre estos últimos se ha cuestionado ante todo el relato de una historia lineal y unitaria, con sus esperanzas de progreso, propio de la Modernidad occidental.

Vattimo parece hallarse en una nueva etapa de su pensamiento caracterizada por un mayor énfasis en lo político, como puede verse tanto en la ponencia “Hermenéutica, democracia y emancipación”, leída en el Congreso de Filosofía, como en la conferencia autobiográfica que dictó en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional.

En la actualidad, Vattimo es colaborador habitual del diario italiano *La Stampa* y autor de varias obras, entre las que merecen destacarse: *El sujeto y la máscara, Nietzsche y el problema de la liberación, La sociedad transparente, Las aventuras de la diferencia y El fin de la Modernidad*.

Ramón Pérez Mantilla y
Rocío Londoño Botero
Profesores de la Universidad Nacional de Colombia

Entrevista con Gianni Vattimo

Interrogantes al *pensamiento débil*

Ramón Pérez Mantilla y Rocío Londoño Botero

El profesor Gianni Vattimo, considerado una de las figuras más sugestivas de la filosofía contemporánea, visitó recientemente el país con motivo del XIII Congreso Interamericano de Filosofía celebrado en la Universidad de los Andes en el mes de julio pasado. Gentilmente el profesor Vattimo aceptó conceder a la Revista Foro una entrevista exclusiva, realizada por el filósofo y profesor de la Universidad Nacional, Ramón Pérez Mantilla y Rocío Londoño, del Comité Editorial de la revista.

“Hay demasiadas repeticiones en la filosofía de Habermas”

Ramón Pérez Mantilla- ¿Cuál es su opinión sobre la crítica que Habermas hace a Nietzsche, especialmente en El discurso filosófico de la Modernidad, que en últimas consiste en decir que, dada la crítica tan radical de Nietzsche a la razón occidental, termina por caer en la llamada contradicción performativa o autorreferencial.

Gianni Vattimo- Debo decir que tengo más en mente la crítica de Habermas a toda la teoría de la Posmodernidad que a la de Nietzsche en particular. Nunca estudié muy bien las páginas sobre Nietzsche, aunque Habermas fue importante con su libro *Conocimiento e interés*, precisamente porque le dio mucho espacio a Nietzsche. Sin embargo, digamos que el planteamiento principal de Habermas, e inclusive de Apel, el de la *contradicción performativa*, es una versión del planteamiento contra el escepticismo bastante tradicional: a ningún escéptico lo ha convencido el argumento anti-escéptico según el cual “si dices que todo es falso estás diciendo, sin embargo, una verdad, por lo tanto...”

En primer lugar, yo negaría que exista una contradicción performativa en Nietzsche. Y en segundo lugar, no estoy tan convencido de que el tema de la autocontradicción tenga importancia, a menos que le diéramos un alcance metafísico a la lógica. Entonces la pregunta es ¿tiene sentido criticar a Nietzsche en estos términos? Sostener que Nietzsche se contradice es como pretender, con un jueguito de dados, poner en jaque todo el desarrollo del nihilismo moderno. Eso puede ser tranquilizador intelectualmente, pero en el fondo no conduce a nada.

Mi impresión es que el planteamiento de Nietzsche sobre el nihilismo sigue teniendo valor, obviamente no desde el punto de vista lógico, pues el de Nietzsche no es un planteamiento lógico puro, sino un discurso de la fenomenología de la cultura a la que pertenecemos. Cuando Nietzsche afirma que “Dios ha muerto”, ¿qué quiere decir? Incluso se podría criticar su argumentación sosteniendo simplemente un argumento ontológico: Dios no puede morir, por lo tanto ésta es una contradicción. Pero, ¿quien ha tomado en serio alguna vez un planteamiento de este tipo? A mi modo de ver, la argumentación de Habermas contra Nietzsche y los posmodernos permanece dentro de una perspectiva de defensa de la racionalidad moderna muy respetable, pero que no tiene en cuenta los argumentos de

Nietzsche y de Heidegger. Decir, por ejemplo, que el proyecto de la Modernidad está inconcluso y que no ha fracasado es, a mi modo de ver, un acto de fe por parte de Habermas; no es tan evidente que sea así. Digamos que hay contenidos en el racionalismo moderno que de alguna manera Nietzsche ha interpretado correctamente al advertir que se autocontradicen. Que Dios muera es un ejemplo de esta autocontradicción: una cierta racionalidad llevada a sus extremos se autodestruye.

Habermas no refuta ni contradice estos temas, sino que les opone la reivindicación de una subjetividad, que es más o menos la subjetividad racional moderna con una pequeña dosis de intersubjetividad. Sin embargo, las razones que Habermas esgrime contra Adorno, según las cuales el sujeto de éste es demasiado solipsista, demasiado centrado en la autoconciencia ¿no valen acaso también para él? Porque, en el fondo, el discurso de una comunicación sin obstáculos, transparente, es el mismo planteamiento de la subjetividad autoconsciente. En síntesis, contra Habermas se pueden lanzar varias objeciones:

Primera: no creo que haya una contradicción performativa en Nietzsche.

Segunda: no creo que indicar la contradicción performativa en el interlocutor signifique refutarlo definitivamente. De hecho, y volviendo a la primera objeción, la teoría nietzscheana de la historia del nihilismo me parece del todo viable, aunque no verificable empíricamente, en el sentido de que nunca verificamos nada.

Tercera: la subjetividad –tendencialmente autotransparente– de Habermas, me parece muy similar al sujeto racional moderno, a pesar de lo que él diría.

Ramón Pérez Mantilla- ¿Qué piensa usted acerca de la distinción hecha por él entre pensamiento posmetafísico y Posmodernidad? Habermas dice que él es posmetafísico,



Gianni Vattimo

pero no posmoderno, diferencia que me parece extraña...

Gianni Vattimo- Sí, sobre todo porque Habermas cree que es posmetafísico en cuanto que llama metafísica a una filosofía que deriva de Adorno, es decir, a una filosofía de la subjetividad individual. Sin embargo, yo estoy convencido de que él también permanece dentro de este subjetivismo individualista. Por ejemplo, es obvio que mientras haya un ideal de la racionalidad, como el de Habermas, se tiende a asumir las ciencias humanas como si fueran la verdad. Esto resulta evidente en su teoría de la *acción comunicativa*: en ella el uso que Habermas hace de sociólogos como Mead o Weber o incluso de Piaget, es como el uso que hiciera un teólogo de las ciencias

naturales para mostrar que la teología es verdadera. Es decir, asume estas disciplinas como si dijeran la verdad sobre el hombre y de allí deduce sus discursos filosóficos. Esto me parece muy extraño en alguien que ha pasado por el marxismo y la Escuela de Frankfurt.

Es así mismo extraña su pretensión de ser posmetafísico cuando por un lado, el ideal de la racionalidad que él profesa es un ideal racional moderno, individualista y autoconsciente, y por otro, utiliza a las ciencias humanas como si fueran ciencias objetivas, es decir, descripciones de las cuales se pueden deducir verdades filosóficas. Este último punto me parece aún más grave: que un filósofo contemporáneo asuma las ciencias humanas como descripciones confiables de la realidad, en las que basa sus filosofías, me parece hoy incomprensible. Por lo tanto negaría que Habermas se pueda llamar posmetafísico, ya que su neokantismo, no obstante la dosis de intersubjetividad, es evidente.

La trayectoria de Habermas ya no me concierne tanto, entiendo que mi respuesta pueda ser insuficiente, pero hace tiempo –dos o tres años– que no me ocupo más de Habermas. No quiero decir que no lo considere una persona respetable, pero hay demasiadas repeticiones en su filosofía.

Habermas puede afirmar que es posmetafísico pero no posmoderno, porque ignora a Heidegger, es decir, no lo toma en consideración y si lo hace, no lo entiende. No lo entiende por razones muy comprensibles: porque es alemán. Siendo Habermas un alemán anti-nazista no puede comprender a Heidegger, lo que me parece respetable por razones históricas que comprendo; sin embargo, el hecho de que Habermas no tome absolutamente nada de Heidegger es grave. Esta actitud se puede entender en Löwith cuando la guerra estaba más cerca y porque había sido alumno de Heidegger y se había sentido traicionado por los acontecimientos. Me parece más grave el rechazo de Habermas a Heidegger, pero cada quien sigue su propio camino.

Marx, un autor entre muchos, que es necesario estudiar

Ramón Pérez Mantilla- *Dada la importancia que el movimiento comunista tuvo en Italia, ¿cómo se ha desarrollado el debate sobre la crisis del marxismo en ese país?*

Gianni Vattimo- Este es un tema gigante, pero tendría algo que decir al respecto. Para comenzar digamos que el fin del marxismo italiano empezó en 1968, un momento en que la influencia marxista era muy grande en Italia. Bien, ese momento fue el comienzo del fin del marxismo porque creo que en todo el mundo, pero sobre todo en Italia, el 68 significó el fin de la idea de una clase obrera.

El 68 empezó como un movimiento de estudiantes que se transformó en un movimiento obrero. Sin embargo, no era un movimiento de obreros en sentido estricto, sino de trabajadores sin mayores raíces en las grandes ciudades italianas. Lo esencial desde 1968 hasta 1978-80 en Italia fue la disolución de cualquier conciencia de *clase obrera*; quiero decir que lo que predominaba en esos años era antes que un ética del trabajo, un rechazo al trabajo, lo cual significaba que faltaban las bases para la idea gramsciana del paso de la hegemonía de la clase burguesa a la clase obrera.

Creo que es significativo el hecho de que por esos años la izquierda comenzó a interesarse en Nietzsche y Heidegger.

Sery tiempo de Heidegger fue traducido a comienzos de los años 50 por Pietro Chioli, un partisano turínés que murió debido a las enfermedades que había adquirido en un campo de concentración alemán; tradujo también *Sendas perdidas*, que ningún editor de izquierda –la mayoría de los editores italianos eran de izquierda– había querido publicar. En 1968 aparece este libro.

Hacia 1963 se comenzó a publicar la edición de las obras completas de Nietzsche que Einaudi –famosa casa editorial de izquierda– se había negado a editar. La edición de la obra de Nietzsche finalmente estuvo a cargo de un comunista ortodoxo, Montinari, quien podía consultar el



Collage de Hernán Mauricio Suárez

archivo de Nietzsche en Weimar, precisamente por ser un comunista *serio*. Sé que son hechos anecdóticos, pero resultan significativos porque el pensamiento de la vanguardia burguesa –Nietzsche primero y Heidegger luego– entran en el discurso de la izquierda italiana coincidiendo con el 68, año en que la visión obrera clásica del marxismo entra en crisis en Italia.

A partir de ese momento, sobrevive un marxismo estructuralista que no tuvo mucha incidencia en Italia; el marxista estructuralista más notable de Italia fue Galvano de la Volpe que prácticamente tuvo un solo alumno: Lucio Colletti, que hoy es poperiano, a quien no denominamos reaccionario, pero que evidentemente no es un hombre de izquierda; él sostiene la política del *centro derrotado*, es decir, la política liberal posterior al ocaso de la Democracia Cristiana. Los demás marxistas italianos dejaron de serlo.

El marxismo se ha convertido en una especie de filosofía mesiánica que ahora *invertir la situación*, pero que está cada vez más lejos de una posibilidad de transformación social. En el 68 algunos antiguos marxistas se volvieron terroristas de hecho o, si se quiere, *leninistas fracasados de extrema*, y otros se transformaron en lo que se denominó *autónomos*, por ejemplo, Toni Negri. Los *autónomos* practicaban una especie de rechazo al compromiso político democrático, intentaban permanecer al margen en una especie de movimiento lúdico de carácter social. En 1977 hacían *expropiaciones proletarias*: iban a un supermercado y tomaban distintas cosas sin pagarlas; colindaban con el terrorismo, pero con modos de acción más que todo anárquicos.

Mientras más se aleja el momento de la revolución más dominan estas tensiones negativas. La dialéctica negativa de Adorno es algo de este tipo, el pensamiento de Benjamin, también. Marx ha quedado entonces reducido a ser un autor, entre muchos, que es necesario estudiar.

Algo de todo esto me ha influido. Escribí un libro, publicado en 1974, titulado *El sujeto y la máscara* que es mi libro principal sobre Nietzsche, en el que me esforcé por unir la teoría marxista de la alienación, la crítica heideggeriana de la metafísica y la crítica nietzscheana del nihilismo. En ese libro todavía creía ingenuamente que se podía conjugar el *superhombre* de Nietzsche con el hombre *desalienado* de Marx. Ahora, reflexionando mejor, esta idea me parece demasiado hegeliana en el sentido tradicional. Mi propio caso es tan sólo una ilustración de lo que sucedía en Italia a mediados de los años 70.

De cierta manera, el terrorismo fue una manera de descubrir que ya no se podía ser marxista hegeliano, sino que había que volverse nietzscheano, porque de lo contrario se corría el riesgo de convertirse en un *profesional de la revolución*. Los personajes de las Brigadas Rojas en Italia eran como unos *burócratas del asesinato* –yo tuve alumnos que estuvieron implicados con las Brigadas Rojas–.

Por lo demás, se conocen las biografías de estos personajes: gente que se levantaba a las cinco de la mañana para fingirse obrera, salían en bicicleta para anotar los horarios de los dirigentes de la Fiat, y luego, dispararles a la hora justa, delante de la puerta de su casa. Para Nietzsche, todo esto hubiera sido objeto de una gran risotada.

Heidegger y el nazismo

Ramón Pérez Mantilla- Por último, ¿cómo ve usted el problema de la relación entre Heidegger y el nazismo? Para nosotros esta pregunta es importante dado que aquí no se ha hecho este debate.

Gianni Vattimo- Bueno, yo no rechazo esta cuestión, como lo hace Rorty, quien asume una posición difícil de sostener: él dice que un gran físico también podría haber dicho cosas erróneas políticamente o incluso moralmente equivocadas; pero la filosofía no es la física, por lo que me parece un gran error la posición de Rorty. Hay una tesis que aprendí como si fuera de Jaspers, según me lo dijo mi maestro Pareyson, aunque nunca he hallado el texto respectivo. Jaspers decía que Galileo podía perfectamente abjurar de su teoría, porque finalmente se trataba de un asunto científico que terminaría por imponerse por sí mismo. En cambio, Giordano Bruno debía morir por su filosofía, porque la filosofía es un asunto de interpretaciones y testimonios, no una verdad objetiva. Por tanto, no creo que se pueda liquidar la cuestión diciendo que Heidegger era un gran filósofo, pero un pésimo político y *moralmente negativo*. Creo, sin embargo, que es igualmente equívoco sostener que el heideggerismo desemboca necesariamente en el nazismo, que es la tesis de Farías. Según esta tesis, tendríamos que rechazar a Heidegger e incluso sus premisas, puesto que él había llegado inevitablemente al nazismo a partir de su teoría.

Creo que hay algo de verdad en la tesis de Farías en cuanto que el nazismo de Heidegger está ligado a su filosofía por una auto-incomprensión del mismo Heidegger. Estoy convencido de que puede existir un heideggerismo de derecha y uno de izquierda, como sucede con Hegel, si es que podemos comparar a Heidegger con Hegel. El heideggerismo de derecha piensa que afirmar la diferencia ontológica significa hacer todavía teología negativa. En un determinado momento Heidegger pensó que el ser podría manifestarse en la raza, el suelo, la Nación, etcétera, haciendo una identificación errónea, a mi modo de ver, desde su propio punto de vista. No quiero decir con esto que todos los heideggerianos de derecha sean nazis, puesto que hay una derecha heideggeriana, por ejemplo, que piensa la diferencia ontológica en términos de teología negativa. Creo que precisamente en Heidegger están las premisas para criticar cualquier posible identificación de la auten-

ticidad del ser con cualquier ente, como podría ser *el partido, la raza o el pueblo alemán*.

Si uno piensa coherentemente con las premisas de Heidegger que el ser no puede nunca darse como presencia, existe la posibilidad de desligar el pensamiento de Heidegger de cualquier malentendido político. Creo que todo lo que Farías describe como heideggerismo es sólo una imagen de derecha del mismo. Heidegger, por lo demás, se auto-interpretó en estos términos, pero dentro de sus textos existe la posibilidad de interpretarlo de manera distinta. Ello supone la posibilidad hermenéutica de desligar el sentido de un texto de las intenciones del autor: ¿si incluso Heidegger se leyó a sí mismo de una manera nazi, no será también lícito leer sus tesis desde otro punto de vista, con tal de que intentemos serle fieles? Porque de otro modo, a Aristóteles, que negaba que las mujeres tuvieran alma, tendríamos que rechazarlo por completo.

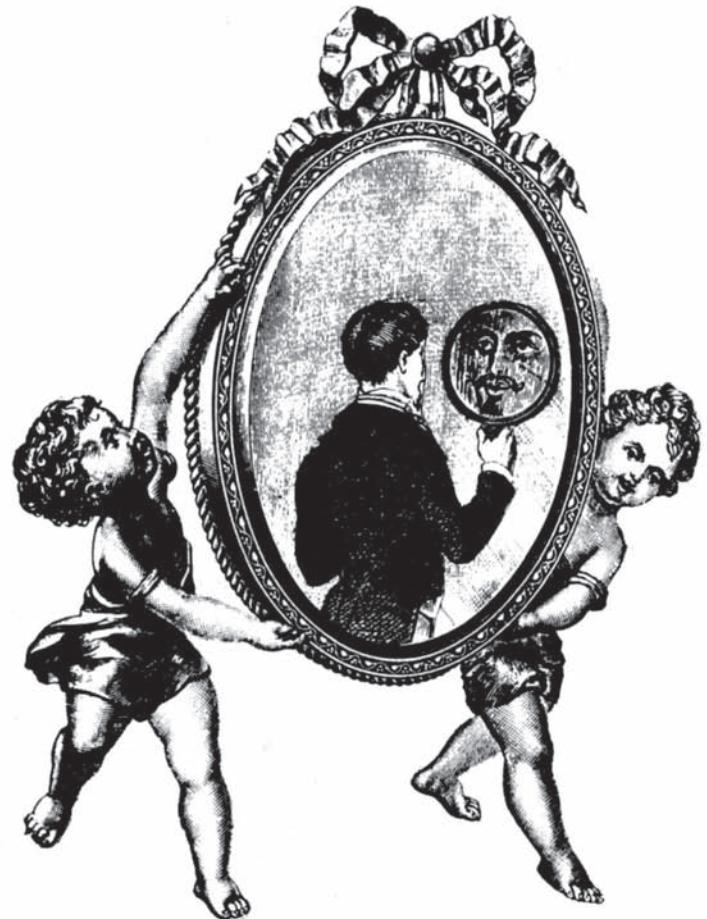
Puedo incluso admitir que Heidegger tenía actitudes de pensador antimoderno, tradicionalista y, por tanto, abierto a la posibilidad de leerse de una forma nazi, pero no es la única posibilidad de su pensamiento. Como prueba de lo que digo está el hecho de que gran parte del heideggerismo europeo de las últimas décadas ha sido de izquierda. Por ejemplo, está el heideggerismo francés; Foucault mismo no era un heideggeriano ortodoxo pero tampoco fue un anti-heideggeriano. Todo ello sólo se puede explicar con esta hipótesis: hay en la teoría de Heidegger una posibilidad de lectura de izquierda, que el mismo Heidegger no hizo, pero que sus intérpretes vislumbraron. La analogía entre el Heidegger crítico de la metafísica y el Ernst Bloch, teórico de la vanguardia, a mí me parece innegable.

En consecuencia, Farías debería demostrar que todos los que leyeron a Heidegger desde un punto de vista de izquierda son unos imbéciles.

La relación con el pasado en la sociedad posmoderna

Rocío Londoño- En su concepción del pensamiento débil usted sostiene que en las condiciones de hoy la proyectualidad es un falso problema puesto que es el pasado y no el futuro lo que está amenazado... ¿en qué sentido el pasado puede ayudar a movernos de modo no caótico y desordenado, aún sabiendo que no vamos a ninguna parte? ¿Desde qué perspectiva se puede criticar la condición posmoderna sin tener una noción de un futuro posible o deseable?

Gianni Vattimo- Efectivamente el problema es: ¿tiene sentido la noción de Posmodernidad o no? A mí me parece que con todo el escepticismo que se pueda tener frente a la noción de posmoderno tratada de una manera demasiado periodística, esta noción está ligada a la idea de que hay una identificación de la noción de Modernidad con una noción



Collage de Hernán Mauricio Suárez

de progreso eurocéntrico. Cuando uno trata de definir lo que se llama Modernidad, siempre encuentra la idea de un tiempo progresivo en el cual es mejor lo que está más adelante porque hay una línea de finalización. En la teoría de la Modernidad esta línea ha sido identificada con el progreso de la occidentalización del mundo.

Todo esto es un poco dudoso en nuestra tradición, puesto que hay otras civilizaciones. Somos conscientes de que el progreso unilateral no tiene sentido, lo cual no significa simplemente decir que el pasado era mejor. Obviamente, si hemos descubierto terapias contra la neumonía, es mejor que si ello no hubiera ocurrido... etc. No se niega totalmente que hay algo que preferimos en relación con el pasado, lo que se advierte es que la idea de Modernidad en sus bases teóricas más evidentes se ha disuelto. Hay un sentido de lo posmoderno como descubrimiento de la activación de una pluralidad de culturas que entran en diálogo posiblemente con derechos iguales.

Ahora, naturalmente esto comporta problemas, por ejemplo, el de la cuestión del pasado, a la que usted se refería, pues extrañamente con el descubrimiento de la pluralidad de las culturas parece que la cuestión consista,

en un cierto sentido, en conservar esta multiplicidad frente a una posibilidad de homogeneización. Es extraño porque la Posmodernidad es el culmen de la Modernidad en el sentido de la tecnología, la fantasmagoría, pero paradójicamente, la Posmodernidad descubre también que no hay un progreso lineal, es decir, que hay múltiples valores de culturas que tienen un mismo derecho con la paradoja en la cual vivimos: de un lado, la Posmodernidad se ayuda de una cantidad de descubrimientos tecnológicos que parecen lineales con la Modernidad. De otro lado, en la tecnología toman la palabra múltiples subculturas que reivindican sus derechos. Lo posmoderno es esta paradoja que no se resuelve en un sentido homogéneo con la Modernidad, porque el proyecto moderno –del cual habla Habermas por ejemplo– implicaría una suerte de unificación de estas culturas y seguir realizando la Ilustración... etc., etc., lo que me parece poco respetuoso de la pluralidad de las culturas que se anuncian. La orientación al pasado es más o menos al pasado como una pluralidad conservada como tal. Más que una línea de tiempo, me parece que en lo posmoderno hay una línea de la dimensión del espacio. Lo que no es deseable que se pierda son las múltiples voces que hablan ahora, sean pasadas, presentes, etcétera.

Rocío Londoño- *Pero usted expresamente afirma “el futuro está asegurado por la innovación del automatismo, lo que está amenazado es el pasado...”*

Gianni Vattimo- Sí, lo que está amenazado es esta pluralidad que es también del pasado y del presente de las culturas múltiples. Usted tiene razón, la dimensión del futuro no parece ser solamente de tipo *vitalístico* económico, es como la reproducción... En esta teoría el pasado ocupa el lugar del otro principio económico de la multiplicación, de la reproducción. Lo que nos amenaza no es el estancamiento, sino la potencia de la producción que deja de lado incluso a los seres humanos. Defender el pasado es también defender a los desempleados y a nosotros los filósofos, porque al final el problema es que los filósofos tienen que ser solidarios con los indios y la gente de la calle porque se descubrirá que también son improductivos.

Sería mejor decir que se trata de salvar múltiples estilos de vida. Yo, por ejemplo, he compartido o me pareció razonable la medida que el gobierno francés tomó sobre las películas norteamericanas en Francia. Es como un asunto de ecología cultural, no es simplemente una cuestión de censura, es una cuestión de multiplicidad de estilos de interpretación del mundo que tienen que ser defendidos en contra de una hegemonía que se impone por razones principalmente económicas. Es verdad que los norteamericanos producen películas a menor costo que los europeos, pero si se aplica una lógica puramente económica, en algunos años las películas europeas no existirán más. No se debe censurar una democracia que pueda decidir que es importante invertir fondos y recursos en la conservación de

una forma cultural que no produce dinero. En último término, me persuade mucho un argumento que encontré en algunos de los economistas franceses como La Tour, del Movimiento Antiutilitarista, MAUS, que dice: *la humanidad ha sobrevivido en el mundo hasta ahora porque tenía muchos formas de tratar con la naturaleza y muchos estilos de vida; es importante conservar la capacidad de hacer cuentas con la mano porque si falla el computador, ¿qué hacemos?... Debemos tener muchas formas de vida para que por lo menos una o dos sobrevivan.*

Ahora, conservar el pasado en el sentido de conservar la pluralidad no linealmente unificable, es un problema políticamente difícil que me parece solucionable sólo desde un punto de vista que separe estética y tecnología; por ejemplo, todos empleamos la TV pero todavía hay diferencias de cocinas locales, de estilos y hay una posibilidad de guardar las diferencias culturales distinguiendo duramente la tecnología básica de los estilos de vida. Las sociedades occidentales ahora parecen muy homogéneas desde el punto de vista tecnológico, pero hay gentes diferentes; yo me siento libre en una sociedad que no es homogénea estéticamente como la sociedad italiana. Se trata de imaginar políticas que mantienen las dos cosas, que no implican, por decir así, una estricta imposición de estilos conectada con la distribución de tecnologías.

Por eso creo que en un sentido es también un problema de política cultural, de ecología, de vitalidad de la sociedad, de grupos, de anarquismo... No es totalmente imposible, es difícil, no está ligado lógicamente con el desarrollo de la tecnología, pero cuando la tecnología se convierte en una tecnología de comunicación, necesita una pluralidad de contenidos, no se puede pasar siempre la misma cosa en la TV porque hay competencia entre las cadenas, la competencia hace que quizás también la lógica de los medios sea también dar la palabra, por un momento, por un rato, a todas las culturas, porque produce una novedad, porque admite una posibilidad de competencia con otras...

Lo que quiero decir es que no es seguro que el mundo de la comunicación sea necesariamente un mundo totalitario como Adorno lo imaginó. Me parece que lo que pasó en las últimas décadas en el mundo occidental muestra que hay una posibilidad de pluralismo ligada a la lógica misma de la comunicación que necesita suscitar voces diferentes.

Los intelectuales de *Il Manifesto* o Habermas dicen que esto es una diferencia falsa, pero ¿desde qué punto de vista se puede decir esto, sino desde el punto de vista de Dios, o de Rossana Rossanda o de Habermas? La defensa de las diferencias teóricas es también la defensa de las diferencias ónticas. Sólo si el ser no se identifica con un orden del existente dado se puede hablar de diferencia ontológica...

Rocío Londoño- *Daniel Bell sostiene que la religión es la posibilidad de conexión entre las generaciones y de continuidad de la experiencia: “la religión, como la única*

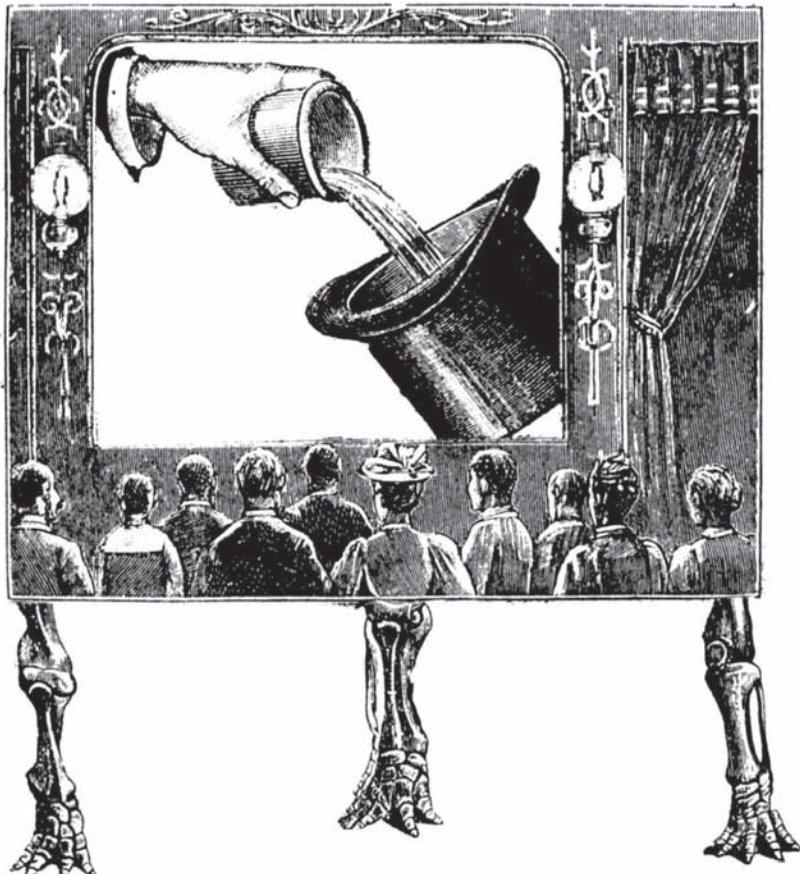
experiencia que nos hace humildes, que nos hace mirar hacia los otros... Si en la sociedad posmoderna los valores absolutos no tienen sentido ¿cómo se explica el renacimiento religioso, porque la religión de todos modos predica valores absolutos?

Gianni Vattimo- En el mundo el problema es mantener las diferencias sin identificarlas con fundamentalismos; es verdad que un mundo muy pluralista tiende a motivar las sectas, las pequeñas iglesias, los fanatismos. Es por eso que yo hablaba de estética y unificación tecnológica, de una multiplicidad de estilos de vida; la palabra *estilo* implica también el reconocimiento del hecho de que no es absoluto sino que es uno entre otros. Es posible desarrollar una civilización que admita los dialektos, por decir así, que no pretenda lenguas nacionales únicas. Esta es la única imagen que filosóficamente se puede construir después de la disolución de un ideal de humanidad unitaria... etc. Pero es una imagen que tiene que ser políticamente encarnada. Admito que esto es difícil; hay por ejemplo una solución de tipo anarquista como decía antes, el cultivo de plurales y pluralidades, de subculturas que se multiplican y que tienen el riesgo de convertirse en sectarias, fanáticas, fundamentalistas.

La solución filosófica es clara, es decir, predicar un pluralismo que esté también impregnado de nihilismo, de relativismo en el sentido bueno. ¿Cuándo es que me siento italiano? Cuando como spaghetti, cuando veo el Nacional de fútbol, pero nunca iría a una guerra por estos motivos. ¿Es posible mantener las diferencias en estos límites? No lo sé, pero lo que más me impresiona es la multiplicación de masas periféricas que se verifica en nuestro mundo. Es particularmente evidente en ciertas zonas del mundo, por ejemplo, la urbanización de los campesinos en Bogotá. Pienso que en Nueva York se encuentra el mismo panorama de una humanidad que uno se pregunta de qué vive, porque no tiene más raíces en una tradición propia y vive como en una enorme periferia del mundo. Estas son cuestiones que no sé cómo puedan resolverse filosóficamente; no son cuestiones teóricas, sino también prácticas: de instrucción, de distribución del saber, de escolarización.

Yo no veo otra posibilidad que ésta. Son cuestiones que no me parecen solucionables desde el punto de vista de un ideal humano tipo Ilustración, tipo la civilización que marcha con sus ideas unitarias, etcétera.

Se tiene que tomar en cuenta esta pluralidad; es por esto que el pasado es también el hombre marginado. La defensa del pasado, es posiblemente la defensa de los márgenes, de los excluidos del curso de la producción y la reproducción.



Collage de Hernán Mauricio Suárez

Rocío Londoño- En sus planteamientos encuentra una paradoja: usted habla del uso del terror, de la violencia, de la guerra y de la revolución como reminiscencias de las épocas bárbaras y esa apreciación implica inevitablemente alguna idea de progreso, de civilización...

Gianni Vattimo- Sí, tengo una idea de progreso que es una idea negativa.

Rocío Londoño- Y habría un ideal humano de no-violencia, de no-terror, de no-fuerza, de "diálogos con la historia y con lo social..."

Gianni Vattimo- Sí, comprendo lo que dice. No se puede desconocer completamente una filosofía de la historia, pero esta filosofía de la historia se presenta como una interpretación razonable no garantizada de la historia de la cual provenimos. Yo creo que efectivamente la única forma de racionalidad de la cual disponemos es tratar de descubrir un sentido posible en los acontecimientos que nos han producido y tratar de detectar una lógica sobre cuya base se puede argumentar. No hay una posibilidad de aprehender el sentido esencial eterno de la humanidad; hay una clase de fidelidad a los padres, en este sentido sí soy un poco conservador, pero es el único patrimonio del cual respon-

do. Estoy en un camino, este camino me parece tener tal sentido y sobre esa base hago la opción.

El sentido que creo se puede proponer como sentido de la historia de la Modernidad hasta ahora es este sentido de debilitamiento de las categorías fuertes; por ejemplo, tiene un sentido el paso del autoritarismo monárquico a las democracias en una parte del mundo, hay una disolución del poder. En la teoría de la modernización de Max Weber se discute, desde diferentes niveles, el sentido del cristianismo y también el sentido de la sociedad racionalizada, etc. Esto no es totalmente negativo, es una perspectiva socio-política, económica, etc. No sé si ustedes conocen los libros de Norbert Elias, a quien yo siempre cito: el poder que se vuelve más formal, menos intensivo. Todo esto son aspectos de una interpretación de la historia que en mi opinión da una mínima orientación; sobre todo la hermenéutica misma, como filosofía que niega la posibilidad de probar algo sobre la base de un hecho evidente y que imagina un diálogo persuasivo con otros, es una forma de debilitamiento de la razón. La verdad objetiva, en frente de la cual uno se calla, no existe más, pero hay preguntas... bueno, éste es un sentido posible que puede orientar, yo creo que éste es también el sentido del cristianismo.

Rocío Londoño- *¿Tiene el pensamiento posmoderno algo que decir sobre la condición de sociedades como la nuestra? O es un pensamiento que supone, además de la informática, sociedades con reglas de convivencia tan sólidamente establecidas que es posible un juego muy fuerte del individuo, de la singularidad, de la pluralidad sin que todo ello devenga en caos, violencia, anarquía...*

Gianni Vattimo- De un lado, a mí me parece totalmente correcto decir que en el curso de la Posmodernidad situaciones como la de Latinoamérica parecen extrañas.

De otro lado, me parece poco persuasiva una idea demasiado mecánica del desarrollo en Europa: hemos tenido la revolución modernizadora, ahora tenemos la Posmodernidad. O aquí estamos todavía en la situación de la modernización, modernizémonos y después... Esto es totalmente impensable. Cuando yo escribí el prefacio a un libro que se llama *Sociedad transparente*, donde decía que el mundo latino bla, bla, bla... tiene el futuro en sus manos, era en cierto modo una defensa de Italia; es decir, que la idea de Modernidad como pura racionalización ya pasó y que no es posible imaginar la reproducción mecánica de ese modelo donde todavía no haya tenido lugar. Esta es una cuestión de invención; puede ser que, por ejemplo, todas las cuestiones de la relación con la naturaleza, la ecología, las energías renovables, den una mayor actualidad a civilizaciones que son premodernas y que tienen todavía estilos de vida que pueden dar sugerencias de cualquier tipo.

Rocío Londoño- *Eso suena un tanto demagógico...*

Gianni Vattimo- Es un discurso totalmente abstracto, yo lo sé, pero se fortalece en la medida en que es absurda la idea de desarrollar linealmente la civilización industrial hasta no se sabe dónde. Ahora, cuando yo digo que los pueblos latinos tienen quizás el futuro, es una esperanza más que una teoría; pero la otra vía, la del modelo de la racionalización weberiana no tiene sentido. La Modernidad europea fue una creación local; el discurso de Elias, por el contrario, es un discurso histórico, no normativo. La única cosa que me parece clara es que no se puede reproducir el modelo.

Cuando se tiene un modelo nuevo se trata de valorizar las otras culturas y de evitar la imposición de modelos industrializantes violentos. Pero en mi opinión estos son problemas de organización económica más que problemas filosóficos. Yo reconozco que puedo tratar de ilustrar, de proclamar, de difundir valores como la no-violencia en lugar de la igualdad, por ejemplo. Esta es una de las tesis que sustento en mi ponencia porque el valor *igualdad* ahora tiene poca posibilidad de imponerse en un mundo en el que la gente tiene miedo de la homogeneidad y de la igualación de tipo competitivo, que no me parece muy humana, sino simplemente productivista.

La filosofía puede tratar de presentar valores, puede tratar de popularizar valores compartidos que la religión no da más. Ahora, el problema es: ¿tenemos que volvernos a las tradiciones religiosas, tratando de tomarlas como base de una convivencia social que ahora no existe? o ¿tenemos que inventar una forma de existencia social de los valores que tenga algo de la tradición religiosa? Yo estoy persuadido de esto último, puede que eso sea más adecuado a lo que pasa en el mundo actual.

[...] Bueno, comprendo que estos son discursos insuficientes; cuando un filósofo envejece, comprende siempre más la marginalidad de sus posiciones; los jóvenes son más entusiastas, creen que escribir un libro sobre Aristoteles va a cambiar el mundo... Este es mi estado espiritual aunque no esté completamente envejecido, pero sí bastante.

Me siento responsable de muchas cosas, por ejemplo me ocupo de la política en Italia sin mucha suerte. En los últimos años he escrito más en diarios también como comentarista político; escribo en el mismo diario donde escribe Bobbio, filósofo de la política italiana muy viejo y reconocido. También he participado en las campañas electorales para la alcaldía de Turín. Me propusieron que fuera candidato pero en ese momento me di cuenta primero, que todavía no había escrito mi *Opus magnum*, y segundo, que la política requiere una habilidad que yo no tenía. En fin, he tenido un poco de miedo, pero me interesa mucho la política ahora, no sé lo que va a pasar...●

Chantal Mouffe
Socióloga francesa

La Democracia Radical ¿Moderna o Posmoderna?*

Chantal Mouffe

¿Qué significa hoy ser de izquierdas?

¿Tiene algún sentido invocar, en las postimerías del siglo XX, los ideales de la Ilustración que informaron el proyecto de transformación de la sociedad? Sin duda estamos viviendo la crisis del ideario jacobino que ha caracterizado, de un modo u otro, la política revolucionaria de los dos últimos siglos. Es improbable que el marxismo llegue a recobrarse de los reveses sufridos; y no sólo se trata del descrédito en que el análisis del totalitarismo ha hundido al modelo soviético, sino también del reto al reduccionismo de clases que plantea la emergencia de nuevos movi-



Collage de John Digby

mientos sociales. Pero el enemigo fraternal, el movimiento socialdemócrata, no está en mejor forma. Ha hecho patente su incapacidad para enfrentarse a las nuevas demandas de las últimas décadas, al tiempo que su mayor logro, el Estado de bienestar, ha salido mal parado de la ofensiva conservadora, al no ser capaz de movilizar a aquellos que debieran tener interés en defender sus conquistas.

En lo tocante al socialismo, lo que parece estar en cuestión es la propia idea de progreso que va unida al proyecto de la Modernidad. En este aspecto, el debate sobre lo posmoderno, que hasta el momento se había centrado en la cultura, ha invadido el terreno político. Por desgracia, el debate no ha tardado en petrificarse en torno a un conjunto

* Este artículo apareció publicado originalmente en la revista española *Leviatán* No. 55, II época, Madrid, primavera 1994, pp. 81-94.

de posiciones simplistas y estériles. Mientras Habermas acusa de conservadurismo a todos los que critican el ideal universalista de la Ilustración,¹ Lyotard declara con melancolía que después de Auschwitz el proyecto de la Modernidad ha quedado eliminado.² Richard Rorty señala con acierto que en ambos bandos se descubre una asimilación errónea entre el proyecto político de la Ilustración y sus aspectos epistemológicos. Por ese motivo Lyotard cree necesario abandonar el liberalismo político con objeto de no caer en una filosofía universalista, en tanto que Habermas, que aspira a defender el liberalismo, se aferraba, pese a todos sus problemas, a esa filosofía universalista.³ De hecho, Habermas cree que la emergencia de formas universalistas de moralidad y de legalidad es la expresión de un irreversible proceso colectivo de aprendizaje, y que rechazar esto supone negar la Modernidad y socavar los cimientos de la existencia democrática. Rorty nos invita a considerar la distinción trazada por Blumenberg, en *The Legitimacy of the Modern Age*, entre dos aspectos de la Ilustración: la *autoafirmación*, que puede identificarse con el proyecto político, y la *autofundación* que es el proyecto epistemológico. Una vez que se reconoce la inexistencia de una relación necesaria entre ambos aspectos, es posible defender el proyecto político de la Ilustración, abandonando la idea de que debe estar basado en una forma específica de racionalidad.

Las ideas de Rorty, no obstante, resultan problemáticas, por cuanto identifican el proyecto político de la Modernidad con un vago concepto de *liberalismo*, en el que se incluyen tanto el capitalismo como la democracia. Sin embargo, es importante distinguir las dos tradiciones que están en la raíz del concepto de Modernidad política, la liberal y la democrática, y comprender que, tal como ha demostrado Macpherson, ambas corrientes no se articularon hasta el siglo XIX y, en consecuencia, no están ligadas por una relación necesaria. Es más, sería un error confundir la *Modernidad política* con la *Modernidad social*, esto es, el proceso de modernización desarrollado bajo la dominación creciente de las relaciones de producción capitalistas. Si no se establece esta distinción entre democracia y liberalis-

mo, entre liberalismo político y económico; si, como en el caso de Rorty, se engloban todos estos conceptos dentro del término *liberalismo*, el resultado inevitable es verse abocado, so pretexto de defender la Modernidad, a una simple apología de las “instituciones y prácticas de las democracias prósperas del Atlántico Norte”,⁴ sin dejar espacio para la crítica (ni siquiera para una crítica inmanente) que podría permitir transformarlas.

Frente a este *liberalismo burgués posmoderno* defendido por Rorty, querría mostrar cómo el proyecto de una *democracia radical y plural*, concebida en los términos esbozados por Ernesto Laclau y por mí misma en el libro *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*,⁵ propone una reformulación del proyecto socialista que evita las dificultades gemelas del socialismo marxista y de la socialdemocracia, al tiempo que proporciona a la izquierda un nuevo ideario, que apela a la tradición de las grandes luchas por la emancipación pero también tiene en cuenta recientes contribuciones teóricas del psicoanálisis y la filosofía. En efecto, un proyecto de tal índole podría definirse al tiempo como moderno y posmoderno. Aspira a realizar el *proyecto incumplido de la Modernidad*, pero, a diferencia de Habermas, creemos que en este proyecto ya no hay espacio para la perspectiva epistemológica de la Ilustración. Aunque esta perspectiva desempeñó un papel importante en la emergencia de la democracia, se ha convertido en un obstáculo en el camino de la comprensión de las formas políticas novedosas que caracterizan a las sociedades actuales y requieren ser abordadas desde una perspectiva no esencialista. De ahí la necesidad de emplear las herramientas teóricas elaboradas por las diferentes corrientes de lo que puede denominarse la filosofía posmoderna y apropiarse de su crítica del racionalismo y el subjetivismo.⁶

La revolución democrática

Se han propuesto diferentes criterios para definir la Modernidad, criterios que varían mucho en función de los niveles o rasgos con-

1. Jürgen Habermas, “Modernity - An Incomplete Project”, en Hal Foster (comp.), *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*, Port Townsend, 1983.

2. Jean-François Lyotard, *Inmaterialität und Postmoderne*, Berlin, 1985.

3. Richard Rorty, “Habermas and Lyotard on Postmodernity”, en Richard J. Bernstein (comp.), *Habermas and Modernity*, Oxford, 1985, pp. 161-175.

4. Richard Rorty, “Postmodern Bourgeois Liberalism”, en *Journal of Philosophy* No. 80, octubre 1983, p. 585.

5. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics*, Londres, 1985. En español, *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización democrática*, Siglo XXI, Madrid, 1987.

6. No sólo me refiero al postestructuralismo, sino también a otras tendencias como el psicoanálisis, la hermenéutica post-heideggeriana y la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein, todas las cuales convergen en la crítica al racionalismo y al subjetivismo.

7. Claude Lefort, *The Political Forms of Modern Society*, Oxford, 1986, p. 305.

8. Claude Lefort, *Democracy and Political Theory*, Oxford, 1988, p. 19.

cretos que pretenden destacarse. Por mi parte, creo que la Modernidad debe definirse en el plano político, pues es en él donde se configuran y ordenan simbólicamente las relaciones sociales. En tanto inaugura un nuevo tipo de sociedad, la Modernidad puede verse como un punto de referencia decisivo. En este aspecto, la característica fundamental de la Modernidad es sin duda el advenimiento de la revolución democrática. Tal como lo ha señalado Claude Lefort, esta revolución democrática está en el origen de una nueva forma de institución de lo social, en la que el poder se torna un *lugar vacío*. Por esta razón, la sociedad democrática moderna está constituida como *una sociedad donde el poder, la legalidad y el conocimiento están expuestos a una indeterminación radical, una sociedad que se ha convertido en escenario de una aventura incontrolable, de tal manera que aquello que se instituye no llega a establecerse, lo conocido queda sujeto a la indeterminación de lo desconocido y el presente resulta indefinible*.⁷ Al faltar un poder encarnado en la persona del príncipe y ligado a una autoridad trascendente, también desaparecen las garantías o fuentes de legitimación últimas; la sociedad ya no puede definirse como una sustancia con una identidad orgánica. Lo que queda es una sociedad sin fronteras claramente definidas, una estructura social imposible de describir desde la perspectiva de un punto de vista único o universal. En ese sentido, la democracia se caracteriza por la *disolución de las señales de la certidumbre*.⁸ En mi opinión, un enfoque de este tipo es muy sugerente y útil por cuanto permite situar múltiples fenómenos de las sociedades modernas en una nueva perspectiva. De tal suerte, los efectos de la revolución democrática pueden analizarse en el ámbito de las artes, de la teoría y de las cuestiones culturales en general, y es posible reformular la relación entre la Modernidad y la Posmodernidad de una manera nueva y más fructífera. De hecho, partiendo de la concepción de revolución democrática de Lefort, que la considera el rasgo definitorio de la Modernidad, resulta evidente que al hablar de la Posmodernidad en el ámbito filosófico se está reconociendo la imposibilidad de dar un fundamento último



Collage de Hernán Mauricio Suárez

o una legitimación definitiva constitutivos del propio advenimiento de la forma democrática de la sociedad y, por tanto, de la misma Modernidad. Este reconocimiento es resultado del fracaso de múltiples intentos de sustituir los fundamentos tradicionales, que apelaban a Dios o a la Naturaleza, por unos fundamentos alternativos basados en el Hombre o la Razón. Dichos intentos estaban condenados al fracaso desde el principio, en razón de la indeterminación radical que caracteriza a la democracia moderna. Nietzsche así lo había comprendido cuando proclamó que la muerte de Dios era inseparable de la crisis del humanismo.⁹

En consecuencia, el reto del racionalismo y del humanismo no implica el rechazo de la Modernidad, sino la crisis de un proyecto concreto de Modernidad: el proyecto de autofundación de la Ilustración. Tampoco implica que debamos abandonar su proyecto político, es decir, la consecución de la igualdad y la libertad para todos. Con objeto de llevar a cabo y profundizar en este aspecto de la revolución democrática, debemos garantizar que el proyecto democrático tenga en cuenta las luchas democráticas de nuestros tiempos en toda su amplitud y especificidad. Es entonces cuando cobra verdadero sentido la contribución de la denominada crítica posmoderna.

En efecto, ¿cómo podemos aspirar a comprender la naturaleza de estos nuevos antagonismos si nos aferramos a una imagen del sujeto unitario como fuente última de la inteligibilidad de sus acciones? ¿Cómo podemos captar la multiplicidad de relaciones de subordinación que afectan a un individuo si concebimos a los actores sociales como entidades homogéneas y unificadas? Lo que caracteriza a las luchas de los nuevos movimientos sociales es precisamente la multiplicidad de posiciones del sujeto que constituyen un único actor, así como la posibilidad de que esa multiplicidad se convierta en el espacio de antagonismos y, de tal manera, se politice. De ahí la importancia de la crítica del concepto racionalista del sujeto unitario, que se encuentra no sólo en el postestructuralismo, sino también en el psicoanálisis, en la filosofía del lenguaje, del último Wittgenstein y en la hermenéutica de Gadamer.

Para pensar en términos políticos hoy día, y para comprender la naturaleza de las nuevas luchas y la diversidad de relaciones sociales que la revolución democrática aún tendrá que abarcar, es indispensable desarrollar una teoría del sujeto como actor descentrado y destotalizado, un sujeto construido en el punto de intersección de una multiplicidad de posiciones del sujeto entre las que no existe una relación apriorística ni necesaria, y cuya articulación es el resultado de las prácticas hegemónicas. Así pues, ninguna identidad llega a establecerse de modo definitivo, pues siempre hay un cierto grado de apertura y ambigüedad en la manera en que se articulan las diferentes posiciones del sujeto. De aquí emergen perspectivas enteramente nuevas para la acción política, que ni el liberalismo, con su noción del individuo que sólo persigue su propio interés, ni el marxismo, con su reducción de todas las posiciones del sujeto a la clase, pueden sancionar, ni mucho menos imaginar.

Debe señalarse, por tanto, que esta nueva fase de la revolución democrática, al tiempo que es, a su manera, el resultado del universalismo de la Ilustración, también pone en cuestión algunos de sus presupuestos. Muchas de las nuevas luchas renuncian de hecho a toda pretensión de universalismo y revelan que en todo alegato de universalismo están implícitos la negación de lo particular y el rechazo de la especificidad. La crítica feminista desenmascara el particularismo oculto tras los ideales que se quieren universales y que, en realidad, siempre han sido mecanismos de exclusión. Carole Pateman, por ejemplo, ha puesto de manifiesto que las teorías clásicas de la democracia se basan en la exclusión de las mujeres: *La idea de la ciudadanía universal es específicamente moderna, y depende necesariamente de la emergencia de la idea de que todos los individuos nacen libres e iguales, o son libres e iguales en estado de naturaleza. Ningún individuo está naturalmente subordinado a otro y, en consecuencia, todos deben tener una posición pública en tanto que ciudadanos, en la que se sustenta su capacidad para gobernarse a sí mismos. La libertad individual y la igualdad suponen asimismo que el gobierno sólo surge mediante el acuerdo o el consenso.*

Para pensar en términos políticos hoy día, y para comprender la naturaleza de las nuevas luchas y la diversidad de relaciones sociales que la revolución democrática aún tendrá que abarcar, es indispensable desarrollar una teoría del sujeto como actor descentrado y destotalizado, un sujeto construido en el punto de intersección de una multiplicidad de posiciones del sujeto entre las que no existe una relación apriorística ni necesaria, y cuya articulación es el resultado de las prácticas hegemónicas.

9. Sobre este tema, véase el penetrante análisis de Giani Vattimo, "La crisis dell'umanismo" "en *La fine della modernità*, Milán, 1985, cap. 2. En español, *El fin de la modernidad*, Gedisa, Barcelona, 1987.



Collage de Hernán Mauricio Suárez

Nos enseñan que el individuo es una categoría universal que se aplica a todos y cada uno de nosotros, lo que, no obstante, no es cierto. El individuo es un hombre.¹⁰

La reformulación del proyecto democrático en los términos de la democracia radical requiere prescindir del universalismo abstracto de la Ilustración y de su concepción de una naturaleza humana no diferenciada. Aun cuando la emergencia de las primeras teorías sobre la democracia moderna y el individuo como depositario de derechos se hiciera posible gracias a estos conceptos, hoy se han tornado grandes obstáculos para la futura ampliación de la revolución democrática. Los nuevos derechos reclamados en la actualidad son expresión de diferencias a las que sólo ha comenzado a atribuirse importancia en los últimos tiempos, derechos que no pueden universalizarse. La democracia radical exige que reconozcamos las diferencias: lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo, y, en efecto, todo aquello que ha sido excluido del concepto

de hombre en abstracto. El universalismo no se rechaza, antes bien, se particulariza; y surge la necesidad de una articulación nueva entre lo universal y lo particular.

La razón práctica: Aristóteles versus Kant

La creciente insatisfacción con el universalismo abstracto de la Ilustración da cuenta de la rehabilitación del concepto aristotélico de *phronesis*. Este *conocimiento ético*, distinto del conocimiento específico de las ciencias (*episteme*), depende del *ethos*, esto es, de las condiciones culturales e históricas distintivas de la comunidad, e implica la renuncia a toda pretensión de universalismo.¹¹ Se trata de una racionalidad adecuada para el estudio de la *praxis humana*, que excluye toda posibilidad de una *ciencia* de la práctica y exige la existencia de una *razón práctica*, una región que no se caracteriza por afirmaciones apodícticas y donde lo razona-

10. Carole Pateman, "Removing Obstacles to Democracy", ponencia presentada en el Congreso de la International Political Science Association, Ottawa, Canadá, octubre 1986, materiales del congreso.

11. Interpretaciones recientes de Aristóteles pretenden disociarlo de la tradición de la ley natural y subrayar las diferencias que lo separan de Platón en este aspecto. Véanse, por ejemplo, los comentarios de Hans-Georg Gadamer en *Truth and Method*, Nueva York, 1984, pp. 278-289. En español, *Verdad y método*, Sígueme, 1991.

ble prevalece sobre lo demostrable. Kant postuló un concepto muy diferente de razón práctica, sustentado en la universalidad. Tal como observa Ricoeur: *Al elevar al rango de principio supremo la norma de la universalización, Kant inauguró una de las ideas más peligrosas y que ha prevalecido desde Fichte hasta Marx, a saber, que la esfera práctica estaba sujeta a un tipo de conocimiento científico comparable al requerido en la esfera teórica.*¹² Gadamer también critica a Kant por haber abierto el camino al positivismo en las ciencias humanas y considera el concepto aristotélico de *phronesis* mucho más adecuado que el análisis kantiano de la razón cuando se trata de comprender el tipo de relación existente entre lo universal y lo particular en la esfera de la acción humana.¹³

El desarrollo de la filosofía de la ciencia posempiricista converge con la hermenéutica en el reto al modelo positivista de racionalidad dominante en las ciencias. Teóricos como Thomas Kuhn y Mary Hesse han realizado una gran contribución a esta crítica al señalar la importancia de los elementos retóricos en la evolución de la ciencia. Hoy existe un acuerdo sobre la necesidad de ampliar el concepto de racionalidad para dar cabida a lo *razonable* y a lo *plausible* y reconocer la existencia de múltiples formas de racionalidad.

Este tipo de ideas son cruciales para el concepto de una democracia radical donde la razón desempeña un papel fundamental, que debe conceptualizarse apropiadamente con objeto de evitar los falsos dilemas entre la existencia de un criterio universal, por un lado, y el dominio de la arbitrariedad, por otro. El que una pregunta no encuentre respuesta científica o no alcance el *status* de verdad demostrable no comporta la imposibilidad de formarse una opinión razonable al respecto, ni tampoco la necesidad de negarle toda la posibilidad de explicación racional. Hannah Arendt tenía mucha razón al insistir en que la esfera política es el dominio de la opinión, o *doxa*, y no el de la verdad, y que cada esfera posee sus propios criterios de validez y legitimidad.¹⁴ No faltarán, no obstante, quienes argumenten que esta perspectiva está amenazada por el fantasma del relativismo. Pero esa acusación

sólo tiene sentido cuando no se supera la tradicional problemática que no ofrece alternativa a la contraposición entre objetivismo y relativismo.

Afirmar que no se pueden aportar fundamentos racionales definitivos a un sistema de valores determinado no equivale a considerar que todas las perspectivas son equivalentes.

Como Rorty señala, *el verdadero problema no es el que existe entre las personas que creen que todos los puntos de vista son igualmente válidos y las que no opinan de ese modo. El problema real se plantea entre las personas para quienes nuestra cultura, nuestros objetivos e instituciones sólo pueden respaldarse mediante la palabra y las personas que todavía confían en darles otro tipo de apoyos.*¹⁵ Siempre es posible distinguir entre lo justo y lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo, pero sólo cabe hacerlo dentro de una tradición: de hecho, no existe un punto de vista externo a toda tradición desde el que pueda ofrecerse un juicio universal. Es más, la renuncia a la distinción entre lógica y retórica a que conduce la crítica posmoderna –y donde se separa de Aristóteles– no significa que “todo lo posible es bueno” o que haya que hundirse en el nihilismo. Aceptar con Foucault que no puede haber una separación absoluta entre validez y poder (por cuanto la validez siempre es relativa a un régimen específico de verdad, unido a un poder) no significa que, dentro de un régimen de verdad dado, no se puedan diferenciar aquellos aspectos que respetan la estrategia de la argumentación y sus reglas y aquellos que simplemente aspiran a imponer su poder.

Por último, la falta de fundamentos “deja todo como está”, como diría Wittgenstein, y nos obliga a formularnos las mismas preguntas de otra manera. De ahí el error de un determinado tipo de posmodernismo apocalíptico que pretende llevarnos a creer que estamos en el umbral de una época radicalmente nueva, caracterizada por el desplazamiento, la diseminación y el juego incontrolable de las significaciones. Esta perspectiva sigue cautiva de la problemática racionalista, la misma que pretende criticar. Como se ha dicho: *El verdadero error del metafísico clásico no fue creer en*

La reformulación del proyecto democrático en los términos de la democracia radical requiere prescindir del universalismo abstracto de la Ilustración y de su concepción de una naturaleza humana no diferenciada. Aun cuando la emergencia de las primeras teorías sobre la democracia moderna y el individuo como depositario de derechos se hiciera posible gracias a estos conceptos, hoy se han tornado grandes obstáculos para la futura ampliación de la revolución democrática.

12. Paul Ricoeur, *Du texte à l'action*, París, 1986, pp. 248-251. En español, *El discurso de la acción*, Cátedra, Madrid, 1988.

13. Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, pp. 33-39.

14. Hannah Arendt, *Between Past and Future*, Nueva York, 1968.

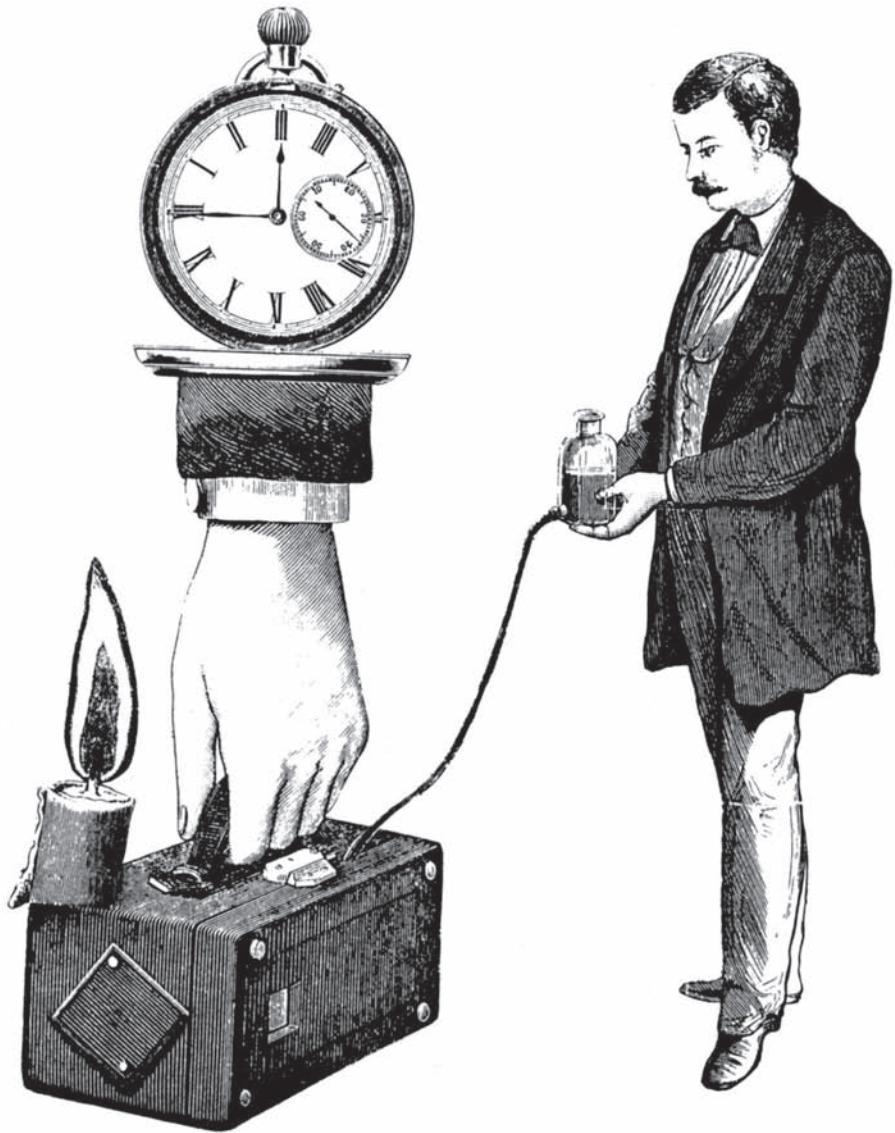
15. Richard Rorty, *Consequences of Pragmatism*, Minneapolis, 1982, p. 167.

la existencia de fundamentos metafísicos, sino creer que esos fundamentos eran de algún modo necesarios, pensar que lo que carece de fundamentos está perdido, amenazado, minado o simplemente en cuestión.¹⁶

La tradición y la política democrática

Debido a la importancia que atribuye a lo particular, a la existencia de diferentes formas de racionalidad y al papel de la tradición, el camino de la democracia radical se cruza, paradójicamente, con las corrientes principales del pensamiento conservador. El pensamiento conservador hace gran hincapié en la crítica del racionalismo y del universalismo de la Ilustración, una crítica que comparte con el pensamiento posmoderno; tal vez esta proximidad explique por qué algunos posmodernos han sido calificados de conservadores por Habermas. De hecho, no sólo se encuentran afinidades en el plano político sino en el hecho de que, a diferencia del liberalismo y del marxismo –doctrinas ambas de la reconciliación y del perfeccionamiento–, la filosofía conservadora se basa en la finitud, la imperfección y los límites de la naturaleza humana. Pero esta actitud no lleva inevitablemente a la defensa del *statu quo* y a una visión antidemocrática, por cuanto se presta a diversas formas de articulación.

El concepto de tradición, por ejemplo, debe distinguirse del de tradicionalismo. La tradición nos permite pensar en nuestra inserción en la historicidad, en el hecho de que nuestra construcción como sujetos se realizó mediante una serie de discursos pre-existentes, y en que la misma tradición que nos conformó es el medio por el que se nos presenta el mundo y se hace posible toda acción política. Una concepción de la política como la de Michael Oakeshott, que atribuye un papel básico a las *tradiciones de la conducta* existentes y que entiende la acción política como la *persecución de un indicio*, es muy útil y fructífera a la hora de formular una democracia radical. Tanto más cuanto para Oakeshott, la política es la actividad que se ocupa de las disposiciones



Collage de Hernán Mauricio Suárez

generales de un colectivo de personas que, en virtud de su aceptación compartida de una manera de ocuparse de tales disposiciones, componen una comunidad única. [...] Esta actividad, por tanto, no surge ni de los deseos de un momento ni de los principios generales, sino de las mismas tradiciones de conducta existentes. En cuanto a la forma que adopta, y que no puede ser otra, consiste en la corrección de las disposiciones existentes mediante la exploración y la persecución de los indicios que ofrecen.¹⁷ Si consideramos la tradición democrática liberal como la principal tradición de la con-

16. John R. Searle, "The Word Turned Upside Down", en *The New York Review of Books*, 27 de octubre de 1983, p. 78.

17. Michael Oakeshott, *Rationalism in Politics*, Londres, 1967, p. 123.

ducta de nuestras sociedades, podremos explicar la ampliación de la revolución democrática y el desarrollo de las luchas por la igualdad y la libertad en todas las áreas de la vida social entendiéndolos como la expresión de esa persecución de los *indicios* presentes en el discurso democrático liberal. Oakeshott nos proporciona un buen ejemplo, sin advertir el potencial para el radicalismo de sus argumentos. Refiriéndose al *status legal* de las mujeres, declara que *las disposiciones que constituyen una sociedad capaz de desarrollar una actividad política, ya sean costumbres, instituciones, leyes o decisiones diplomáticas, son a un tiempo coherentes e incoherentes; componen un modelo y a la vez despiertan simpatía por algo que no está del todo presente. La actividad política es la exploración de esa simpatía; y, en consecuencia, serán razonamientos políticos pertinentes aquellos que expongan con convicción una simpatía, que está presente pero no ha sido desarrollada, y que demuestren inapelablemente que éste es el momento adecuado para reconocerla.*¹⁸ Oakeshott concluye diciendo que ésta es la manera de llegar a reconocer la igualdad legal de las mujeres. La utilidad de una razonamiento de esta índole para justificar la ampliación de los principios democráticos es obvia.

La importancia concedida a la tradición también constituye uno de los temas básicos de la hermenéutica filosófica de Gadamer, la cual nos provee con herramientas muy útiles para pensar sobre la construcción del sujeto político. Siguiendo a Heidegger, Gadamer postula la existencia de una unidad fundamental entre el pensamiento, el lenguaje y el mundo. Mediante el lenguaje se constituye el horizonte de nuestro presente; el lenguaje conserva las señales del pasado; es la vida del pasado en el presente y, por ello, el movimiento de la tradición. El error de la Ilustración, según Gadamer, fue desacreditar los *prejuicios* y proponer un ideal de comprensión que requiere trascender el presente y liberarse de la inserción en la historia. Sin embargo, los prejuicios son precisamente los que defienden nuestra situación hermenéutica y constituyen la condición del conocimiento y de la apertura hacia el mundo. Gadamer recha-

za asimismo la contraposición establecida por la Ilustración entre tradición y razón, ya que, para él, *la tradición es siempre un elemento de la libertad y de la propia historia. Incluso la más genuina y sólida de las tradiciones no perdura naturalmente, debido a la inercia de lo que ya existe. Antes bien, requiere ser afirmada, aceptada y cultivada. Es, en esencia, la conservación que actúa en todo cambio histórico. Ahora bien, conservar es un acto de la razón, aunque poco llamativo y, por ende, sólo lo nuevo o lo planeado parece ser el resultado de la razón. Mas esto es una ilusión. Aún cuando la vida cambia violentamente, como en las épocas revolucionarias, lo antiguo se conserva en la supuesta transformación general en una medida mucho mayor de lo que pueda suponerse, y se combina con lo nuevo para crear nuevos valores.*¹⁹

Esta concepción de la tradición que encontramos en Gadamer se torna más específica y compleja al reformularla en términos de los *juegos del lenguaje* de Wittgenstein. Desde esta perspectiva, la tradición se convierte en el conjunto de juegos del lenguaje que conforman una comunidad dada. Puesto que para Wittgenstein los juegos del lenguaje son una unión indisoluble entre las normas lingüísticas, las situaciones objetivas y las formas de vida,²⁰ la tradición sería el conjunto de discursos y prácticas que nos conforman como sujetos. De este modo, podemos concebir la política como la persecución de indicios, lo que, desde la perspectiva de Wittgenstein, podría entenderse como la creación de nuevas acepciones para los términos fundamentales de una tradición dada, así como su empleo en nuevos juegos de lenguaje que hacen posible nuevas formas de vida.

Con objeto de aplicar el concepto de tradición al análisis de la política de la democracia radical, es importante subrayar el carácter compuesto, heterogéneo, abierto y, en última instancia, indeterminado de la tradición democrática. Siempre hay varias estrategias alternativas, no sólo porque cabe interpretar un mismo elemento de distintas maneras, sino también porque diferentes partes o aspectos de la tradición pueden oponerse a otros. Eso es lo que Gramsci —quizás el único marxista que comprendió el papel de la tradición— entendía como el proceso de desarticulación y rearticulación de los elementos característicos de las prácticas hegemónicas.

Con objeto de aplicar el concepto de tradición al análisis de la política de la democracia radical, es importante subrayar el carácter compuesto, heterogéneo, abierto y, en última instancia, indeterminado de la tradición democrática.

Siempre hay varias estrategias alternativas, no sólo porque cabe interpretar un mismo elemento de distintas maneras, sino también porque diferentes partes o aspectos de la tradición pueden oponerse a otros. Eso es lo que Gramsci —quizás el único marxista que comprendió el papel de la tradición— entendía como el proceso de desarticulación y rearticulación de los elementos característicos de las prácticas hegemónicas.

18. *Ibid.*, p. 24.

19. Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, p. 250.

20. Ludwig Wittgenstein, *Investigaciones filosóficas*, Alianza, 1991.



Collage de Hernán Mauricio Suárez

el papel de la tradición— entendía como el proceso de desarticulación y rearticulación de los elementos característicos de las prácticas hegemónicas.²¹

Los recientes intentos neoliberales y neoconservadores encaminados a redefinir conceptos tales como libertad e igualdad, y a desarticular las ideas de libertad y democracia, demuestran que es posible poner en práctica diferentes estrategias dentro de la tradición democrática liberal y, de ese modo, desarrollar indicios de distintos tipos. Enfrentados a la ofensiva desencadenada por aquellos que desean deshacer la articulación establecida en el siglo XIX entre liberalismo y democracia, y aspiran a redefinir la libertad como simple falta de coerción, el proyecto de la democracia radical debe pasar por la defensa de la democracia y la

expansión de su esfera de aplicación a las nuevas relaciones sociales. Este proyecto se orienta a crear otro tipo de articulación entre los elementos de la tradición democrática liberal, donde los derechos no se concibían en un marco individualista sino como *derechos democráticos*. De esta manera se creará una nueva hegemonía, que será el resultado de la articulación del mayor número posible de luchas democráticas.

Necesitamos que se implante la hegemonía de los valores democráticos, para lo cual las prácticas democráticas tendrán que multiplicarse e institucionalizarse dando lugar a relaciones sociales aún más diversas, de manera que mediante una matriz democrática puedan conformarse múltiples posiciones del sujeto. De este modo, y no pretendo dotarla de fundamentos raciona-

21. Sobre este tema, véase mi artículo "Hegemony and Ideology in Gramsci", en Chantal Mouffe (comp.), *Gramsci and Marxist Theory*, Londres, 1979, pp. 168-204.

les, podremos defender la democracia y además profundizar en ella. Una hegemonía de tal índole nunca llegará a completarse y, en cualquier caso, no es deseable que una sociedad sea gobernada por una única lógica democrática. Las relaciones de poder y autoridad no pueden desaparecer por completo y, en este sentido, es importante abandonar el mito de una sociedad transparente y reconciliada consigo misma, por cuanto ese tipo de fantasía conduce al totalitarismo. El proyecto de una democracia radical y plural, por el contrario, precisa de la existencia de la multiplicidad, de la pluralidad y del conflicto, en los que ve la razón de ser de la política.

La democracia radical, una nueva filosofía política

Si la tarea de la democracia radical es realmente la profundización en la revolución democrática y la vinculación de diversas luchas democráticas, una tarea de esa índole requiere que se creen nuevas posiciones del sujeto que permitan una articulación común de, pongamos por caso, el antirracismo, el antiesxismo y el anticapitalismo. Puesto que estas luchas no convergen espontáneamente, para establecer equivalencias democráticas se requiere un nuevo *sentido común* que permita transformar la identidad de los diferentes grupos de manera que sus reivindicaciones puedan articularse entre sí de acuerdo con el principio de la equivalencia democrática. Pues no se trata de establecer una mera alianza entre determinados intereses, sino de modificar la propia identidad de esas fuerzas. Con objeto de que la defensa de los intereses de los trabajadores no se realice a costa de los derechos de las mujeres, los inmigrantes y los consumidores, es necesario establecer una equivalencia entre las distintas luchas. Sólo en esas circunstancias se vuelven verdaderamente democráticas las luchas contra el poder.

La filosofía política desempeñará un papel muy importante en la emergencia de un sentido común diferente y en la creación de las nuevas posiciones del sujeto, ya que proveerá la *definición de la realidad* que configurará la experiencia política y actuará

como matriz en la construcción de un determinado tipo de sujeto. Algunos de los conceptos básicos del liberalismo, como los de libertad, ciudadanía y derechos, son reclamados hoy por el discurso del individualismo posesivo que se interpone en el camino del establecimiento de una cadena de equivalencias democráticas.

Ya me he referido a la necesidad de un concepto de derechos democráticos: derechos que, aun perteneciendo al individuo, sólo pueden ejercitarse colectivamente y presuponen la existencia de derechos equivalentes para los demás. Pero la democracia liberal también debe incorporar una idea de libertad que trascienda el falso dilema entre las concepciones antigua y moderna de la libertad y que nos permita conjugar la libertad individual con la libertad política. En este aspecto, la democracia radical comparte las preocupaciones de varios autores que quieren recuperar la tradición del republicanismo cívico. Esta tendencia, al ser bastante heterogénea, plantea la necesidad de indicar qué diferencias separan los denominados comunitaristas, quienes, aun compartiendo la crítica a la idea del individualismo liberal según la cual el sujeto existe antes que las relaciones sociales que lo conforman, muestran actitudes distintas hacia la Modernidad. Por un lado están aquellos que, como Michael Sandel y Alasdair MacIntyre, acuden a Aristóteles como principal fuente de inspiración y rechazan el pluralismo liberal en nombre de una política del bien común y, por otro lado aquellos que, como Charles Taylor y Michael Walzer, critican los supuestos epistemológicos del liberalismo al tiempo que procuran incorporar su contribución política en el área de los derechos y el pluralismo.²² Estos últimos mantienen una perspectiva más próxima a la democracia radical, en tanto que los primeros muestran una actitud extremadamente ambigua hacia el advenimiento de la democracia y tienden a defender las concepciones posmodernas de la política, sin establecer diferencias entre lo ético y lo político, entendiendo esto último como la expresión de los valores morales compartidos.

La doctrina de Maquiavelo es quizás la que mejor puede iluminar el republicanismo

Si la tarea de la democracia radical es realmente la profundización en la revolución democrática y la vinculación de diversas luchas democráticas, una tarea de esa índole requiere que se creen nuevas posiciones del sujeto que permitan una articulación común de, pongamos por caso, el antirracismo, el antiesxismo y el anticapitalismo. Puesto que estas luchas no convergen espontáneamente, para establecer equivalencias democráticas se requiere un nuevo sentido común que permita transformar la identidad de los diferentes grupos de manera que sus reivindicaciones puedan articularse entre sí de acuerdo con el principio de la equivalencia democrática.

22. Me refiero a los siguientes estudios: Michael Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge, 1982; Alasdair MacIntyre, *After Virtue*, Notre Dame, 1984; Charles Taylor, *Philosophy and the Human Sciences*, Philosophical Papers 2, Cambridge, 1985; Michael Walzer, *Spheres of Justice*, Nueva York, 1983.

cívico y, en este sentido, la obra reciente de Quentin Skinner posee un interés muy especial. Skinner pone de manifiesto cómo en Maquiavelo hay una concepción de la libertad que, sin postular una noción objetiva de la vida correcta (y siendo, por tanto, según Isaiah Berlín, una concepción *negativa* de la libertad), incluye ideales relativos a la participación política y a la virtud cívica (los cuales, según Berlín, son típicos de una concepción *positiva* de la libertad). Skinner señala que la idea de libertad plasmada en los *Discursos* es la capacidad de los individuos para perseguir sus propios objetivos, sus *humores (humori)*. Esto va unido a la afirmación de que, con objeto de garantizar las condiciones necesarias para evitar la coerción y la servidumbre, que imposibilitarían la práctica de la libertad, es indispensable que los individuos desempeñen determinadas funciones públicas y cultiven las virtudes que ello requiere. Para Maquiavelo, si se ha de practicar la virtud pública y servir al bien común, el objetivo no es otro que asegurarse un cierto grado de libertad personal que permita perseguir los propios objetivos.²³ Aquí encontramos la articulación entre una concepción muy moderna de la libertad individual y una concepción antigua de la libertad política, lo cual es un requisito básico para el desarrollo de la filosofía política de la democracia radical.

Ahora bien, apelar a la tradición del republicanismo cívico, aun haciendo hincapié en su rama maquiavélica, no nos proporciona por completo el lenguaje político requerido para articular la multiplicidad de luchas democráticas actuales. En el mejor de los casos, nos ofrecerá los elementos necesarios para combatir los aspectos negativos del liberalismo individual, sin llegar a servirnos para entender la complejidad de la política actual. Nuestras sociedades se enfrentan a la proliferación de espacios políticos radicalmente nuevos y diferentes, espacios que nos exigen abandonar la idea, característica tanto del liberalismo como del republicanismo cívico, de un único espacio conformador de lo político. Si la concepción liberal del *yo sin trabas* es deficiente, la alternativa presentada por los defensores comunitaristas del republicanismo cívico no es mejor. No se trata de trasladarse desde

el *yo unitario y sin trabas* al *yo unitario situado en un contexto*; el problema está en la propia idea del sujeto unitario. Muchos comunitaristas parecen creer que pertenemos sólo a una comunidad, definida empírica e incluso geográficamente, y que esa comunidad podría unificarse con la sola idea del bien común. La realidad es, que somos sujetos múltiples y contradictorios, habitantes de una diversidad de comunidades (tantas, en realidad, como las relaciones sociales en las que participamos y como las posiciones del sujeto que éstas definen), construidas por una variedad de discursos, y ligadas temporal y precariamente en la intersección de esas posiciones del sujeto. De ahí la importancia de la crítica posmoderna a la hora de desarrollar una filosofía política encaminada a hacer posible una nueva forma de individualidad que sea verdaderamente plural y democrática. Una filosofía de esta índole no presupone que la democracia posee fundamentos racionales, ni tampoco proporciona respuestas, a la manera de Leo Strauss, a las preguntas relativas a la naturaleza de los asuntos políticos y del mejor régimen posible. Por el contrario, propone permanecer en la incertidumbre y, tal como lo expresa Michael Walzer, “interpretar para nuestros compañeros de ciudadanía el mundo de significados que compartimos”.²⁴ La tradición democrática liberal está abierta a muchas interpretaciones y la política de la democracia radical no es sino una de las estrategias posibles. Nada garantiza su éxito, pero este proyecto ya se ha puesto en marcha para llevar a la práctica y profundizar el proyecto democrático de la Modernidad. Una estrategia de esta índole nos exige abandonar el universalismo abstracto de la Ilustración, la concepción esencialista de una totalidad social y el mito del sujeto unitario. En este aspecto, lejos de ver el desarrollo de la filo-sofía posmoderna como una amenaza, la democracia radical la acoge como instrumento indispensable para alcanzar sus objetivos●

*Nuestras sociedades se enfrentan a la proliferación de espacios políticos radicalmente nuevos y diferentes, espacios que nos exigen abandonar la idea, característica tanto del liberalismo como del republicanismo cívico, de un único espacio conformador de lo político. Si la concepción liberal del *yo sin trabas* es deficiente, la alternativa presentada por los defensores comunitaristas del republicanismo cívico no es mejor. No se trata de trasladarse desde el *yo unitario y sin trabas* al *yo unitario situado en un contexto*; el problema está en la propia idea del sujeto unitario.*

23. Quentin Skinner, “The Idea of Negative Liberty: Philosophical and Historical Perspectives”, en R. Rorty, J. B. Schneewind y Q. Skinner (comps.), *Philosophy in History*, Cambridge, 1984. En español, *La filosofía en la historia*, Paidos Ibérica, 1990.

24. Walzer, *Spheres of Justice*, p. XIV.

Francisco Weffort
Sociólogo brasileño

Nuevas democracias: ¿qué democracias?*

Francisco Weffort



Ilustración de Jhon Digby - Collage del libro *Miss Liberty*

i Qué son las *nuevas democracias*? La expresión suscita algunas discusiones, de suerte tal que una definición descriptiva puede ser útil, por lo menos como punto de partida. Entiendo como *nuevas* aquellas democracias que vienen surgiendo desde los años 70, la primera de las cuales conocida como “la revolución de los claveles”, en 1974, fue en Portugal. Allí se inició una gran onda

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista *Lua Nova* No. 27 del Centro de Estudios de Cultura Contemporánea de Brasil. Fue publicado también en la revista *Sociedad* No. 2, Buenos Aires, mayo 1993, pp. 93-114.

histórica que pasó por el sur de Europa en los años 70 y por América Latina en los 80 y cuyas últimas manifestaciones se encuentran en los recientes cambios políticos de Europa oriental (1989) y de la Unión Soviética (1991).¹ Creo también que la expresión se aplica a los regímenes políticos tales como los que existen actualmente, por ejemplo, en España, Brasil y Polonia. Es que, a pesar de sus muchas diferencias, tienen por

lo menos una condición en común: el reciente derrumbe de las dictaduras y la restauración de una democracia que nunca fue realmente sólida en los intentos anteriores de implantación.² Esta circunstancia común es la que importa, desde mi punto de vista, para la definición descriptiva anteriormente mencionada. Mi argumento principal es que las *nuevas democracias* son democracias en construcción en condiciones políticas de un proceso de transición que tornó inevitable la mezcla con importantes herencias del pasado autoritario. Están en construcción también en circunstancias creadas por una época de crisis social y económica que acentúa la influencia de situaciones de desigualdad social extrema así como de una creciente desigualdad social. En tales circunstancias, las nuevas democracias están tomando formas institucionales peculiares que ponen más énfasis en la delegación que en la representación (o en la participación).

En correspondencia con estas ideas, también pretendo argumentar aquí en favor de la idea de que el liderazgo es relevante para la consolidación de la democracia. Del mismo modo son relevantes las instituciones y los atributos correlativos al liderazgo, como la competencia política, lo que autores como Juan Linz y Alfred Stepan llaman *political craftsmanship*. Finalmente creo que deberíamos estar preparados para admitir que la consolidación de las *nuevas democracias* es un proceso mucho más difícil de lo que fueron los procesos de transición por los cuales ellas llegaron a ser lo que son.

Viejas democracias y nuevas democracias

Si en los años 60 y 70 América Latina ofreció numerosos ejemplos de regímenes autoritarios, en los años 80 pasó a ofrecer otros tantos de *nuevas democracias*. Algunas de éstas, particularmente las de Argentina, Brasil, Guatemala y Perú, son tomadas aquí como referencia; pero pretendo considerar también, aunque no de modo sistemático, algunos casos de Europa oriental, como Rusia, Polonia y Hungría. En los tiempos que corren, alguna comparación entre las transiciones en América Latina y los países de



Europa del Este no es sólo inevitable sino también deseable.

Más allá de esos casos, pretendo abrir también algún espacio para una *vieja democracia* latinoamericana. Me refiero al caso de Chile, probablemente el más conspicuo (y también el más dramático) caso de democracia consolidada que se conoce en la región. Al igual que la de Uruguay, también la democracia chilena falló en algún momento de los años 70, abriendo de ese modo el mismo ciclo autoritarismo-transición-democracia que tuvo vigencia en la región duran-

1. Philippe Schmitter y Terry Karl, "What Democracy Is... and Is Not", en *Journal of Democracy*, verano 1991, p. 75.

2. Samuel Valenzuela en sus comentarios a la primera versión de este texto me sugirió la siguiente definición: *nuevas democracias* son "los casos de transición democrática en países que no tienen un pasado de democracia consolidado". En este sentido, Brasil, Polonia y España son *nuevas democracias*, pero no los casos de Chile y Uruguay.

te las últimas décadas. Felizmente, como se sabe, Chile y Uruguay son hoy buenos ejemplos de restauración democrática, volviendo a formar parte, con la permanente excepción de Costa Rica, de los pocos ejemplos de democracia consolidada en la región.

La referencia a Chile hace obligatorio retomar aquí algunas sugerencias que Juan Linz hiciera en su comentario al estudio de Karl Dietrich Bracher sobre el estancamiento de la República de Weimar.³ Aunque siempre lamentables, los casos de fracaso de las democracias consolidadas son mucho más sugestivos para los fines de un análisis comparativo que los procesos que se observan en las democracias más recientes. Los fracasos de las *viejas democracias* resuenan, o deberían resonar, como una advertencia para los líderes de las actuales transiciones democráticas. Ellas sugieren, en primer lugar, que algunas de las debilidades que hoy vemos en las nuevas democracias pueden encontrarse, también, en las democracias consolidadas. En este sentido, las circunstancias que rodearon al golpe de Estado en Chile adquieren una relevancia especial, enteramente justificada, en la imaginación política latinoamericana. Pero existe una segunda razón: la experiencia histórica de las *viejas democracias* también inspira motivos de esperanza.

Las nuevas democracias, cuando todavía no están consolidadas, son institucionalmente frágiles y políticamente inestables. Sin embargo, cuando estudiamos en conjunto las democracias que fracasaron, las diferencias entre *viejas* y *nuevas* democracias aparecen bajo una luz diferente. Estos estudios nos recuerdan que aquello que los científicos sociales llaman estabilidad y solidez institucional significa, de hecho, una preocupación permanente de los líderes respecto del perfeccionamiento de los procesos democráticos.⁴ Es cierto que en algunas democracias consolidadas el entusiasmo democrático de los liderazgos a veces sustituido por el simple automatismo o por hábitos más o menos mecánicos. Sin embargo, el funcionamiento de la democracia desarrolla sus propios antídotos contra tales males generados por la estabilidad y por la adaptación. Antídotos que resaltan, una vez más, el papel de los liderazgos.

Como sugiere Dankwart Rustow, el proceso democrático, al ser competitivo por definición, *instituye un doble proceso de [...] selección en favor de los demócratas convencidos: uno entre los partidos en las elecciones generales y otro entre los políticos disputando el liderazgo dentro de los partidos*.⁵ En contra del persistente énfasis en las ondas de *desencanto* que caracterizan hoy a las democracias estables, creo que permanece en los líderes bastante conciencia e información. Y esto es parte necesaria de la explicación de una tendencia permanente, observable en las viejas democracias, en el sentido de una reafirmación de las instituciones y de su funcionamiento equilibrado.

En todo caso, es cierto que la distancia entre una democracia nueva e inestable y una democracia vieja y consolidada puede ser menor de lo que muchos piensan. Viejas o nuevas, lo esencial en una democracia es el entramado de las relaciones y de las instituciones políticas que, evidentemente, un liderazgo antidemocrático (o incompetente) puede, tal vez, destruir. Pero éste es también un entramado que líderes democráticos y competentes pueden restaurar o reconstruir. Esta perspectiva analítica, desarrollada por Juan Linz, tiene mucho que ver con las perspectivas de consolidación democrática.

También a propósito de *nuevas* y *viejas* democracias creo necesario mencionar aquí un segundo punto. Si las nuevas democracias son democracias en construcción, su consolidación tiene que ser entendida como algo más que una mera restauración de un régimen democrático previamente existente. La democracia española, que se puede considerar consolidada —después del trabajo del liberal Adolfo Suárez durante la transición y ahora con la dirección del socialista Felipe González y la discreta pero eficaz presencia de la monarquía— es mucho más que una mera restauración de la democracia que, con ropajes republicanos cayó en el peso de la Guerra Civil en los años 30.

Si la historia, en sentido general, implica continuidad y permanencia, su sentido específico está en el cambio. Evidentemente, casos de puro renacimiento de regímenes políticos son excepcionales, si es que existe

3. Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes-Crisis, Breakdown & Reequilibration*, The John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1987, 3a. edición. El mismo argumento fue retomado por Linz y Alfred Stephan en "Political Crafting of Democratic Consolidation or Destruction: European and South American Comparisons", en Robert Pastor, *Democracy in the Americas-Stopping the Pendulum*, Holmes & Meier, Nueva York-Londres, 1989.

4. Evidentemente, la estabilidad significa más que eso. Implica también, por ejemplo, como Seymour M. Lipset mostró, con riesgo de caer en algún tipo de determinismo, un nivel más elevado de desarrollo económico y un cierto nivel de eficacia de un régimen democrático. *Political Man*, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1981. Volveré sobre las condiciones sociales más adelante. La importancia de enfatizar la *political craftsmanship* aquí es que, con unas pocas excepciones, las *nuevas democracias* parecen no estar alcanzando mucho éxito ni en la eficacia ni en el desarrollo económico.

5. Dankwart A. Rustow, "Transitions to Democracy", en *Comparative Politics* Vol. 2, No. 3, abril 1970.

alguno. En todo caso, en lo que se refiere a la democracia, el cambio es la regla. Es por esto que podemos hablar, por ejemplo, de democracia censitaria, democracia liberal, democracia de masas, democracia social, etc.; estas designaciones representan criterios diferentes para describir diferentes períodos de la historia democrática. Se puede admitir que una idea general de la democracia permanece en cada uno de estos tipos. De otro modo no podríamos hablar de democracia en ningún sentido. Sin embargo, como en cualquier apreciación histórica, cuando hablamos de períodos de la democracia, siempre hablamos de cambios en torno de una tendencia central.

Y aquí paso a un tercer punto relevante en estos comentarios preliminares respecto de las viejas y las nuevas democracias. Si podemos hablar de diferentes períodos de democracia ¿por qué no podemos hablar también de diferentes tipos de democracia? La idea de una tipología de la democracia debería ser obvia, haciendo innecesaria una presentación. Tal vez se encuentre aquí la resonancia de un viejo y complicado problema histórico y político. Se cometieron tantos errores (en verdad, fue más que eso, sería mejor decir que se cometieron tantos crímenes) a partir de distorsiones en torno de las concepciones de democracia, que lo obvio precisa ser explicado. Para resumir una discusión, me limito a decir que no fueron pocos los que adjetivando a la democracia acabaron, en verdad, por contribuir a su supresión. Se llegó así a un comprensible temor que afecta cualquier intento de descripción tipológica, inclusive de carácter tan inicial como la que intento presentar aquí.

Quede claro, entonces, que creo que el concepto de democracia incluye un contenido general y límites muy definidos, de los cuales hablaré más adelante. No obstante, también creo que este hecho no debe excluir la posibilidad de una tipología. Por el contrario, el primer paso hacia una tipología consiste precisamente en eso: un concepto estricto, rigurosamente definido, y que, en nuestro caso, coincide con lo que se llama en general democracia política.

Sin embargo, una tipología requiere aun un segundo paso. Requiere criterios que le

aseguren al investigador una amplia flexibilidad cuando tenga que estudiar situaciones diferentes. Esto puede ampliar tanto el trabajo del investigador para entender situaciones concretas como también el progreso del conocimiento. De hecho, sería más fácil evitar hablar de tipos (o de períodos) y entender el concepto de democracia sobre la experiencia moderna de Europa occidental (o de Estados Unidos). De acuerdo con esta perspectiva, el próximo paso, no en nuestro caso, sería verificar si las *nuevas democracias* se ajustan a aquel modelo. Sería fácil anticipar una conclusión: en muchos casos las *nuevas democracias* tendrían que ser entendidas no sólo como *no consolidadas*, sino también como *no democracias*.

La idea de que estamos delante de democracias en construcción, abriendo paso a una tipología, implica una crítica de ese procedimiento, digamos, *negativo* en el estudio de la consolidación. Pero, evidentemente, todavía no ofrece una respuesta *positiva* a nuestro problema. En verdad, tenemos mucho que caminar antes de llegar a la construcción de una tipología consistente y persuasiva. Mientras tanto, un buen punto de partida sería considerar a las nuevas democracias desde el punto de vista de un conjunto de factores posibles de observación comparada. Pienso en especial en los siguientes factores: estructuras institucionales, liderazgos (y procesos de reclutamiento de líderes), participación de las masas y contexto económico. No pretendo que tales categorías sean exclusivas, sin embargo, creo que pueden ser útiles para comenzar. Eso es lo que trataré a continuación.

Instituciones: regímenes mixtos

Para comenzar por el primero de los criterios mencionados, el de las estructuras institucionales, pretendo sugerir aquí la hipótesis según la cual las *nuevas democracias* tienen que ser consideradas como *regímenes mixtos*. La pregunta que surge es: ¿a qué tipo de regímenes mixtos pertenecen?

Mezcla de mecanismos institucionales no son una novedad en política; por el contrario, son muy frecuentes. La mayor parte de los regímenes políticos son mixtos en



Algunos de los más modernos sistemas representativos combinan mecanismos de participación directa y/o mecanismos corporativos. En algunos sistemas de gobierno, regímenes presidenciales se mezclan con procedimientos parlamentaristas de modo tal que se vuelve difícil determinar si estamos hablando de un parlamentarismo modificado o de un presidencialismo modificado. En un sentido más general, podría decirse que la democracia liberal es una mezcla institucional –más aun, una mezcla que fue muy difícil de realizar en la historia y que llevó mucho tiempo para evolucionar hasta la forma que conocemos hoy–.

alguna medida. De hecho, algunos de los más modernos sistemas representativos combinan mecanismos de participación directa y/o mecanismos corporativos. En algunos sistemas de gobierno, régimes presidenciales se mezclan con procedimientos parlamentaristas de modo tal que se vuelve difícil determinar si estamos hablando de un *parlamentarismo modificado* o de un *presidencialismo modificado*. En un sentido más general, podría decirse que la democracia liberal es una mezcla institucional –más aun, una mezcla que fue muy difícil de realizar en la historia y que llevó mucho tiempo para evolucionar hasta la forma que conocemos hoy–. Otros ejemplos de mezcla podrían presentarse aquí.

Para responder a nuestra pregunta tomaremos una sugerencia de Phillip Schmitter: si uno desea conocer las posibilidades de consolidación presente (o futura) de la democracia, mire en el pasado, esto es, observe de dónde vinieron las transiciones.⁶

Mi hipótesis general es que las *nuevas democracias* son régimes políticos en los cuales la transición llevó a una mezcla de instituciones democráticas con importantes herencias de un pasado autoritario reciente. Estas herencias se refieren por lo menos a los siguientes aspectos: primero, a estructuras estatales del régimen autoritario previamente existente; segundo, a la relativa permanencia (o *conversión*) de líderes del régimen anterior.

El primer aspecto se refiere a instituciones tales como el ejército (en algunos casos incluyendo la *comunidad de inteligencia*), bancos estatales y otras empresas públicas. Se incluyen también diversos tipos de instituciones ligadas a la intervención económica del Estado o que sirven para reafirmar la preeminencia de los Ejecutivos sobre los Parlamentos, así como la subordinación de las asociaciones de la sociedad civil al aparato del Estado. El segundo aspecto, que se refiere a los líderes (y las instituciones correlativas), será examinado más adelante.

La discusión sobre las instituciones debe comenzar por la explicitación de un principio democrático. Me refiero al principio clásico relativo a la autonomía de la sociedad civil respecto del aparato del Estado. Se trata, evidentemente, de una idea democrática que es, en su origen, una idea liberal.

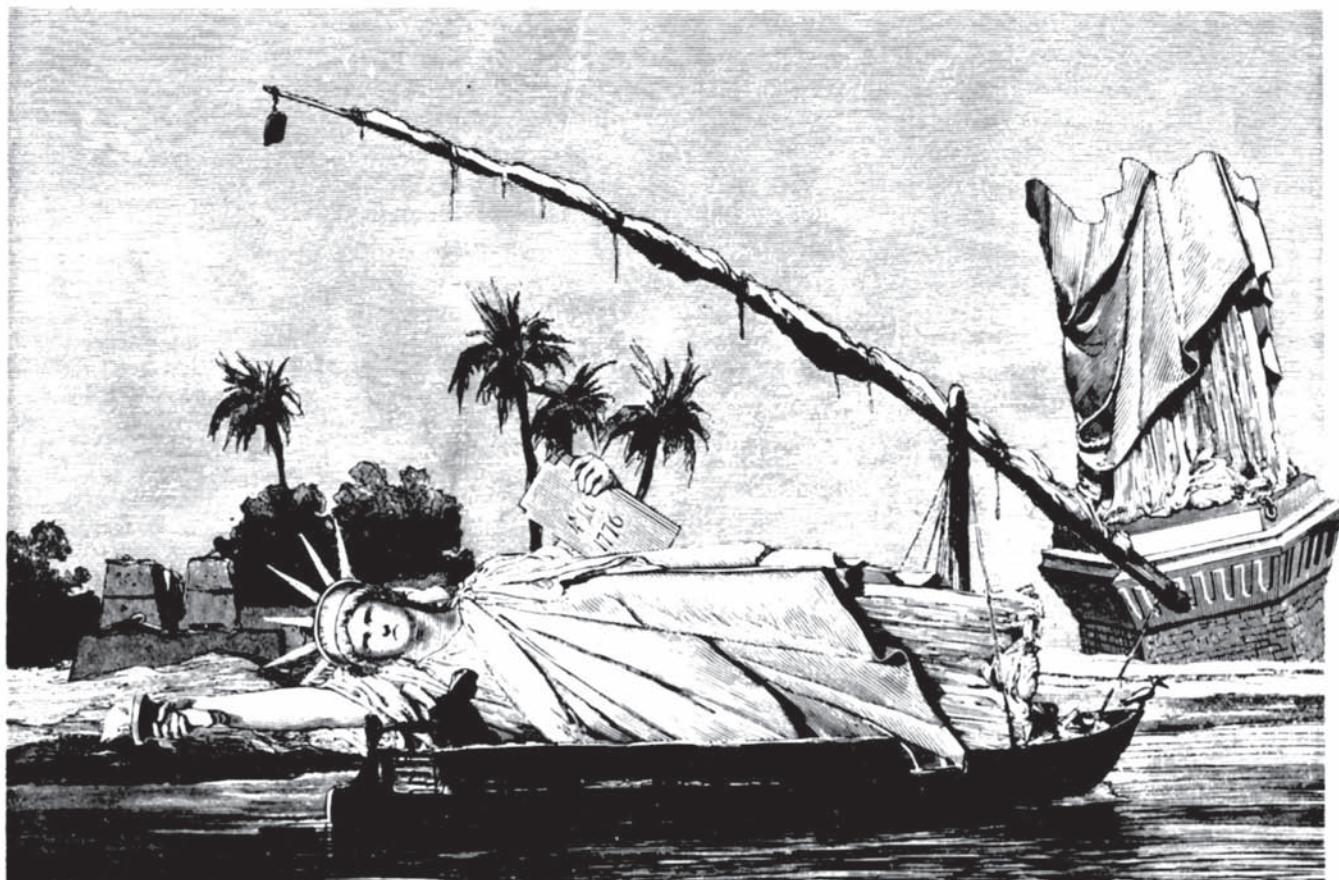
Pero sería una interpretación demasiado estricta reducir su significado a sus raíces. Como otras ideas democráticas, ésta también tomó una forma (y legitimación) general, adquiriendo un sentido que supera aquel definido en sus orígenes. Además del liberalismo, podemos encontrar ejemplos de ideas generales sobre la autonomía de la sociedad civil frente al Estado en el anarquismo y en algunas ramas del pensamiento socialista (*control operario, sociedad autorregulada, etc.*) Diferentes tendencias del pensamiento político consideran que no hay democracia donde no hay autonomía de la sociedad civil (y de la sociedad política) frente al aparato del Estado. Todo esto quiere decir que la autonomía tendría que ser considerada una condición necesaria, pero no suficiente, para la democracia.

Si bien creo que ahí tenemos un principio necesario en las democracias, creo también que debería ser considerado en un contexto más definido. El hecho es que situaciones de completa autonomía de la sociedad civil frente al Estado son poco comunes. Otra vez más, lo más frecuente son situaciones mixtas de signo a veces contradictorio. Además, las personas directamente involucradas en la tensión política entre sociedad civil y Estado tienen visiones diferentes sobre los grados relativos de autonomía que poseen en tales situaciones.

En casos concretos las personas directamente involucradas pueden considerar las situaciones mixtas como una posible pérdida para la democracia o como una posible ganancia. Esto no es, evidentemente, el caso de los régimes totalitarios, pero es probablemente el caso de diferentes tipos de régimes que todavía se hallan muy distantes de ser considerados democracias consolidadas. Por ejemplo, ciertos *régimes mixtos* sólo precariamente democráticos y con una pesada carga de herencias autoritarias, deberían ser considerados una victoria para la democracia, cuando se los compara con las dictaduras totalitarias que fueron capaces de sustituir. Es el caso de algunos de los países del Este de Europa y el ejemplo más significativo es ciertamente el de Rusia. También es el caso de muchos latinoamericanos, tales como Brasil de 1978 a 1984, cuando el país ingresó en el llamado

Mi hipótesis general es que las nuevas democracias son régimes políticos en los cuales la transición llevó a una mezcla de instituciones democráticas con importantes herencias de un pasado autoritario reciente. Estas herencias se refieren por lo menos a los siguientes aspectos: primero, a estructuras estatales del régimen autoritario previamente existente; segundo, a la relativa permanencia (o conversión) de líderes del régimen anterior.

6. Estoy tomando de Schmitter apenas la perspectiva general sobre las relaciones entre transición y consolidación. Véase Philippe Schmitter, "The Consolidation of Democracy and the Choices of Institutions", en *East South System Transformations*, Documento de Trabajo No. 7, Departamento de Ciencias Políticas, University of Chicago, septiembre 1991.

John Digby - *Miss Liberty*

período de *apertura*. A pesar de estar duramente controlada desde arriba, la *apertura* presentaba claros signos de progreso democrático en relación con el período anterior, habiendo sido considerada por muchos un pasaje necesario hacia el período democrático actual que se abrió con la Constitución de 1988.

El punto fundamental aquí es el siguiente: si se trata de examinar mezclas no hay que adoptar una óptica estricta, de negro sobre blanco. Más importantes resultan las variaciones del color o el espectro posible de situaciones. Y para distinguir entre tales posibilidades se requiere de una habilidad analítica para develar variedades y niveles de mezcla. Para ilustrar este punto tomaré de la historia del Brasil un ejemplo bien conocido de mezcla institucional –la subordinación de los sindicatos al Estado durante el período de la democracia populista (1945-1964) y durante la *nueva democracia* (después de 1984)–. Como es sabido por los estudiosos, la subordinación de los sindicatos al Estado no se explica sólo por la

7. Esta compleja estructura se conoce muy bien en Brasil después de los estudios sociológicos y políticos que comenzaron con Evaristo de Moraes Filho "El problema del sindicato único en Brasil" y de Azis, Simão "Estado y sindicato". Existe una impresionante lista de artículos y libros sobre el tema, mereciendo especial atención los de Leoncio Martins Rodrigues y José Albertino Rodrigues. En inglés, el mejor análisis del corporativismo brasileño puede encontrarse en la obra de Philippe Schmitter, *Interest, Conflict and Political Change in Brazil*, Stanford University Press, 1971. Un buen análisis de la historia y de la estructura sindical se puede encontrar en Kenneth Erickson, *The Brazilian Corporative State and the Working Class Politics*, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1977.

existencia más o menos generalizada de patrones de comportamiento dependiente por parte de los trabajadores en relación con el Estado. Se explica también por la existencia de constreñimientos institucionales, que resultan de una estructura institucional construida después de 1945, para preservar las herencias del Estado Nuevo (1937-1945), que crearon un conjunto específico de instituciones legales incluyendo definiciones constitucionales, el Ministerio del Trabajo, la previsión social, la estructura sindical y un *impuesto sindical* que el Estado recogía (y todavía recoge) con la finalidad específica de financiar las actividades sindicales.⁷

La Constitución de 1988 –principal base institucional de la *nueva democracia* brasileña– preservó muchas de aquellas instituciones autoritarias. En verdad no sólo fue eso. Introdujo también algunos cambios democráticos significativos, tales como el reconocimiento al derecho de huelga, la independencia de los sindicatos frente al Ministerio de Trabajo y el reconocimiento de las centrales sindicales, hasta entonces

prohibidas por ley. Si bien se pueden considerar estos progresos como limitados, es difícil negar la mayor autonomía de un segmento específico de la sociedad civil, en este caso la de los trabajadores organizados frente al Estado. Es evidente que continúan existiendo tensiones entre los constreñimientos del Estado y las presiones del movimiento sindical. Pero el progreso en la autonomía de la capacidad de organización de los trabajadores es muy claro.

Otro ejemplo de mezcla institucional aparece en los países en los cuales los políticos civiles, a pesar de haber logrado poner fin al régimen militar anterior, no parecen ser capaces todavía de hacer valer el principio de soberanía del poder civil sobre los militares. En el caso de Brasil, en el cual cada gobierno que se constituya debe contar con una *herencia* de seis ministros militares, es un ejemplo clarísimo. Pero no es menos impresionante el caso de Chile, donde el progreso de la democracia política, evidenciado en las elecciones que posibilitaron el gobierno de Patricio Aylwin, no pudo eliminar la presencia del general Augusto Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pinochet fue expulsado del gobierno, pero no del Estado (ni siquiera de todo el poder que detentaba). En la transición democrática chilena, otras disposiciones fueron tomadas en relación con la "estabilidad" de centenas de autoridades públicas. Esto quiere decir que el gobierno democráticamente elegido está obligado a trabajar con una parte del aparato administrativo de la dictadura anterior y que se encuentra imposibilitado, por algún tiempo, para ejercer el procedimiento democrático normal de designar nuevas autoridades para los mismos puestos.⁸

Otro ejemplo de mezcla institucional es el fenómeno del *decretismo*, o el uso de *medidas de emergencia* por el poder ejecutivo de algunos países, como medida administrativa de rutina. La práctica del gobierno por decreto implica en el sistema político la subordinación del Congreso y, por extensión, también la subordinación de los partidos políticos y de las élites políticas. El *decretismo* es visible, por ejemplo, en Brasil, donde el Ejecutivo con mucha frecuencia distorsiona la Constitución, ya que ésta

permite el uso de *medidas provisorias* en situaciones excepcionales, críticas, y con un carácter temporal. En la realidad, han sido usadas casi de un modo permanente: el presidente Sarney emitió 142 *medidas provisorias* durante los 525 días en que gobernó bajo la vigencia de la Constitución de 1988, esto implica una *medida provisoria* cada cuatro días. En 1990, el gobierno de Collor emitió 150 *medidas*, esto es, aproximadamente una cada dos días.⁹

Liderazgos: continuismo y conversión

Si nuestro primer punto se refirió a las instituciones, el segundo se refiere a los liderazgos, lo que no debe ser entendido solamente en términos de personas. Se debe prestar atención también a los partidos, sindicatos, periódicos, escuelas, iglesias y otras organizaciones de la sociedad civil. Esto significa que este segundo punto se relaciona con el primero (instituciones) por lo menos en el siguiente sentido: el momento más elocuente de un liderazgo democrático es el de la construcción de instituciones democráticas. En nuestro caso, diríamos que el momento más expresivo de un liderazgo democrático es aquel en el cual éste contribuye a la consolidación de las instituciones democráticas. De esta manera, por lo menos una parte del problema de generar liderazgos democráticos es el problema de cómo generar (y consolidar) nuevas instituciones democráticas.

En relación con esto, es oportuno hacer explícito aquí que, en general, si las nuevas democracias desarrollaran una estrategia de reformas institucionales, con el apoyo de liderazgos democráticos, podrían alcanzar un éxito considerable. Me refiero a las reformas constitucionales (incluyendo la elaboración de nuevas constituciones) y al establecimiento de nuevas leyes sobre elecciones, partidos políticos, asociaciones, etc. Si bien no puede decirse que las nuevas democracias alcanzaron un éxito completo en este tipo de reformas institucionales –el tema permanece abierto en Brasil, Chile, Argentina, Polonia, etc.– se hicieron importantes avances.

Otro ejemplo de mezcla institucional aparece en los países en los cuales los políticos civiles, a pesar de haber logrado poner fin al régimen militar anterior, no parecen ser capaces todavía de hacer valer el principio de soberanía del poder civil sobre los militares. En el caso de Brasil, en el cual cada gobierno que se constituya debe contar con una herencia de seis ministros militares, es un ejemplo clarísimo. Pero no es menos impresionante el caso de Chile, donde el progreso de la democracia política, evidenciado en las elecciones que posibilitaron el gobierno de Patricio Aylwin, no pudo eliminar la presencia del general Augusto Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

8. Estoy siguiendo mis notas de la conferencia de Genaro Arraiga sobre la transición chilena presentada en el Kellogg Institute, 1990.

9. Timothy Power, "Politicized Democracy: Competition, Institutions and Civic Fatigue in Brazil", mimeo, Department of Government University of Notre Dame, 1991.

Entre tanto, el rol de los líderes se refiere a otro campo de reformas igualmente decisivo para la construcción de instituciones democráticas (y de liderazgos democráticos). Pero en este campo, las *nuevas democracias* no tuvieron éxito. Me refiero a las políticas que buscan reformas económicas y sociales. Los sucesivos fracasos en esta área van disminuyendo la confianza en las instituciones políticas y desmoralizando a los líderes políticos. Este punto se retomará más adelante.

Me parece necesario hacer explícita la hipótesis general que orienta nuestra discusión respecto de este punto. Tal hipótesis dice que los líderes –así como también las instituciones correlativas, partidos, escuelas, diarios, sindicatos, iglesias, etc.– desempeñan un papel relevante en la consolidación de la democracia. Primero, las posibilidades de consolidación democrática son mayores si los líderes son democráticamente conscientes.¹⁰ Segundo, las posibilidades de consolidación democrática son menores si los líderes son autoritarios. Tercero, las posibilidades son apenas un poco mejores, comparadas con el caso anterior, si los líderes aun siendo democráticos no son conscientes del papel que desempeñan en la consolidación de la democracia, o si son parte de un conglomerado difuso de personas abocadas a juegos personales o sectoriales. A título de ejemplo, creo que la primera hipótesis se aplica ampliamente al caso de Chile, la segunda se aplica ciertamente al caso de Rusia y la tercera se aproxima al caso de Brasil. Es evidente, además, que en todos los casos concretos se *mezclan* las hipótesis mencionadas de tal modo que este ejemplo es sólo relativo.

Para los lectores de Maquiavelo, diría que la consolidación democrática no es apenas una cuestión de *fortuna* sino también de *virtú*. En este caso, de una virtud democrática de liderazgo con amplia conciencia de su papel. Es evidente que los políticos democráticos serán incapaces de construir (o consolidar) la democracia, si no poseen condiciones como tales. Pero es también obvio que cualquier definición de las condiciones apropiadas para la democracia, deberían incluir la presencia de un liderazgo democrático. Es tal vez la primera

de las condiciones de la democracia. No existe nada que se le parezca a una consolidación democrática por *generación espontánea*.

Con esto no pretendo sugerir que las condiciones apropiadas para la democratización tengan que ser necesariamente claras, transparentes y agradables. En verdad, las *mezclas* de las que ya he hablado, tanto de regímenes y de instituciones como de líderes, tienen algo que ver con la dureza y con la opacidad de la transición. Frecuentemente los procesos de democratización implican un alto grado de conflicto, y también de violencia, como nos lo recuerdan las teorías modernas sobre las democracias y las teorías clásicas sobre la formación del Estado. Como dice un axioma teórico básico de Dahl, una democracia es el fruto de una situación en la cual los adversarios consideran la coexistencia menos costosa que la destrucción recíproca. Tiene un sentido semejante la proposición básica de Przeworski, para quien la democracia es el resultado del conflicto. Además, dicho sea de paso, las modernas teorías de la democracia apenas actualizan, en un grado más elevado de sofisticación, las teorías clásicas del Estado.

Engels y Weber, a pesar de pertenecer a diferentes tradiciones filosóficas, describieron la violencia que subyace en los orígenes del Estado y que debería ser suprimida, por lo menos bajo su forma de violencia privada, si se considerara al Estado como tal. El Estado es necesario, dice Engels, porque sin él la sociedad se divide en dos campos incompatibles y en lucha; así, la función primaria del Estado es mantener la cohesión de la sociedad.¹¹ Weber dice algo semejante: el Estado es un conglomerado de individuos que reivindica con éxito el ejercicio legítimo de la violencia en un territorio determinado. Eso quiere decir que la violencia (considerada como violencia legal, o sea, sometida al imperio de la ley) es un *privilegio* del Estado. De esta manera, la construcción del Estado es un proceso de centralización de la violencia, y de *expropiación* de la capacidad de violencia ejercida por las personas (o grupos) particulares.¹² La mayor diferencia entre las teorías del Estado y las teorías de la democracia,



10. Para usar los términos de Rustow estoy adoptando en este ensayo una perspectiva *genética*, focalizando los orígenes de la democracia política, actitud diferente a la de un abordaje *funcional*, el que se ocuparía del funcionamiento de las democracias establecidas. Véase Dankwart Rustow, *op. cit.* Como ya lo sugirió Rustow, en un abordaje funcional, los líderes democráticos tienen mayores posibilidades de éxito que los líderes autoritarios en una democracia consolidada. Mi hipótesis, de carácter genético, es que en las situaciones en las cuales la democracia todavía no está consolidada, aumenta la relevancia del papel de los líderes democráticamente conscientes.

11. Véase de Engels, principalmente, *The Origins of the Family, the Private Property and the State*.

tales como las propuestas por Dahl y Przeworski, consiste en que mientras la construcción del Estado es un proceso de supresión de la violencia privada, la construcción de la democracia es un proceso no de supresión sino de institucionalización del conflicto. En ambos casos, sin embargo, coinciden en hacernos recordar que los escenarios de construcción de la democracia o de construcción del Estado no son necesariamente limpios y transparentes. Quien tenga dudas sobre este punto no debería más que dar una mirada a lo que está ocurriendo en países como Rumania, Georgia o, más trágicamente, Yugoslavia.

Aun cuando se estudien transiciones en las cuales existen progresos reales en el camino de la libertad y de la participación popular, las situaciones oscuras son frecuentes. Por ejemplo, son frecuentes las situaciones en las cuales los liderazgos de las transiciones democráticas no nacieron democráticos. Si las democracias nacen del conflicto y de la violencia, muchos de sus líderes nacen de las dictaduras. En este sentido, Havel de Checoslovaquia y Walesa de Polonia, son excepciones a una regla general en la que se encuentran Gorbachov, Yeltsin, etc. Sin embargo, si bien son pocos los líderes que provienen directamente de movimientos disidentes, la mayoría se van convirtiendo en democráticos durante el propio proceso de transición. Esto ha sido hasta aquí la regla general y en todo caso la esperanza. Porque no hay que olvidar que algunos líderes como Fujimori comienzan a transitar el camino inverso.

La presencia de líderes de oposición democrática –como Raúl Alfonsín y Carlos Menem, en la Argentina, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos en Chile, y en el caso de Brasil, Ulysses Guimaraes, Mario Covas, Leonel Brizola y Luis Ignacio Lula da Silveira tal vez más importante en el proceso de transición de América Latina que en el de Europa. Algunos de los líderes latinoamericanos se formaron en regímenes democráticos anteriores al régimen autoritario. Otros tuvieron alguna posibilidad de carrera dentro del *pluralismo limitado* (Linz) de regímenes autoritarios. Los regímenes totalitarios de la Europa del Este duraron mucho más tiempo, y durante ese largo período no dieron oportunidad al pluralismo.

Pero aun en América Latina las nuevas democracias cuentan con un número significativo de líderes democráticos de reciente conversión como por ejemplo José Sarney y Fernando Collor en Brasil. Brasil es apenas un ejemplo entre otros en el que líderes antes conocidos como *hombres del sistema*, esto es, del sistema autoritario anterior, adquirieron una nueva identidad política en la transición. Podemos suponer que ellos cambiaron o están cambiando sus perspectivas sobre el Estado y la sociedad. Esto ocurrió o está ocurriendo también en áreas de antigua oposición a los regímenes militares, en especial las áreas de izquierda que en el pasado reciente pertenecieron a la guerrilla. Pero no está ahí la cuestión más importante. En el caso de liderazgo brasileño como en cualquier otro –por ejemplo, el ruso– la cuestión fundamental es saber la profundidad de ese cambio y prever qué influencia tendrá en el comportamiento de la élite política prevaleciente y en la cultura política del país. Esta cuestión puede plantearse de la siguiente manera: además de trabajar en beneficio de sus legítimos intereses políticos, personales o grupales, ¿los líderes de las nuevas democracias están trabajando también en beneficio de los objetivos generales que ayuden a consolidar la democracia política como un todo?

La discusión sobre los liderazgos es un ejemplo del argumento de que si la continuidad y la ruptura son, históricamente, materias diferentes y contrastantes, no son siempre excluyentes. Por lo menos en lo referido a las estructuras del Estado y a la política. En ciertas situaciones es, por cierto, difícil diferenciar entre lo que permanece del pasado autoritario (o totalitario) o entre lo que es realmente democrático y nuevo.¹³ Para los fines de la comparación, lo que resulta relevante es el grado relativo de continuidad (o alternativamente de ruptura) que se encuentra en un proceso dado de transición cuando se lo compara con otros. Por ejemplo, si se quiere entender las diferencias entre las transiciones latinoamericanas y las de Europa del Este, creo que se puede afirmar que la ruptura relativa es (especialmente en el plano social y económico) más típica de las transiciones de Europa oriental y una relativa continuidad

12. La definición weberiana puede encontrarse en "Politics as a Vocation", en Hans Gerth y C. Wright Mills, *From Max Weber: Essays in Sociology*, Oxford University Press, Nueva York, 1958.

13. A esta altura es evidente que nos estamos refiriendo a los *viejos* autoritarismos que preceden a las nuevas democracias. En todo caso quiero puntualizar que también en éstos, existen ejemplos de viejas instituciones democráticas. Aunque sean pocas existen como testimonio de una tradición democrática que viene de lejos. Es obvio que el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, es una vieja institución democrática de España, muy anterior al régimen de Franco. Tiene algo más de un siglo de existencia. Un buen ejemplo en Brasil, aunque más reciente ya que data de 1930, es la Justicia Electoral. En Chile se puede mencionar como ejemplo el sistema partidario que es anterior al régimen de Pinochet y que le sobrevivió.



John Digby - Miss Liberty

(especialmente en el plano político) es más típica de las transiciones latinoamericanas.

A pesar de las diferencias planteadas, sigue siendo relevante considerar algunas experiencias de Europa oriental desde un ángulo latinoamericano. El sociólogo húngaro Elemer Hankiss habla de una *conversión* de los miembros de la vieja élite comunista de Hungría en un nuevo tipo de clase dominante.¹⁴ Evidentemente, esta idea representa una forma de continuidad de la clase dominante en un régimen económico y político que atraviesa por un importante proceso de cambio o de ruptura. Si no fuese

éste el caso la *conversión* como tal no sería necesaria. De acuerdo con esta interesante sugerencia conceptual, deberíamos abrir un espacio para hacer distinciones claras aun dentro del área del *continuismo* latinoamericano. En este caso no sólo existen diferentes formas de continuismo, sino que algunas de ellas están más próximas al concepto sugerido por Hankiss.

En la transición brasileña, por ejemplo, el continuismo no fue sólo una imposición de los grupos militares que dejaban el poder, sino también una elección política de muchas fuerzas democráticas que lo asu-

14. Elemer Hankiss, "A Grande Coalizão (As Mudanças na Hungria)", en *Lua Nova* No. 22, diciembre 1990, pp. 35-68. Y el capítulo 9 de Hankiss, "East European Alternatives: Are There Any?", publicado en 1991 por la Oxford University Press.

mían. Fue un compromiso entre moderados de ambos lados, en este sentido una expresión de la realidad del poder dominante en el país. Rechazado sólo por pequeños grupos de izquierda, este compromiso pone al descubierto la naturaleza real de la *nueva república* en Brasil como un resultado de una *transición conservadora*. Una transición conservadora que combinó la *conversión*, en el sentido definido por Hankiss y el *continuismo*, en el sentido latinoamericano más tradicional, para establecer una mayoría de líderes en los que hoy se sustenta la *nueva república* brasileña. Pero no creo que Brasil sea el único caso entre los *regímenes mixtos* de América Latina.

Democracia política y desigualdades sociales

En todas sus posibles y diferentes *mezclas* los *regímenes mixtos* son una cuestión de discusión empírica. Sin embargo, a pesar de lo importante que pueda ser la idea de *regímenes mixtos*, esta idea no constituye ninguna novedad o dificultad teórica. Las cuestiones teóricas importantes sólo aparecen cuando, después de describir regímenes políticos diferentes, es necesario definir cuáles de ellos son verdaderas democracias, las que a pesar de todas sus debilidades, no resultan ser dictaduras que *importan* algunas formas y símbolos democráticos. Esto significa que antes de aceptar, para un caso específico, descripciones basadas, como yo he hecho hasta aquí, en continuidades, conversiones, mezclas, etc., es necesario apelar a algunos criterios teóricos que puedan servir como límite al relativismo conceptual.

Estos criterios son, de acuerdo con Norberto Bobbio, las *reglas de juego*. O sea, son el meollo de las reglas institucionales que dan sentido a la democracia representativa.¹⁵ Robert Dahl, en su clásico *Poliarchy*, llamó a estas reglas “requerimientos para la democracia”.¹⁶ Estas reglas se refieren a los procedimientos que los científicos políticos llaman de *definición mínima* de la democracia: voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares, competencia partidaria, derecho de asociación y responsabilidad de los ejecutivos.¹⁷ Con pequeñas diferencias

se pueden encontrar los mismos criterios en la obra de muchos científicos políticos que conforman la corriente dominante del pensamiento democrático contemporáneo. Esencialmente son herederos de la crítica de Joseph Schumpeter (en el muy celebrado *Capitalismo, socialismo y democracia*, publicado por primera vez en 1942) al concepto clásico de democracia. Se apoyan, a veces con énfasis, en su idea básica de que la democracia es un método de adquirir poder con base en la competencia pacífica entre las élites.¹⁸ Eso no los convierte, al menos no necesariamente, en adeptos al elitismo político. Algunos son demócratas radicales y otros son socialistas democráticos. Pero, por cierto, los aparta de una concepción clásica, instrumental, de la democracia, la cual es vista, para usar los términos de Schumpeter, al servicio del bien común.

¿Cómo se aplican tales criterios a una situación política concreta? Tal vez pueda ayudar un ejemplo de la historia brasileña. Como ya vimos, la democracia brasileña, de 1946 a 1954, heredó muchos elementos autoritarios de la dictadura preexistente de 1937 a 1945. Pero esto está lejos de limitarse solamente al plano de las instituciones sindicales, ya que alcanza niveles más elevados. El general Eurico Gaspar Dutra, el primer ministro de Guerra durante la dictadura, fue electo presidente en 1945 con la mayoría del voto popular. Contó con el apoyo de Getulio Vargas, dictador del régimen anterior. El mismo Getulio Vargas, que fundó en 1945 dos de los mayores partidos del país, fue electo en 1950. Y aun después de su muerte en 1954 tuvo una importante influencia político-ideológica en la política brasileña hasta 1964. No solamente el régimen democrático de 1946 era mixto, sino la propia cultura política del régimen de 1946 a 1964 fue una mezcla de democracia y autoritarismo.

Sin embargo, este régimen es una democracia porque, a despecho de todas las continuidades, conversiones y otras posibles *mezclas*, los líderes brasileños experimentaron esta “organización de la incertezza” (Przeworski) que caracteriza a la democracia representativa. El régimen brasileño de 1945-1964 fue probablemente una demo-

15. Norberto Bobbio, *The Future of Democracy - A Defense of the Rules of the Game*, University of Minnesota, Minneapolis, 1987, pp. 24 y 25. En español, *El futuro de la democracia*, FCE, México, 1986.

16. Robert Dahl, *Poliarchy - Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven, 1971, cap. 1.

17. Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule - Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, The John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1989 (2a. ed.). La definición de Dahl inspiradora de muchas de las *definiciones mínimas* actuales de la democracia, se puede encontrar en este libro en el capítulo 1, p. 9, nota 6.

18. Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper & Row, Nueva York, 1975, cap. 21 y 22.

19. Véase Lipset, *op. cit.*

20. La *Poliarchy* de Dahl tiene tres capítulos sobre cuestiones socioeconómicas. El clásico de Seymour M. Lipset, *Political Man*, The John

cracia inestable, en la acepción de Lipset.¹⁹ Se caracterizó por intervenciones militares intermitentes en la política, a través de pronunciamientos y, eventualmente, amenazas de golpes de Estado, intervenciones que al final condujeron al golpe que instauró el régimen militar en 1964. Fue una democracia frágil, pero no fue una democracia de acuerdo con la definición mínima que mencionamos más arriba. Una definición mínima cuyo mayor valor es precisamente permitir reconocer a la democracia sobreviviendo en medio de la confusión, la violencia y lo que Fernando Henrique Cardoso llamó cierta vez, con la mirada puesta en la transición brasileña, "embrollo autoritario".

En mi opinión, la definición mínima exige alguna discusión teórica. No se trata de proponer cualquier cambio en la definición pero creo que es necesario aumentar su alcance interpretativo. En efecto, el funcionamiento de las reglas mínimas de procedimiento de una democracia política implica la existencia de ciertas condiciones sociales. Este es un punto claramente establecido por los científicos políticos de fines de los años 50, como Dahl, y también por sociólogos como Lipset. Pero este aspecto que me parece decisivo para comprender el drama de las nuevas democracias, fue probablemente olvidado por muchos científicos sociales que estudiaron las nuevas democracias de los años 80.²⁰ Muchos de ellos aceptan la definición mínima de democracia como si las *reglas de juego* fuesen apenas formas vacías desprovistas de cualquier contenido social. De modo paradójico se comportan como extraños compañeros de viaje de otros que rechazan la definición mínima de democracia con base en el mismo argumento, o sea que sólo se trata de una definición formal de reglas institucionales.

Me propongo rechazar la proposición que concibe las formas como vacías, porque considero que son formas con algún contenido. En este caso, son formas con algún contenido social. Esto es especialmente apropiado en el estudio de las transiciones, particularmente cuando vemos que muchas nuevas democracias surgen en sociedades caracterizadas por fuertes presiones sociales. Países como Brasil, Guatemala y Perú se caracterizaron tradicionalmente por fuer-

tes desigualdades sociales. Otro, como Argentina, están pasando actualmente por procesos crecientes de desigualdad social o de desigualización.²¹ Y evidentemente en ambos casos se siente el peso de un estancamiento económico prolongado.²²

Cuando observamos el Este, queda claro que a pesar de que las circunstancias económicas son diferentes, las nuevas democracias tienen que cambiar la estructura económica porque los efectos de los procesos de aumento de la desigualdad parecen ser todavía más fuertes. Las recientes reacciones electorales en Polonia, que llevaron a la disminución del peso político del liderazgo de Walesa y a la multiplicación de los partidos, así como las resistencias manifiestas que encuentra el programa económico de Yeltsin en Rusia pueden ser tomadas como señales de tendencias de *desigualización* incrustadas en las políticas económicas en curso. Con estos ejemplos pretendiendo sugerir, semejantes a otros que se pueden encontrar en América Latina, que sería una ingenuidad imaginar que la transición política puede pasar incólume por una crisis económica y social de tamaña profundidad.

Existe una premisa de la definición mínima de democracia, que es habitualmente pasada por alto por sociólogos y científicos políticos. Me refiero a la premisa según la cual los requisitos mínimos de participación democrática se aplican a la población adulta de las naciones.²³ Esta proposición que para muchos es tan obvia, resulta olvidada. Olvidan con frecuencia que la participación de la población adulta es la mayor diferencia entre democracias modernas, que se realizan en el contexto del Estado-nación, y los sistemas políticos anteriores, comenzando por las democracias de la antigua ciudad-Estado.²⁴

Cuando nos referimos al concepto mínimo de democracia, también es cierto que no estamos hablando de democracias que se desarrollan en las sociedades esclavistas (Antigüedad). También es cierto que no nos referimos a los regímenes políticos de la Edad Media, apoyados en la relación de servidumbre. Por el contrario, nos estamos refiriendo a regímenes en los cuales se entiende que los ciudadanos están preparados para hacer uso de las reglas mínimas de



Hopkins University Press, Baltimore, 1981, tiene la explícita intención de ser una *sociología política*; recuérdese que el subtítulo de *Political Man* es "The Social Bases of Politics".

21. Guillermo O'Donnell, "¿Democracia delegativa?", en *Novos Estudios* No. 31, CEBRAP, San Pablo, octubre 1991.

22. Se puede encontrar un buen análisis del peso de la desigualdad social en el caso brasileño, en Bolívar Lamounier, "Brazil: Inequality Against Democracy", en Larry Diamond, Juan Linz y Seymour M. Lipset, *Politics in Developing Countries-Comparing Experiences with Democracy*, Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, 1990.

23. Una explicitación de esta premisa puede encontrarse en Samuel Valenzuela, "Democratic Consolidation in Post-Transitional Setting: Nation, Process and Facilitating Conditions", mimeo, Kellogg Institute, 1990.

24. En la época actual del Estado-nación, podría admitirse que está surgiendo un tipo supra nacional de ciudadanía (por ejemplo, la ciudadanía europea asociada a una perspectiva de Europa unificada a partir de 1993). Es claro que esta posibilidad no está presente cuando examinamos las *nuevas democracias*.

participación democrática; lo que significa que son portadores de aquellos atributos sociales básicos que definen una individualidad. En la Antigüedad la identidad individual estaba dada en el contexto de la definición de ciudadano, entendido éste primariamente como miembro de la ciudad-Estado. En la Edad Media, la participación era concebida, típicamente, no a partir del individuo o al ciudadano, sino con base en diferentes tipos de privilegios asociados a *status*. En el moderno Estado-nación, la ciudadanía es una realidad pública (institucional), por cierto distinta de la realidad social del individuo, pero apoyada en ésta.

¿Qué le sucede a un régimen democrático cuando le falta a la ciudadanía alguna de sus condiciones sociales? ¿Y qué le sucede al régimen democrático cuando le falta al supuesto ciudadano los atributos sociales del individuo?

Si recordamos a los clásicos de la teoría democrática, recordaremos también que una teoría del desarrollo de la democracia no puede dejar de lado una teoría del desarrollo de la sociedad. Una premisa que subyace a la definición mínima de democracia se refiere a las relaciones entre condiciones políticas y sociales. Ninguna teoría política clásica nos autoriza a ser tan formalistas al punto de creer que la definición mínima de democracia es operativa en cualquier contexto social, de modo enteramente independiente de ciertas condiciones sociales básicas. Así como la realidad política de los ciudadanos de los Estados-nación modernos requieren un mínimo de condiciones institucionales, requieren también un mínimo de condiciones sociales. Y este mínimo se refiere al fenómeno de la individualización, a la formación social de los individuos en la sociedad moderna.

Una teoría de la democracia exige una teoría de la sociedad, por lo menos en el sentido de que la igualdad democrática de los ciudadanos requiere de algún nivel de igualdad social entre los individuos. No me estoy refiriendo aquí a la igualdad social en el sentido de Marx, sino en el sentido de Tocqueville, para quien la igualdad social no es una igualdad de poder o de riqueza, sino que esencialmente es una igualdad de individuos como tales.²⁵ Cuando Tocqueville piensa sobre la democracia como un

tipo de sociedad opuesto a la aristocracia (sociedad aristocrática), la individualización típica de las sociedades modernas es vista como una condición necesaria para el funcionamiento de la democracia política. La definición dada por Giovanni Sartori sobre *igualdad social* se refiere directamente a lo que según mi parecer es el punto central de la perspectiva tocquevilliana: *igualdad social, entendida como igualdad de status y de consideración, lo que implica que las distinciones de clase y riqueza no implican diferenciación*.²⁶

En contraste con Marx, la idea fundamental de Tocqueville sobre *igualdad social* significa *égalité de condition*, esto es la oportunidad de que un individuo sea tratado como tal por los otros. Por más moderada que esta noción de igualdad pueda resultar, es suficiente para mis propósitos. Si hay una revolución tocquevilliana, ella es la revolución de la igualdad como tendencia universal, contrastando con situaciones en las que la *diferencia* es el significado primario de los patrones predominantes de comportamiento, como, por ejemplo, en las sociedades aristocráticas o en las situaciones donde las relaciones clientelistas prevalecen. Contrasta también con las situaciones de preeminencia de *status*, típicas de las sociedades jerárquicas, como con situaciones de extrema desigualdad social o procesos de creciente desigualdad, tan frecuentes en las nuevas democracias.

Esta explicación podría ser desarrollada aun más, pero por ahora creo que es apropiado sacar de ella por lo menos una conclusión.²⁷ Más allá de las sospechas de Tocqueville respecto de la democracia, su concepto de igualdad social permanece, de cualquier modo, como un requisito previo para la igualdad política de los ciudadanos en las sociedades modernas. Sin embargo, esta condición social *mínima* está ausente en muchas de las nuevas democracias. En lo que se refiere al pasado, creo que esta ausencia puede ayudar a explicar la típica inestabilidad democrática y algunas de sus experiencias políticas características: Vargas y la tradición varguista en Brasil, Perón y la tradición peronista en Argentina, el régimen mexicano basado en el papel dominante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el liderazgo peruano de Haya de la

25. Tocqueville es mi referencia clásica para la relación entre igualdad social y libertad política. Discusiones contemporáneas sobre el tema se pueden encontrar en Robert Dahl, *Poliarchy*, *op. cit.* cap. 6, "Equalities and Inequalities", y en Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revisited*, Chatham House Publishers Inc., Chatham-New Jersey, 1987, cap. 12, "Equality".

26. Giovanni Sartori, *op. cit.*, p. 343. Recordemos que Sartori define diferentes tipos de igualdad: igualdad jurídico-política, igualdad social, igualdad de oportunidad, *igualdad (sameness)* económica. La igualdad social significa también "a cada uno la misma importancia social, esto es el poder de resistir la discriminación social" (p. 345).

27. Sería apropiado mencionar aquí el ensayo de T. H. Marshall sobre "Citizenship and Social Class", en T. H. Marshall, *Class, Citizenship and Social Development*, Anchor Books, Londres, 1965. Pero evitemos confusiones. La teoría de Marshall sobre el desarrollo de la democracia (para ser sintético: de los derechos civiles a los derechos políticos y de éstos a los derechos sociales) sugiere una discusión diferente de la que yo pretendo realizar. Tocqueville veía una tendencia a la igualdad de condiciones en Estados Unidos, en una época muy anterior, en las primeras décadas del siglo XIX donde ni siquiera era posible una discusión sobre derechos sociales. La referencia de Marshall a los derechos sociales es, de hecho, una referencia al Estado de Bienestar Social el que aparece en Inglaterra después de la Segunda Gran Guerra. Es una referencia importante en sí misma pero que va mucho más lejos de mis propósitos en este texto.

Torre y el APRA, la experiencia del régimen de Velazco Alvarado, etcétera.

Con todo, eso es el pasado o parte del pasado. Las consecuencias políticas de situaciones de extrema desigualdad y de crecientes desigualdades, hacen que las situaciones actuales sean más complicadas. No creo que las *nuevas democracias* repiten las experiencias populistas. Estas, a pesar de las diferencias de país a país, estuvieron siempre alimentadas por algún momento relevante de desarrollo económico, como en Argentina durante el primer gobierno peronista, o por un largo período de crecimiento económico, como en el Brasil entre los años 30 y los años 60. Este es también el caso de México, si la historia política de este país fuese pensada dentro del paradigma populista. Con menor énfasis el mismo argumento se ajusta al caso del Perú y de otros países latinoamericanos hasta los años 60.²⁸

Los regímenes populistas aparecieron en países donde los sectores masivos de las clases populares, tradicionalmente dependientes, experimentaron procesos de progreso social. Experimentaron procesos de creciente igualdad social, principalmente conquistando nuevas posiciones en la sociedad, aunque tales posiciones significasen apenas un paso más en los escalones ocupacionales más bajos. Así, para muchas personas, los regímenes populistas eran experiencias que se asociaban con una mayor independencia individual en el nivel social, aunque permanecieran dependientes en el nivel político. Es difícil decir lo mismo, o sea, que las personas ganaron mayor independencia social en los países de Europa oriental durante los períodos en que estuvieron bajo experiencias políticas totalitarias. Pero no puede haber dudas sobre la naturaleza radical de sus experiencias igualizadoras. En este sentido, tuvieron algo de común con el populismo.

En los años 80 el proceso de democratización política que liberó a tantos países de las trabas del autoritarismo, ocurrió en el mismo momento en que ellos entraban en una profunda y prolongada crisis económica. Una larga y severa crisis abrió condiciones de exclusión social y de pobreza masiva, disminuyendo el sentido básico de independencia de los individuos. La premisa básica de una igualdad social mínima entre



John Digby - *Miss Liberty*

28. Sobre el populismo véase mi trabajo "Estado y Masas en Brasil", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, Buenos Aires, 1965, publicado también como "State and Masses in Brazil", en Irving Louis Horowitz (comp.), *Masses in Latin America*, Oxford University Press, 1970. Véase también Torcuato Di Tella, "Populism and Reform in Latin America", en Claudio Velliz (comp.), *Obstacles to Change in Latin America*, Oxford University Press, Nueva York, 1965, y en Octavio Ianni, *La formación del Estado populista en América Latina*, Ediciones Era, México, 1975.

los individuos perdió credibilidad, con serios efectos sobre el funcionamiento de la democracia política. No hay exageración en decir que algunos de aquellos países están construyendo una democracia política sobre un campo minado de *apartheid social*. Brasil, Perú, Guatemala son casos típicos de este fenómeno. Otros países, como Argentina, Chile o Uruguay, están ensayando la construcción de una democracia política sobre un terreno, tal vez un poco menos difícil, de una desigualdad social creciente. Este parece ser también el caso de los países de Europa oriental, aunque en estos últimos las dificultades que aparecen son mucho mayores. De todas formas, no creo que debamos retornar a teorías deterministas, ya sea de inspiración económica o sociológica. Tales teorías llevarían, casi inevita-

blemente, a conclusiones pesimistas con respecto a las posibilidades de éxito de la democracia política. Además de ello, una insuficiencia básica de todo determinismo consiste en no captar la autonomía de la cultura y de la política, lo que nos llevaría al equívoco adicional de no poder explicar el crecimiento de la democracia política durante los años 80, esto es, específicamente en el contexto de la crisis económica. Tendríamos oscurecidas las perspectivas de acción democrática así como las de un mejor conocimiento de las nuevas democracias.

Una de las funciones de la política comparada es ayudarnos a ver matices allí donde el ojo desnudo sólo vería dos colores. Aunque las comparaciones no nos ofrecieran imágenes muy optimistas (¡eso sería pedir mucho!), nos permitirían mantener el pesimismo bajo control. En este sentido, es útil recordar que en Estados Unidos fue posible una democracia consolidada aun en períodos de dura crisis económica, como en los años 30, o en regiones de *apartheid* racial y social, como en el sur hasta los años 50. Si la comparación con los Estados Unidos puede parecer exagerada, tal vez el caso de la India sea más útil. Es aceptado fácilmente que la India es un caso muy especial de democracia consolidada, en una sociedad jerárquica, que enfrenta situaciones de *apartheid* social y racial. Ejemplos como éste sugieren que las relaciones entre sociedad, economía y política son más complejas de lo que pueden parecer a primera vista.

Para resumir mis argumentos referentes a estas relaciones, trataré dos preguntas básicas. La primera es la siguiente: ¿la democracia política es posible en sociedades marcadas por un alto grado de desigualdad (Brasil, Perú, Guatemala) o por procesos de creciente desigualdad social (Argentina, Chile, Uruguay)? Mi respuesta es sí. Aunque esta respuesta implica una gran cantidad de limitaciones reales respecto del tipo de democracia que es posible construir en tales condiciones. Hay una contradicción entre un sistema institucional basado en la igualdad política de los ciudadanos (y, por tanto, en la igualdad social básica de los individuos como individuos) y sociedades caracterizadas por procesos de extrema desigualdad social o procesos de creciente desigualdad. Sin embargo no creo que esta

contradicción deba llevar, por lo menos necesariamente, a las nuevas democracias al desastre, ella abre un campo de tensiones, distorsiones institucionales, inestabilidad, violencia, etc. Desigualdad extrema y desigualización no anulan las posibilidades de democracia política. Pero hacen una diferencia, una gran diferencia.

La segunda pregunta: ¿bajo tales condiciones, es posible la consolidación de la democracia? Mi respuesta es no. De acuerdo con muchos conceptos de consolidación, Brasil que es hoy ciertamente una democracia, no es una democracia consolidada. Me parece que esta consideración se aplica también a la democracia brasileña de 1945-1964. Algunos de los factores institucionales que caracterizaban en aquella época a una democracia no consolidada están aún presentes en la actualidad, con algunas diferencias de grado. Entre esos factores se encuentran los siguientes: baja institucionalización partidaria (esta condición es hoy peor que en 1945-1964); *impasses* intermitentes entre la Presidencia y el Congreso (esta condición también es peor hoy que antes); presencia militar como herencia del régimen autoritario anterior (esta condición es menos importante hoy que en 1945-1964). Sin embargo, hay algo más que debe ser considerado al margen de nivel institucional y es, como ya lo observé antes, que en el nivel social la situación actual es mucho peor.



Adpostal

Esto son nuestros servicios ¡utilícelos!

- ☒ SERVICIO DE CORREO ORDINARIO
- ☒ SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO
- ☒ SERVICIO CERTIFICADO ESPECIAL
- ☒ SERVICIO ENCOMIENDAS ASEGURADORAS
- ☒ ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO
- ☒ SERVICIO CARTAS ASEGURADAS
- ☒ SERVICIO DE FILATELIA
- ☒ SERVICIO DE GIROS
- ☒ SERVICIO ELECTRONICO BUROFAX
- ☒ SERVICIO INTERNACIONAL APRS/SAL
- ☒ SERVICIO "CORRA"
- ☒ SERVICIO RESPUESTA COMERCIAL
- ☒ SERVICIO TARIFA POSTAL REDUCIDA
- ☒ SERVICIOS ESPECIALES

Para sus quejas y reclamos,
llame a los teléfonos: 334 03 04 y 341 55 36 en Santafé de Bogotá

Hay que creer en los correos de Colombia

Juan Carlos Portantiero
Sociólogo argentino
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires



Collage de John Digby - Miss Liberty

Las apuestas de la democracia en Sudamérica*

Juan Carlos Portantiero

i Habrá marcado el *impeachment* a Collor de Melo un punto de inflexión en el proceso de transición-consolidación de la democracia en el Sur de América Latina? El descrédito público y el pedido de juicio político subsiguiente hacia quien fuera consagrado presidente a fines de 1989 en las primeras elecciones verdaderamente democráticas, tras un período de tres décadas, ha sido visto por la mayoría de los observadores como una prueba de la fortaleza del sistema repres-

tativo. En ese sentido, el juicio, predominantemente institucional, parece ser correcto: una crisis como la que precipitó la salida de Collor de Mello hubiera provocado, muy pocos años atrás, un clásico golpe militar. Esta vez no fue así y fueron los propios

* Trabajo presentado en el seminario "Transformaciones sociales y acciones colectivas: América Latina en el contexto internacional de los noventa", organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, del 11 al 13 de noviembre de 1992. Fue publicado en *Sociedad* No. 2, Buenos Aires, mayo 1993, pp. 5-16.

mecanismos que marca la Constitución los que se pusieron en marcha como correctivos, con lo cual el ejercicio democrático en América del Sur habría sorteado con éxito un riesgoso *test* en el más importante de sus países. Pero si se quedara allí, la valoración resultaría superficial: para el análisis debe importar tanto la cura como los síntomas, sobre todo cuando ellos se manifiestan en el interior de estructuras débiles como las sudamericanas con estados ineficientes y corruptos, sin un sistema de partidos representativos y con instituciones deslegitimadas, incapaces de disciplinar al poder económico y satisfacer la creciente demanda social.

Un tópico común de la literatura socio-política señala que hacia 1990 las *transiciones* sudamericanas habían superado su fase de máximo riesgo y alcanzado los umbrales de la *consolidación*, definida convencionalmente a partir del momento en que una sucesión presidencial *normal* tenía lugar.

En efecto, entre mediados del 89 y mediados del 90 se realizaron nuevos turnos electorales en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay, mientras Chile y Paraguay se incorporaban al lote democrático y Colombia, Ecuador y Venezuela mantenían su más antigua rutina de secuencia constitucional. Entre mediados de 1993 y de 1995, nueve de esos diez países deberán renovar sus mandatos presidenciales en una coyuntura en que todas esas sociedades se hallan sometidas a similares estrategias de transformación económica y atraviesan los momentos socialmente más dolorosos de las mismas. Los síntomas del *mal* brasileño obligarían a ser más cautos (no necesariamente pesimistas pero sí prudentes) en relación con el precoz entusiasmo ante la consolidación: el futuro próximo dista de ser seguro, pues el consenso público que aún está en juego no se medirá, como al principio del proceso, por la lealtad al valor genérico de la democracia, sino por la capacidad de asociar el ejercicio de ella con las dificultades de las reformas económicas. Como la *transición* equivalía, en verdad, a un complejo proceso de *transiciones* desplegadas secuencialmente, esa asincronía genera problemas para acordar en la convención capaz de señalarnos el momento en que ella está realmente consolidada, pero resulta claro

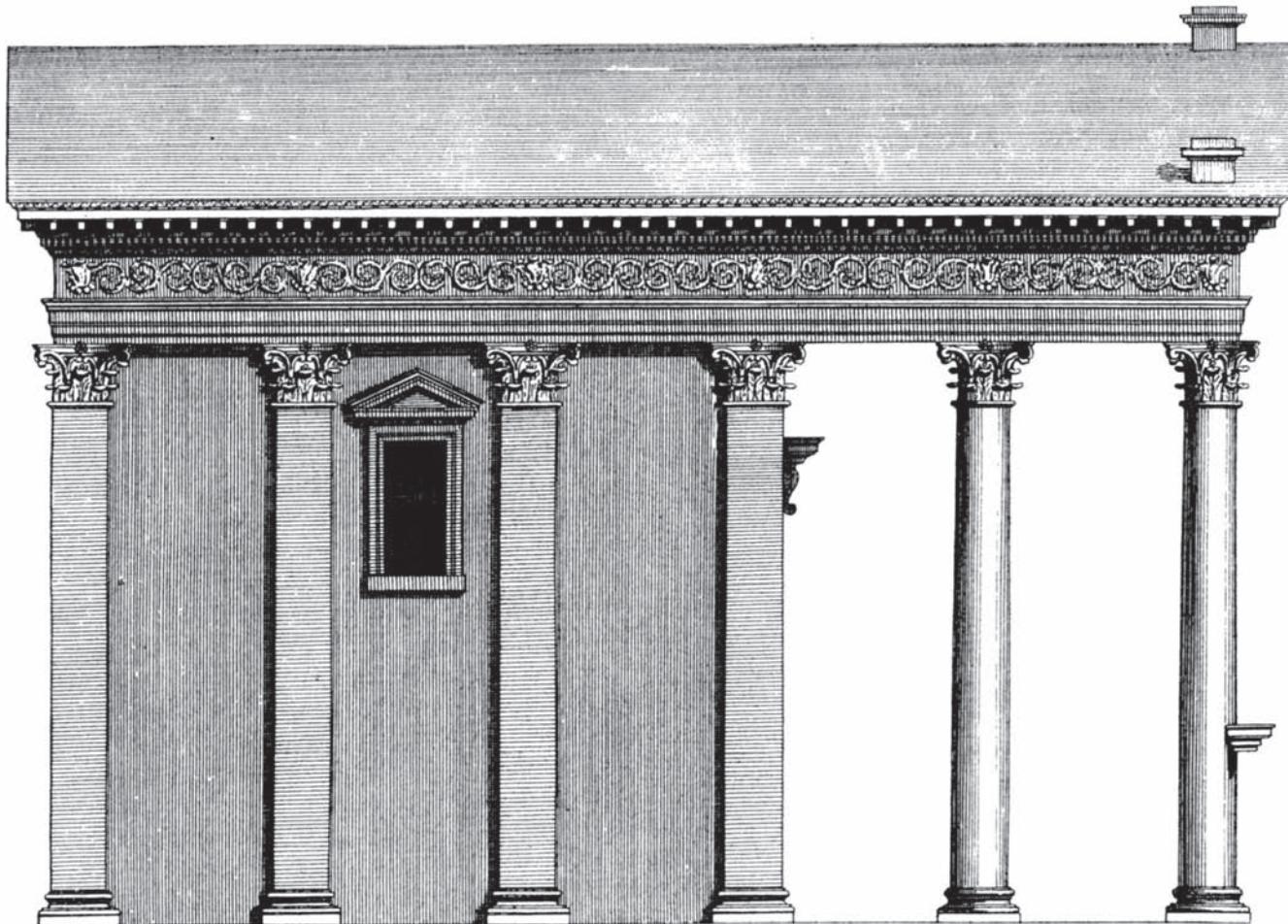
que el indicador de un mero recambio presidencial normal no es suficiente.

Por eso el síntoma brasileño preocupa, más allá de esta primera resolución institucional feliz, porque forma parte de una nueva saga de amenazas en la que se agolpan, de manera confusa, los espectros de la corrupción, del autoritarismo civil, del retorno militar (a veces con formas neopopulistas), de la desagregación social y de la descomposición del Estado. Novedades sobre esos temas son recurrentes y notorias, desde los intentos de golpe de Estado en Venezuela hasta el autogolpe en Perú, pero abarcan también otras situaciones nacionales que parecen más sólidas como las de Argentina, Bolivia y Paraguay en una gradación de peligros que tornan todavía frágil a la estabilidad democrática. Superados los primeros entusiasmos de la transición posmilitar y ante la advertencia de que la consolidación no depende sólo del respeto a mecanismos electorales, se torna urgente un balance que rinda cuentas, también, de los dilemas de la otra transición, la populista que es la que nos permitirá medir la posibilidad de asociación entre democracia política y reconversión económica en las dos relaciones centrales en que ella se dirime: democracia y eficiencia; democracia y pobreza. A esas tensiones alude, precisamente, el *síntoma brasileño*.

Transiciones: la primera fase

Ha quedado señalado más arriba que el proceso de transición-consolidación podía ser leído en clave secuencial. La afirmación debe ser matizada para no dar lugar a equívocos. En efecto: no se trata de una prescriptiva sucesión de *etapas* en las que las dimensiones no se articulan entre sí; lo que estos países sudamericanos (como también los del Este de Europa) deben acometer es un proceso de reconstrucción de la sociedad que abarca todas las esferas; la político-estatal, por supuesto, pero también las del mercado y la sociedad civil y la interacción entre ellas. En ese sentido, son las expectativas públicas las que fijan las agendas y señalan las prioridades a las élites políticas, como articulación de demandas en la que algún tipo de ellas organiza y subordina a

En términos de Touraine (1987) para que la democracia representativa funcione no sólo tiene que darse la existencia de instituciones representativas, sino también la de actores sociales representables, es decir, con un margen alto de autonomía de conciencia y acción. Ambas condiciones son de precaria densidad histórica en Sudamérica: la primera intentó ser llenada (pero mucho más en la forma que en los contenidos, como veremos más adelante) luego de las dictaduras, y la segunda por efecto de la crisis y la segmentación social, se degradó aun más.



las demás. Visto desde ese ángulo, el proceso de transición-consolidación tiene forma secuencial (aunque no unidimensional), en una espiral en la que se van agregando sucesivas demandas político-institucionales y socioeconómicas.

La experiencia sudamericana permitirá entonces hablar de tres momentos a partir de una progresiva complejización de la articulación de demandas colectivas. Una primera fase tuvo un carácter predominantemente institucional; la segunda debió atender a las presiones de la crisis económica y la tercera –de la que los síntomas de Venezuela primero y ahora de Brasil son testimonio– abre el abanico sobre las promesas incumplidas, de tipo ético y social, que se les reclama a las nuevas democracias.

A principios de la década de los 80, cuando en el Sur de América Latina los autoritarismos militares se manifestaban (salvo en el caso chileno) como incompetentes para resolver los gravísimos problemas

que la crisis de la deuda había desatado, sucesivamente se abrían los llamados procesos de transición, sometidos cada uno de ellos a las modalidades históricas de los países involucrados, aunque reconociendo algunos rasgos comunes. El más importante de estos últimos era la persistencia de la convicción acerca de que la reconstrucción post-autoritaria era exclusivamente un hecho político-institucional. El descrédito público frente a los fracasos militares alimentaba, como reacción, un fuerte apetito por la recuperación de las libertades cercenadas –que habían sido sacrificadas a cambio de nada– y de los mecanismos del Estado de Derecho. Quiero expresar con ello que al ser privilegiada de tal manera, casi excluyente, la construcción de un régimen democrático de gobierno, no se advertía que el tránsito debía incluir, necesariamente y con el mismo peso, la reorganización de la economía. Una consigna emblemática del entonces flamante presidente constitucional argentino

no, Raúl Alfonsín, sintetiza bien ese fugaz clima de época: “con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”. De hecho, todos aquellos primeros turnos de liderazgo postautoritario subestimaron o encararon con gruesos errores de cálculo las relaciones entre política y economía y debieron pagar el precio, al concluir sus períodos, de que sus mandatos no fueran revalidados. Así, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay los partidos que respondían al oficialismo fueron derrotados inapelablemente en las urnas.

Durante esta primera fase, preponderantemente *política*, en que la democracia aparecía como panacea universal ante el colapso de los autoritarismos, la economía era vista como un subproducto. Dicho de manera más precisa: la reforma del Estado era vista desde una perspectiva estrechamente institucional y no como cambio de una modalidad de regulación entre aquél y la esfera económico-social. La democracia quedaba como un tema de cultura política o de marco jurídico constitucional sin avanzar demasiado más allá de esos límites. En general, la economía aparecía como un tema de *distribución*: así como la política democrática equivalía a distribución del poder ilegítimamente concentrado por las dictaduras, la economía democrática debía ser, del mismo modo, redistribución de la riqueza que las dictaduras habían centralizado.

Democracia y crisis

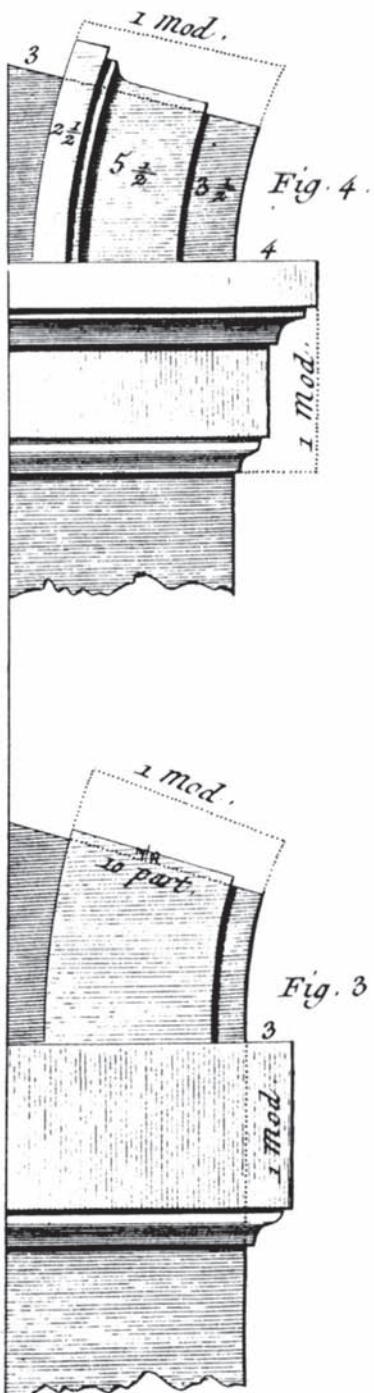
Pero esta inocencia inicial no tardó en esfumarse; rápidamente quedó demostrado que antes que reparar las inequidades, lo que urgía a los nuevos gobiernos era gestionar la crisis más grave de su historia reciente, más aun que la de los años 30, que tuviera entonces una relativamente rápida superación. El deterioro económico se aceleró y con ello los fenómenos de desagregación social, no por *culpa* de la democratización, ciertamente, pero sí por una visión muy unilateral de las tareas que debían ser encaradas. La realidad era otra: la *transición* se presentaba como un emprendimiento con, por lo menos, dos dimensiones: además de una reestructuración de la esfera política requería una reorganización de la economía, porque lo que

había colapsado junto con las dictaduras era un modo de regulación de las relaciones entre Estado y economía y lo que había que reconstruir era un modelo de sociedad –de acumulación económica y de integración social– y no sólo un modelo institucional en el sentido político-jurídico. Por ello mismo, las fórmulas populistas y/o nacional-desarrollistas que habían sostenido las políticas públicas anteriores al autoritarismo y con las que no habían roto los nuevos liderazgos democráticos, resultaban caducas: no sólo no podían resolver la crisis, sino que formaban parte fundamental de ella.

La saga de democratización mundial –Sur de Europa, América Latina, Este europeo– expresa sin equívocos la continuidad entre liberalización de la política y liberalización de la economía; entre construcción del Estado de Derecho y construcción del mercado. Claramente a partir de 1989 el tema del *ajuste* y la reconversión se ha universalizado, como resultado de la mundialización de la historia a partir de la hegemonía, sin rivales a la vista, del patrón capitalista de acumulación. Por cierto que ello no niega las autonomías nacionales ni la existencia de distintas lógicas sociales en la aplicación de las reformas en cada una de ellas, pero las relativiza de manera suficiente como para que sus rasgos centrales no puedan ser eludidos.

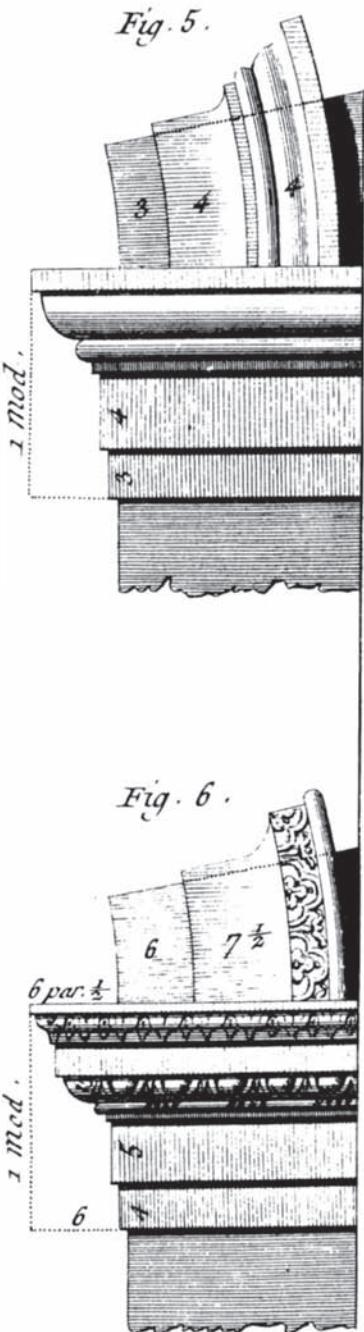
Durante la primera fase postautoritaria la demora en advertir estas restricciones de época significó para los países sudamericanos un acelerado agravamiento de la situación, de tal modo que los valores taumatúrgicos de una democracia política que por sí sólo resolvía todos los problemas sociales quedaron mellados en la percepción colectiva, aunque si bien no tan profundamente como para que se añorara una vuelta de las fuerzas armadas al poder. Los espasmos hiperinflacionarios que comenzaron a surgir como picos amenazantes en la tradicional megainflación sudamericana fueron el indicador más evidente de la descomposición que se avecinaba. Quedaba claro que si las democracias querían consolidarse, debían realizarlo en una situación de emergencia económico-social y por lo tanto debían hacerse cargo de la misma.

Esta expectativa no estaba presente en la concepción *distributiva* de la democracia



que acompañó los primeros pasos de la transición. Así como se soslayaba el problema de la deuda y de sus consecuencias, el de la crónica inflación quedaba subestimado en la medida en que se lo consideraba superable a través de recetas que estuvieron en boga en los años 60, pero que ya habían perdido totalmente su vigencia. Sin embargo, la inflación era apenas el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que el desajuste económico con que se expresaba. Su perduración a través del tiempo indicaba la decadencia irremediable de un tipo de capitalismo asistido, prebendalista, que continuaba con la antigua tradición patrimonialista del Estado latinoamericano, reforzada modernamente por las características de la industrialización protegida y de las políticas de inclusión social con que se encaró la superación de la crisis de los 30 y el desarrollo económico de la posguerra.

La megainflación, como fenómeno de frontera entre la economía y la política, venía a ilustrar el carácter de la crisis como *crisis estatal* (dándole al calificativo un sentido gramsciano) por lo que el pasaje del autoritarismo a la democracia involucraba muchos más aspectos que los político-institucionales. La presencia del autoritarismo y la posibilidad de achacarle a sus excesos toda la responsabilidad sobre los fracasos sociales opacaba una visión más honda de la situación, que remitiera no al desgaste de un régimen político, sino a la desagregación de un modo estatal de regulación de la vida social vigente desde muchas décadas atrás. Le tocaría a la democracia hacerse cargo de ese problema –salvo en Chile, donde la larga dictadura militar lo había asumido a un alto costo– a través de un laboratorio de ensayo-error que todavía no ha concluido. La reconstrucción democrática debía ir más allá de la secuencia liberalización-democratización, cuyo único riesgo parecía consistir en que el pasaje de la primera a la segunda se quebrara por un retorno autoritario: en los hechos debía coexistir con la emergencia económica más grave, en una etapa de reconversión mundial y desde ahí acometer la ímproba tarea de reconstruir las bases del Estado, no sólo en cuanto a sus formas autoritarias, sino en sus contenidos patrimonial-corporativos.



Las formas de la gobernabilidad

Enfrontados a la necesidad ineludible de gestionar la crisis económica, sin que ni sus líderes ni la sociedad estuvieran preparados para ello, los países sudamericanos pusieron en marcha distintos planes de reforma: algunos heterodoxos y moderados (como los planes Austral y Cruzado, en Argentina y Brasil); otros ortodoxamente neoliberales (como el boliviano, bajo el gobierno del populista Paz Estenssoro) y otros como los de Perú, bajo el gobierno de Alan García, francamente ortodoxos también, pero en su caso de otra ortodoxia: típicamente sesentista. ¿En qué condiciones políticas?

La coincidencia del derrumbe de las dictaduras con la decadencia terminal de un modo de regulación política de la economía transfirió a las democracias la imperiosa necesidad de acumular capacidad de gobierno, dada la magnitud de las tareas a enfrentar. El saldo de la primera fase de la transición fue esquivo para casi todos los partidos en el poder: fracasaron en sus intentos y al final de los mandatos la crisis económico-social no sólo no estaba en caminos de resolverse sino que se había agravado. No habían logrado construir la fuerza política necesaria para gobernar la emergencia.

Las dificultades que se interpusieron fueron muchas; subrayaré sólo aquellas que tienen que ver con la reconstrucción del sistema político. Por cierto que es menester reconocer diferencias entre países, derivadas en buena medida de las tradiciones ideológicas y de los modelos de organización social heredados. En ese sentido, una primera gran distinción debe hacerse entre sociedades en las que antes de las dictaduras predominaba un patrón populista de articulación de la comunidad política (como Argentina, Brasil o Bolivia) y aquellas –sólo Chile y Uruguay– en las que el patrón dominante era liberal-democrático.

Es obvio que una de las condiciones fundamentales para la perdurabilidad de un sistema político democrático consiste en la capacidad que poseen para equilibrar las tensiones entre participación colectiva y decisión gubernamental hasta hacerlas compatibles. En los extremos, la pura decisión

equivale a despotismo y la pura participación, a anarquía. En las condiciones de *doble transición* en que se encontraron las nuevas democracias sudamericanas, presionadas por las exigencias de ajuste de la economía y por los reclamos distributivos de la ciudadanía, la tarea fue enormemente compleja y frustrante para los primeros liderazgos, así como condicionantes del futuro desempeño de quienes los reemplazaron en el poder.

Un supuesto generalizado, a partir de la teoría pero también de la experiencia de algunos países del Sur de Europa, notablemente España, dice que la mejor manera de resolver los problemas de la gobernabilidad democrática (esto es, de articular un óptimo de decisión y participación) es la que logra organizar el consenso a través de estrategias de cooperación en el interior del sistema político, estrategias que se expresan en una mecánica de *pactos*, explícitos o implícitos. Ejemplos recientes de España, como los llamados Pactos de la Moncloa, o más antiguos pero más cercanos en el espacio, como los de Venezuela entre socialdemócratas y democristianos o los de Colombia entre liberales y conservadores, eran invocados como caminos de solución, a medida que los datos de la crisis eran más evidentes.

En aquellas sociedades donde las tradiciones políticas fuertes eran las demócratas de base contractual y en las que los partidos eran el núcleo principal de agregación de intereses, las estrategias del pacto podían tener un camino más seguro. Tal fue el caso de Uruguay y luego de Chile más nítidamente, a través de la gran coalición que sustentó la llegada al poder del presidente Aylwin. Pero las otras, en las que primaba una tradición populista, con una visión corporativa y organicista de la comunidad política, la orientación hacia el acuerdo entre partes resultaba más difícil, porque la propia legitimidad de cada una de esas partes resultaba más difícil, porque la propia legitimidad de cada una de esas partes estaba en cuestión para las otras (Portantiero, 1988). Esto resultó claro, dentro de una cultura política de tipo *movimentista* como la argentina, durante la presidencia de Alfonsín.

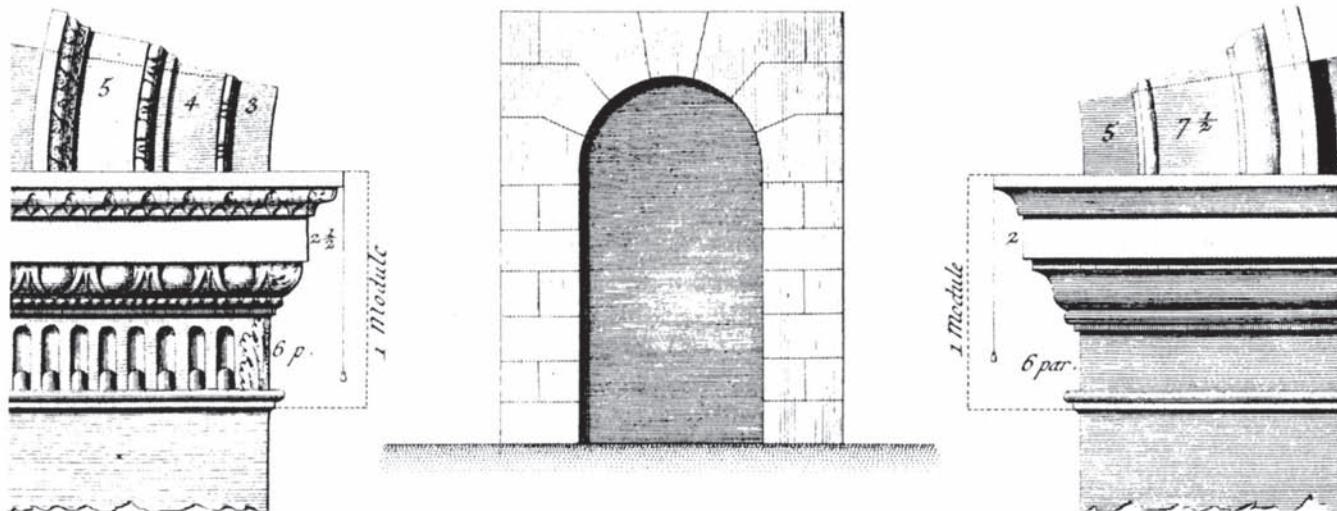
Si queda vedado el camino de los grandes acuerdos cooperativos, si la relación

entre oficialismo y oposición es transformada en un juego suma cero, la capacidad de gobierno de la democracia se recluye en el principio de la decisión con lo cual, en un círculo perverso, se corre el riesgo de correr su legitimidad, sólo consolidable entonces en función de sus éxitos. Pero éstos, dado el monto y la calidad de la crisis, no son fáciles. En rigor, el sistema político democrático no se constituye como tal, sino como un agregado de fuerzas centrífugas en el que entrechocan los partidos y los grupos corporativos aplicando lógicas de confrontación y en el que el gobierno, aislado, debe hacerse cargo del sistema como totalidad. El resultado, como en el caso argentino, no puede ser otro que la ingobernabilidad, tal como se demostró en 1989, cuando el presidente Alfonsín debió entregar el mando antes de que culminara su período constitucional.

Es cierto que el ejemplo de Argentina fue el más extremo, por razones que sólo encuentran explicación en rasgos históricos particulares que he intentado desarrollar en otros textos (Portantiero, 1987), pero salvo en Chile y en Uruguay (en este caso con metas y resultados mucho más modestos) la irresuelta tensión entre decisión y participación y la consecuente caída en problemas de gobernabilidad afectaron severamente al Brasil de Sarney, al Perú de Alan García y aun a Bolivia, pese al pacto parlamentario entre Paz Estenssoro y Banzer primero, y entre éste y Paz Zamora luego. Como lo ha señalado Torre (1991), a medida que era evidente que la consolidación de las transiciones requería más gobierno y fallaban las grandes estrategias cooperativas, las jóvenes democracias comenzaban un difícil tránsito entre el Escila de la ineficacia y el Caribdis del autoritarismo.

Esta primera fase de la democratización, culminada hacia fines de la década del 80, colocaba en la agenda una serie de problemas irresueltos. Por un lado veía agravar los datos de la crisis económica y las demandas sociales, por el otro y aun cuando parecían aventadas las amenazas de retorno de los militares no resolvía la ecuación capaz de consolidar un estable sistema político democrático, atenazada por la tensión entre eficacia y participación. Al decir de Malloy

Es obvio que una de las condiciones fundamentales para la perdurabilidad de un sistema político democrático consiste en la capacidad que poseen para equilibrar las tensiones entre participación colectiva y decisión gubernamental hasta hacerlas compatibles. En los extremos, la pura decisión equivale a despotismo y la pura participación, a anarquía. En las condiciones de doble transición en que se encontraron las nuevas democracias sudamericanas, presionadas por las exigencias de ajuste de la economía y por los reclamos distributivos de la ciudadanía, la tarea fue enormemente compleja y frustrante para los primeros liderazgos, así como condicionantes del futuro desempeño de quienes los reemplazaron en el poder.



(1991), el derrotero parecía conducir hacia *regímenes híbridos* en los que una democracia electoral coexistía con un estilo autoritario y tecnocrático de políticas públicas. Todo ello habría de reforzarse en la segunda fase.

El tiempo del ajuste

Como lo ha señalado Adam Przeworski (1991), las transiciones, tanto en el Sur cuanto en el Este, abarcan un proceso que va desde el autoritarismo hacia distintas variedades de democracia, y desde sistemas económicos administrados por el Estado, proteccionistas y monopólicos, hacia la confianza en el mercado: ambas reformas son radicales e interdependientes. Esta interrelación sólo fue advertida con fuerza en la segunda fase, puntualmente coincidente con el reemplazo de los turnos electorales iniciales.

En varios casos esa sucesión fue traumática, con un sistema político fragmentado, un Estado debilitado y una creciente movilización social. En algunas situaciones, como la Argentina durante el pasaje de Alfonsín a Menem, se hizo presente la sombra del colapso democrático, pero en casi todas (Sarney-Collar en Brasil; García-Fujimori en Perú) la crisis económica devoró a los gobiernos. La bancarrota fiscal, la hiper-

inflación, las vacilaciones entre el decisismo y el consenso como políticas gubernamentales y el deterioro del nivel de vida que generaba protestas colectivas, alimentaron un círculo progresivo de deslegitimación que advertía sobre la urgencia de cambios de rumbo para encarar la interdependencia de las *transiciones*. Concluía así el período idílico de la autosuficiencia de la democracia política.

En un trabajo sobre la transición democrática en América Latina, Giorgio Alberti (1991), señala que los regímenes que sucedieron a los autoritarismos constituyen democracias *by default*, en el sentido de que si ellas –pese a no haber resuelto las grandes expectativas que estuvieron presentes en sus comienzos– no se han desmoronado totalmente, la razón deberá encontrarse en el hecho de que para la mayoría de la sociedad no es visible una mejor solución alternativa. En tal sentido, la idea de un consenso estable y activo, de una consolidación en sentido estricto de la democracia, tenderá a horadarse en lugar de crecer, en la medida en que su legitimidad radica menos en sus propias potencialidades que en la quiebra de las dictaduras que la precedieron. En otras palabras: su legitimidad de origen no estaría avalada por una legitimidad de desempeño.

El carácter de esta peculiar democracia *por ausencia*, cuya fortaleza es la inviabilidad

lidad de las alternativas a la vista, se reveló con toda claridad en el tránsito de la primera a la segunda fase de su ciclo de instalación en Sudamérica. Si en su etapa inicial, cuando comenzaron a advertirse los signos graves de la crisis económica, aparecieron los rasgos primeros de esa *hibridización* de la democracia, que combinaba publicidad republicana con secreto tecnocrático dada la necesidad de gobierno a que obligaba la emergencia, este proceso habrá de acentuarse frente a la bancarrota fiscal del Estado que precedió a los nuevos turnos presidenciales.

La crisis hiperinflacionaria hizo aun más dramática la necesidad de gobierno y vinculó de una manera nueva la sensación de catástrofe económica vivida por la población con los valores de la democracia, expresando un brusco viraje de las demandas. Si en un primer momento, en los albores del proceso democratizador, la demanda colectiva era predominantemente político-institucional, en el segundo ella giró a lo económico-social. La manera como esa situación se dio en Argentina y Perú es paradigmática.

En el primero de los casos, el presidente Alfonsín se vio obligado a abandonar el poder seis meses antes, desbordado por una quiebra económica que no pudo controlar. El poder pasó a las nuevas autoridades electas, encabezadas por Menem, quien había conseguido la mayoría popular a favor de un programa nítidamente populista y nacionalista, entroncado con las más puras tradiciones originales del peronismo. En el caso peruano, el fracaso económico de Alan García dio lugar al triunfo de un verdadero *outsider* de la política, Fujimori, quien derrotó al candidato liberal, Mario Vargas Llosa, enarbolando también banderas populistas. Ambos, Menem y Fujimori, practicarían sin embargo desde el gobierno políticas inversas a las que habían prometido, virtualmente desde el primer día de sus gestiones. Esa *traición* a sus programas y, se supone, a la voluntad de sus electores, que implicaba la aplicación de violentas políticas de ajuste, no sería enjuiciada moralmente ni castigada por la ciudadanía. Es que la magnitud de la crisis no dejaba, en la percepción colectiva, otras alternativas. También en este caso, el ajuste se imponía *by default*.

En el ejemplo brasileño, con matices, porque en él sería el tema (verdaderamente *boomerang*) de la corrupción el ariete de la campaña de Collor de Melo, se da una situación parecida a la argentina y a la peruana, en el sentido de que la demanda mayoritaria apela a la necesidad de gobierno como reclamo predominante. Sobre este marco de bancarrota se opera el segundo tránsito en el ciclo democratizador, anclado sobre el tema del ajuste y la concentración del poder, del *shock* económico y la tentación del autoritarismo. Es el camino que lleva del ciudadano al consumidor, de la demanda institucional a la demanda económica, de la lógica de la política, en fin, a la lógica de la economía. En el límite, de la retirada de la política, de la apatía cívica y la desmovilización.

Delegación y representación

Es que los alcances desorganizadores de la crisis no pueden ser subestimados. El estancamiento y la megainflación de los años 80, que configuraron la conocida *década perdida*, y sobre todo los picos hiperinflacionarios que asomaron hacia su final, descargaron sobre el tejido social la percepción del derrumbe. Los viejos temas durkheimianos de la anomia, de la disolución de las identidades colectivas en las situaciones de crisis, retomaron vigencia analítica. La población, recuperada durante la primavera democrática del terror padecido bajo la dictadura, perdió la frágil cohesión otorgada por el retorno de las libertades entre las llamas del desastre económico, que la condenaba a la incertidumbre cuando no directamente a la marginalidad. ¿Cómo podría consolidarse la democracia en ese cuadro, en el que debía coexistir con la ineficiencia gubernamental y con la pobreza creciente?

La respuesta avanzó en dirección de una degradación de la democracia, a través de un proceso en el que se acentuaron rasgos que ya habían aparecido en la primera etapa: sobre el tembladeral de incertidumbre que generaba la crisis hiperinflacionaria, la sociedad extendió el crédito a favor de la concentración de poder presidencial. La juridicidad republicana empezó a asentarse



más sobre la *delegación* que sobre la *representación* y, en el sofocamiento de la vida política consiguiente, la búsqueda del *líder*, del *salvador* apareció como el remedio para el desorden, recuperando las nunca olvidadas tradiciones del *movimentismo* sudamericano.

Las reflexiones sobre la *democracia delegativa* (O'Donnell, 1991) como adulteración de la democratización representativa o sobre el *retorno del líder* (Zermeño, 1989) tematizaron esta incapacidad de las nuevas democracias para afrontar los dilemas de la crisis en los marcos clásicos del Estado de Derecho occidental. La desagregación social resultante de la descomposición del modelo de regulación preexistente derivó en fragmentación, desarticulación y heterogeneidad de los actores históricos que habían organizado la dinámica política modernizadora del continente: clases, Estado, movimientos sociales. En ese cuadro de

desintegración ¿qué es lo que puede recomponer los trozos descentrados, lo que da sentido y centro a la acción, lo que devuelve un principio de unidad? En términos de Touraine (1987), para que la democracia representativa funcione no sólo tiene que darse la existencia de instituciones representativas, sino también la de actores sociales *representables*, es decir, con un margen alto de autonomía de conciencia y acción. Ambas condiciones son de precaria densidad histórica en Sudamérica: la primera intentó ser llenada (pero mucho más en la forma que en los contenidos, como veremos más adelante) luego de las dictaduras, y la segunda por efecto de la crisis y la segmentación social, se degradó aun más.

El resultado fue el predominio de los aspectos delegativos y plebiscitarios de la relación gobernantes-gobernados, la vocación cesarista del liderazgo democrático, el refuerzo de una visión organicista y no

liberal-contractual de la democracia. Su fórmula fue la del hiperpresidencialismo, emblematizado por los Menem, los Collor o los Fujimori; el papel residual de los otros poderes del Estado; la concentración de la autoridad en favor de acelerar una política de reformas que se confiaban a la sabiduría del líder. La segunda fase posdictatorial construía así un camino que se alejaba del que lleva a la consolidación institucional de un régimen verdaderamente representativo.

Por cierto, en un primer momento y teniendo a su disposición un tan alto crédito, los nuevos gobiernos desentendidos de cualquier prejuicio antidecisionista, mejoraron la capacidad de gestión y reforzaron la gobernabilidad del sistema. Bajo el impacto del *shock* de políticas públicas en casi todos los casos (salvo en Brasil) la amenaza de retorno hiperinflacionario fue controlada y el factor de la estabilidad macroeconómica se incorporó como un sedativo para una sociedad convulsionada por el desorden. En ese marco se pudieron colocar en la agenda política temas hasta entonces tabú como las privatizaciones, la desregulación y la apertura de la economía: se unificaba el discurso del *ajuste* que presidiría toda esta segunda fase como el institucional había intentado organizar a la primera.

Ajuste y reconversión

Retomando al pie de la letra los argumentos neoconservadores que venían del mundo central, codificados en el llamado “Consenso de Washington” de fines de los 80, el postulado central había de invertir los términos de la formulación inicial: ya no sería la economía el subproducto de la política sino al revés, con lo cual una lógica economicista suplantaría a una lógica politicista de la democracia. Bien conocido es el fraseo de esa nueva retórica: el mercado como organizador de la sociedad, no sólo como mejor asignador de recursos sino como dispositivo moral, como ordenador cultural y como sustituto de la política, en una secuencia en que lo privado reemplaza no sólo lo estatal sino, y sobre todo, lo público.

Las condiciones que hicieron posible la sólida implantación de esa profunda trans-

formación de valores, en una región en la que la tradición de cultural estatal era muy fuerte, ya han sido mencionadas. El fracaso de la gestión de la economía era tan notorio que la popularización de las viejas consignas de la derecha resultaba inevitable: al menos apuntaban alguna pizca de esperanza hacia el futuro en una sociedad desmotivada y desmovilizada. El *ajuste*, aunque cruel, prometía una deconstrucción de la realidad de crisis y una búsqueda de integración con los cambios que se producían en el mundo.

Y en ese sentido su pertinencia resulta irrefutable. Carece de sentido discutir sus puntos básicos, en tanto ellos responden a la lógica vigente en la economía mundial, frente a la cual todas las alternativas en juego se han desmoronado. Aun su costo social es insoslayable: más costoso en términos humanos sería el mantenimiento del viejo modelo. Lo que sí puede y debe ser confrontado críticamente es el uso neoconservador del *ajuste*, que es el que ha predominado en esta segunda fase de la democratización sudamericana.

Para sus voceros ortodoxos pareciera que el *ajuste* es al mismo tiempo la reconversión; que la deconstrucción equivale a la reconstrucción. El mantenimiento del equilibrio fiscal, los problemas de la tasa de cambio, de la tasa de interés y de la tasa de inflación agotan, en la visión neoconservadora, los problemas macroeconómicos: el resto depende de la acción del mercado. Esta ilusión, en un principio creíble, porque se asienta sobre el predominio de estrategias individuales de prosperidad en la percepción de actores que fueron colectivos y que ahora se hallan segmentados, deja afuera el verdadero problema que sufren tanto los Estados periféricos como los centrales, los capitalismos maduros, como los nuevos capitalismos que quieren resurgir de las ruinas del socialismo estatista. Y el problema es que el *ajuste* sólo destruye, pero deja un vacío de proyecto que solamente desde fuertes políticas estatales puede ser llenado.

El caso argentino vuelve a ser ilustrativo porque durante el gobierno de Menem se ha avanzado en esa línea más que en ningún otro país sudamericano, salvo Chile, que inició este proceso bajo la dictadura bastantes años antes. ¿Cuáles son sus resultados

El descrédito público frente a los fracasos militares alimentaba, como reacción, un fuerte apetito por la recuperación de las libertades cercenadas –que habían sido sacrificadas a cambio de nada– y de los mecanismos del Estado de Derecho. Quiero expresar con ello que al ser privilegiada de tal manera, casi excluyente, la construcción de un régimen democrático de gobierno, no se advertía que el tránsito debía incluir, necesariamente y con el mismo peso, la reorganización de la economía. Una consigna emblemática del entonces flamante presidente constitucional argentino, Raúl Alfonsín, sintetiza bien ese fugaz clima de época: “con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”.

inmediatos? Se alcanzó el equilibrio fiscal vía incremento de la recaudación impositiva y disminución del gasto público, se estabilizó el tipo de cambio y la tasa de inflación, se privatizaron virtualmente todas las empresas que estaban en poder del Estado, se disciplinó fuertemente al sindicalismo y también –aunque al precio de grandes concesiones políticas– a las fuerzas armadas. En menos de tres años se desmontaron las bases del populismo estatista que el propio peronismo había contribuido a fundar en la década de los 40, con lo que los objetivos del ajuste quedaron de alguna manera colmados.

Pero el mapa que quedó tras esa operación quirúrgica es, en algunos rasgos centrales, el siguiente: si bien las privatizaciones desmontaron al corporativismo estatal, el monopolio en el que habían medrado burocracia y sindicatos fue reemplazado por un oligopolio de menos de diez grupos empresarios que se quedaron con la propiedad de esas empresas y con una capacidad de control enorme sobre una economía trustificada.

En lo social, en la medida en que la búsqueda de equilibrios presupuestales impuso la disminución del gasto público en salud, educación y asistencia social, la pobreza crítica se ha acrecentado notablemente mediante la incorporación masiva de *nuevos pobres* resultantes de la degradación económica de los estratos medio-medios y medios-bajos de la población. Argentina es hoy una sociedad dual y si bien sería injusto atribuirlo con exclusividad a las últimas políticas, es evidente que la falta de articulación entre ajuste y reconversión ha acelerado la marginalización social.

Por fin, en lo político-institucional, todas las acechanzas decisionistas han finalmente cuajado en una desmedida acumulación de poder en el Ejecutivo, en una disminución del papel del Parlamento (mediante el uso reiterado de la legislación por vía de “necesidad y urgencia”, al punto de que en un trienio se han dictado más decretos de ese tipo que en todos los años de vida constitucional sumados) y en una supeditación política de la justicia a la voluntad presidencial, en el mejor estilo de los gobiernos autoritarios.

El resultado es un ajuste económico que no es reestructuración; una democracia que

es cada vez menos representativa y segura jurídicamente y una sociedad crecientemente desigual. Sus consecuencias son un Estado que pierde poder frente a los grandes grupos empresariales y que sólo gestiona las grandes variables del equilibrio macroeconómico, mientras crece la pobreza y se vacía el espacio de la ciudadanía.

La reforma del Estado

Este último ítem es importante, entre otras cosas porque ha de permitir el contraste con la situación brasileña. La consolidación de la democracia supone, volviendo a Touraine, el vigor de *instituciones representativas* y de *actores representables*. La emergencia económica, la crisis hiperinflacionaria y el ajuste posterior, esos tres hitos por los que ha debido atravesar la democratización sudamericana, han corroído –entre la pobreza y la ineficiencia estatal; entre la crisis de toda idea de progreso social, en fin– esas dos dimensiones imprescindibles. Si la democracia se resiente cuando descansa en forma delegativas y no en instituciones representativas, esa mella forma un solo haz con la pérdida de la autonomía de los actores y la decadencia del espacio público, en una situación de “sálvese quien pueda” y en un clima moral que sólo premia el éxito individual por vía del negocio o del delito. En la ética del recluimiento defensivo, la política, el lugar de la *polis* se transforma en espectáculo (en un lugar donde se mira y se oye pero donde no se es oído ni mirado, parafraseando un tópico arendtiano) y el ágora donde el espectáculo transcurre es la pantalla de televisión, como forma de comunidad ilusoria. En el reino de la ajenidad, la política es video política. Pero este distanciamiento no es, sin embargo, inocente y sin consecuencias para las élites que creen beneficiarse de él: de él puede surgir un eco impensado (y peligroso); su interpretación como escándalo, como corrupción y, por lo tanto, el reforzamiento de una mirada ética sobre la realidad.

La fortaleza del ajuste sin reestructuración reside en el mismo mecanismo *by default* que protegió a la democratización institucional. Una sociedad con actores segmentados, no representables, una sociedad

El patrón de desarrollo tuvo en América Latina la forma predominante de un capitalismo asistido por un Estado prebendario en el que se volcaban demandas organizadas corporativamente. Los actores sociales funcionales a este modelo patrimonialista, incluyendo al sindicalismo cuando el populismo amplió la capacidad integrativa del sistema, buscaron identificarse con el Estado para orientar sus decisiones de manera estrechamente corporativa y perdieron su capacidad autónoma, en la medida en que se transformaban en clientes prebendalistas dentro de un territorio estatal colonizado por los grupos de presión.

despolitizada, carece de energías para movilizar alternativas. Aun así, el ajuste, frente al cual no pueden encontrarse opciones en el pasado, muestra sus límites como horizontes de futuro. Exitoso en la destrucción, al confiar ciegamente en que la democracia es un residuo del mercado, puede cancelar no sólo a la democracia, sino también a la viabilidad de un proyecto económico que sustituya al modelo anterior en crisis terminal. Porque, ¿qué significa, en verdad, cambiar de raíz el modelo de sociedad, el patrón de regulación de las relaciones entre Estado, sociedad y política vigente incluso bajo las dictaduras cuyo colapso abrió el ciclo de democratización? Si estas nuevas democracias, además de ser postautoritarias, buscan ser también pospopulistas y posnacional-desarrollistas, ¿cuáles son los nudos decisivos que deberían ser desatados para lograrlo?

En un texto que ya tiene más de veinte años (Cardoso, 1972) se intentaba una respuesta a la pregunta sobre la nueva relación entre Estado y sociedad que se planteaba en los países más modernos de la región, aunque el interrogante, en rigor, estaba planteado puntualmente con referencia al Brasil. Cardoso señalaba entonces la presencia de lo que llamaba *anillos burocráticos*, como instancias de mediación –interiores al Estado– entre intereses públicos y privados. Dichos *anillos* en buena medida anudaron las fronteras que deben separar a la sociedad, al Estado y al sistema político, y heterogeneizaron a los actores y a los espacios institucionales, desplazando a los viejos temas liberal-representativos de la vida política.

Esa forma de organización de los intereses y de representación política de los mismos, que llamaremos *patrimonial-corporativa*, enraizada en la tradición iberoamericana que nunca recibió en plenitud la herencia liberal anglosajona, se acentuó con formas modernas a partir de la resolución industrializadora de la crisis de los años 30. El modelo *mercadointernista*, Estadocéntrico y proteccionista sonó una similar melodía en los momentos populistas o desarrollistas, autoritarios o semidemocráticos, en cuanto hace a la subsunción de la economía en la política y a la consiguiente falta de separación entre sociedad civil, sistema político y Estado. Este último se convirtió en gestor de la economía y dispensador de

privilegios, lo que lo convirtió en una fortaleza codiciada en cuyo interior operaban las presiones por el reparto del excedente. En este marco, el patrón de desarrollo tuvo en América Latina la forma predominante de un capitalismo asistido por un Estado prebendario en el que se volcaban demandas organizadas corporativamente. Los actores sociales funcionales a este modelo patrimonialista, incluyendo al sindicalismo cuando el populismo amplió la capacidad integrativa del sistema, buscaron identificarse con el Estado para orientar sus decisiones de manera estrechamente corporativa y perdieron su capacidad autónoma, en la medida en que se transformaban en clientes prebendalistas dentro de un territorio estatal colonizado por los grupos de presión.

Claro está que la relación entre Estado y acumulación de capital es una relación estructural y la idea de un mercado autorregulado no resiste la confrontación con la historia. En ese sentido, y desde sus orígenes, desde la propia emergencia de los mercados, el capitalismo siempre ha estado *asistido* por el Estado y mucho más explícitamente aun con la reestructuración posterior a la crisis del 30. Giorgio Ruffolo (1985) ha resumido en cuatro rasgos los modos principales en que la sociedad, a través del gasto público, financia al sector privado: los subsidios directos, las exenciones impositivas, la orientación del poder de compra de los gobiernos y el proteccionismo. Bajo el modelo sustitutivo de industrialización y en el marco del Estado de Compromiso que tuviera vigencia durante décadas en América del Sur todos estos instrumentos, mediados por los *anillos burocráticos* a que aludiera Cardoso, fueron utilizados para impulsar el desarrollo económico y la integración social, hasta transformar a los Estados en verdaderas máquinas prebendalistas.

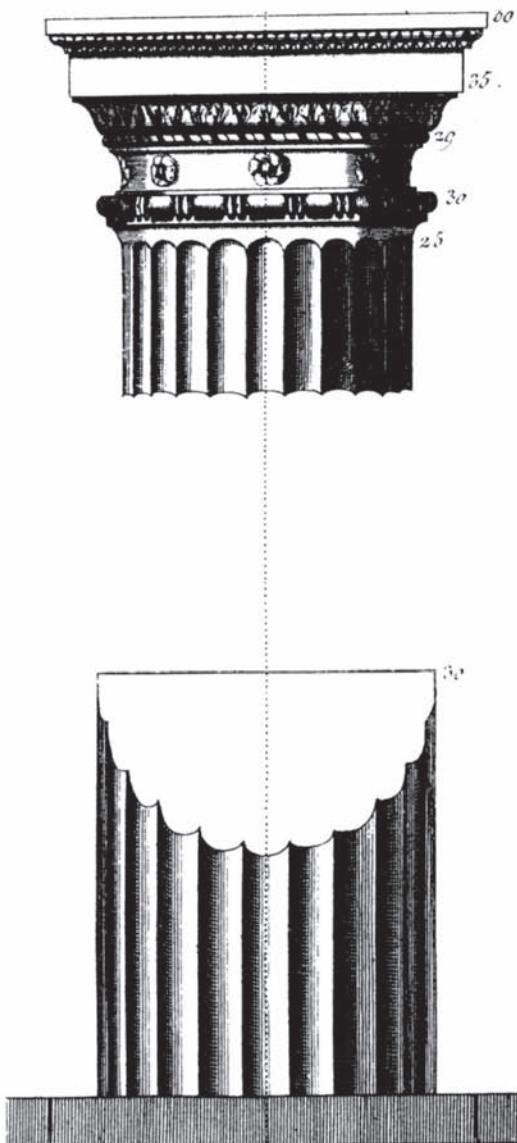
Cuando el desarrollo inflacionario dejó de ser el mecanismo apto para financiar este modo de regulación de las relaciones entre Estado y sociedad, la crisis estalló ya en un grado terminal. Primero se supuso que la mera remoción del autoritarismo militar la superaría y rápidamente se demostró que ésta no era suficiente. Luego se intentó el camino del ajuste del *shock* de mercado, de la privatización y la apertura, pero éste tampoco alcanza para desatar los nudos

profundos de la crisis; en buena medida puede, por el contrario, afianzarlos si cree que un mercado oligopolizado frente a un Estado sin capacidad de regulación ni de orientación de la sociedad es remedio suficiente. El ajuste vale como desmantelamiento: repliega algunos actores corporativos como los sindicatos y aun las fuerzas armadas, pero no reforma los roles prebendalistas del Estado. Si lo que debe ser reconvertido es el carácter asistido del capitalismo, la política de reforma del Estado consistiría en *desprivatizarlo*, esto es, en liberarlo de su colonización por los grupos de presión. Privatizar el capitalismo es más importante que desestatizar la sociedad; la lógica neoconservadora del ajuste no parece llevar por ese camino, sino más bien hacia una virtual privatización del Estado, cuando lo que éste necesita es *nacionalizarse*, construir su capacidad de orientación y regulación de la sociedad y los mercados.

Reformar el Estado, tarea compleja que, como he señalado en otro texto (Portantiero, 1989), supone cambios profundos en por lo menos cuatro áreas de actividad: la administrativa, la económica, la social y la institucional, implica en síntesis transitar desde un capitalismo asistido hacia un capitalismo regulado y orientado por un Estado fuerte, medido por su *capacidad de distanciamiento* de la sociedad, del mercado y del sistema político. No es esta intención la que parece presidir los procesos de desmantelamiento en curso durante la segunda fase de la democratización, en la que no sólo se lo relega de toda intervención directa, sino se le veda la capacidad de control sobre lo privado.

Final

Retornemos ahora, para concluir ya esta larga revisión, al interrogante inicial. ¿Estamos ante el fin de otra etapa, cuyo anuncio



son los casos de Brasil, Perú y Venezuela? Estos ejemplos suponen en primer término, una alerta. Del mismo modo como la primera fase se agotó al no poder resolver la relación participación-decisión y, por tanto, la contradicción entre democracia y eficiencia, la segunda, que encará a través del ajuste la tarea de mejorar los niveles de gestión de la economía, puede tambalear frente a los desafíos éticos y sociales que plantean la creciente pobreza de los sectores populares y la corrupción de la nueva *Nomenklatura* que la democracia generó.

Si una incógnita a despejar es la de cuánta ineficiencia global (inflación, desajuste fiscal, pérdida de competitividad) puede tolerar el consenso democrático, no es menos importante la que inquieta sobre cuánta inequidad ese mismo consenso es capaz de resistir. A esas dos dimensiones críticas se le ha sumado, con enorme fuerza, otra temática: la de la corrupción, que subraya los rasgos de escándalo de la tradicional distribución desigual de la riqueza y que le ha hecho señalar al Banco Mundial en su informe de 1990 que *en ninguna región del mundo los contrastes entre la riqueza y la pobreza son tan notables (como en América Latina)*. A pesar de

ingresos per cápita que son en promedio cinco o seis veces mayores que los de Asia Meridional y África al sur del Sahara, casi una quinta parte de la población latinoamericana sigue viviendo en estado de pobreza y esto se debe a un grado excepcionalmente elevado de desigualdad en la distribución del ingreso.

La corrupción de los funcionarios públicos y los niveles del consumo ostentoso de la porción más rica de la población han sido el detonante inmediato de la crisis venezolana y brasileña y adquieren en la Argentina de Menem un peso movilizador cada vez mayor. Si bien la descomposición del viejo modelo de regulación y los rigores del ajuste acentuaron la fragmentación de los acto-

res sociales, el ejercicio democrático creó, pese a todos los condicionantes culturales, un segmento crítico de *opinión pública* que opera como una masa difusa pero penetrante en la sociedad civil y sustituye de alguna manera la desorganización y falta de representatividad del sistema político. Es como si a partir de catalizadores irritativos como la corrupción, la sociedad buscara despegar-

se de su tradicional fusión con el Estado y el sistema político, para intentar constituirse autónomamente a partir del disparador de una nueva demanda, centrada ahora en lo ético y en lo social. Esta combinación puede ser explosiva y en caso de desarrollarse puede decidir la apuesta de estas precarias democracias: su retroceso o su consolidación●

BIBLIOGRAFIA

- Alberti, G., "Democracy by default, economic crisis, 'movimiento' and social anomie in Latin America", mimeo, Bologna, 1990.
- Cardoso, F. H., *Estado y sociedad en América Latina*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.
- Malloy, J., "Economic crisis and democratization in Latin America in the 1980s", en *The Latin America and Caribbean Contemporary Record*, Vol. 8, 1991.
- O'Donnell, G., *Delegative Democracy*, Notre Dame ed., 1991.
- , *La producción de un orden*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.
- , "La múltiple transformación del Estado latinoamericano", en *Nueva Sociedad* No. 104, Caracas, 1989.
- Portantiero, J. C., "La democracia entre la confrontación y el acuerdo", en Num, J. y Portantiero J. C., *Ensayos sobre la transición democrática en Argentina*, Puntosur, Buenos Aires, 1987.
- Przeworski, A., *Democracy and the market*, Cambridge University Press, 1991.
- Ruppolo, G., *La Qualità Sociale. Le vie dello sviluppo*, Laterza, Bari, 1985.
- Torre, J. C., "América Latina: el gobierno de la democracia en tiempos difíciles", mimeo, Buenos Aires, 1991.
- Touraine, A., *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*, Santiago, Chile, 1987.
- World Bank, *Development Report*, 1989.
- Zermeño, S., "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", en *Revista Mexicana de Sociología* Año LI, No. 4, 1989.

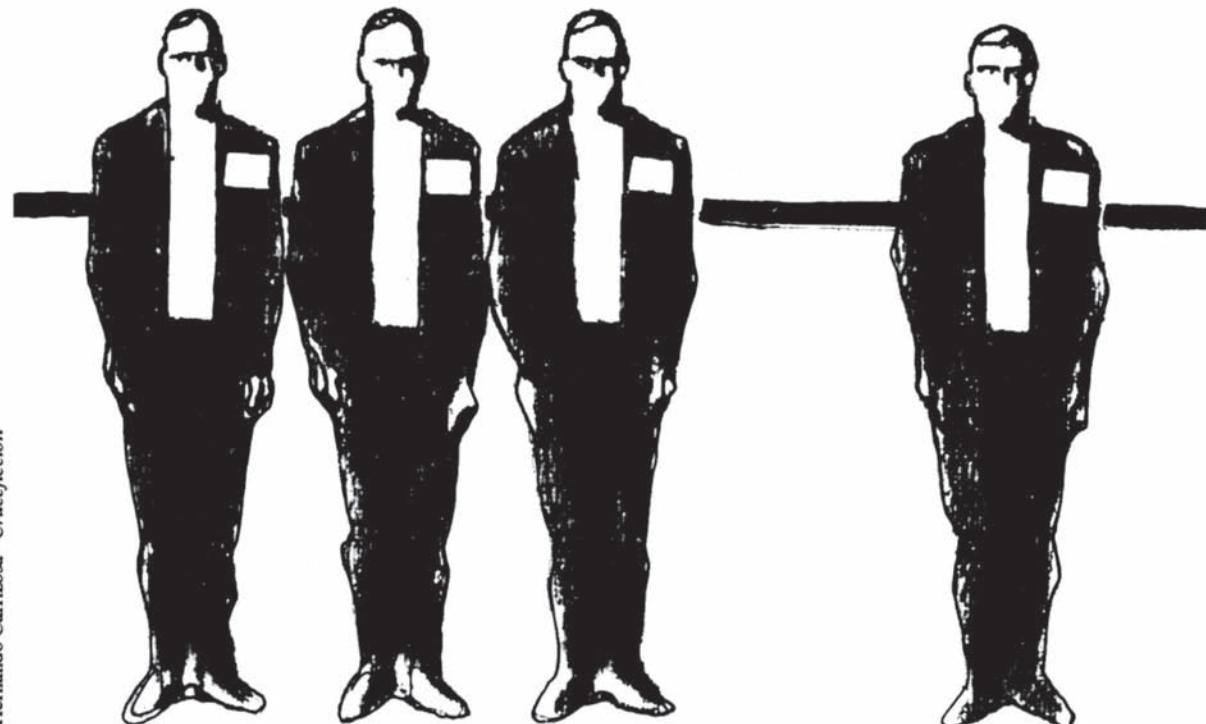


*Por un sindicalismo
para la democracia*

Rubén Sánchez David
Politólogo
Director del Posgrado en Ciencia Política
Universidad de los Andes

La democracia contemporánea y la crisis de los partidos

Rubén Sánchez David



Hernando Carriosa - Crucifixión

En el mundo contemporáneo es difícil imaginar un sistema político que carezca de partidos. Como agentes de expresión y de recuperación del conflicto en sociedades cruzadas por múltiples tensiones, los partidos modernos son como una reproducción en pequeña escala de la complejidad estatal. Mecanismos imprescindibles de los régimenes democráticos, los partidos enriquecen al Estado con su quehacer político, legislativo y administrativo, e impregnán de tal modo la realidad de las sociedades complejas que no es concebible la defensa de un interés, por intrascedente que pueda parecer, al margen de las

1. Manuel García Pelayo, *El Estado de partidos*, Alianza Editorial, Madrid, 1986.

organizaciones de partidos. En tanto que interlocutores privilegiados entre el individuo y el Estado, los partidos representan intereses económicos, de carácter étnico o incluso cultural y religioso.

Los partidos políticos surgieron asociados al desarrollo de los régimenes democráticos en un proceso tan profundamente interrelacionado que teóricos tan lúcidos como Manuel García Pelayo, autor de estudios decisivos sobre teoría del Estado, han afirmado que "el Estado democrático ha de configurarse como un Estado de partidos".¹ Sin embargo, al morir el siglo XX un número creciente de ciudadanos ya no se reconoce en los

partidos que ellos mismos se dieron y buscan canalizar sus demandas a través de instancias como los movimientos sociales, las corporaciones gremiales o, simplemente, permanece al margen de los mecanismos institucionales de toma de decisiones. Sin duda estos fenómenos traducen la crisis de los procesos de socialización que dieron cuerpo a las prácticas democráticas de convivencia social y a los mecanismos partidistas de representación ciudadana.

De hecho, la democracia es hoy no sólo un régimen político que se ha impuesto de forma universal, sino también una concepción del mundo que a muchos les parece insuperable. Ni siquiera en una perspectiva utópica se dispone hoy de propuestas para la convivencia política que no pasen por la democracia. De esta manera, la democracia ha perdido su dimensión instrumental y ha adquirido una condición teleológica al convertirse en su propio fin, un fin que es además el último fin. En consecuencia, el horizonte democrático ha dejado de ser un horizonte emancipador para transformarse en un mecanismo de confinamiento. Paradójicamente, la generalización de los derechos políticos, en vez de conllevar una presencia más efectiva de los ciudadanos, se traduce en la extinción de muchas prácticas democráticas, en la ritualización del voto, en la atonía ciudadana.

Así mismo, los partidos políticos, por ser instituciones históricas, sufren el impacto del tiempo y del desarrollo de las sociedades en las que están inmersos. En un comienzo, la noción de partido político se asoció al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que surgen en el momento en que se reconoce al pueblo el derecho de participar en la gestión del poder político. El partido moderno, que se consolida en la medida en que se dota de una estructura interna y una organización, es una consecuencia inevitable de la democracia de masas. De otro lado, surgido al margen del Estado, pasa a asumir una cantidad considerable de funciones y acaba siendo el puntal sobre el cual se asientan los Estados, amarrándose a su suerte.

La crisis de los partidos políticos contemporáneos corresponde a la crisis de la democracia como sistema institucional y político cultural. Los dispositivos democráticos actuales acusan síntomas de agotamiento para manejar la complejidad societal de fin de siglo, razón por la cual han situado la gobernabilidad en el corazón de su teoría. Enmarcado por una creciente diferencia-

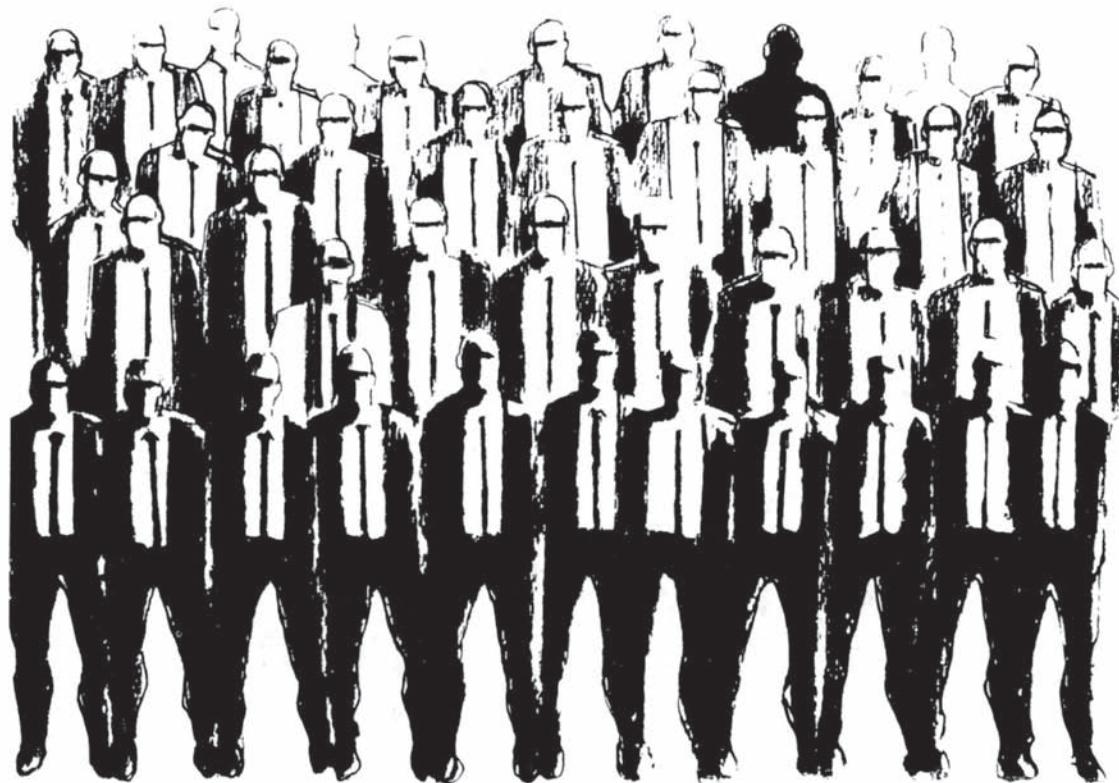
ción social, por la fragmentación de la voluntad política, por el alejamiento de los individuos de la arena política, por la deslegitimación de los profesionales de la política, es el sistema de representación el que se derrumba y con él, los partidos. En efecto, la imposición de esquemas ideológicos racionalizadores, hostiles a las utopías, terminó por introducir una estrategia de centralización del conflicto y reducir la política a un conjunto de dispositivos de control. De acuerdo con una abundante bibliografía politológica, para salvar el sistema democrático del caos, es necesario rebajar el umbral de participación y reforzar, en cambio, sus funciones de legitimación y vigilancia. El resultado de la alteración de la función social de la política es el divorcio entre las instituciones y la opinión pública, entre los dispositivos democráticos activos y los valores que los inspiran.

Desde una perspectiva estrecha, algunos han identificado a la democracia con las elecciones, en la medida en que éstas son el mecanismo democrático por excelencia para acceder al poder. Esta circunstancia ha llevado a los partidos a estructurar sus respectivas organizaciones con miras a la participación electoral.

Cuando el acceso al poder se impone a toda consideración política, los partidos, en su afán de atraer el mayor número posible de votantes y maximizar el sufragio, minimizan los elementos programáticos que puedan generar antagonismos. Además, cuando están lejos de alcanzar la mayoría absoluta, entran en coalición con otros partidos o movimientos políticos y para lograr un acuerdo viable en términos electorales, reducen el alcance de sus propuestas a reivindicaciones negociables con los potenciales participantes en la coalición.

Por último, la lógica de la competencia electoral ha llevado a los partidos a equiparar sus estructuras organizativas con las burocracias de las empresas de negocios, cuyo éxito depende en parte de su tamaño y de la presencia permanente en el mercado de sus unidades de ventas. Así, los partidos se convierten cada vez más en máquinas electorales y se debilitan como organizaciones representativas de la sociedad civil. Y cuanto más grandes son los esfuerzos de los partidos para adaptarse a la dinámica del mercado electoral, menos espacio queda para la determinación de la política del partido mediante procesos internos de debate en la organización. El resultado es un proceso de incomunicación en el seno del partido

La crisis de los partidos políticos contemporáneos corresponde a la crisis de la democracia como sistema institucional y político cultural. Los dispositivos democráticos actuales acusan síntomas de agotamiento para manejar la complejidad societal de fin de siglo.

Hernando Carrizosa - *Crucifixion*

y la desactivación de los miembros de base. Para hacer frente a esta situación, los partidos optan por campañas electorales que se asemejan a gigantescas operaciones publicitarias, pero esta estrategia queda sujeta a imponderables organizacionales como el carisma de los candidatos.

En las democracias contemporáneas existe la tendencia a trocar las ideas por el cultivo de las formas y el manejo de la imagen tal como corresponde a la difusión de los procesos que caracterizan el moderno individualismo de masas. Sin embargo, la existencia de unas demandas sociales que evolucionan constantemente frente a una oferta política de gran rigidez, tarde o temprano conduce a la ruptura del diálogo entre amplios sectores de la sociedad civil que no se ven representados ante el gobierno y los partidos políticos, que pierden sus facultades tanto para articular preferencias y demandas diversas como para canalizar las energías de los ciudadanos en pos de soluciones a sus problemas. En estas condiciones, es lógico que aumenten las posibilidades de protagonismo electoral de candidatos extrapartido y de movimientos políticos que cuestionan los límites de la política institucional.

Atribuir los quebrantos y perturbaciones en el funcionamiento de la democracia a causas como la voracidad de poder de los partidos, la corrupción de los políticos o el desinterés de los ciudadanos por lo político es equivocar la dirección. La causa básica no está en factores como los mencionados –que son efectos– sino en la transformación radical de la realidad a la que respondía el modelo democrático del siglo pasado y de la primera mitad del siglo XX, que lo hace impropio de la realidad actual. Por tanto, no se trata de actuar sobre aspectos parciales de la realidad, sino de diseñar un nuevo paradigma de lo político desde los valores de la democracia, reivindicando los principios democráticos en su conjunto para, desde esa reivindicación, explorar nuevas vías y modos de construir un sistema político capaz de articular demandas sociales culturalmente complejas, no como una suma de reivindicaciones dispersas sino como síntesis. Este objetivo, utópico para algunos, pero utopía razonable, es inseparable de la suerte de los partidos políticos los cuales, a pesar de sus múltiples defectos y limitaciones, se han revelado como el único mecanismo viable para integrar a los ciudadanos en la acción colectiva, canalizar



Hernando Carrizosa - Crueñeción

su participación en la elección de los gobernantes y ejercer el control de la gestión de los aparatos del Estado.

El pluralismo propio de la democracia y la neutralidad del Estado de Derecho exigen la eliminación de todo criterio sustantivo en la formulación de las reglas del juego democrático. Esta exigencia, que es la garantía del tratamiento igual para todos, ha llevado, sin embargo, a desconocer los derechos de las minorías. La defensa de la democracia como forma de convivencia social y de organización política pasa hoy por la defensa del pluralismo y la participación sin las cuales el dispositivo democrático corre el peligro de esterilización. Ahora bien, los valores que inspiran a la democracia participativa deben estar presentes en todos los elementos constitutivos del sistema democrático entre los que se encuentran los partidos.

El perfeccionamiento de los mecanismos internos democráticos de los partidos no es sólo un imperativo moral, sino también una necesidad estratégica derivada de la constatación de un hecho fundamental: en los modernos Estados democráticos los partidos no son únicamente instituciones a través de las cuales se expresa la voluntad popular; también se han constituido en instrumentos en cuyo interior se comienza la construcción del proyecto democrático de esa voluntad.

Los partidos son puntos de referencia de la sociedad y como tales están obligados a buscar vías y fórmulas para abordar los problemas del gobierno. Cuando éstas tienen como meta la profundización democrática, se impone el principio de los partidos con amplia representación democrática, se impone el principio de los partidos con amplia representación política y social, capaces de garantizar sin reservas la posibilidad de que las distintas tendencias se expresen en pie de igualdad y contribuyan a la definición del proyecto partidista. No se trata de crear complicidades políticas, sino de realizar constantes esfuerzos en pro de la convergencia, teniendo en cuenta las condiciones que unen y las discrepancias que enriquecen.

El proyecto de la democracia participativa exige la participación social en un proyecto global muy difícil de construir al margen de un sistema de partidos, dado que en una democracia no hay avance sin el apoyo electoral de la mayoría de la población. Democratizar los partidos equivale a abolir prácticas sectarias y arbitrarias, a regular las relaciones entre los representantes políticos y los electores, a disponer de modalidades de selección de los candidatos a puestos colectivos, a establecer mecanismos internos de control para que los derechos de sus miembros sean respetados por los órganos dirigentes●

Entrevista con Antonio Navarro Wolff

¿Qué paso con la AD M-19?

“No supimos definir una personalidad política”



La legitimidad y consolidación de una democracia se mide también por la fortaleza y presencia de la oposición política. Para cualquier observador desprevenido la oposición legal y democrática pareciera no existir hoy en Colombia. El vertiginoso ascenso de la Alianza Democrática-M19 y su destacado papel en la formulación del nuevo orden institucional, seguido de un precipitado proceso de disolución política constituyen una derrota política al movimiento democrático. Un fenómeno que amerita una profunda reflexión sobre las estrategias de construcción

de alternativas democráticas y sobre la naturaleza de nuestro régimen político y de partidos.

Revista Foro ha querido contribuir a este análisis entrevistando a Antonio Navarro Wolff, dirigente máximo de la Alianza Democrática-M19, como quiera que en los últimos cuatro años tuvo en sus manos la orientación, en las buenas y en las malas, de esta fuerza política. Sus explicaciones y sus proyectos políticos sin duda resultaran útiles al esfuerzo de desentrañar la pregunta: ¿qué pasó con la AD-M19?

Revista Foro - *Hace cuatro años la Alianza Democrática M-19 suscitó una amplia expectativa y recibió un amplio respaldo ciudadano. Se llegó a afirmar que con la Alianza se abría una nueva era política y se quebraba históricamente el bipartidismo. Hoy los hechos y resultados políticos electorales han desmentido esta afirmación. ¿Cuál es su explicación a esta parábola de ascenso y crisis de la Alianza Democrática M-19?*

Antonio Navarro- Para explicar la situación actual de la AD M-19 es necesario remontarse a los orígenes del movimiento y las circunstancias políticas que los rodearon, las cuales pueden resumirse en la conjunción de cuatro elementos esenciales: en primer lugar, recogíamos 25 años de gente luchando por cambiar el país por la vía armada. Esa raíz nos daba un perfil de rebeldía, de lucha, de búsqueda del cambio. La decisión del M-19, al igual que los otros agrupamientos, de firmar unos acuerdos de paz, interpretaba un sentimiento ampliamente mayoritario en el país. Persistir en la paz, incluso después del asesinato de Carlos Pizarro, constituyó el primer gran hecho político que rodeó nuestro surgimiento.

En segundo lugar, el surgimiento de liderazgos nacionales, empezando por Carlos Pizarro, que lograron sintetizar y expresar los propósitos de paz, de cambio y de rebelión pacífica. Un proyecto político, cualquiera que él sea, necesita no uno, sino muchos liderazgos. En su momento, las fuerzas democráticas y alternativas tuvieron a Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, quienes adquirieron un perfil y dimensión nacional, que sin duda favoreció nuestros proyectos políticos.

En tercer lugar, los desarrollos políticos que, coincidentes con la política de paz, se dieron alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente, sin duda el acontecimiento político más importante del siglo XX en nuestro país.

Estos tres acontecimientos, todos ellos de transcendencia histórica y política le dieron una gran fuerza al despegue de la Alianza Democrática M-19.

La Asamblea Nacional Constituyente coincidió con un relativo desprecio de las instituciones y el establecimiento político por lo que podría representar la Asamblea Constituyente, lo cual permitió que por primera vez no existiera una hegemonía del partido liberal en un cuerpo legislativo. La Constituyente hizo posible una hegemonía colectiva y conceptual.

Después de la Asamblea Constituyente ocurren fenómenos políticos que van a incidir en el rumbo de la Alianza Democrática: en primer lugar, no hay nuevos hechos políticos de la importancia de los anteriormente señalados. No hay nuevos procesos de paz, no hay un Congreso que logre continuar el proceso de la Constituyente. Por el contrario, se reconstruye la vieja hegemonía clientelista.

Nosotros no fuimos capaces de entender la importancia de crear hechos políticos de gran alcance. Entramos en un

proceso en el que nos vamos borrando del escenario político. Después de la Asamblea teníamos dos escenarios nacionales con poder desde los cuales movernos: el Ministerio de Salud y el Congreso. Eramos muy débiles a nivel local.

En ninguno de estos dos escenarios nacionales que teníamos fuimos capaces de generar hechos políticos de trascendencia. El Ministerio de Salud poco a poco fue hundiéndose en un ministerio administrativo, que se fue amarrando. No generaba hechos de importancia, de trascendencia política y social, se lo fueron pasando por encima.

En el Congreso tampoco se logró consolidar una fuerza que produjera acontecimientos políticos de importancia. Nuestros congresistas se volvieron "buenos" congresistas, que sin embargo no generaban hechos políticos.

Adicionalmente, los resultados a nivel de elecciones locales no fueron buenos. La alcaldía de Barranquilla no se convirtió en un polo de organización, o en un polo de acción política nacional. La alcaldía sirvió para aprestigiar un alcalde y su administración, pero no fue nunca parte de un proyecto político coordinado.

A partir de esta situación se inicia una etapa complicada, difícil para el desarrollo de la Alianza Democrática. Yo estoy convencido que el proceso de construcción de una alternativa política requiere hechos políticos de trascendencia y requiere un proceso de organización detallado y cuidadoso.

Es imposible intentar por crecimiento aritmético o vegetativo, tener una fuerza política con capacidad de ser alternativa de gobierno. Así se puede construir una fuerza política, pero siempre será una fuerza minoritaria, secundaria. Sin generar hechos políticos que produzcan saltos, no es posible construir una fuerza alternativa en la política colombiana.

Revista Foro- *Usted habla de la incapacidad de la Alianza para generar hechos políticos, pero ¿hasta qué punto tiene que ver con su debilidad programática?*

Antonio Navarro- Indudablemente que los aspectos técnicos y programáticos son importantes en la construcción de una organización política. Sin embargo, insisto en que lo más importante es la capacidad para generar hechos políticos. Por ejemplo, en la Asamblea Constituyente presentamos un proyecto de Constitución, más o menos completo. Sin embargo, ese no fue el texto definitivo, lo importante fueron los acontecimientos políticos que se generaron en el funcionamiento mismo de la asamblea: la presidencia colegiada, la composición de las comisiones, la revocatoria del mandato, los actos legislativos de vigencia inmediata, etcétera.

No era la letra de los proyectos de Constitución, sino los hechos políticos lo que nos daba capacidad de acción. Lo que se pierde después de la Constituyente es justamente la capacidad de generar hechos políticos. Allí indudablemente había problemas de diseño político, no de programa.



Tras la exitosa participación en la Asamblea Nacional Constituyente, la AD-M19 resultó incapaz de generar nuevos hechos políticos que consolidaran su fuerza y su estrategia de ser gobierno.

Una fuerza política como la nuestra al meterse en la dinámica normal de funcionamiento de las instituciones, sin generar hechos políticos de importancia, se conduce al alejamiento de la opinión pública, porque de algún modo la gente la ve de manera similar a las fuerzas tradicionales, así tengan elementos de diferenciación.

Miremos la experiencia de Causa R en Venezuela. Causa R tiene el 20% del Congreso. Ellos, sin embargo, saben lo que les puede ocurrir si se meten en la dinámica tradicional del Congreso. Por eso ha decidido retirarse del Congreso y empujar con otras fuerzas la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Este, a mi modo de ver, es ejemplo de actuar creando hechos políticos.

Revista Foro- ¿Hasta qué punto las decisiones políticas equivocadas de la Alianza M-19 en el período pos-constituyente explican los resultados posteriores? Por ejemplo, la bancada parlamentaria era una fuerza prestada, por lo cual era imposible tomar decisiones como la de Causa R en Venezuela.

Antonio Navarro- No, eso no es cierto. Es algo en lo que se equivocan los académicos. De los 22 parlamentarios, 17 eran guerrilleros desmovilizados. Sólo seis provenían de otro partido. Sin embargo, ese no era el problema. En la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de la heterogeneidad actuamos como bancada, colectivamente.

Lo que ocurrió con la bancada parlamentaria es que no actuó colectivamente, no tenía claridad de cómo actuar políticamente, así sólo fueran los 17 desmovilizados. Se fue atomizando, individualizando. Cada congresista, poco a poco, se fue convirtiendo en un individuo que estaba formalmente dentro del proyecto, pero que no actuaba dentro de las líneas del proyecto.

De alguna manera esta atomización estaba relacionada con un grave problema de dirección. Existía una dirección nacional bastante plural, conformada por gente no elegida [al Congreso de la República]. Fue siempre prácticamente imposible lograr que se pudiera actuar de forma coherente, uniendo los propósitos de los parlamentarios y de los no parlamentarios. La dirección quedó prácticamente sin nada qué hacer.

Los congresistas no se unían entre sí, no actuaban mancomunadamente, no trazaban orientaciones políticas, ni tampoco se integraban a una dirección más amplia. Aquí hay un problema digno de resaltar: la dirección nacional de un movimiento no puede estar por fuera del escenario real donde se esté ejerciendo la función pública.

Lo que realmente pasó, como cosa grave, fue que se perdió la concepción de que una fuerza nueva tiene que tener un espíritu colectivo. Eso es esencial. Pero no se perdió por la vía del caudillismo. Simplemente, los que estaban en el escenario de la política no actuaron, no se

unieron. Los que estábamos por fuera del Congreso no teníamos ningún poder, ni recursos, ni espacio.

Lo que ocurrió fue una disolución del espíritu colectivo. Allí empieza la disolución orgánica, el resultado de 1994 es su consecuencia. No hubo espíritu, ni pensamiento, ni un accionar colectivo. La cultura política tradicional de los jefes de grupo se impuso. Nuestra gente empezó a replicar el método de que cada uno era el *jefe* de un pedacito del movimiento y perdimos la potencialidad de actuar colectivamente.

Política de alianzas en las elecciones del 92

Revista Foro- *Uno de los aspectos más cuestionados de la acción de la Alianza fue su política de alianzas en 1992.*

Antonio Navarro- En la política de alianzas de 1992 hubo cosas explicables y errores.

No hay que olvidar que en esas elecciones se elegían también gobernadores y nosotros intentamos ganar algunos. Esto para explicar porque en el caso de Nariño incluimos al conservador Carlos Albornoz, lo cual era parte de un acuerdo con sectores liberales y conservadores que respaldaron a nuestro candidato Raúl Delgado. Para ganar la gobernación entregamos un renglón del Senado a Carlos Albornoz y una en Cámara a un dirigente liberal de Tumaco.

Otro caso es el de Samuel Moreno Díaz. Fue un intento de lograr que la Anapo pudiera incorporarse al proyecto. Existían unas raíces históricas entre el M-19 y la Anapo que consideramos importantes para acrecentar los alcances del proyecto.

A Mario Laserna lo propusieron nuestros compañeros del Tolima. Fue objeto de discusión. Existió un acuerdo para que él apoyara nuestra lista a Cámara, a cambio de un cupo en el Senado. Lo aceptamos como un hecho de coalición política.

El caso de Pedro Bonett fue una equivocación nuestra. No hay que olvidar que él tenía vinculaciones históricas con nosotros por su amistad con Jaime Bateman. En el M-19 se conocía a Bonett. No era una persona traída de las filas del enemigo. Lo que ocurre es que nosotros no valoramos el simbolismo que representaba Bonett como miembro del grupo económico más grande de este país. Yo creo que fue un error, porque siempre se nos endilgó que habíamos entregado la Alianza Democrática al grupo Santodomingo, o que habíamos vendido un cupo por dinero. Nada de eso fue verdad. Su vinculación fue a título personal.

Bonett y Laserna son errores, en la medida en que dejaron la impresión de que habíamos entregado la Alianza Democrática a las fuerzas tradicionales de la economía del país, pero eran sólo 2 parlamentarios de los 22. Desgra-

ciadamente, los demás no teníamos claro cuál comportamiento se esperaba de nosotros.

La Anapo, por ejemplo, siempre fue una piedra en el zapato del Congreso. No fuimos una fuerza pacíficamente rebelde. Yo creo que esto impidió que tuviéramos una personalidad política definida. Sencillamente, nos disolvimos políticamente. No fue un problema ideológico sino un problema político. En general, actuábamos sobre unos ejes ideológicos alternativos, pero políticamente dejamos de ser una piedra en el zapato, dejamos de ser rebeldes. Se interiorizó un comportamiento demasiado conformista tanto en la gente que estaba en el parlamento, como fuera de él. Nos tornamos demasiado conciliadores.

Yo siento también que no se conformaron equipos académicos suficientemente sólidos para haber presentado proyectos maduros. Solamente al final, algunos congresistas lograron consolidar una actividad parlamentaria de algún nivel, pero siempre de manera individual.

Perdimos la personalidad política, actuamos por chispazos. Estuvimos muy por debajo de lo que fue la Anapo en su momento.

Creo que nosotros nos contagiamos, nos confiamos de lo que habíamos conseguido, nos volvimos demasiado concertadores, demasiado *juiciosos* y perdimos la posibilidad de perfilar una personalidad que dentro de la paz y las reglas del juego institucional fuera la rebelión pacífica. Este es el problema más profundo de personalidad política que explica lo ocurrido en estos cuatro años.

Otro grave error fue que nosotros no le dimos el peso que debía tener y tiene el poder local. Allí también nos equivocamos. Por nuestro origen, lo local tenía un significado que no valoramos suficientemente. Hoy estoy convencido que para poder tener una personalidad política hay que sustentarla en el poder propio, es decir, el poder que le da a uno el elector, no en poder delegado.

Un asunto que siempre gravitó en la conducción y comportamiento del movimiento fue la participación en el gobierno de Gaviria. Cuando decidimos retirarnos del gobierno había gentes que consideraban que estar en el gobierno era una necesidad política. Paradójicamente, casi todos los que sostienen este punto de vista se retiraron de la Alianza en la campaña presidencial.

Hoy por hoy, estoy convencido que plantear el desarrollo de un proyecto alternativo manteniendo vínculos permanentes con el gobierno es imposible. Con vínculos permanentes se puede construir una fuerza política, pero esa fuerza no tiene alcance de ganar poder.

Revista Foro- *¿En qué está hoy el M-19? ¿Desapareció o no el M-19?*

Antonio Navarro- La gente que conforma la AD M-19 está viva. Yo les pronostico que como AD M-19 sacamos 200 concejales. Tengo esa certeza. Por los desarrollos que hemos tenido, por liderazgos que se han constituido,



A diferencia de la bancada de la Constituyente, la fuerza parlamentaria de la AD-M19 careció de coherencia y voluntad de trabajo colectivo. Las formas tradicionales de hacer política parlamentaria la fueron minando al punto de perder la totalidad de su representación en las últimas elecciones.

podemos aspirar a tener 20 alcaldías con candidatos propios.

El núcleo esencial de la AD M-19 no ha desaparecido y sigue siendo hoy la fuerza política más importante, numérica y regionalmente distribuida, que hay en el terreno de las fuerzas no tradicionales.

Al mismo tiempo, la AD M-19 como razón social ya no tiene la capacidad y la dinámica que tuvo antes, ni le va a poder recuperar. Ya no tiene capacidad de convocatoria ni hay que apostarle a que la recupere.

Revista Foro- Entonces, ¿cambiar de razón social y de proyecto político?

Antonio Navarro- No creo que se trate de eso. Creo que es indispensable construir una personalidad política que se sustente en su propio poder y en una combinación de rebeldía y, sobre todo, de aportes y salidas a los problemas concretos. Proponerse una oposición radical es simplificar el problema.

El escenario sobre el cual es posible reconstruir el movimiento es el escenario del poder local y actuando de manera distinta a como actúan los alcaldes de las fuerzas tradicionales, con participación ciudadana, con alcaldías abiertas, con concejales que hagan no sólo política municipal, sino también regional y nacional. El caso de Alvarez Gardeázabal es un buen ejemplo. El PT brasileño es un partido que sustenta su desarrollo en el ejercicio del poder local con las características antes indicadas.

Desde el eje del poder local aspiramos a tener un método de acción política que nos proyecte desde lo local a lo nacional en torno a grandes temas como la paz, la participa-

ción ciudadana, la política social, el medio ambiente y su expresión concreta a nivel local y regional.

Es importante insistir en la necesidad de actuar desde lo local con coherencia nacional. Yo creo que es posible y necesario que los alcaldes elegidos por este proyecto político actúen cohesionados en el nivel nacional.

Finalmente, me parece que la dinámica que desata el movimiento debe ir juntando su acción con la de otros sectores que están buscando una alternativa. Que ese juntarse vaya conformando la razón social y la organización de una alternativa con personalidad política propia.

Quisiera subrayar el carácter político social que ha de tener la nueva fuerza política. En el país existen ya importantes experiencias como las de Fecode y los indígenas, que nos deben servir.

Revista Foro- ¿Cuál es el proyecto político inmediato de la AD M-19 para acompañar esta apuesta política de fortalecimiento a nivel local?

Antonio Navarro- Una lección que hemos aprendido es la necesidad de mantener nuestra independencia política del gobierno de Samper, lo cual no quiere decir que estemos declarando la oposición total y frontal, o que satanicemos a quienes lo están apoyando desde posiciones independientes.

Por ahora vamos a mantener nuestra independencia del gobierno. Vamos a jugarnos a fondo en la estrategia de conseguir poder local y desde allí empeñarnos en construir una fuerza nacional con personalidad política, con fuerza propia.

La independencia frente al gobierno de Samper no significa que si el gobierno en algunas áreas desarrolla

iniciativas de importancia e interés para el país, o en el terreno de la paz, no podamos analizar la situación.

Revista Foro- *¿Cómo va a reconstruir la Alianza Democrática?*

Antonio Navarro- Primero que todo, hay que reconstruir unos valores, antes que pensar o concebir formas de organización. Hay que reconstruir valores como los de la solidaridad, los principios éticos, el compañerismo, el interés general, el interés colectivo.

El proceso anterior fue de enorme individualización del proyecto y no es posible recuperarlo por mecanismos orgánicos o de consulta interna. Por ejemplo, en Bogotá escogimos un candidato único a la Cámara y se quedó solo, no se le apoyó, lo cual refleja la crisis de valores que considero esencial reconstruir

La paz

Antonio Navarro- Yo creo que es posible. Es muy complicado por los múltiples factores que hoy gravitan a su alrededor. La paz hay que tejerla, es un tejido muy prolífico. Si el gobierno quiere la paz tiene que tejer el proceso y evitar un gran protagonismo de sus representantes en el proceso de paz.

Cómo se lo expresé al presidente Samper, estoy convencido que el Comisionado debe hacer y trabajar mucho y hablar muy poco. Hacer y trabajar con todo el mundo: la sociedad civil, con la gente que ha firmado la paz, con los factores de conflicto, con quienes han trabajado procesos exitosos en otros países.

Antes de formular una propuesta de paz en blanco y negro, hay que construir un diseño y unos consensos alrededor de ese diseño.

Revista Foro- *¿Cómo juzgar las cartas jugadas hasta ahora por la guerrilla en torno a la paz?*

Antonio Navarro- La guerrilla tiene diversas posiciones: las FARC pareciera no tener una política clara de paz. No hay ideas comunes suficientemente sólidas y compartidas. Lo único que se conoce y que unifica a las FARC son los doce puntos de su propuesta general de paz.

Considerando esos 12 puntos esbozados por las FARC, es sensato pensar que tienen interés en encontrar un camino de paz, así los pasos para llegar a él sean aún muy confusos.

Revista Foro- *¿La Coordinadora ha avanzado en términos de su cohesión política?*

Antonio Navarro- Lo que ocurre es que el ELN y las FARC son fuerzas distintas. Las FARC son una fuerza móvil, que centra su organización en estructuras móviles, en tanto que el ELN es una fuerza mucho más territorial.

Aunque las FARC tengan territorios donde actúa, su fortaleza es el grupo móvil. En cambio, en el ELN la fuerza del trabajo local es prioritaria. Hay frentes del ELN cuyo objetivo esencial es arraigar poder político local. Esa es su acción política.

Son fuerzas distintas que tienen una racionalidad distinta: mientras para las FARC es más importante el efecto de la política nacional, para el ELN es más importante el peso del poder local. Es más, el ELN a través de instancias mediatisadas, participa en procesos electorales locales desde las elecciones pasadas, y tienen una influencia y representación política no despreciable.

Revista Foro- *¿Hay voluntad política de paz en Samper y en su equipo?*

Antonio Navarro- Hay ganas, hay interés en que se pueda hacer, pero mi impresión es que todavía no tienen una propuesta y un pensamiento suficientemente maduros.

Revista Foro- *¿Cuáles serían las claves de su propuesta para tejer la paz?*

Antonio Navarro- En primer lugar, no puede haber paz sin una favorabilidad política y social sumamente clara. Yo creo que la paz al estilo como se hizo con nosotros, es decir sólo por espacios políticos y protagonismo, no va más. Eso ya se hizo, arrojó unos resultados positivos, pero no se puede repetir. Hoy los logros políticos y sociales regionales tienen un peso muy grande en la negociación de la paz.

En segundo lugar, hay que incorporar al proceso a muchísimos sectores que actúan en favor de la paz de manera dispersa: iglesia, gremios, sectores políticos regionales, organizaciones sociales. Es necesario encontrar un mecanismo que los incorpore, distinguiendo el diálogo de la negociación.

Tercero, me parece esencial el tema de los derechos humanos para ambas partes. En medio de violaciones graves es imposible que se cree el clima para el desarrollo de un proceso de diálogo y negociación. Mientras persista este clima de violación de derechos humanos es imposible que pueda tener protagonismo la paz.

Finalmente, dada la polarización que tiene el conflicto hoy, adquiere gran importancia el componente internacional. Se requiere de una fuerza que frente a los momentos difíciles de polarización del conflicto, tenga la tranquilidad y la distancia suficiente para superar las dificultades y garantizar la continuidad del diálogo y la negociación.

Todos los procesos de paz exitosos demuestran que este componente internacional es indispensable.

Revista Foro- *¿Cuál es su próxima batalla?*

Antonio Navarro- La alcaldía de Pasto, dentro del contexto que hemos examinado●

Adolfo Alvarez**Consejero de Paz del municipio de Cali, miembro de Foro Nacional por Colombia, profesor de la Universidad del Valle, militante de la AD M-19.****Hernando Llano A.****Director de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Cali, simpatizante de la AD M-19.**

La Alianza Democrática M-19: ¿una tercera fuerza frustrada?

Adolfo Alvarez y Hernando Llano A.

“Con fuerza telúrica una nueva Nación pugna por nacer en la República de Colombia y ¡lo está consiguiendo!...La última década del siglo XX ha sido testigo del estallido de dos desbordantes fenómenos de opinión en la vida política nacional. Una nueva Constitución señalará los pilares de una institucionalidad renovada, cuyos cimientos se afincan en los terrenos de la Modernidad y cuyo edificio monumental se eleva hacia los cielos del siglo XXI [...] Por otra parte, como la misma faz de ese centavo, está la insurgencia –de nuevas expresiones políticas que reventaron para siempre la camisa de fuerza del bipartidismo–: y el mejor ejemplo de esa opción diferente, preñada de anhelos de cambio y de futuro, ¡se llama Alianza Democrática M-19! [...] Sólo hay –tal vez– una salida posible para que el pueblo colombiano sea capaz de tomar las riendas de su destino: ser gobierno construyendo organización, construir organización siendo gobierno [...] Buscamos en último término, una organización novedosa, audaz, creativa e imaginativa, un organismo vivo, cambiante y flexible al ritmo de los tiempos, una organización capaz de responder al reto gigantesco que hoy nos tocó asumir: ser gobierno de una nueva Colombia, ser generadores de una nueva sociedad”.¹

Los términos de esta proclama expresaban en un lenguaje propio del “discurso M”, la percepción ampliamente optimista y triunfalista que se respiraba en el seno del movimiento, a comienzos de 1991. Se trataba de un optimismo fundado en hechos relativamente fulgurantes y excepcionales en la historia política nacional. En efecto, arrancó de una votación por Antonio Navarro en mayo de 1990 que superó los 600.000 votos, se acercó, en diciembre del mismo año, con la lista nacional a la Constituyente, al millón de votos. Esta votación representó el 27% del total de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, y sumada a la de otros sectores populares y democráticos, permitió consolidar una mayoría absoluta que rompió el tradicional dominio bipartidista de los cuerpos elegidos popularmente y promovió las transformaciones progresistas y democráticas desarrolladas en ella. Se trataba de un éxito sin precedentes en la historia nacional, logrado por un movimiento exguerrillero, que con su irrupción contribuía a transformar el Estado, forjando un nuevo régimen institucional (demasiado ambicioso y prematuro hablar de un nuevo país).

Pero además, la relativa movilización política que acompañó el proceso de elección de la Constituyente y la campaña de la lista nacional encabezada por Navarro, a pesar de la elevada abstención (cercana al

1. *Proclama: una nueva fuerza política para un nuevo país*, junio 3 de 1991, de un colectivo de trabajo de la AD M-19.

74%), alimentaron el optimismo y la esperanza de que, por fin, habría surgido en Colombia una alternativa a la hegemonía bipartidista liberal-conservadora. En palabras de Carlos Pizarro parecía cuajarse la posibilidad de "una oportunidad para que la inconformidad se exprese en Colombia". El nuevo reto del M-19 era convertirse en catalizador y eje de un vasto movimiento social de los inconformes.²

Alfonso López diría que el M-19 era "flor de un día", para tranquilizar al establecimiento político y provocar la ira de quienes desde la AD M-19 veían reflejados en esa sentencia sólo los deseos de los grupos de poder dominantes del país.

Pero entre 1990 y marzo de 1992, y entre esta fecha y marzo de 1994, la Alianza Democrática M-19 pasó de ser un movimiento que crecía amenazando la hegemonía bipartidista, a una pequeña fuerza marginal, más parecida a la izquierda tradicional, sin capacidad para contrastar y amenazar esa hegemonía. Como correlato de lo anterior, se convirtió en desencanto y desilusión para miles de compatriotas y para los sectores democráticos que miraban con simpatía y esperanza su aparición en la escena política nacional.

En efecto, en las decisivas elecciones de octubre de 1991 que debían renovar el Congreso, para darle continuidad a la labor de la Constituyente y desarrollar la nueva Constitución, la votación por la Alianza Democrática M-19 se redujo a la mitad y en términos relativos su participación con 9 senadores y 13 representantes (en un Congreso de mayoría liberal) no alcanzó al 10% del total. En marzo de 1992 en las elecciones locales, disminuye aún más su votación y su peso relativo en la composición de fuerzas. En estas últimas elecciones se produjo una verdadera catástrofe en las ciudades más importantes y en las regiones donde antes había tenido más acogida,³ con excepción de Barranquilla donde, por razones muy particulares, se logró la alcaldía, con una figura, polémica y controvertida en la misma AD, pero con gran arraigo y respeto en el pueblo, el padre Bernardo Hoyos.

La declinación electoral de la AD-M19 se prolongó en las elecciones de marzo de

1994, cuando se perdieron todos los escaños del Congreso. Pero más impactante que la caída cuantitativa y la pérdida de poder de un movimiento que convocó a amplios sectores intelectuales y medios, que por momentos revivía la opción de la política entre el pueblo, fue la pérdida de su credibilidad y de autoridad entre ellos.

Las preguntas obvias son ¿cómo explicar este desastre? ¿No se trata acaso de su confirmación de la idea siempre difundida y justificada por el establecimiento político de que no existe en Colombia espacio para terceras fuerzas y que sólo lo tienen las del sistema bipartidista? Para entender y explicar este proceso es necesario moverse en dos planos o hipótesis:

1. Una referida a la cultura política y al proceso mismo de la política en Colombia.

2. Otra relacionada con el proceso, los acontecimientos y dinámicas político-organizativas del proyecto Alianza Democrática M-19 y con sus propios actores.

No se trata de dos planos opuestos o divergentes, al contrario se han reforzado y alimentado en el tiempo conduciendo al resultado que hoy tenemos.

De la rebeldía al desprestigio de la política

La irrupción y el vertiginoso ascenso de la Alianza Democrática M-19 en 1990, coinciden y cabalgan en la onda de rebeldía y esperanza política que se abrió con el primer proceso de paz exitoso en la historia reciente, en un país agobiado y martirizado por las diversas violencias y que, simultáneamente, coincidía con uno de los momentos más bajos de legitimidad y credibilidad de los partidos y líderes políticos tradicionales.

Esta onda provocada en parte por el M-19 y su reinserción a la vida civil, era resultado también de un largo proceso de cuestionamiento y confrontación del movimiento democrático al establecimiento y que tuvo un punto alto en la votación por la séptima papeleta que le abrió paso a la Asamblea Nacional Constituyente.

Al presentarse con una lista única nacional, que incluyó parte de los líderes históri-

La declinación electoral de la AD-M19 se prolongó en las elecciones de marzo de 1994, cuando se perdieron todos los escaños del Congreso. Pero más impactante que la caída cuantitativa y la pérdida de poder de un movimiento que convocó a amplios sectores intelectuales y medios, que por momentos revivía la opción de la política entre el pueblo, fue la pérdida de su credibilidad y de autoridad entre ellos.

2. Angel Beccassino, *M-19 El Heavy Metal Latino Americano*, Fondo Editorial, Santo Domingo, 1989, p. 110.

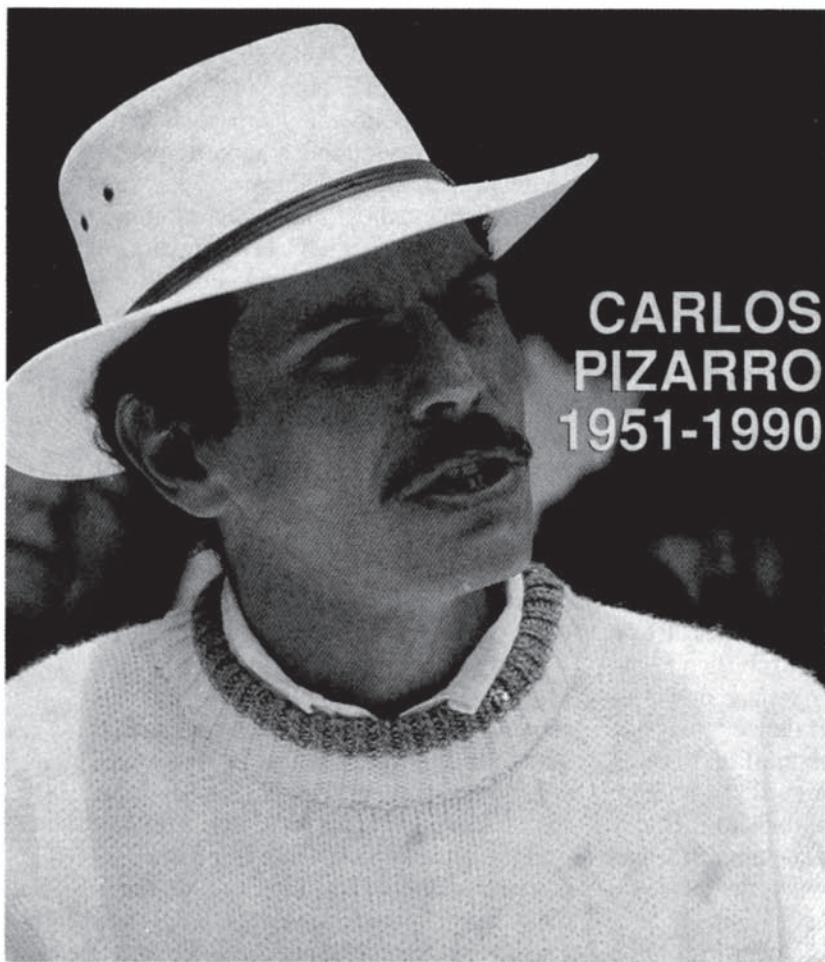
3. La catástrofe fue nacional, con pocas excepciones como en Sucre, donde se desarrolló un movimiento autónomo, casi al margen de la propia oficialidad.

cos de esa formación e incorporó a personalidades y figuras de un amplio espectro democrático, logró convocar y aglutinar parte de la protesta y los sentimientos de cambio y renovación. En esa coyuntura se convirtió en el *movimiento político del cambio y la democracia*.

Una ponderación objetiva no puede desconocer que en el proceso de la Constituyente, ese mandato y perfil se vio plasmado y le impidió un inequívoco signo de cambio democrático a ese cuerpo. En efecto, a pesar de las incongruencias y posibles contradicciones ideológico-programáticas entre algunos miembros de la lista nacional, superados por momentos y en ciertos temas por constituyentes liberales o de otras corrientes, el bloque de la Alianza Democrática M-19 fue decisivo en la definición del signo final de la Constituyente y la propia Constitución.⁴

Para los propósitos de este análisis, afirmamos que la nueva Carta abrió una puerta a la modernización y la transformación democrática de las instituciones y de la sociedad colombianas, promoviendo espacios y entregando nuevas herramientas de participación y control, pero dejando en estado de hibernación o incluso sin tocar la médula del sistema político: los partidos.⁵

Se podría afirmar que la elección de la ANC representó el punto más alto de la onda de rebeldía política, pero su proceso y su producto, la Constitución de 1991, con todas sus potencialidades y limitaciones, no contribuyó al fortalecimiento y a la transformación cualitativa de esa rebeldía



Carlos Pizarro había dicho que el M-19 representaba una oportunidad para que la inconformidad se expresara en Colombia. Hoy este propósito suena a oportunidad perdida o dilapidada

Revista Semana

en un movimiento orgánico. En este sentido, una responsabilidad muy grande le tocó a la naciente AD M-19, incapaz de transformar los debates y el proceso de discusión de la Constituyente en un escenario de educación, de cualificación y de organización política de masas. Al contrario, siendo el único sector, con amplia participación –en fin de cuentas los representantes liberales y conservadores, aparecían como una *colcha de retazos*– los constituyentes se encerraron a trabajaren el seno de la Asamblea, como era indispensable, pero dando no sólo la sensación, sino colocándose de espaldas y alejados de las re-

giones y los múltiples sectores de opinión, que simplemente querían tener información de primera mano, conocer los términos de los debates centrales y despejar preguntas y críticas que en forma relativamente orquestada se hicieron a la ANC desde sus comienzos.

Ni siquiera los seminarios regionales⁶ realizados durante los meses de febrero y marzo de 1991, a través de todo el país, y en los cuales aún se mantenía una gran capacidad de convocatoria por el movimiento, mística y entusiasmo entre militantes y simpatizantes, permitieron afianzar ese proceso.

En cuanto al aprovechamiento del espacio de la Constituyente, la AD M-19 fue el sector que más sufrió el desgaste de ese cuerpo, cuestionado y atacado abierta o sutilmente por los más diversos motivos, a través de los medios, por la clase política tradicional y por sectores del estableci-

4. Veáse respecto el comportamiento político y la relativa mayor cohesión con la que operó la AD M-19, el texto de Manuel José Cepeda: *La Constituyente por dentro*, Presidencia de la República- Consejería para el Desarrollo de la Constitución, junio de 1993.

5. En la negación de la democratización de los partidos, el voto negativo y las abstenciones de los miembros de la lista fue determinante. *La Constituyente por dentro*, op. cit., 284-302.

6. Organizados para preparar el Congreso Nacional, nunca realizado. Veáse serie *Cuadernos de formación política y materiales preparatorios*, Instituto de Estudios Políticos para la Democracia (AD M-19), Bogotá, febrero 1991.

miento, o simplemente por periodistas a la caza de noticias: sus costos de funcionamiento, los salarios, los auxiliares, la demora en aprobar el reglamento y hasta lo largo del nuevo texto constitucional; o por ejemplo, los debates en torno a si incluir o no a Dios en el preámbulo, o el cierre del Congreso, etcétera.

Se trató de un proceso del cual tampoco fue consciente la propia bancada ni los encargados de la organización, probablemente convencidos de que se venían propiciando cambios fundamentales y que el pueblo y la ciudadanía entendería y sabría valorar.

Precisamente, la ausencia de una estrategia y de una dirección política que estuviera atenta al proceso global de la Constituyente, como parte de un proyecto de más amplio alcance, permitió ese desgaste e impidió sacarle todo el rédito político, como espacio de formación, organización y propaganda política, a partir de los temas que se debatían e incorporaban al texto de la Carta y que podían superar el sentimiento de lejanía respecto al ciudadano medio y sus angustias vitales, pero que también debían mostrar los límites y alcances de ese nuevo pacto.

Ante la conquista de un acuerdo político de gran trascendencia como fue la virtual suspensión del Congreso recién elegido y la convocatoria a nuevas elecciones para octubre de 1991 y con unas cuentas optimistas y triunfalistas infladas por las encuestas, la AD M-19 se dispuso a retar por segunda y decisiva vez al establecimiento político colombiano, con el convencimiento de que su hegemonía sería nuevamente golpeada.

Pero se ignoraba o minimizaba el hecho de que nos encontrábamos en un momento muy bajo de credibilidad del sistema político, de la política y que, para muchos, en él debía incluirse a la AD M-19, aun cuando fuera su principal impugnador. El abismo entre país político y país nacional continuaba profundo e insonable.

Paradójicamente, la carta de presentación de la AD M-19, para la renovación del nuevo Congreso era la nueva Constitución, que no sólo estaba *en pañales*, cuestionada incluso en la veracidad de su articulado, y

siendo sus efectos prácticos eran casi nulos. Sus postulados de Estado Social de Derecho reñían con un Estado cada vez menos social y más neoliberal, y el paso de la democracia representativa a la participativa, aparecía huérfana de ciudadanos y electores libres. Para muchos “todo había cambiado [pero] todo seguía igual”: la corrupción, el clientelismo, los dramas sociales, el desempleo, la inflación, la incapacidad del Estado para responder a ellos, etc. Simultáneamente una verdadera danza de los millones y una apertura impulsada por el gobierno Gaviria con un proyecto neoliberal al mando, no confrontados por la AD M-19, minaban la credibilidad del proyecto político. Se dirá que el movimiento y sus líderes más importantes estaban ocupados reformando la Constitución y preparando el camino para los cambios que vendrían luego.

En parte esto era así, pero precisamente el movimiento no era, ni podía ser, los constituyentes y Navarro. Además requería la autonomía para cuestionar al gobierno, no sólo como estrategia de división del trabajo, sino por pura lógica política, por tratarse de dos planos relativamente autónomos del proceso político. El asunto trató de remediar con algunas propuestas en el *Congresoito*⁷ pero en general el peso de la AD M-19, que en ese momento le daba una mano al gobierno Gaviria, no se hizo sentir frente al curso de las políticas globales de éste.

No se tuvo la capacidad organizativa o la claridad de fines para mantener simultáneamente el consenso y el liderazgo en la ANC y la diferenciación y oposición en el plano político. No se trataba, claro está, de un asunto fácil en un equilibrio de fuerzas y en un contexto no del todo claro. Pero a los ojos de la opinión pública la AD M-19 perdía, en términos relativos, su aureola de alternativa rebelde recursiva y beligerante, en el propio campo de batalla y ganaba imagen de ponderación y prudencia, valorada positivamente sólo por algunos sectores.

Aparecen, aquí, con toda su fuerza las limitaciones de la cultura política colombiana: el apoliticismo como expresión de la carencia de tradición y de reflexión política de masas, o el abstencionismo como expresión de una rebeldía no canalizada y, en

No se tuvo la capacidad organizativa o la claridad de fines para mantener simultáneamente el consenso y el liderazgo en la ANC y la diferenciación y oposición en el plano político. No se trataba, claro está, de un asunto fácil en un equilibrio de fuerzas y en un contexto no del todo claro. Pero a los ojos de la opinión pública la AD M-19 perdía, en términos relativos, su aureola de alternativa rebelde recursiva y beligerante, en el propio campo de batalla y ganaba imagen de ponderación y prudencia, valorada positivamente sólo por algunos sectores.

7. Por ejemplo en la creación del Fondo de Solidaridad y en la oposición a la ley de estados de excepción.



Nunca antes una fuerza política de izquierda había recibido un respaldo como el brindado por las fuerzas democráticas a la Alianza Democrática M-19.

general, el atraso, el desinterés y la desinformación políticas de amplios sectores sociales y ciudadanos. Los procesos de la Constituyente, su complejidad, la relativa desinformación y los aparentemente pocos efectos prácticos de la misma, en los meses siguientes a la promulgación de la Carta, acentuaron tales lógicas. Pero sobre todo la debilidad de una vanguardia histórica del movimiento democrático, no permitieron entender y cabalgar sobre ese obstáculo.

Mientras tanto, el sistema clientelista seguía incólume, con el poder de las maquinarias y de partidos controlados por poderosos grupos, intocados por la Constituyente y dispuestos a la revancha contra quienes habían osado pisar sus predios.

En una lucha contra el tiempo, la dirigencia de la AD M-19, y principalmente Antonio Navarro, creyeron que era posible superar o al menos enfrentar exitosamente esas condiciones. Pero las cuentas y los presupuestos no tomaron en consideración,

o sólo mínimamente, el factor que terminaría siendo decisivo: las carencias y limitaciones del proyecto político organizativo, debilitado aún más por la quiebra de principios elementales de solidaridad, de sentido colectivo y la preponderancia de los intereses individuales y de grupo. Carencias que sumadas al debilitamiento de la credibilidad y la imagen del movimiento en el proceso anterior, condujeron a un escenario poco propicio a la confrontación.

De los afectos en la guerra a la dispersión y la insolidaridad

Esto nos remite al segundo nivel de nuestro análisis, el proceso político *interno*, referido al tipo de proyecto político, al desarrollo organizativo, a la toma de decisiones y a los conflictos de poder en su seno.

En primer lugar es necesario señalar que, en principio, existió alguna claridad

relativamente importante sobre el tipo de organización y su programa político. Entre finales de 1990 y los primeros meses de 1991, el asunto preocupó a los militantes y dirigentes y fue tema central de los seminarios preparatorios de un congreso nacional, que debía definir el perfil y la naturaleza del movimiento, elegir sus máximos organismos y diseñar la estructura y la táctica de organización.

El siguiente texto resume parte de la claridad y el relativo consenso logrado, en un proceso que involucró a los cuadros y militantes de todas las regiones, entre febrero y marzo de 1991 y que culminó en el seminario nacional de abril de 1991.

Un partido democrático, siendo éste su principal aspecto. Democrático por supuesto en su propuesta a la sociedad, porque en lo fundamental somos constructores de democracia, pero, por eso mismo, democrático hasta el cansancio en el orden interno y en su funcionamiento [...] Democrático, porque el objetivo es ampliar cada vez más la capacidad para tomar las decisiones fundamentales a todo el conjunto de los afiliados al partido. 'La base para la estructuración de AD M-19 es la afiliación individual y voluntaria' [...] Esto nos obliga al perfeccionamiento de los procedimientos que hagan posible el ejercicio del sufragio universal y secreto para la elección de directivas a todos los niveles y para la presentación de listas a los organismos de representación popular en la sociedad [...] Una base de afiliados en capacidad de incidir permanentemente en su movimiento es la garantía para la construcción de una nueva cultura política en el país y para posibilitar la movilidad y el libre juego de las dirigencias [...] Un partido democrático significa también reglas claras a partir de las cuales sus componentes tengan un marco de referencia y por donde pueda transcurrir ordenada y eficazmente la vida de la colectividad. Donde las mayorías y las minorías sepan a qué atenerse, donde exista claridad acerca de los derechos y deberes correspondientes a los afiliados. Proponemos construir una alternativa no para los agrupamientos hoy existentes sino para los millones de colombianos que aspiran con justa razón a incidir en los destinos

del país [...]. La promoción y potenciación de liderazgos nuevos y a todo nivel, el respeto a los acumulados de las comunidades y, en fin, buscar el acercamiento con los elementos activos de otros sectores, dándoles todas las posibilidades en un plano de igualdad, debe ser un propósito que anime al conjunto de los actuales constructores de la organización [...]. En los criterios para la construcción del nuevo partido tendremos que llegar al convencimiento que ninguna de las actuales estructuras en que se han basado los agrupamientos que confluyen en AD M-19 responden a las expectativas de la organización que nos proponemos. Ni las que el país reclama. Correlativos con este proceso debe desde ya exigir el acatamiento pleno de las directivas programáticas y de acción política de que dote al partido, por parte de todos los sectores. En esa dirección la legitimación de los organismos de dirección y en particular de una dirección nacional colegiada debe ser un objetivo a conseguir en el corto plazo.⁸

El discurso y la promesa de construir, por fin, una organización con ciudadanos y para los ciudadanos, de tipo democrático se enarbó y proclamó con fuerza, desde la Constituyente, pero a pesar de la claridad conceptual, de las declaraciones y de algunos esfuerzos, como la carnetización, las prácticas y los procesos reales fueron en otra dirección.

Una de las carencias que más pesó fue el divorcio entre el proyecto político y los sectores sociales y populares que aspiraba a convocar. Centrando su atención en la política electoral, confiada en los réditos de sus éxitos constitucionales, olvidó la poca incidencia de éstos en la política real, que se nutre no tanto de principios como de acciones y hechos. Así, en lugar de ir cuajando ese eje de convergencia de los movimientos sociales y aglutinamiento de inconformidad, postulado por Pizarro, se fue diluyendo esa posibilidad al fragor del ineludible combate electoral.

Una de las carencias que más pesó fue el divorcio entre el proyecto político y los sectores sociales y populares que aspiraba a convocar. Centrando su atención en la política electoral, confiada en los réditos de sus éxitos constitucionales, olvidó la poca incidencia de éstos en la política real, que se nutre no tanto de principios como de acciones y hechos. Así, en lugar de ir cuajando ese eje de convergencia de los movimientos sociales y aglutinamiento de inconformidad, postulado por Pizarro, se fue diluyendo esa posibilidad al fragor del ineludible combate electoral.

8. Conclusiones del Seminario Nacional de abril 7 y 8 de 1991, Secretaría de Organización.

Un proyecto socialdemócrata en proceso

Respecto de los asuntos programáticos, a diferencia de lo que parece ser un sentir bastante común entre sectores académicos y de la intelectualidad política, se puede afirmar que no radicó aquí la debilidad o la limitación del proyecto AD M-19. Al contrario, precisamente por ser una preocupación muy sentida en la práctica política de varias de las formaciones llegadas a ella y por plantearse como talón de Aquiles del movimiento, en los dos eventos más representativos del debate político en su seno,⁹ se produjeron importantes tesis y consensos políticos sobre los propósitos y las grandes banderas de la nueva formación, que, en síntesis, se podrían tipificar como una propuesta socialdemocrática para Colombia.

Además, respecto de todo el debate programático que ha caracterizado a la izquierda colombiana, se superó el plano del fundamentalismo marxista o de cualquier otro corte, colocándolo en un sentido más moderno y pragmático. Esto no implica que en sus formulaciones no existan contradicciones o vacíos, pero ellos no fueron un obstáculo práctico ni político. Por lo demás, en una formación con apenas dos años de creada eran no sólo entendibles, sino normales. El asunto era forjar los espacios y los escenarios para trabajar, discutir y superar dichas limitaciones y sobre todo desarrollar una metodología que fuera conduciendo a propuestas más concretas y fundamentadas, lo que necesariamente se relacionaba con el desarrollo de una organización moderna, informada, bien asesorada, ajena a pretensiones hegemónicas y vanguardistas.

De liderazgos históricos a la pérdida de autoridad

Puede parecer como una simplificación de la crisis de este proyecto decir que el debilitamiento del liderazgo y la autoridad o el hecho de no haber podido construirlos con toda la legitimidad y en forma inequívoca en estos tres años, explica no pocos de los problemas de organización y dirección del mismo.

¿Cuánto pesó en esto la tradición jerárquica, proclive a las lealtades y afectos personales o de grupo del M-19? Se partió de un liderazgo muy fuerte y relativamente incontrastable e incuestionable: el de Antonio Navarro, candidato a la presidencia en 1990, cabeza de la exitosa lista nacional y luego presidente de la Constituyente. No terminaremos de ponderar el aporte de Navarro en este período y su papel en el proceso de la ANC, pero en la medida que su poder y su imagen se fortalecía (las encuestas lo colocaban entre los tres primeros a la presidencia), el proyecto político colectivo se minaba. Desde 1991, apareció el conflicto entre la figura y la proyección de Navarro, o sus aspiraciones y las necesidades del movimiento y su desarrollo.

El dilema siempre se resolvió en favor del primero, bajo el presupuesto, tácito, de que su ascenso era prácticamente imparable y que detrás de él ascendería el movimiento y sus cuadros. Parecía que la meta no era crear un movimiento de cambio, una fuerza real de gobierno, sino llegar, y pronto, a la presidencia con Antonio Navarro.

Incluso frente a la campaña de marzo de 1994, en el Foro Ideológico de febrero de 1993, se le propuso a Navarro que declinara su aspiración a la presidencia y encabezara una lista nacional al Senado, buscando no sólo frenar el proceso de dispersión de listas nacionales, que se veía venir, sino propiciar un fenómeno de aglutinamiento de la protesta y la inconformidad que tuviera repercusión en la conformación del congreso e impidiera repetir la historia de la legislatura de 1991-1994, en la cual la AD M-19, con escasas excepciones, había sido marginal y no había logrado un liderazgo de la oposición. Ni Navarro ni la dirigencia histórica entendió que, a pesar del atraso político, el pueblo y la franja buscaban no sólo un líder, sino una fuerza organizada.

Esta contradicción, sumada a los afanes y las premuras de dos años continuos de elecciones, impidieron darle institucionalidad al movimiento. De alguna manera, en este caso se puede aplicar el aforismo de que “lo urgente no dejó realizar lo importante”. Como ejemplo y máxima expresión de esa incapacidad, obviamente explicada por los cruces de intereses y aspiraciones,

Respecto de los asuntos programáticos, a diferencia de lo que parece ser un sentir bastante común entre sectores académicos y de la intelectualidad política, se puede afirmar que no radicó aquí la debilidad o la limitación del proyecto AD M-19. Al contrario, precisamente por ser una preocupación muy sentida en la práctica política de varias de las formaciones llegadas a ella y por plantearse como talón de Aquiles del movimiento, se produjeron importantes tesis y consensos políticos sobre los propósitos y las grandes banderas de la nueva formación, que, en síntesis, se podrían tipificar como una propuesta socialdemocrática para Colombia.

9. Los seminarios de febrero y marzo de 1991 y el Foro Ideológico Nacional de febrero de 1993, convocado bajo el lema “Por la construcción del Estado Social de Derecho”.

está la no realización del congreso del movimiento, prometido desde finales de 1990.

Evento que nunca se realizó por las premuras electorales y por la ausencia de voluntad de la dirigencia de la AD M-19, que parecía más preocupada en la realización de cálculos y conciliábulos para decidir el futuro electoral, convencidos de que el respaldo popular o incluso de los militantes y simpatizantes se mantenía intacto.

Sin un congreso que le diera una institucionalidad al movimiento, que lograra establecer instancias de dirección política, con autoridad y separadas de los cargos de representación popular, no sometidas a ellos o a los liderazgos tradicionales, la autoridad se fue diluyendo y fragmentando.

Para los máximos dirigentes parecía lógico seguir manejando y dirigiendo la organización con los mismos criterios e instrumentos informales, basados en la fuerza de liderazgos o simpatías históricas; el predominio del espíritu de cuerpo del antiguo M-19 sobre la AD tuvo en esto gran peso. Por otra parte, se delegó en direcciones débiles, sin autoridad y poder real que, a pesar de la buena voluntad de los encargados, terminaron siendo arrastrados por el torbellino de intereses e incongruencias. Se llegó a una dirección formada por exconstituyentes, por los parlamentarios y por otras figuras, pero con poca autoridad y credibilidad, con poca fuerza, en parte por el distanciamiento de esos líderes con las realidades y los procesos de las regiones y porque el propósito colectivo, la construcción de una fuerza de cambio, se había ido diluyendo. La última dirección elegida caería, por ejemplo, en tamaña contradicción, cuando quienes la conformaron quedaron inhabilitados para ser candidatos en la campaña de 1994, pero en su gran mayoría terminarían aspirando y encabezando listas al Congreso en este año.

Por otra parte, con la elección de los parlamentarios, a finales de 1991, apareció, de hecho, otro centro de poder, pero ni siquiera uno sólo sino múltiples, parecidos a las formas de autoridad y poder de los partidos tradicionales, no comprometidos orgánicamente con la construcción del movimiento, quedando presos de proyectos y dinámicas individuales y en últimas más

preocupados por la imagen particular y el “mantenimiento de la curul”, que por el desarrollo de una estrategia de partido.

Los cálculos desbordados, las encuestas infladas o el optimismo exagerado y la falta de un espacio de reflexión y de decisión racional, dispararon las aspiraciones y las disputas por el poder, en momentos en que todos los lazos de solidaridad y las reglas de racionalidad estaban rotas o superadas por los acontecimientos.

Nuevamente el problema no era tanto construir un proyecto colectivo, cuanto el ascenso y el control de cargos gubernamentales por individuos y grupos, que creían encarnar ese proyecto o simplemente veían allí una posibilidad única de posicionamiento personal.

Un ejemplo de la desinstitucionalización y sus repercusiones en los procesos de deterioro político del movimiento, es lo sucedido en Cali, uno de los pocos sitios que mantuvo una fuerza importante en octubre de 1991, donde se realizó una convención bajo criterios modernos y democráticos, en diciembre de ese año. De ella emanó una dirección municipal, con credibilidad y reconocimiento en la militancia, de la cual hicieron parte “por derecho propio” los tres parlamentarios de la ciudad. Además de su papel como conductora política, buscó construir reglas del juego y establecer procedimientos para manejar cuestiones tan importantes como el acceso a los cargos públicos, la selección de funcionarios, su evaluación, etc. Pero los conflictos entre distintos sectores y especialmente la falta de voluntad de los parlamentarios para darle legitimidad, terminaron debilitándola y desmontándola. De esta forma, el poder de decisión y la “dirección”, como en los partidos tradicionales, pasó de un cuerpo colegiado a quienes tenían las credenciales de parlamentarios. El único espacio que tenía legitimidad, desde el punto de vista colectivo, desapareció y con ello, toda referencia de organización. Esta comenzó a girar en torno a los grupos de lealtad y amistad de los parlamentarios y no de un propósito colectivo, de un proyecto, en el cual los intereses y aspiraciones personales se sometieran a aquéllos. Como resultado final –no sólo por la división y los otros factores ya analiza-

Los cálculos desbordados, las encuestas infladas o el optimismo exagerado y la falta de un espacio de reflexión y de decisión racional, dispararon las aspiraciones y las disputas por el poder, en momentos en que todos los lazos de solidaridad y las reglas de racionalidad estaban rotas o superadas por los acontecimientos.

dos, sino por la destrucción de la organización—fue que en las elecciones de 1994 se perdieron las tres curules de la AD M-19 del Valle. Las redes de solidaridad y afecto que fueron tan importantes, se debilitaron en forma dramática en el proceso de la AD M-19 con efectos destructivos.

El otro aspecto que vale la pena evaluar se refiere a la promesa de “un movimiento democrático, donde tuvieran espacio las nuevas fuerzas y los liderazgos populares y democráticos” hecho por la AD M-19, la cual no se expresó en la creación de espacios a liderazgos de personalidades democráticas e independientes, de líderes populares o representantes de la intelectualidad.

El proceso que condujo a la elaboración de la lista nacional al Senado en 1991 y a la representación a la Cámara en varios departamentos, en buena parte fue en contravía de esa promesa. En efecto, a diferencia de la lista a la ANC, pensada más hacia el país y en la potenciación de esos liderazgos, la lista nacional al Senado reflejó las contradicciones y las limitaciones del nuevo proceso o *proyecto*, o las incongruencias de quienes decidieron el asunto. Era, en primer lugar, una lista de los liderazgos *internos* en respuesta claramente a los reacomodos de poder o a la tradición en el seno del M-19, lo cual era explicable e incluso le podía dar relativa credibilidad a los ojos de la opinión pública nacional. Pero, en segundo lugar, acompañada con nombres que ni le daban el carácter nacional ni democrático que tuvo la lista a la ANC. Por ejemplo, con personas como Mario Laserna, de reconocida tradición conservadora, muy distante de una tradición democrática, o como Pedro Bonet, quien haría un buen papel como congresista, pero cuya inclusión se interpretó como un señal de proclividad hacia un grupo de poder del establecimiento; o la inclusión de un conservador de Nariño, cuyo compromiso con el movimiento nunca se dio, mientras simultáneamente, en ese departamento, uno de los movimientos regionales con más fuerza, no tenía el mismo tratamiento. En fin, una lista donde la intelectualidad democrática o los grandes líderes obreros y populares, soportes fundamentales del proceso de diciembre,



Los propósitos de construir una alternativa política por parte del M-19 quedaron enredados en los vericuetos del parlamentarismo y la disolución política.

estaban en lugares subalternos o brillaban por su ausencia.

¿Cuánto desestimuló a la militancia y al electorado una lista nacional con estas contradicciones? Es evidente que el resultado y los desarrollos no pueden explicarse por la lista, pero nuestra hipótesis es que ella hace parte del conjunto de decisiones o procesos que, con efecto residual y acumulable, condujeron a la caída electoral y a la quiebra política de la AD M-19.

A los ojos de muchos, la contradicción entre el discurso y las promesas de renovación y democracia y las prácticas más tradicionales, necesariamente debía producir alejamiento y, en muchos casos, franca rebeldía o rechazo. Recordemos que hemos señalado que estamos en el

ciclo de crisis de la política y por ello este proceso *interno* de la AD M-19 tenía un efecto de sinergia negativa, al *corroborar* que los vicios eran inherentes a “todos los políticos” y, en cierto sentido, a “la política”.

La informalidad de los liderazgos tradicionales funcionó mientras ellos y su autoridad no tuvieron cuestionamientos o estuvieron por encima de toda sospecha y cuando los lazos de solidaridad en el grupo eran muy fuertes. Esta situación idílica pasó rápidamente en la AD M-19 y prácticamente desde el momento en que se decidió la lista nacional afloraron las divergencias y pugnas de poder.

La cuestión se agravó en las elecciones de octubre de 1991, tanto en el ámbito nacional como regional. Si bien se constituyeron direcciones elegidas en convenciones o asambleas, en el proceso afloraron con fuerza las debilidades de un proyecto orgánico inconcluso e inmaduro y, sobre todo, las ambiciones desbordadas de decenas de cuadros, exguerrilleros o no, excomandantes o no, que con la perspectiva de convertirse en representante o senador (y más tarde), diputado o concejal, se consideraban con todo el derecho para aspirar. El problema central para la gran mayoría de cuadros y líderes se volvió la aspiración a ser elegido en uno de estos cargos. Parecía que la lucha política y las posibilidades de incidir y tener protagonismo pasaban exclusivamente por los cargos de representación.

En varias regiones se logró llegar a listas únicas, pero generalmente con procesos cuestionados que minaron la solidaridad interna, fueron gestando grupos antagónicos y dejando en el camino resentimientos personales y a la organización fragmentada. Debe recordarse que en octubre de 1991 se perdieron por lo menos 7 representantes por las divisiones regionales del movimiento.

Es claro que los resultados del 27 de octubre de 1991, que marcaron el ciclo de descenso del movimiento, implicaban un mensaje y un llamado de los sectores populares y democráticos que no sólo reclamaban un liderazgo político claro y activo, sino más coherencia y transparencia como fuerza política alternativa, que parecía re-

producir la cultura política criolla: el personalismo, el grupismo político, etcétera.

En medio de la crisis de la política y de los políticos, el mensaje que le llegaba a los ciudadanos, en cuanto a lo que acontecía en el seno de una formación que se había propuesto como renovadora, no era el del cambio y la transparencia, sino el de una enconada lucha de ambiciones personales donde los *ideales*, las *grandes promesas* y los proyectos eran cosa del pasado.

La promesa de modernización y transparencia política de la AD M-19 quedó sepultada en el fragor de las presiones, de los afanes electorales y de las ilusiones de que se estaba a las puertas del Palacio de Nariño.

Que el centro de la lucha política durante estos dos años gravitara en torno de las elecciones era una realidad que obligaba al movimiento a medirse en esos procesos. Si bien desde posiciones diversas, desde las tradicionalmente abstencionistas hasta otras más orgánicas, se llamó la atención sobre el asunto, el proceso de construcción quedó sometido a la dinámica electoral, descuidando o casi abandonando el fortalecimiento de los procesos de organización popular, de sus proyectos y luchas. Se debilitó así uno de los principales soportes de la construcción y afianzamiento del movimiento.

De la pretensión parlamentarista a un remedio del caciquismo

N i siquiera cuando la Anapo amenazó la hegemonía política en 1970, hubo una representación tan amplia diferente a la del bipartidismo¹⁰ en el Congreso. Pero esa representación, grande en términos de la historia política, era pequeña frente al reto de enfrentar la amenaza de contrarreforma y hegemonismo del parlamento elegido en octubre de 1991. Pero el asunto no era sólo cuantitativo o la postura hegemónica del liberalismo, que de hecho operó en la legislatura del 91 al 94. Más allá de esos obstáculos objetivos, el principal obstáculo fue lo inorgánico, la dispersión y la falta de sentido de partido de la bancada. Si bien en sus inicios buscó funcionar en forma coordinada, terminaría siendo arrastrada por los

El problema central para la gran mayoría de cuadros y líderes se volvió la aspiración a ser elegido en uno de estos cargos.

Parecía que la lucha política y las posibilidades de incidir y tener protagonismo pasaban exclusivamente por los cargos de representación.

10. La representación elegida por la Anapo tenía la impronta liberal o conservadora.



Revista Semana

La fórmula presidencial Navarro-Piñacue no logró suscitar el entusiasmo de las fuerzas democráticas y aún de las propias fuerzas de la Alianza Democrática-M19.

conflictos del movimiento, dispersa su acción en protagonismos y ejercicios más o menos individuales, sin un norte y una estrategia, que permitieran usar ese espacio como verdadera tribuna y palanca de lucha política. Sería injusto desconocer que hubo acciones y participaciones individuales de importancia y de impacto, como el trabajo realizado por Eduardo Chávez frente a Cusiana. Pero se trató de hechos y protagonismos individuales que, a pesar de la trascendencia, como la de Cusiana, precisamente por la inexistencia de una organización que hiciera de caja de resonancia, con una estrategia de información y comunicación masiva, terminaron diluidas o subvaloradas por los medios de información, desconocidas por la opinión pública o sumadas a las cuentas a favor del establecimiento.

Por otra parte, a pesar de las pretensiones parlamentaristas que se fueron desarrollando, haciendo girar la organización y las decisiones en torno a ellos, la bancada tampoco logró el liderazgo ni el respeto para acaudillar y levantar el movimiento. En parte, porque más que dirigentes del movimiento comenzaron a comportarse como jefes de sus propias toldas y subgrupos, reproduciendo de hecho la experiencia de cacicazgo de los partidos tradicionales. Pero no sólo terminarían siendo víctimas de sus aspiraciones sino que liquidarían una de

las pocas opciones de liderazgo legítimo que le quedaba al movimiento.

La participación en el gobierno: ¿oportunidad o trampa? •

La participación o no, primero en el gobierno nacional y luego en los gobiernos regionales y locales, no sólo generó polémica, sino que también incidió fuertemente en la imagen del movimiento y en su propia crisis interna.

A pesar de las críticas y reparos iniciales a la participación, que veían en ella la posibilidad de que el movimiento fuera cooptado por el establecimiento, pero sobre todo, que perdiera credibilidad ante los ciudadanos y sectores críticos de las fuerzas tradicionales y sus gobiernos, ella tuvo justificaciones, que en su momento parecieron válidas y coherentes.

No parecía lógico negarse a participar en el gobierno Gaviria, precisamente en momentos en que se construía un proceso de concertación hacia la reforma de las instituciones y cuando era necesario no sólo mostrar vocación de gobierno, sino disposición hacia la construcción de consensos políticos más amplios e interés en trabajar desde el Estado en la búsqueda de soluciones.

Si se piensa que esta participación, en los términos propuestos por el propio Gaviria, no negaba la independencia y capacidad de criticar o distanciarse en algunos aspectos. En últimas, según las circunstancias, siempre era posible el recurso de la retirada para pasar a la oposición.

La obsesión de ser gobierno en un plazo no muy lejano llevaba además a una conclusión obvia: había que comenzar a mostrar que se estaba en capacidad de ser gobierno y esto sólo era posible ejerciendo y haciendo la prueba del poder institucional. Por otra parte, una importancia práctica, no despreciable: tenía la posibilidad de disponer de cargos públicos para vincular a mucho exguerrillero y militantes urgidos de empleo e ingresos.

La primera participación y la que más se discutió y obviamente más efectos tenía en el debate político y en la imagen del movimiento, fue la del Ministerio de Salud.¹¹ En síntesis, se podría decir que el ministerio ejercido por Navarro en un plazo bastante corto, con base en un planteamiento global relativamente claro en materia de salud y la realización de algunas denuncias importantes, fue fundamental en el posicionamiento de la figura de Navarro y del proyecto en 1990. Más contradictorio y problemático, fue el segundo período, cuando se dieron hechos tan controvertibles como el uso del glifosato, o la liberación de los precios de las drogas, en los cuales la actuación no fue clara o coherente. La presión interna y la necesidad de diferenciarse del Gobierno tardíamente, llevó al retiro del ministerio con la pretensión de lanzarse a la oposición. Retiro que hubiera sido más entendible antes y que no implicó ningún beneficio político, no sólo por lo tardío, sino por realizarse *en frío*, más como producto de las contradicciones internas, que del enfrentamiento con el Gobierno.

En éste, como en los casos de participación a nivel de las gobernaciones o las alcaldías, el problema no fue tanto la presencia o el compromiso del movimiento en esos niveles, sino la incapacidad para diferenciarse en términos de la gestión y en la forma de relación entre los funcionarios y el movimiento. Ante la carencia de organización, de reglas y de una tradición de trabajo

político desde la gestión pública, los cargos terminaron siendo casi representaciones personales, donde la línea, las propuestas y estrategias dependían del buen o regular desempeño de aquél o donde los modos de gestión, no mostraban prácticas diferentes y de renovación del ejercicio público. Al contrario, en algunos casos se cayó en acciones y prácticas típicas de los malos manejos del clientelismo.¹² Por esto, a pesar de algunas ejecutorias de importancia, en el Ministerio de Salud, en la Superintendencia y en las administraciones locales, por la falta de estrategia, quedaron minimizadas, sin contar en los balances de hechos positivos.

En algunos casos la representación, fue un motivo adicional de conflictos y pugnas internas, precisamente por cuanto los funcionarios eran presentados no por una dirección oficial, sino por los que tenían la vocería –los parlamentarios, o quien hacía las veces de jefe– o incluso en algunos casos eran los propios mandatarios los que escogían al representante, estimulando, consciente o inconscientemente, las diferencias internas.¹³ La división y la premura por tener poder impedían pensar siquiera la conveniencia o los términos de la participación, en forma tal de condicionar o por lo menos colocarle principios y límites a los compromisos. En el último período, ya con una fuerza bastante débil, las invitaciones a participar en los gobiernos locales tuvieron la limitante adicional de ser marginales o en todo caso ya no como expresión de un reconocimiento pleno a una fuerza política importante y sólida. Por ejemplo, en el caso de Cali, el apoyo al candidato triunfante en las elecciones a la alcaldía de 1992 (Rodrigo Guerrero), con base en un acuerdo programático, condujo a la participación en el gabinete en términos difusos, en buena parte por la escasa fuerza que ya mostraba el movimiento y por su propia división.

En fin, parte del éxito de la participación exigía una gestión no sólo diferente por los contenidos, por la celeridad y eficacia, porque marcaba diferencias técnicas y políticas con lo que antes se hacía. Es claro que esto no siempre es fácil cuando se trata de una participación que implica

La presión interna y la necesidad de diferenciarse del Gobierno tardíamente, llevó al retiro del ministerio con la pretensión de lanzarse a la oposición. Retiro que hubiera sido más entendible antes y que no implicó ningún beneficio político, no sólo por lo tardío, sino por realizarse en frío, más como producto de las contradicciones internas, que del enfrentamiento con el Gobierno.

11. Ejercido primero por el propio Antonio Navarro, luego por Camilo González y, finalmente, por Gustavo de Roux, quien renunció en diciembre de 1992.

12. Algunos funcionarios del movimiento se vieron involucrados en hechos o acusaciones de malos manejos de sus cargos.

13. Esto sucedió en el Valle con el gobernador Holguín, a quien enfrentó Rosemberg Pabón en las elecciones de 1992

trabajar con estructuras burocráticas del bipartidismo, consolidadas y que debieron enfrentarse o transformarse en un proceso que produjo mucho desgaste. Pero fuera de esto, en algunos casos aconteció fue el desarrollo de gestiones ineficientes, sin trascendencia, que dejaron la impresión de incapacidad para gobernar y producir transformaciones.¹⁴

De todo lo anterior se descubre una realidad: una fuerza que quería ser gobierno, pero no estaba preparada orgánica, intelectual y espiritualmente para serlo. Este hecho revela problemas en la política de formación y preparación de cuadros, pero sobre todo, la carencia de una tradición y de un talante que con los discursos acompañara prácticas y actitudes plenas de renovación.

Hay aquí una gran paradoja y contradicción, por cuanto la formación y la capacitación no pueden darse en frío y seguramente muchos de los errores y falencias en el ejercicio del gobierno tenían que ver con el hecho de no haberlo ejercido antes, lo que necesariamente implicaba correr con el costo de la inexperience. Pero para algunos, mejor habría sido pasar por el desierto de la oposición sin compromisos burocráticos, sin correr riesgos políticos; sólo que esto también podría conducir, en una formación proclive al radicalismo verbal, a volverse también una fuerza tradicional de izquierda, incapaz de ser alternativa real de gobierno. La clave seguramente está en la inexistencia de una cultura de organización y de una ética política, que permitiera la flexibilidad, la audacia, la eficiencia, la capacidad de autocontrol y de crítica y en últimas, el ejercicio de una dirección colectiva, atenta y capaz de usar las palancas de poder o de renunciar a ellas, como parte de un proyecto de construcción de un gran movimiento político, que tocara todos los espacios de la vida social y no sólo los del Estado.

Pero se trató también de una relativa –¿o amplia?– debilidad en la for-

mación política, técnica e intelectual del conjunto del movimiento, no sólo de los grupos que desde Bogotá pretendían dirigir, sino de los miles de cuadros que en centenares de municipios querían construirlo. El voluntarismo y muchas veces la tradición guerrera primaban sobre la racionalidad y el análisis informado. El propósito de una política de formación, de cualificación de los cuadros y la militancia quedó entre las promesas no realizadas. Por la carencia de políticas y planes concretos, en la perspectiva de un gran proyecto político, las ofertas y los apoyos internacionales estuvieron inutilizados o sólo muy parcialmente aprovechados.¹⁵

En espera de una nueva oportunidad

El vacío de un proyecto político democrático alternativo al bipartidismo continúa existiendo. La inconformidad y la disposición de vastos sectores sociales y de opinión continúa a la espera de una oportunidad de expresión orgánica. Pero será necesario atravesar un gran desierto, de oposición, de soledad, de incredulidad; re establecer lazos orgánicos y de credibilidad con los movimientos sociales y con la intelectualidad democrática, reconstruir la solidaridad y el afecto, pero, sobre todo, el espíritu de partido, actuar con perspectiva y responsabilidad históricas. Que los dirigentes y militantes de la AD M-19 tengan la capacidad, la humildad y la grandeza para lograrlo, lo mostrará el desarrollo futuro de la política colombiana●

Para algunos, mejor habría sido pasar por el desierto de la oposición sin compromisos burocráticos, sin correr riesgos políticos; sólo que esto también podría conducir, en una formación proclive al radicalismo verbal, a volverse también una fuerza tradicional de izquierda, incapaz de ser alternativa real de gobierno. La clave seguramente está en la inexistencia de una cultura de organización y de una ética política, que permitiera la flexibilidad, la audacia, la eficiencia, la capacidad de autocontrol y de crítica y en últimas, el ejercicio de una dirección colectiva, atenta y capaz de usar las palancas de poder o de renunciar a ellas, como parte de un proyecto de construcción de un gran movimiento político, que tocara todos los espacios de la vida social y no sólo los del Estado.

14. Tal es el caso en el Valle del Cauca, con la presencia primero en la secretaría de Educación y luego en la de Agricultura.

15. Por ejemplo, el apoyo del PSOE.

Oscar Delgado
Politólogo e investigador
Miguel Eduardo Cárdenas
Doctor en Derecho, asesor en política social

Franja electoral y opinión crítica en Colombia

Oscar Delgado
Miguel Eduardo Cárdenas

La ausencia de democracia en Colombia, vale decir, la *democracia delegativa*¹ se verifica 1) por la alta discrecionalidad del poder ejecutivo para el control de la agenda pública facilitada por la dependencia de los medios de comunicación y la virtual ausencia de organizaciones partidarias; 2) por el sistema presidencialista del subdesarrollo, una especie de monarquía constitucional,² y 3) por la estructura del poder político: la dominación de una élite político-económica reforzada por la inexistencia de una genuina sociedad civil³ con capacidad defensiva de los bienes públicos,⁴ del interés social en general y del interés de los excluidos, que permanecen al margen de un sistema estratificador de clases.

En las sociedades occidentales de mayor desarrollo democrático los canales e instrumentos de las acciones colectivas de la sociedad civil han sido: 1) desde el siglo XVIII la opinión de las élites alternativas y pequeños públicos (a través de los medios de comunicación de élites), los parlamentos constituidos en elecciones competitivas y sinceras, y los movimientos sociales y políticos; 2) a mediados del siglo XIX, los anteriores y la conversión de los movimientos políticos en partidos políticos, y 3) en el siglo XX,

la consolidación de la democracia liberal.

En esas sociedades, los propietarios de los medios, los comunicadores y periodistas son "hombres públicos", líderes de la opinión, defensores de los bienes públicos y del interés social, en especial cuando la fijación de la agenda pública enmascara la defensa de los intereses privados en detrimento de la comunidad o de la democracia (Watergate, por ejemplo).⁵

En Colombia la antigua oligarquía aristocrática, hoy élite pragmática, afirma su dominación de la sociedad al desplegar con éxito las estrategias de fijación de la agenda; corrupción del parlamento, de la política y de las elecciones; control indirecto de los noticieros de televisión y cadenas radiales, y fuerte influencia en los diarios y revistas –vía publicidad pagada de las grandes empresas privadas y oficiales–.

Hay dos modelos no conflictivos del accionar político: el del consenso y el de participación-representación. La élite dominante colombiana desde 1958 hasta hoy viene proclamando el

1. Sobre la democracia delegativa en América Latina, véase Guillermo O'Donnell, "Estado, democratización y ciudadanía", en *Nueva Sociedad* No. 128, noviembre-diciembre 1993, pp. 62-87. Véase también Norbert Lechner, "Los nuevos perfiles de la

política. Un bosquejo", en *Nueva Sociedad* No. 130, Caracas, marzo-abril 1994, pp. 32-43.

2. Dieter Nohlen y Mario Fernández, "El presidencialismo latinoamericano. Evolución y perspectivas", D. Nohlen y M. Fernández (comps.), *Presidencialismo versus parlamentarismo en América Latina*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1991, pp. 37-50. El tema de los sistemas de gobierno está llamando la atención de los polítólogos. Véase Arend Lijphart, *Parliamentary versus Presidential Government*, Oxford University Press, New York, 1992; Giovanni Sartori, "Ni presidencialismo ni parlamentarismo", en *Revista Uruguaya de Ciencia Política* No. 5, Montevideo, 1992.

3. Véase Arnaud Sales, "The Private, the Public and Civil Society: Social Realms and Power Structures", en *International Political Science Review* Vol. 12, No. 4, octubre 1991, pp. 295-312.

4. El concepto de bien público, que incluye bienes materiales y no materiales, como valores, ha sido introducido en la moderna teoría de las políticas públicas por la escuela virginiana del *public choice*, tiene como antecedente remoto la noción de bien común, contrapuesto al interés individual. Algunos filósofos políticos de la Edad Media justificaban la rebelión contra el soberano cuando se desinteresaba del bien común. Una revalorización del concepto de bien en la política aparece en Wendell Bell, "Réintroduire la notion de bien: les valeurs, l'objectivité et l'avenir", en *Revue Internationale des Sciences Sociales* No. 137, Unesco, agosto 1993.

5. Robert M. Entman, *Democracy without Citizens: The Media and the Decay of American Politics*, Oxford University Press, New York, 1989; Romain Laufer y Catherine Paradise, *Marketing Democracy: Public Opinion and Media Formation in Democratic Societies*, Transaction Books, New Brunswick, NJ, 1990; Rafael Roda Fernández, *Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en la cultura contemporánea*, CIS, Madrid, 1989.



Pese a los nuevos espacios de participación consagrados en la Constitución del 91, la participación electoral sigue siendo la forma predominante.

consenso, que en la teoría es voluntario y en su práctica criolla, un resultado de la combinación de la alienación social, incluido el abstencionismo electoral y el conformismo generalizado de la población, con la represión de las minorías opositoras. El conflicto social, atenuado por la alienación, ha sido determinante entonces de la participación-representación buscada y no hallada.

A nivel del interés privado y corporativo, el modelo participativo ha sido funcional para la élite, a través de estrategias de organización e interacción comunicativa. La red orgánica de los poseedores y agentes del capital –importantes actores públicos– no poseen una conciencia del bien común y de los bienes públicos, menos aún del

interés social.⁶ Esta mentalidad existe en otros ámbitos primigenios de la potencial sociedad civil, conscientes de que el modelo del consenso ficticio tiene como finalidad la prolongación del *statu quo*, y por tanto, han optado por el modelo tensionante de participación, representación, lucha u oposición.

En Colombia el modelo participativo desde *la llanura* muy distinto de la falsa participación, de naturaleza exclusivamente electoral, postulada por la Constitución de 1991 y en la legislación reglamentaria, es utilizado por dos colectividades que, con alguna fortuna, han tratado de conmover a la población alienada. Una de ellas, no violenta y sin organización ni liderazgo, apenas tiene una oportunidad de

actuar cada cuatro años, en elecciones presidenciales: es la así llamada *franja*. Otra forma de participación popular en la política es la de los movimientos sociales locales, generalmente sin éxito y sin consecuencias para el cambio político.

Si se acepta que la dominación de la élite sobre la sociedad está siendo mediada por las instituciones corrompidas, moralmente descompuestas y socialmente deslegitimadas –la bu-

6. Véanse algunas contribuciones en la obra colectiva de W. Streeck y P. C. Schmitter (eds.), *Private Interest Goverment. Beyond Market and States*, Sage Publications, Beverly Hills, California, 1985. Así mismo, el enfoque menos empírico de Jane Mansbridge, "Self-Interest in Public Life", en *Political Theory* No. 18, 1990, pp. 132-153.

rocracia estatal,⁷ los partidos y los parlamentarios⁸ el estudio del cambio social y político debe tender la mirada a la sociedad, a los valores y actitudes de individuos y colectividades, así sean éstas informales o inorgánicas.

En un país donde la mayoría de la gente yace entre el sometimiento y la sumisión, y que en vez de la acción electoral con racionalidad crítica, opta por el abstencionismo, puede ser interesante observar el comportamiento de las minorías más o menos activas. Amerita un estudio en profundidad la situación y las posibilidades del accionar colectivo tanto de las fuerzas sociales de reacción moral, como de las fracciones críticas de la opinión pública. Así mismo, sobre las limitaciones que para su cabal expresión se hallan en los medios de comunicación que no plantean agendas alternativas a las fijadas por la élite.

La llamada franja no debe ser confundida con la opinión pública ni tampoco con un movimiento social convencional. Es nuestra creencia que la franja comprende en parte a un sector de la opinión pública (esto es, gente con una educación mínima y una adecuada información) y en parte, a un sector popular menos educado y menos bien informado, motivado por un deseo de cambio, o en defensa de su interés social vulnerado, o por un sentimiento moral como concepción focal de su mundo-vida.⁹

En los comicios presidenciales de 1994 el fenómeno de la franja continuó haciendo presencia, al igual que en anteriores ocasiones a partir de 1970. Aquí se intenta hacer una descripción comparativa sobre su composición, en términos de sus actitudes y conducta electoral en defensa de los bienes colectivos y del interés social.

El comportamiento electoral en 1994

En el presente siglo, se han alternado sucesivamente las hegemonías conservadora, liberal, bipartidista

y, de nuevo, liberal, con elecciones presidenciales por votación directa a una vuelta (1914-1990) y a dos vueltas en 1994. El partido minoritario de turno ha ganado las elecciones cuando el mayoritario se ha dividido (1930, 1946 y 1982).

Durante el Frente Nacional aparece un sector de la población que se identifica como *sin partido*. Este sector de independientes en su mayoría es abstencionista aunque una proporción menor, volátil y de orientación cambiante, desde 1970 concurre a las urnas, con mayor afluencia en comicios presidenciales. A este agregado básico se suma el de un grupo menor de personas que se identifica con un partido tradicional pero que, por causas que se explicarán adelante, decide votar por un candidato de otro partido, sin que ello implique renuncia a su identidad tradicional, los denominados *switchers*. Ambos grupos conforman la llamada *franja electoral*.

Gracias al concurso de esa franja, el partido minoritario ha logrado aproximarse al mayoritario en los cuatro casos de cuasiempate de la historia contemporánea: elecciones presidenciales de 1970, 1978, 1982 y 1994. Unicamente en 1982 el candidato del partido minoritario ascendió a la Presidencia de la República, como consecuencia de la división liberal, del apoyo de un sector de la franja y del déficit de la movilización liberal (abstención-castigo antilopista).

El cuasiempate de 1994 se registró tanto en la primera vuelta electoral del 29 de mayo, como en la segunda, realizada el 19 de junio. En ambas rondas Samper superó a Pastrana; en la primera, por sólo 18 mil votos de un total de 5.8 millones; y de nuevo, en la segunda, por 157 mil de una votación total de 7.4 millones de sufragios. No toda la votación por el primero proviene de liberales, ni toda la del segundo de conservadores, pues en ambos casos estas cifras contienen votos de la franja. (Ver cuadro 1 y 2)

Estos dos tipos de actores político-electORALES –los independientes y los *switchers*– irrumpieron en la escena pública en 1970 y, desde entonces, participan con intensidad variable, configurando un patrón de comportamiento electoral diferente del de otras clases de comicios, los cuales, por norma, se han efectuado en fechas distintas: desde 1978, en el caso de las elecciones presidenciales, separadas de las de Congreso; las demás, de autoridades y corporaciones departamentales y municipales, no han coincidido con ninguna de aquéllas, pues en la historia electoral del país son desconocidas las elecciones generales, práctica corriente en numerosos países.

Quienes se identifican con un partido corresponden al menos a otras dos categorías: 1) los utilitaristas, cuya acción racional-instrumental se orienta a la obtención del provecho personal o familiar, y 2) La gente buena

Cuadro 1
Elecciones presidenciales 1994
(en miles)

Candidatos	Primera vuelta	Segunda vuelta	Variación
Samper	2.623.0	3.733.3	1.110.3
Pastrana	2.605.0	3.576.8	971.8
Navarro	219.9	---	----
Resto, blancos, nulos	374.1	117.6	-256.5
TOTALES	5.821.3	7.427.7	1.606.4

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Cuadro 2
Composición estimada de la votación en junio de 1994
(en miles)

Categoría de electores	Samper	Pastrana	Totales
A. Partidarios	3.200	2.554	5.754
B. Franja	533	1.023	1.556
1. Sin partido	460	673	1.133
2. Switchers	73	350	423
Totales	3.733	3.577	7.310

Fuente: Estimaciones basadas en encuestas preelectorales de Invamer-Gallup y Centro Nacional de Consultoría.

—altruista e ingenua— que rinde culto a sus ancestros, al guardar una fidelidad desinteresada a un partido tradicional, que hoy es más imaginado que real.

La articulación de la franja

i De dónde salieron los votos depositados por ambos candidatos en 1994? En la primera vuelta, casi exclusivamente de los partidarios; en la segunda éstos repiten, pero esta vez emerge masivamente la *franja*, que —según nuestra estimación—añade a la votación partidaria 1'600.000 sufragios, esto es, 1'300.000 nuevos electores de la franja se suman a los 300 mil de la primera vuelta, los cuales, supuestamente, también repitieron su presencia en las urnas. En la segunda vuelta de cada tres electores de la franja, dos votaron por Pastrana y uno por Samper, en el agregado nacional, y por iguales partes en Bogotá.

Partidarios puros

Se estima que Pastrana fue acompañado por unos 2.3 millones de conservadores en la primera vuelta y en la segunda, por 2.5 millones, cantidad máxima de conservadores que han hecho presencia en una elección presidencial, teniendo en cuenta las de 1982 y 1986 (en 1990 sólo fueron 2'169.000, sumados los votos por Gómez y Lloreda).

En cambio, el voto partidario por Samper, que fue de 2.5 millones en la primera vuelta, tuvo un considerable incremento en la segunda, en la que se estima un aporte de 3.2 millones de liberales puros, y por tanto, una franja de un poco más de medio millón de votos. Recuérdese la votación por López en 1982, 2.8 millones, y la de Gaviria en 1990, 2.9 millones. En el caso de Barco, en sus 4.2 millones hubo alrededor de un millón pertenecientes a la franja, y una cantidad algo menor por Gaviria.

La franja

Se reservó para votar en la segunda vuelta de modo masivo, ante la confusión generada por la indiferenciación programática de los candidatos en la campaña de la primera vuelta.

El aporte de la franja a Pastrana es equivalente a la diferencia entre su votación en la segunda vuelta y el promedio de las votaciones conservadoras para Presidente en 1982 y 1990, promedio muy similar, en casi todas las localidades, a la votación conservadora en 1986.

El cuadro 2 muestra la composición estimada de la votación por ambos candidatos en la segunda vuelta. La franja aportó al voto samperista un 14.3% (más de medio millón de votos) del total de sus sufragios, y el millón de los pastranistas contribuyó

7. Fernando Cepeda Ulloa (ed.) *La corrupción administrativa en Colombia. Diagnóstico y recomendaciones para combatirla*, Tercer Mundo Editores-Contraloría General de la República-Federarrollo, Santafé de Bogotá, 1994.

8. Un 63% de la población mayor de 18 años de edad, tiene una imagen negativa de los políticos, según la encuesta realizada por la Universidad de los Andes para la Registraduría Nacional del Estado Civil, en quince localidades urbanas y cinco rurales, en una muestra de 1.642 personas entrevistadas en los meses de julio y agosto de 1993. Mientras una porción identificó a los políticos como "corruptos" o "deshonestos", otra expresó que ellos eran "gente que sólo busca su propio beneficio". El 43% en la muestra también manifestó que se interesaba por la política con el fin de procurar que hubiera "menos corrupción".

9. Prácticamente, todos los estudiosos de las elecciones colombianas confunden el voto de los independientes con el voto de opinión, esto es, el que se presenta en la dimensión cognitiva y más o menos bien informada. Esta equívoca identidad excluye al sector de independientes que no corresponden a esa dimensión, sea por su bajo perfil educativo y falta de información, o porque actúan por otras motivaciones, como en la dimensión moral, sentimental o simplemente perceptiva. Si la *franja* fuera equivalente al voto de opinión, quedaría excluida quizá la mayoría de la gente sin identidad partidaria, que vota en el campo y en las barriadas urbanas, y aún en la esfera de la opinión, quienes lo hacen con base en la imagen de los candidatos difundida por los medios, la cual es susceptible de manipulación en la definición de los perfiles de los candidatos. Véase de Ricardo García Duarte, "El mercado político y la lógica de clientela", en *Revista Foro* No. 23, Santafé de Bogotá, abril 1994, pp. 17-25, en especial p. 19.

Con base en investigación experimental en Estados Unidos, uno de los principales teóricos del voto emocional es George E. Marcus. Véanse de este autor, "The Structure of Emotional Response", en *American Political Science Review* Vol. 82, 1988, pp. 735-761; y "Emotions and Politics: Hot Cognitions and the Rediscovery of Passion", en *Social Science Information* No. 30, 1991, pp. 195-232. Un trabajo más reciente del mismo autor, asociado a Michael B. McKuen, es el artículo "Anxiety, Enthusiasm, and Vote: The Emotional Underpinnings of Learning and Involvement during Presidential Campaigns", en *American Political Science Review* Vol. 87, No. 3, septiembre 1993, pp. 672-685.

El politólogo Rodrigo Losada ha seguido el marco teórico de Marcus en una investigación, con base en la cual concluye que en Colombia y en otros países "las preferencias electorales, en buena pero no excluyente medida, están relacionadas con factores de tipo afectivo, sentimental o emotivo". Véase del autor, "Incidencia de los sentimientos en las preferencias por candidatos", *Colombia elige presidente*, Universidad Pontificia Javeriana, Santafé de Bogotá, 1994, pp. 55-63.

a su votación en una proporción de 28.6%. La franja nacional se dividió en 34.3% por Samper y 65.7% por Pastrana. En suma, al voto conjunto por ambos candidatos (7.3 millones, sin incluir los votos en blanco y nulos, que sólo fueron 117.600), la franja contribuyó con 21.3%. De cada cinco votos emitidos, cuatro fueron de partidarios y uno de la franja.

Desde 1970 la franja ha favorecido a tres conservadores (Rojas Pinilla, Betancur y Andrés Pastrana) y a tres liberales (López en 1974, Barco y Gaviria). Dada la posición hegemónica del liberalismo y el ínfimo apoyo del voto-franja al candidato conservador en 1974, 1986 y 1990, a los liberales les bastaba el apoyo partidario y no requerían el concurso de la franja, aunque lo obtuvieron generosamente (López en 1974 y Barco en 1986), la excepción es Turbay en 1978.

La franja es crucial para el conservatismo porque debe compensar la brecha del voto partidario, que sigue siendo una ventaja histórica del liberalismo. También ha llegado a ser un factor decisivo para éste, hacia el futuro, por haberla perdido en su mayoría en 1994, y porque el conservatismo no presentará una vez más la candidatura de Alvaro Gómez Hurtado, cuya sola presencia en la liza era la mejor garantía para la continuidad de la hegemonía. En adelante, los partidos van a cuidarse de lanzar candidatos presidenciales sin ascendiente entre la franja.

La crisis de los partidos

La crisis de los partidos tradicionales¹⁰ no se verifica tanto en el orden cultural de la identidad, como en la capacidad para inducir a sus adherentes simbólicos a hacer presencia en las urnas. Desde hace más de dos décadas, según encuestas, casi dos terceras partes de los colombianos continúan identificándose con uno de los dos mayores partidos-símbolos. Un tercio

de la población adulta se considera a sí misma como *sin partido*. Es un segmento enorme (7 millones de adultos), pero en los últimos 25 años no ha aumentado en términos relativos. Siendo una franja nominal, tampoco vota en la proporción de su presencia real en la sociedad (33%).

El liberalismo percibió en 1986 una votación de 4'200.000 para Presidente, y 4'780.000 para Senado en 1990. Desde entonces se ha sumido en una crisis electoral. A Gaviria sólo le brindó 2.9 millones de votos (incluidos los de la franja) y a Samper, alrededor de 3.2 millones de partidarios *puros*. Para Senado en 1994 votaron 2.8 millones. Hay un millón y medio de liberales de 1990 que han pasado al abstencionismo o están votando por otros movimientos. En 1994 hubo 350 mil que pasaron a votar por Andrés Pastrana.

En el período 1982-1990 la votación conservadora se mantuvo estable entre 2.6 y 2.7 millones, y cayó a 1.4 millones para Senado en 1994, recuperándose en la segunda vuelta con los 2.5 millones de partidarios *puros* que sufragaron por Pastrana en ambas vueltas. Mientras su candidato fue Gómez Hurtado, en 1986 y 1990, los conservadores votaron más para Congreso que para Presidente (en 1974 las elecciones presidencial y del Congreso, aún se hacían simultáneamente). Se comportaron inversamente cuando sus candidatos fueron Betancur, en 1978 y 1982, y Pastrana en 1994.

La última campaña electoral

Durante la campaña presidencial de 1994, los dos candidatos de los partidos tradicionales dirigieron sus mensajes hacia *la gente*, mas no hacia las colectividades con actitudes y valores específicos. Esta vaguedad fue más notoria en el caso de Pastrana, pues la estrategia de Samper lo indujo a identificar grupos de intereses concretos.

Pastrana utilizó una comunicación masiva indiferenciada y simbolizó la personalización de la política mejor que Samper, quien mantuvo vínculos con el partido mayoritario. El torpe manejo del sector de opinión de la franja que hizo Pastrana indica que no tenía un conocimiento de su carácter y expectativas, como sí lo tuvo Belisario Betancur durante las dos décadas precedentes al año de su elección como presidente.

Los medios masivos en otros países, en ciertas ocasiones, han beneficiado a un candidato o partido en perjuicio del otro o de los adversarios, con consecuencias decisivas, como en los casos de Brasil e Italia.¹¹ En Colombia –donde competían dos miembros de la misma élite dominante– la televisión no parece haber sido el medio decisivo del resultado final, posiblemente debido a su fuerte dependencia del Estado y ante la incertidumbre generada por el cuasiempate, revelado por las encuestas. Por eso, también, los noticieros (y seguramente las demás firmas programadoras) contribuyeron a las dos campañas con iguales sumas de dinero. Cabría suponer que tal neutralidad no se habría presentado si en la segunda vuelta hubiera competido un candidato de oposición al régimen bipartidista.

El acceso gratuito a las campañas de Samper y Pastrana, complementado por los avisos *comerciales* supuestamente pagados, fue subutilizado por ambos, ya que sus mensajes durante meses versaron sobre aspectos puntuales con soluciones obvias y muy similares las propuestas de uno y otro.

10. Rubén Sánchez David, "Modernización, democracia y partidos políticos en Colombia", en *Avance* No. 12, Fidec, Bogotá, 1991, pp. 17-20; Javier Sanín, S. J., "La organización actual de los partidos políticos", en *Revista Javeriana* No. 601, Santafé de Bogotá, enero-febrero 1994, pp. 45-56.

11. El triunfo de Collor de Mello, según investigaciones de los polítólogos, fue decidido por la manipulación de la televisión. Véase Thomas E. Skidmore (ed.), *Television, Politics, and the Transition to Democracy in Latin America*, Woodrow Wilson Center Press, Washington, 1993.



La franja se ha constituido en un factor esencial en las estrategias políticas electorales. Desde 1970 la influencia de la franja ha ido creciendo.

Ninguno propuso un plan coherente y sistemático para sacar al país del caos en que se halla; ninguno atribuyó al gobierno de Gaviria responsabilidad en los problemas que éste fue incapaz de resolver o siquiera atacar con alguna eficacia, y ambos candidatos hicieron lo posible por evitar diferenciarse. Sus estrategias iguales fueron las del *catch-all* en la fase más importante de la campaña, la del perfilamiento de imagen y personalidad, antes de la primera vuelta electoral.

Caída de la participación electoral

En vista de los resultados electorales durante el Frente Nacional (1958-1974), Colombia ingresó al grupo

de países con menores tasas en la participación electoral en Latinoamérica. En cuatro de las cinco elecciones presidenciales celebradas entre 1970 y 1986 mejoró la concurrencia a las urnas. No obstante, por los diversos comicios efectuados a partir de mayo de 1990, Colombia pasó a ser el país latinoamericano con más baja participación electoral, incluso por debajo del que le sigue en orden ascendente: Haití.

El 16 de diciembre de 1990 fue electo Aristide por el 65.7% de los 1.640.729 votos emitidos,¹² votación que representa una participación del 27.3% (votación total como porcentaje de población total), la cual es mayor que las correspondientes a las diversas elecciones efectuadas en Colombia entre mayo de 1990 y junio de 1994.

Cuadro 3
Tasas de participación electoral sobre población en edad de votar elecciones presidenciales 1970-1994

Año	Votación total (en miles)	Tasas(%)*
1970	4.036	46.7
1974	5.212	49.3
1978	5.076	35.2
1982	6.840	44.0
1986	7.230	40.3
1990	6.048	29.7
1994**	7.428	33.8

* Las tasas no son brutas, sino calculadas sobre la población en edad de votar.

** En la segunda vuelta.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

12. Dieter Nohlen (coord.), *Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1993, p. 379.

La tasa de participación en la segunda vuelta de 1994 no fue más baja por haber concurrido a las urnas una franja de un millón y medio de electores; por el incremento de la participación o arrastre partidario, conservador y liberal, en la región atlántica, y por el arrastre conservador en Bogotá, más disciplinado que el fuerte potencial liberal de años anteriores. En el resto del país los totales de las votaciones absolutas son muy similares en el conjunto. (Ver cuadro 3).

La baja participación de los últimos cuatro años refleja la crisis de los partidos y la decadencia de la política electorera. La abstención absoluta y relativa creciente es un proceso generalizado, que afecta tanto al sector urbano como al rural (aunque más a éste que a aquél, debido a la emigración y a la guerrilla).

Contrariando el patrón universal de mayor participación urbana que rural en los demás países del mundo, en Colombia el comportamiento ha sido inverso. Las diferencias han sido muy significativas en todos los niveles hasta los comicios de marzo de 1990. Con posterioridad han venido reduciéndose, hasta el punto de ser casi iguales en los comicios presidenciales de 1994. Más aún, en algunos departamentos, por primera vez en la historia electoral del Frente Nacional, y no obstante las bajas y decrecientes tasas urbanas de participación, en las elecciones de 1994 llegaron a ser inferiores las tasas de participación rurales en los departamentos donde la guerrilla ejerce alguna influencia o control de áreas en municipios rurales (concretamente en los dos santanderes; Cauca, Nariño y Caquetá, y en el interior Meta, así como César y Córdoba en la región atlántica). En los demás departamentos, las tasas urbanas y rurales son muy similares.

Evolución de la franja bogotana

La votación total en Bogotá desde 1982 en comicios presidenciales, ha sido entre 900 mil y 1'100.000 votos, de los cuales alrededor de 400 mil han sido de la franja, esto es, entre 36 y 44% del total mencionado. En la capital, el tamaño de la franja que vota tiende a coincidir con el alto porcentaje de población que dice no identificarse con ningún partido tradicional (46.8%). La bogotana ha sido la franja más importante, en términos absolutos y relativos, en comparación con las demás ciudades del país. Sin embargo, mientras la población ha crecido considerablemente, de forma paralela a la votación total, la franja capitalina se estancó en los mismos 400 mil votos en 1982, 1986 y 1990, e incluso descendió a unos 330 mil en 1994. (Ver cuadro 4).

El descenso se explica porque la fracción de centro-izquierda, que en Bogotá tiene una capacidad electoral de 150 mil votos –como en los comicios de diciembre de 1990 para la Asamblea Nacional Constituyente– en gran parte se abstuvo en la segunda vuelta de 1994.

La votación pastranista tuvo sus mejores votaciones en las zonas donde el casi extinto M-19 tuvo aprecia-

bles votaciones en las elecciones presidenciales y para Constituyente de 1990, a saber: en Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Fontibón y, especialmente, en Suba y Usaquén. Igual fenómeno se observó en Santa Marta, Pasto y Cúcuta, mas no en el Valle del Cauca y en otras áreas en donde la franja de centro-izquierda también llegó a ser importante en 1990.

Motivaciones de los electores

Los votantes potenciales son motivados por diversos factores: 1) el institucional, sostenido por el sentimiento de pertenencia y fidelidad a un partido-símbolo, que conforma una subcultura política y se refuerza por el control social y la influencia personal e impersonal (la imagen proyectada por los medios); 2) búsqueda utilitaria del interés propio de los individuos, y 3) el sentimiento provocado por valores individuales distintos del tradicionalismo partidario, como los bienes públicos de ética, justicia u orden, los cuales llegan a ser más apreciados que el simple interés individual, en los sectores de la franja. Los intereses y las pasiones son motivadores fuertes de las acciones humanas, incluida la política.¹³

Cuadro 4
Votación de la franja en Bogotá
Elecciones presidenciales 1970 - 1994
(en miles)

Año	Candidato	Votos	Candidato	Votos	Candidato	Votos	Franja
1970	Rojas	254	-----	-----	-----	-----	254
1982	Galán	284	Betancur	100	López	29	413
1986	Barco	315	Gómez	50	Pardo Leal	49	414
1990	Gaviria	250	Navarro	125	Gómez/Lloreda	50	425
1994*	Samper	170	Pastrana	160	-----	-----	330

* Segunda vuelta

Fuente: Estimaciones basadas en resultados electorales y encuestas.

En los análisis politológicos, la conducta electoral del tipo 1) se comprende mejor por las teorías institucionalistas y culturalistas y de la socialización política; y la del tipo 2) por las teorías de la *acción racional* en su versión instrumentalista, o por las teorías economicistas de la democracia, o por las técnicas del *marketing electoral*, y la del tipo 3) por las teorías psicológicas o por las de opinión pública, o por las de *acción racional* en su versión crítica o comunicativa.

La distinción entre el sentimiento de afiliación partidaria y el interés individual no ofrece dificultad al observador en algunas culturas, pero resulta problemática en otras, particularmente en la colombiana, donde los racionalistas instrumentalistas enmascaran la búsqueda del interés propio, presentándose como fieles partidarios.

El tradicionalismo partidario en las últimas décadas se ha desarticulado como parte del proceso de modernización neotradicional, esto es, sin democratización, que se caracteriza por la expansión del mercado y del consumo de bienes no esenciales; búsqueda de *status* sin sujeción a reglas culturales; descomposición de la comunidad y cambio de la familia extensa por la nuclear.

Tradicionalistas y utilitaristas

Los tradicionalistas sinceros –liberales y conservadores– acuden a las urnas espontáneamente o impulsados por el control social ejercido en la comunidad, el vecindario, el sitio de trabajo o la familia. Los utilitaristas¹⁴ votan a *mano alzada* para procurar un beneficio personal, una meta para cuya búsqueda y logro no tiene importancia que el candidato gane o pierda. Suelen ser activistas en las coyunturas electorales, desde los grandes barones provinciales del patronazgo hasta sus clientelas, que conforman redes de activistas de oficio en todos los nive-

les sociales y territoriales. El activismo partidario comprende a grandes y pequeños financiadores y a un segmento del vasto grupo de profesionales y universitarios (más en las disciplinas del saber tecnológico, que en las del científico), quienes aspiran a un cargo público, o a su estabilidad en él, si ya lo desempeñan.

Aun cuando algunos obran cínicamente, la gran mayoría enmascara el interés individual bajo el manto de la fidelidad a una supuesta causa tradicional. Estos pragmáticos suelen concebir la política como “el arte de lo posible”, conformándose con un *status quo* que los beneficia poco o mucho, según sus expectativas y sus vínculos con redes amistosas y de parentesco.

Este tipo de actor electoral individualista ha crecido paralelamente a la disminución del viejo tradicionalista comunitario y hoy ingenuo, cuya mentalidad colectiva rememoraba el conflicto fundamentalista entre las causas de la modernidad y la de la cosmovisión sacralizada enraizada en el contrarreformismo y las estructuras social y de poder, provenientes de la colonización hispánica.

Sin que sea posible hacer una discriminación de sus motivaciones reales, en la segunda vuelta votaron cerca de 5'750.000 tradicionalistas y utilitaristas (alrededor de 3'200.000 por Samper y 2'550.000 por Pastrana). El expresidente López Michelsen se refirió a los electores de ambos partidos que *razonablemente* buscan estabilidad en el empleo público, así como a los que, según él, aspiran a conseguirlo. En la interpretación de los datos de una muestra nacional, *El Tiempo* el 26 de mayo de 1994, juzga así los resultados de la encuesta: “Se pasó de una concepción política en la cual imperaban las lealtades partidistas, a otra donde prevalecen las afiliaciones o simpatías por prebendas o repartos burocráticos”.¹⁵

El núcleo básico de este segmento de votantes está conformado por la burocracia estatal, los pensionados,

sus familias y las personas por ellos influidas, así como por empleados y obreros de numerosas empresas privadas, cuyos propietarios o administradores presionan por su participación electoral. Desde la desaparición de los Estados liberales, el subsistema mencionado ha pasado a formar parte del ámbito público y del sistema político.¹⁶

El número de empleados del Estado colombiano es de 1'200.000 (en sus tres niveles: en la administración, los establecimientos públicos y las empresas no financieras), y el de sus pensionados, de 650 mil (cantidad que no incluye a los 350 mil pensionados del sector privado a través del ISS). Estos importantes recursos electorales estuvieron en gran medida, en las dos vueltas, del lado de Samper.

13. Además del citado politólogo George Marcus –quien estudió el factor emocional o pasional–, véase Jon Elster, *Political Psychology*, Cambridge University Press, New York, 1993, quien sostiene que la formación de preferencias y creencias son modelados por las instituciones sociales y políticas.

14. A este vasto segmento se aplica la teoría de la *acción racional* o *elección racional*, según la cual “sólo la expectativa de un provecho particular da motivos a los individuos para comprometerse políticamente” (Olson, 1965; Tullock, 1971). El modelo de elección racional de Mancur Olson se basa en que “los individuos no participarán en amplias acciones colectivas a menos que los *beneficios* esperados superen los *costos* de su participación. Se supone que la acción política [...] viene motivada por esta estrecha concepción del interés propio”, escriben Dalton, Kuechler y Bürklin, en R. J. Dalton y M. Kuechler (eds.), *op. cit.*, pp. 25-26.

15. Los citados académicos Alford y Friedland, escriben en *Powers of Theory* (p. 51): “Muchos valores tienen un potencial negativo, porque tienden a ser individualistas y auto-interesados. Los individuos crecientemente tratan de maximizar su beneficio personal a través de los canales disponibles para ellos. Aunque tales motivos individuales sean bien adaptados al funcionamiento de los mercados económicos, ellos pueden ser peligrosos para la cohesión social del Estado democrático”.

16. Así lo admiten prestigiosas teorías de la ciencia política: las de la élite, el neocorporativismo, el marxismo, la teoría crítica y, en cierto modo, la del *public choice*. Por razones de principios más que empíricas, se desentienden de esa realidad las teorías del pluralismo, neopluralismo y neoliberalismo. La economía política estatalista-desarrollista no totalitaria, proclama abiertamente las virtudes del modelo bismarckiano o de los *zaibatsu* nipones.

Independientes y *switchers*

Desde 1970, de hecho, las elecciones presidenciales colombianas no son competencias interpartidarias de modo exclusivo, sino más bien alianzas informales entre cada partido y una o más fracciones de la franja. La relación informal se mantiene hasta ahora por todos los candidatos liberales y conservadores, posiblemente para no adquirir compromisos, no ya burocráticos, pero relativos a sus expectativas de cambios en las políticas públicas. Se ha optado por subsumir la franja en un desdibujado conjunto con la base partidaria, o bien como una adhesión colectiva a la persona del candidato.

Por convención operacional, la franja se define como la suma de los votantes que se identifican como *sin partido*,¹⁷ y de partidarios que votan por el candidato de otro partido o movimiento (*switchers*). El electorado-franja no es leal a ningún partido, porque de hecho se considera a sí mismo como *sin partido*, y no es leal al propio, porque sin abandonar su identidad, decide votar por el candidato de otro partido.

El concepto de franja no debe ser confundido con el de *opinión pública*, noción de la filosofía liberal referida al juicio racional cognitivo o al menos bien informado, lo cual remite al sector más educado de la clase media. La franja incluye, además, el voto de grupos que apenas poseen un sentido de la percepción o llanamente carecen de información o han sido desinformados, y comprende también a electores del sector rural y de las barriadas populares urbanas, los cuales pueden estar motivados por los sentimientos de justicia y moral. De hecho, una parte de la opinión vota, mientras otra es abstencionista, y entre la gente de opinión que vota, una parte lo hace por adhesión al partido, otra por interés propio y una más, por acción racional crítica o por el sentimiento ético como factor

predominante. Salvo excepciones de pequeños círculos de relacionados con el respectivo candidato, casi la totalidad de los votantes de la franja son desinteresados. La franja posee una profunda convicción ética, o un conocimiento perceptivo o cognitivo de la situación, o acerca del desempeño de su partido en el gobierno saliente, o bien una actitud de reprobación hacia un candidato por sus acciones pretéritas (voto-castigo).

En 1970 una franja popular y de clase media castigó con su voto al prolongado régimen oligárquico-consociativo del Frente Nacional. En 1974, 1986 y 1990 la memoria colectiva recordó a un actor protagónico de la era de la violencia. En 1982 castigó a los gobiernos de López y Turbay, al votar en parte por Galán y en parte por Betancur.

En 1990-1994, bajo un sistema, régimen y Estado incapaces de controlar la corrupción y el desorden, de ejecutar una política social distributiva, y de renovar el personal de un establecimiento que parece haber alcanzado su tercera edad, el agravamiento de los problemas llegó a ser de conocimiento popular por la difusión de los hechos a través de los medios de comunicación. El difuso clima preelectoral se convirtió en corrientes de opinión. La juventud, que se había retirado de la política desde finales de los 60, en esta ocasión hizo mayor presencia, algo así como un reingreso por el ángulo derecho (en 1990 lo hizo por el izquierdo, con ocasión de su apoyo a la Alianza Democrática M-19, en mayo y diciembre, el cual fue prontamente retirado).

Las motivaciones psicológicas se referían a la necesidad de corregir los desmanes en el enriquecimiento ilícito; la anomia con índices desbocados de criminalidad y la falta de política social de las dos últimas administraciones. El candidato ideal para la franja era aquél que, teniendo posibilidades de triunfo, mostrara intención de actuar en la resolución de ese conjunto

de problemas de atención prioritaria e impostergable.

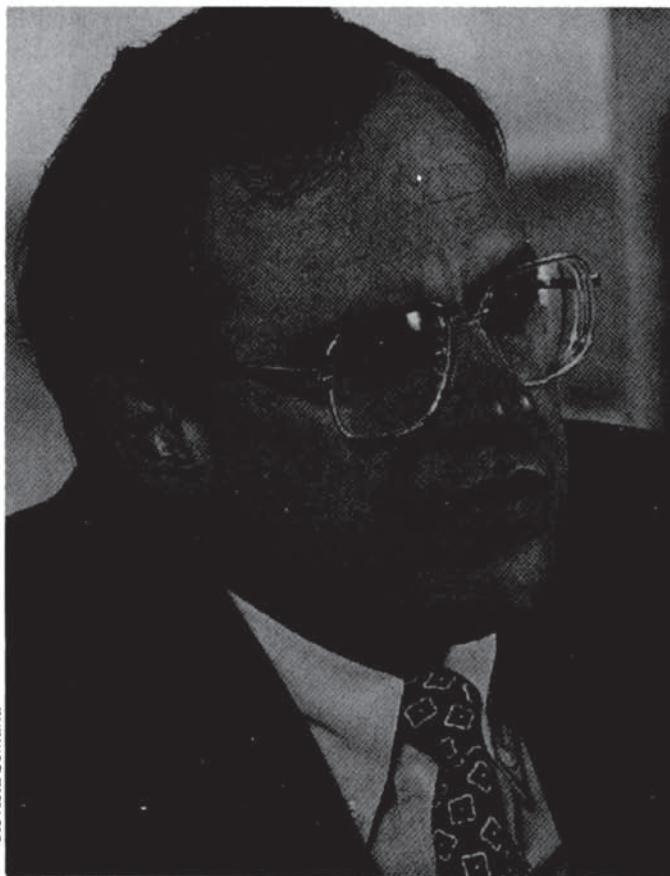
Ese requisito de cobertura integral de capacidad de resolución de los más acuciantes problemas no lo consiguió ninguno de los dos principales candidatos. La franja pudo advertir que con Samper habría justicia distributiva, pero no consiguió ser desvinculado del *handicap* de la vieja clase política que lo apoya. Así mismo, pese a sus diferencias con la política gavirista –un tanto veladas durante la campaña– las responsabilidades recaían en el partido de ambos.

A su vez, Pastrana se posicionó en la franja potencial, como decidido a luchar contra la corrupción, a restaurar el orden social descompuesto, y a renovar el vetusto establecimiento liberal-conservador. Pero no adquirió ningún compromiso en materia de justicia social distributiva, por su apego sincero a la teoría económica neoliberal.

Esta diferenciación en el *posicionamiento* de los candidatos definida para la segunda vuelta –que no se presentó en la primera– impidió que la franja se concentrara en su totalidad en torno de alguno de ellos. El primer sector apoyó mayoritariamente a Pastrana; el último, del mismo modo a Samper. El sector que no pudo resolver el conflicto de la ambivalencia, optó por el retiro de las urnas, como lo hizo efectivamente en Bogotá, Cali y Medellín.

En general, las franjas provienen de una combinación de clases media y popular, y así fueron las de Pastrana y Samper. Sin embargo, el perfil ha sido de clase media urbana, en el caso del galanismo, y más popular, en los casos de ANAPO en 1970 y de la AD M-19 en 1990.

17. En una muestra en las tres principales ciudades se identificaron a sí mismos como "sin partido", un 34.8% en Cali; 40.7% en Medellín, y 46.8% en Bogotá (43.1% en el promedio ponderado de las tres ciudades). Analizar Mercadeo Ltda., "Análisis de la abstención", julio de 1992, p. 53. Se supone que en las ciudades intermedias el porcentaje podría estar entre las cifras correspondientes a Cali y Medellín.



La tasa de participación (33.8%) no fue más baja en la segunda vuelta gracias a la franja que aportó un millón y medio de electores y que favorecieron a uno y otro candidato.

Moral convencional y posconvencional

Mientras en Colombia persistan los agentes del patrimonialismo y los demás buscadores de rentas (*rent-seekers*) y el exclusivismo social, habrá grupos de votantes cuyo comportamiento puede explicarse con base en la teoría del desarrollo moral, como la expone Lawrence Kohlberg¹⁸ (discípulo y colaborador de Piaget). El autor considera tres niveles en la evolución moral de las personas: el preconvencional, el convencional y el posconvencional.

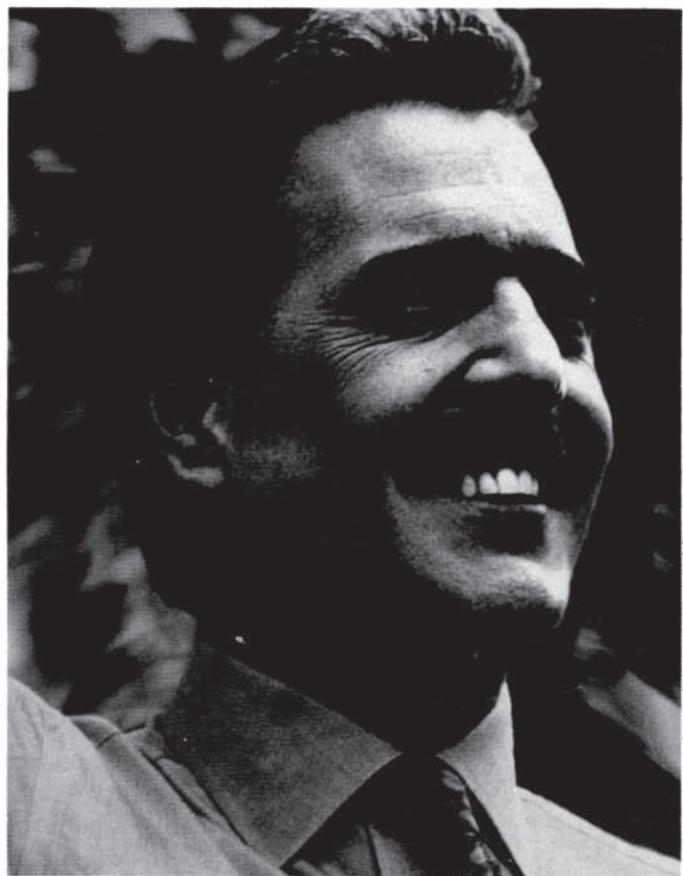
El primero es el original, caracterizado por el hedonismo y el utilitarismo. Los individuos se sirven a sí mismos en sus necesidades, evitan las penas y carecen de una perspectiva sistémica.

En el nivel convencional son determinantes las opiniones de los otros y

las normas; las expectativas son mutuas o interpersonales; se procura la aprobación de los otros, y adquieren importancia las normas sociales.

En el nivel posconvencional se posee la capacidad de hacer juicios basados en principios, de manera autónoma y empática. Los juicios son consistentes y los valores de justicia distributiva y conmutativa son tan predominantes, que su consideración llega a trascender las lealtades hacia otros individuos e incluso a las normas sociales. Para adquirir este nivel del juicio moral es requisito el desarrollo cognitivo, que genera atributos estructurales.

Al parecer, en nuestro *ethos* cultural la moralidad ocuparía un lugar muy importante. En una encuesta realizada en julio de 1992 por Analizar Mercadeo Ltda., se preguntó acerca de la opinión sobre la conveniencia de expedir una ley anticorrupción "muy



severa". Un 87.4% respondió que la aceptaba; a un 7.3% no le importaba el asunto y un 5.3% manifestó su rechazo. Estos porcentajes fueron muy similares en las ciudades donde se tomó

18. Véanse los dos primeros tomos de sus *Essays on Moral Development*, y su obra *The Philosophy of Moral Development*, Harper & Row, San Francisco, 1981. Sobre el tema, Richard Wilson y Gordon Schochet (eds.), *Moral Development and Politics*, Praeger, New York, 1980; William Kurtines y Jacob L. Gewirtz (eds.), *Morality, Moral Behavior, and Moral Development*, Wiley, New York, 1984. El notable politólogo marxista Steven Lukes se ocupa de la cuestión en sus libros *Moral Conflict and Politics* (1991) y en *Marxism and Morality* (1985), ambos publicados por Oxford University Press.

Polítólogos y otros científicos sociales, que dejaban el tema a los filósofos y psicólogos, más recientemente han empezado a abordarlo desde su método positivista o empírista. Véanse Jean-François Médard, "De la corruption comme object d'étude", en *Revue Française de Science Politique* Vol. 43, No. 4, agosto 1993, pp. 690-697; Marion Smiley, *Moral Responsibility and the Boundaries of Community: Power and Accountability from a Pragmatic Point of View*, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.

la muestra (Bogotá, Medellín y Cali), al igual que entre grupos de edad y género; sin embargo, por clases sociales la aceptación fue de 94.4% en la alta; 90.3% en la media y 83.5% en la popular. Según afiliación, la aceptaban los liberales en un 79.1%; los conservadores en un 87.9% y los de la Alianza Democrática M-19 en un 84.9%.

Lo anterior podría ser interpretado en primera instancia como la existencia de un avanzado estadio posconvencional del desarrollo moral y también como un *clima* de opinión sensible a la cuestión moral, al valor de justicia comutativa. No obstante, no sabemos mucho acerca de la cobertura del estadio preconvencional, o si ha llegado a ser convencional la tolerancia o permisividad cuando intervienen otros factores condicionantes de actitudes y conductas, como el interés propio o la adhesión partidaria.

El problema de la hipocresía (aún el cinismo) ha sido expuesto por la periodista María Teresa Herrán, a propósito del narcotráfico y el cartel de Cali: *Hay una mentalidad que todavía se resiste a aceptar una realidad de la cual se beneficia o que por lo menos tolera, para no tener que llegar a rupturas que no desea. La doble moral juega a fondo en el caso del narcotráfico; la gente se hace de la vista gorda cuando no hay escándalo, y se escandaliza cuando las realidades salen a la luz pública.* Tras recordar los episodios de la extradición en la Constituyente, y de la discusión del Código de Procedimiento Penal en el Congreso, exclama la autora: ‘Pero ¡ay de quien diga que somos una narcodemocracia!’¹⁹

La importancia política de las recientes elecciones presidenciales ha sido señalada por el expresidente López Michelsen al escribir en *El Tiempo* del 26 de junio de 1994: *El siglo XXI no cayó en Colombia el 19 de junio de 1994, pero incuestionablemente de esta fecha en adelante pueden irse presentando hechos nunca antes registrados en nuestra crónica política.*

Redescubrimiento de la opinión pública

Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que carecen de una oposición política, así no fuere más que nominal y de bajo perfil. La continuidad del régimen ha sido y continúa firmemente asegurada por la sumisión de los grandes medios de comunicación incorporados al sistema político, al igual que el Congreso y los partidos-símbolos y en todo caso, por la insignificancia de las elecciones, cualesquiera sean los resultados.

La despolitización social inducida y manipulada por la oligarquía bipartidista del Frente Nacional deriva en la extensa alienación social y política de la población; los medios de comunicación son incorporados al régimen, y sus propietarios a la estructura del poder corporativo. Sin liderazgo de opinión y sin medios de comunicación, los públicos de opinión desaparecen de la escena.

A la impenetrabilidad de tan abroquelada estructura contribuye la alienación social y política²⁰ de la mayoría de la población, que impide hacer un despliegue de fuerzas (inexistentes) de la sociedad civil, como movimientos sociales o nuevos movimientos políticos-partidarios.

En Colombia no tiene aplicabilidad hoy el concepto de *sociedad civil* (la ciudadanía también es de *segunda clase* o, como la llama Guillermo O’Donnell, *de baja intensidad*) pero el de *opinión pública* podría cobrar alguna vigencia si se la identifica con la conciencia social, acerca de lo cual es poco lo que podemos decir por falta de investigaciones experimentales distintas de las encuestas convencionales y *preconvencionales*. Es claro que al menos hay unos públicos, unos intelectuales que los orientan en sus juicios cognitivos, y que, por tanto, son líderes de opinión crítica, y unos medios alternativos de alcance aún modesto, en comparación con los medios

masivos que directa o indirectamente sirven al refuerzo de la estabilidad del régimen.

Es cierto que una porción indeterminada de la franja electoral corresponde al voto de opinión pública. Pero otra porción de aquélla no pertenece a una definición de opinión, según la cual está formada por actitudes de los públicos cuando en ellos predomina el componente cognitivo y verbal.²¹

La importancia de la opinión pública está en que, siendo cognitiva o posconvencional, puede llegar a adquirir conciencia colectiva de la necesidad de trascender el esquema situacional. La noción de opinión ha sido cambiante según las teorías de la filosofía social o política,²² desde al menos el siglo XVIII. Las ciencias sociales²³ empezaron a ocuparse de ella desde los años 30.

La observación del español Cándido Monzón, acerca de que la opinión pública no es algo estático, sino un

19. María Teresa Herrán, *El Espectador*, 24 de junio de 1994, p. 2A.

20. Sobre la alienación social y política, véase la importante investigación empírica de los polítólogos Rodrigo Losada y Eduardo Vélez Bustillo, *Identificación y participación política en Colombia*, Fedesarrollo, Bogotá, 1982.

21. Cándido Monzón, “Manifestación y medida de la opinión pública”, A. Muñoz Alonso et al., *Opinión pública y comunicación política*, Eudema, Madrid, 1992, p. 180.

22. John R. Zaller, *The Nature and Origins of Mass Opinion*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; George E. Marcus, “Democratic Theories and the Study of Public Opinion”, en *Polity* No. 21, 1988, pp. 25-44; Jürgen Habermas, *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*, Gustavo Gili, Barcelona, 1981; Alejandro Muñoz-Alonso, “Génesis y aparición del concepto de opinión pública”, A. Muñoz-Alonso et al., *op. cit.*, pp. 23-83.

23. Los investigadores estadounidenses y europeos revelan los resultados de sus estudios en la revista *Public Opinion Quarterly*, que empezó a ser editada en 1936. El polítólogo John R. Zaller, antes citado, publicó recientemente dos importantes contribuciones: *Elite Discourse and Public Opinion*, Cambridge University Press, New York, 1991; también “Information, Values, and Opinion”, en *American Political Science Review* Vol. 85, No. 4, diciembre 1991, pp. 1215-1238. La influencia de las élites de opinión fue así mismo investigada por Richard A. Brody, *Assessing the President: The Media, Elite Opinion and Public Support*, Stanford University Press, Palo Alto, California, 1991.

fenómeno sujeto a transformación constante en realidades diferentes y en diferentes sociedades, se confirma en el caso colombiano. En el país desde finales del siglo XVIII se gestaron importantes públicos y movimientos de opinión de élites, en el conflicto cultural-político entre tradicionalismo y modernización. Esta profunda división elitista, que atrajo a pequeños públicos deliberantes, se prolongó durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, en la doble dimensión paralela de ideología y religión.

En todo este tiempo las élites fueron muy dinámicas en la comunicación interactiva a través de periódicos y libros. Hubo estrechos vínculos entre el poder y la oposición, los partidos de élites y la controversia sobre ideas y creencias. Todo ello contrasta con la era del Frente Nacional, prolongada hasta hoy, cuando no existe la oposición y los partidos ya no canalizan los juicios ideológicos de los públicos. En el pasado, los líderes de opinión lo eran al mismo tiempo de los partidos y simultáneamente dueños de los medios, pero siempre, inequívocamente, ubicados en la esfera pública.

La academia crítica y la prensa alternativa

La expansión de la educación universitaria en el país y el grupo de posgraduados en el exterior en las disciplinas de las ciencias sociales, permitieron la formación de una nueva élite académica, comprometida con la causa del cambio social y político. Según una investigación,²⁴ tras los antecedentes de pioneros aislados, en 1988 se inicia la fase actual de comunicaciones de las nuevas élites intelectuales.

Las nuevas élites académicas han tomado diferentes rumbos. En el mundo intelectual, algunos se han replegado al oficio de enseñar o investigar, eludiendo compromisos o exteriorizar sus posiciones críticas. Este grupo de

modernizadores es un *depósito* de consejeros y de tecnócratas para los sectores público y privado.

Hay otros que pertenecen a la corriente del pensamiento crítico, quienes abiertamente luchan por la democracia y la moral política, con sus escritos difundidos a través de medios de alcance limitado, pero forjadores del núcleo más activo en la opinión pública. Están conformando un liderazgo intelectual de opinión en ámbitos cognitivos y bien informados, aunque sin acceso a los medios masivos de la televisión y la radio.

Estos medios son unos de naturaleza cultural no política (*Mito* las revistas universitarias de filosofía, la *Gaceta de Colcultura*, *Fin de Siglo*, *Número*, para nombrar algunas) y otros, de naturaleza socio-cultural política. Su principal antecedente es la desaparecida revista *Alternativa*, dirigida por Orlando Fals Borda y Enrique Santos Calderón.

En la actualidad, el periodismo alternativo tiene dos vertientes. Una es la de oposición gubernamental con un sentido de Modernidad y Posmodernidad. Representa una división al interior de la élite dominante y un pensamiento neoconservador. Es el diario *La Prensa*, con un tiraje estimado de 30.000 ejemplares y una bien informada edición dominical.²⁵

La segunda vertiente es la puramente académica, con revistas vinculadas a universidades. Para las ciencias políticas la más importante de estas publicaciones intramurales es *Ánalysis Político*, fundada en 1988 por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Destinada a un público bien informado, de mayor amplitud, en septiembre de 1986 fue fundada la **Revista Foro**, bajo la dirección de Pedro Santana. En 1991 aparece el periódico *Caja de Herramientas*, publicado por la Corporación S.O.S. Colombia-Viva la Ciudadanía, dirigido en su primera época por Bernardo González (Nos. 1 a 16),²⁶

y en su nueva, por Libardo Sarmiento Anzola.

En la prensa alternativa, la más difundida es la revista *Cien Días* del Cinep, que infelizmente sólo pública tres números por año, desde 1988. Su circulación se estima en cerca de medio millón de ejemplares, distribuida gratuitamente con cuatro diarios: *El Espectador* de Bogotá, *El Colombiano* de Medellín, *La Patria* de Manizales, y *El Heraldo* de Barranquilla.

Por último –pero no lo menos importante– en los últimos años ha surgido un grupo de unos veinte *escritores públicos*, intelectuales que con regularidad comentan sobre la situación social, política o económica, con mayor cobertura de público, dado su acceso a columnas de algunos diarios tradicionales de circulación más amplia. Se distinguen de otros columnistas convencionales por su pensamiento crítico, que a menudo contrasta con las posiciones de los propietarios del medio.

No disponemos de información sobre los columnistas críticos en los diarios del interior, pero sí sobre los de la capital, donde *El Espectador* es virtualmente el único diario que, de vieja data, ha mantenido una política abierta de la comunicación hacia los

24. Oscar Delgado, "Dominación, modernización y democracia en Colombia", O. Delgado, Pierre Gilhodes et al., *Modernidad, democracia y partidos políticos*, Fidec-Fescol, Santafé de Bogotá, 1992, pp. 159-245.

25. Los grandes diarios actuales también fueron alternativos cuando hicieron oposición política y cultural en sus momentos genéticos. Así, *El Espectador*, entre 1887 y 1930; *El Tiempo*, fundado en 1911 como "republicano", se convierte en alternativo entre 1920 y 1938, y *El Siglo*, fundado en 1936, tuvo su época alternativa en 1936-1946. Los tres fueron fuertes opositores del régimen militar-populista en 1953-1957, antes de entrar a formar parte del establecimiento frentenacionalista.

26. Véanse los dos volúmenes que recogen los principales textos de las ediciones del periódico durante 1991-1992, *Constitución 1991: Caja de Herramientas*, Ediciones Foro Nacional por Colombia-Corporación S.O.S. Colombia, Santafé de Bogotá, 1992.

públicos posconvencionales.²⁷ Adicionalmente, en *El Tiempo* estos espacios menores son ocupados parcialmente por algunas cartas de los lectores y por algunos miembros de la familia propietaria. Desde hace poco este diario intenta compensar la carencia de columnistas críticos, con profesionalismo informativo.

El grupo de columnistas independientes de *El Espectador* ha llegado a conformar, por vez primera desde el comienzo del Frente Nacional, un liderazgo de opinión, por tratarse de personas que han demostrado su honestidad intelectual insobornable.

Encuestas y opinión pública

La crisis de los partidos y el descrédito de la clase política, de la burocracia, del parlamento y de otras instituciones del Estado, son hechos negativos que en la fase tardía del Frente Nacional empiezan a ser de algún modo compensados por el proceso formativo de una nueva opinión pública más respetable y protagónica; por ciertos medios de comunicación que están aprendiendo a diferenciar el acontecimiento descontextualizado y el significante de su sentido o significado y por la final aceptación en los medios de la difusión de resultados de las encuestas que miden los estados y variaciones de los climas de opinión de un heteróclito público-masa, (pero no todavía de los públicos, esto es, de las emergentes corrientes de opinión). Con el interés colectivo creciente por su conocimiento y evaluación, los encuestadores van a jugar un papel tan destacado como los periodistas de televisión, radio y prensa.²⁸

Las encuestas con universo público-masa, no le eran favorables a Andrés Pastrana una semana después de las elecciones. La *espiral del silencio* y el efecto *band-wagon* se comprobaron cuando la gente que dijo haber votado en segunda vuelta manifestó en un 65% que lo había hecho por el

presidente electo, *vis à vis* una realidad escrutada en el sector urbano (donde se hicieron las encuestas) de un 53% en las urnas, en segunda vuelta. Lo mismo sucedió con Gaviria, quien con la más baja tasa de participación electoral en el último cuarto de siglo, obtuvo en las elecciones de 1990 un 47.8% de la votación total, y el día de su posesión, un 89% de popularidad, según las encuestas.

Los índices de popularidad del presidente Gaviria²⁹ son cuestionables, ya que los sondeos no han tenido como referentes ni han sido tabulados con base en públicos, sino en universos masivos e indiferenciados. Una cosa es la popularidad de la reina de Inglaterra o del rey de España, y otra muy distinta la popularidad disputada entre los líderes del gobierno y de la oposición. Cuánta diferencia entre el conformismo apático suscitado por un Gaviria omnipresente, y la opinión realmente confrontada entre Felipe González y Aznar. La satisfacción egocéntrica de Gaviria es una ilusión en la medida en que ningún encuestador pudo confrontarlo, mientras la realidad era sesgada por los factores distorsionantes de las respuestas, bien conocidos de los encuestadores (fijación de la agenda, consonancia informativa, omnipresencia, resonancia, efecto *band-wagon* e incluso *espiral del silencio*).

Ambiente, masa crítica y agente

Varios elementos –según la teoría– se requieren para las estructuraciones en la sociedad y la política: ambiente, masa crítica y agente.

En lo que concierne al primero, se ha visto que la situación de crisis social y de legitimidad del régimen, se ha agravado por el conocimiento público de nuevos ingredientes degradantes. El sector de la población nacional marginado o excluido es de un 40%; el tradicional reto guerrillero a la

institución que posee el monopolio de la violencia física; las incesantes violaciones de los derechos humanos por parte de las instituciones estatales y paraestatales, así como de la propia guerrilla, corresponden al cuadro histórico inmodificado.

Al esquema anterior se añaden nuevos elementos de ilegitimidad del régimen (Estado y élites dominantes), tales como la corrupción extendida de la burocracia en todos los niveles de la administración; la anomia con sus secuelas de criminalidad, desorden social e inseguridad de la población urbana y rural; la penetración del Estado

27. Los más destacados y con mayor tiempo en la profesión son los colaboradores de *El Espectador*: Jorge Child, María Teresa Herrán, Luis Carlos Sáchica, Alfredo Vázquez Carrizosa, Silvia Galvis, Osuna, Gabriel Rosas Vega, Alberto Donadío, Ramiro de la Espriella, Hernando Giraldo y Oscar Collazos. Sus escritos llegan a cerca de 200 mil lectores de lunes a sábado y a casi 350 mil, los domingos.

28. Los estudios académicos sobre los medios de comunicación en Colombia fueron objeto de atención en el primer lustro de los años 80. En el último decenio decayó el interés, con la excepción de la obra de María Teresa Herrán, *La industria de los medios masivos de comunicación en Colombia*, Fescol, Santafé de Bogotá, 1991. Los antecedentes más conocidos fueron los de Charles David Collins, *Prensa y poder político en Colombia*, Universidad del Valle-Cidse, Cali, 1981; Gabriel Fonnegra, *La prensa en Colombia*, El Ancora Editores, Bogotá, 1984; Enrique Santos Calderón et al., *Prensa, radio y televisión en Mitaca 84*, CPB, Seminario Nacional de Periodismo Político, Bogotá, 1984; Amparo Cadavid y Rubén Darío Espinosa, *Televisión y democracia en Colombia*, Fescol-Fepec-Ciid, Bogotá, 1984; Javier Darío Restrepo, "Televisión y opinión pública", en *Controversia* No. 129, Cinep, Bogotá, 1985; María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, *Etica para periodistas*, Tercer Mundo, Santafé de Bogotá, 1991.

29. Popularidad de 89% el día de su posesión presidencial (7 de agosto de 1990); 42% en mayo de 1992 y 67% en julio de 1994; sin embargo, a la pregunta sobre si su gobierno respondió a las expectativas, dijo "no" un 42% del total entrevistado en esta última muestra. Sobre problemas nacionales, en la misma encuesta de julio de 1994, un 82% dijo que la inseguridad tendió a permanecer igual o a empeorar; y un 88%, que el costo de vida había permanecido igual o había desmejorado (*El Tiempo*, 31 de julio de 1994, p. 3B). En la encuesta de la Universidad de los Andes, en agosto de 1993, un 82% de entrevistados manifestó que su motivación para votar (cuando lo hacía) era la "esperanza de que las cosas cambien"; un 43% expresó que se interesaba por la política "para que haya menos corrupción".

por parte del narcotráfico; la desatención de las políticas públicas hacia la defensa del bien común y del interés social, y la incapacidad de establecer un sistema democrático.

En el agravamiento de este círculo de problemas que afectan la sobrevivencia de la sociedad (el presidente Gaviria traducía la complejidad identificándola como un problema de *calidad de vida*) no puede ser exculpada de responsabilidad la ineficacia de la élite bipartidista dominante en la fase corriente de profundización de las crisis en diversos órdenes.

El proceso de cambio social y político iniciado en 1990 con la nueva Constitución fue prontamente interrumpido, al ser reconstituida la alianza de la élite con la vieja clase política corrupta; por la institucionalización del neocorporativismo clasista en la nueva estructura del poder, y por el

bloqueo del pluralismo político, al limitar la apertura al colaboracionismo burocrático de un grupo, que dejó sin resolver el problema del vacío de la oposición crítica del gobierno.

Para la superación del bloqueo de la élite del poder al cambio social y político, existe un potencial: el sector de la población que no se identifica con los partidos tradicionales. Está conformado por más de siete millones de adultos, de los cuales un millón y medio, sin esperar un beneficio personal, asume el *costo* de concurrir a las urnas motivado en la defensa del bien común vulnerado. El primer segmento es una masa atomizada de individuos; el segundo es una *masa crítica*³⁰ en estado potencial para la estructuración, siempre que se presenten los elementos motivadores del ambiente o situación, y los agentes estructuradores. Esa masa crítica por no ser

homogénea, puede ser activada por diferentes agentes: individuales y colectivos; carismáticos y cognitivos.

El cuello de botella que impide la acción colectiva es el vacío de liderazgo capaz de convertir a la *masa crítica* en una o varias estructuras en capacidad de actuar solidariamente en movimientos por la justicia social, por la reconstrucción moral, por la democracia, o por la defensa de otros bienes públicos.●

30. Pamela Oliver; Gerald Marwell y Roy Teixeira, "A Theory of the Critical Mass: Interdependence, Group Heterogeneity, and the Production of Collective Action", en *American Journal of Sociology* Vol. 91, 1985, pp. 522-556.

En el Tolima...

La pasión de leer...



Está en...



- ❖ Libros y Revistas
- ❖ Papelería
- ❖ Implementos de oficina
- ❖ Servicio de fax
- ❖ Trabajos en computador
- ❖ Fotocopia y Anillado
- ❖ Servicios editoriales

En Librería Foro usted puede conseguir los libros y revistas que le permiten actualizarse en su profesión o como medio de apoyo en su ámbito universitario. Ya no es necesario viajar a otra ciudad para adquirirlos; venga ya a Librería Foro, y si no tenemos su pedido, se lo conseguimos.

IBAGUE
 Cra. 4^a N^o 7-73
 A.A. 2254 Tel. 611441

DISTRIBUIDOR EDICIONES FORO NACIONAL POR COLOMBIA

Germán Vargas Guillén
Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional
Director nacional de las Escuelas de Liderazgo Democrático de la
Corporación S.O.S. Colombia - Viva la Ciudadanía

Los conceptos de imagen y política en Lezama Lima*

Germán Vargas Guillén

Nueve años antes de la aparición de *Paradiso*, Lezama Lima dictó un ciclo de conferencias sobre *La expresión americana*. En ellas, entre otros asuntos, trató el de *La curiosidad barroca* (1957). De este escrito quiero hacer especial énfasis en la interpretación que realizó del quechúa Kondori y de lo que él significó para el siglo XVIII americano.

Luego, centraré la atención en un pasaje de *Paradiso* (1966) –no sólo la obra más representativa de la novelística de Lezama Lima, sino también una de las más destacadas de la literatura cubana y latinoamericana–; en el pasaje que someto a estudio, encuentro el centro de lo que pudiera llamarse el concepto de *política*. Básicamente, desde la tesis de que Lezama Lima pretendió y realizó una idea de la misma totalmente anclada a la construcción de la subjetividad.

Posteriormente, detendré la atención en el concepto estricto de *imagen*, a partir de la noción que expresa en *Esferaimagen* (1970; pequeño libro en que el autor colecciona ensayos sobre la expresión poética en la figura de Don Luis de Góngora); concepto que parece dar cuenta de lo que implica tanto el mito como la *futuridad*. Allí, concluiré mostrando cómo la *imagen* es un ámbito donde quizás a una viven la intuitividad y la razonabilidad del americano; ella es un modo esencial para la constitución de una *praxis política* que se orienta hacia la realización de las expectativas –en muchos

casos bajo el nombre de esperanza– del americano.

La política como ámbito de la ética

La política es el ámbito de la experiencia ética en donde se sintetizan: deseo, intuitividad y razonabilidad del americano.

Esta tesis permitirá ver cómo Lezama Lima es uno de los escritores latinoamericanos que logró hacer de su reflexión un camino de reconstrucción genética y de caracterización de los horizontes –en uno y otro caso: *poética*– de vida que ha logrado abrir el americano.

Por supuesto, parto de la convicción de que esta manera de pensar no sólo hace comprensible, sino también justificado el proceso de liberación que han vivido los pueblos de la América Latina y la enseñanza que en esta materia concreta ha dejado la experiencia histórica, del pueblo y la cultura, que representa y encarna Lezama Lima a quien se puede seguir valorando como poeta de poetas.

* Ponencia presentada al *VII Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana* sobre *Filosofía Política*, organizado por la Universidad Santo Tomás, Santafé de Bogotá, junio 26 a julio 1 de 1994. Este ensayo tiene el carácter de *informe de conversación* con el poeta Augusto Pinilla, con quien el autor ha compartido la reflexión sobre la obra de Lezama Lima, por tres lustros.

La figura del quechúa Kondori

[...] el indio Kondori representa la rebelión incaica que termina como un pacto de igualdad, en que todos los elementos de su raza y de su cultura tienen que ser admitidos. [...]

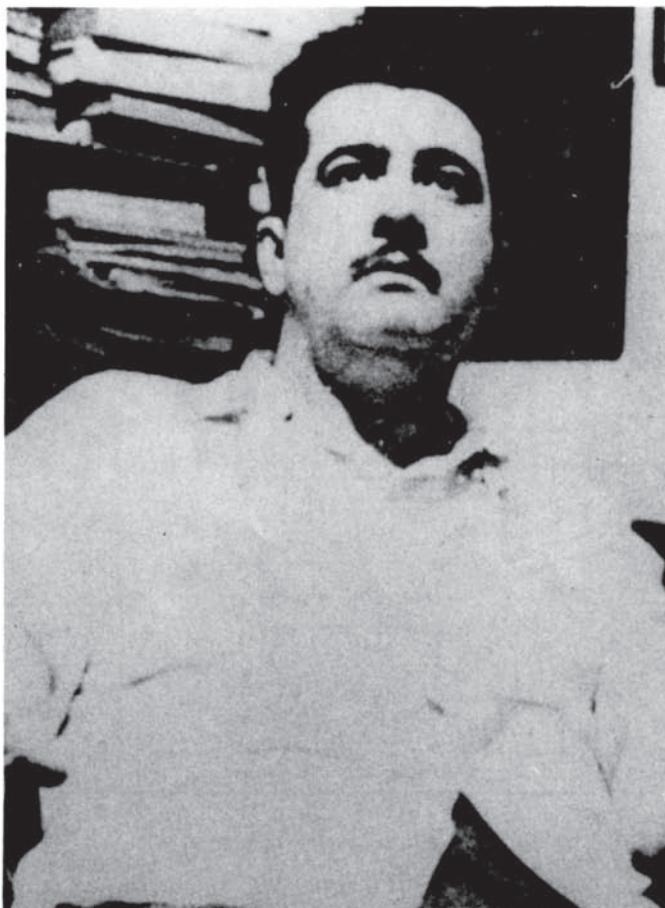
He ahí la prueba más decisiva, cuando un esforzado de la forma, recibe un estilo y una gran tradición, y lejos de amenguarlo, lo devuelve acrecido, es un símbolo de que ese país ha alcanzado su forma [...]. Es la gesta que en el siglo siguiente al Aleijadinho, va a realizar José Martí. La adquisición de un lenguaje, que después de la muerte de Gracián, parecía haberse soterrado, demostraba, imponiéndose a cualquier pesimismo histórico que la nación había adquirido forma.¹

¿Qué significa, pues, para el americano –una vez venida tal *forma de ser*, a saber, la americana– la tradición de su historia y la realidad contingente de una situación que le obliga a reubicarse en el presente?

Aquí es donde comienza el sentido de la historia política americana: cuando el pasado no es objeto de renuncia y el presente se puede experimentar como transformable. La figura de Kondori es, creo, la comprensión de un modo diferente de experimentar la temporalidad.

Filosóficamente comprendemos que la temporalidad es la estructura misma de la subjetividad humana. Kondori no sólo se descubre existiendo, sino que también conoce y reconoce su *anclaje* al pasado propio. No obstante, queda para él mismo la pregunta: ¿cómo jugar en un *mundo de la vida* que ha creado extrañeza frente a su propia historia?

Hubiése sido simplista y tonto, de parte del americano Kondori, entrar en el juego de la *historia como progreso*, es decir,



José Lezama Lima: "poética de vida, que ha logrado abrir el americanismo"

habría sido el fin de un proceso que buscó por más de dos siglos el desarraigo. Habría sido una concesión, desde la renuncia, a convertir radicalmente lo propio en ajeno.

No obstante, fórmula alternativa frente a ese estado de cosas habría podido ser la ensoñación a ultranza en el pasado ido. Pudo Kondori hacer del recuerdo una forma de inacción y de inmovilidad que, a su turno, también tomaba el cuerpo de una renuncia al presente.

Las dos alternativas claras: progreso y regreso; se configuraban como perspectivas para actuar en el presente. No cabría decir que se tratara, en cualquiera de los dos casos, de una fórmula simple de ser asumida; de hecho, en Kondori se vio como un imposible; regresar habría sido tan difícil como progresar.

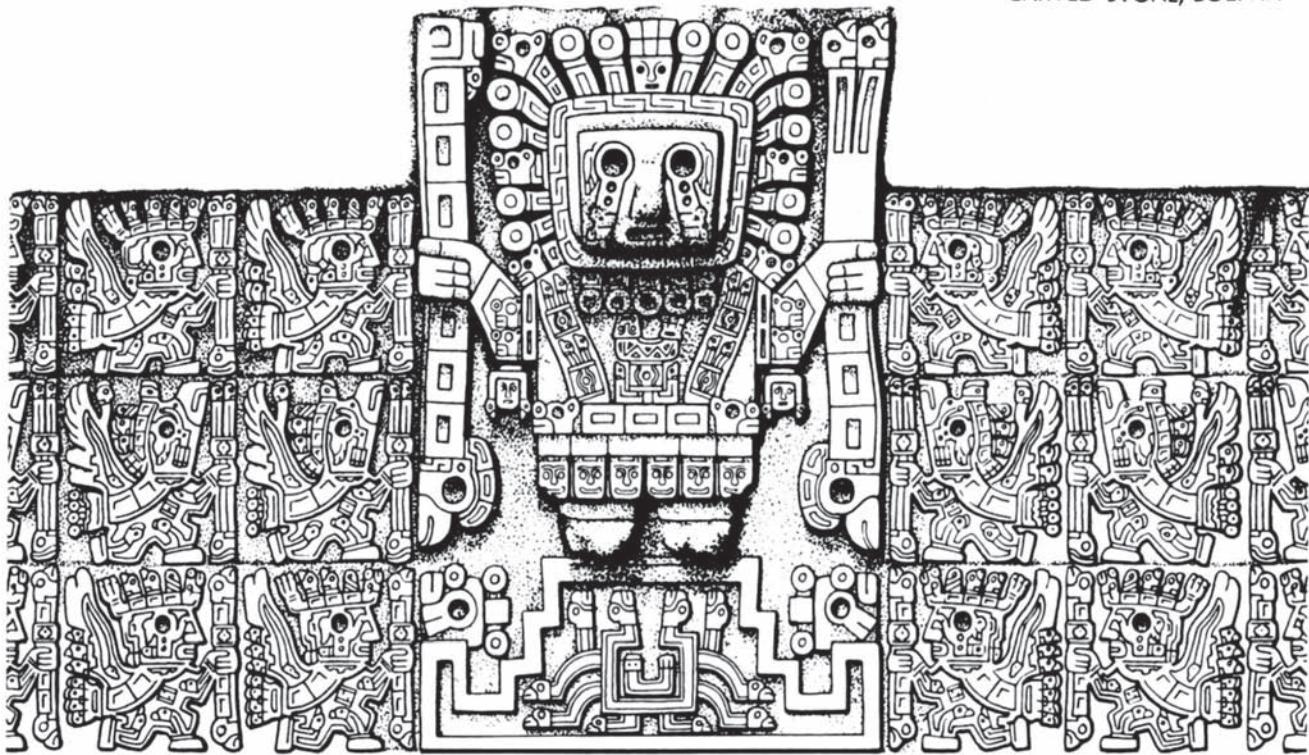
Aquí comienza la historia, nuestra historia, cuando se acepta el suelo del presente como el único *espacio* donde se puede habitar con sentido. Dicho filosóficamente, no asumió Kondori ni una ontología del pasado (eterno retorno), ni una ontología del futuro (salvación); vivió y construyó en presente, el presente. Este retiene el pasado y protiende el futuro.

El tiempo se experimenta ética-poéticamente como eternidad, no como lo eterno y tampoco como lo eternizable. Que esta concepción se traduzca en una actitud contemplativa es no sólo posible, sino también necesario. Que esta contemplación se traduzca en inacción es imposible porque, el presente se vuelve en cada americano presencia.

De manera que se trata de que el pasado haga presencia en el presente, se presente; y que el futuro, igualmente, comience a habitar en el ahora, se presente. Es la realización continua y continuante de la presentificación.

1. José Lezama Lima. *La expresión americana*, Alianza Ed., Madrid, 1969, pp. 77-78.

CARVED STONE, BOLIVIA



American Indian - Dover

El arte del indio Kondori representaba en una forma hierática y oculta la síntesis del español y del indio, de la teocracia hispánica de la gran época con el solemne ordenamiento pétreo de lo incaico. Su arte es como un retablo donde a la caída de la tarde, el mitayo sólo desea que le dejen colocar su semiluna incaica en el ordenamiento planetario de lo español, y entre los instrumentos que entonan la alabanza, el charango, la guitarrita apoyada en el pecho, tenga su penetración sumergida en la masa tonal. Parecía contentarse con exigirle a lo hispánico una reverencia y una compañía, como aquellas momias, en el relato del Inca Garcilaso, de las primeras dinastías incaicas que al ser exhumadas en la época de la conquista y del derrumbe de las fortalezas cuzqueñas, eran saludadas respetuosamente por la soldadesca hispánica.²

En síntesis, logra el americano –situado en y poseso de su situación– hacer vivir el pasado en el presente y lo convierte en una mueca que empieza a indicar y a construir futuro; es, como en el caso también de nuestro barroco colombiano –que bien se puede mirar en el altar y en la sacristía de la

2. *Ibid.*, pp. 79-80.

Iglesia San Francisco en el centro de Santafé de Bogotá– la exuberancia de nuestro paisaje y del rostro precolombino vuelto ambiente para el culto a las nuevas deidades o –¿por qué no?– son las viejas deidades americanas vueltas vivas en su paisaje tomando posesión de los nuevos espacios de culto. Es esto, pues, lo que puede ser llamado *hacer presencia, presentificación*.

Si en el orden mítico-poético y ritual aparece –tiene su *aparecencia*, si puede así decirse– la configuración del orden propiamente americano, por qué no pensar que también ello tuvo y ha de tener su expresión en el orden político. Sería incierta la historia americana si no contara con este tipo de categorías para hacer claridad sobre su ser histórico. Qué tal que los fracasos de la mentalidad planificadora y previsiva no sean más que un resultado del abandono de esta íntima historicidad de lo americano; qué tal que se tuviese la libertad de no pensar que este estar ebrios de eternidad y suspendidos en el presente no es un *falla* o una *debilidad* en la cultura, sino un auténtico estilo que consolida incluso más que la *razón*, la *razonabilidad* que llegará a *traducirse* hasta en formas de *ciencia*.

La política

He paseado muchas veces por el *Paradiso* y creo haber encontrado un texto que, pese a no ser expresamente dirigido a la política, contiene la esencia del pensamiento que en esta materia pretendió legar el poeta.

El contexto, en la novela, del fragmento que citaré a continuación es el siguiente: fue el padre de José Cemí un militar que murió joven. Rialta, madre de Cemí, queda al frente de los asuntos. Cemí fue, desde siempre, un asmático y débil niño. Una vez vuelto adolescente ingresa a la Universidad (Upsalón en la novela) y, como todos los de la época, se acerca a las manifestaciones políticas, en las que no sólo hay una búsqueda de sentido histórico, sino en la que también se trena el sentido de la experiencia propia.

En el capítulo, del que hace parte el siguiente texto, se hace claro que han comenzado las revueltas en Upsalón y que el joven Cemí toma parte de las mismas. Con qué nivel de compromiso, podrá juzgarlo el lector de la novela. Aquí me limito a transcribir el texto:

Mientras esperaba tu regreso, pensaba en tu padre y pensaba en ti, rezaba el rosario y me decía: ¿Qué le diré a mi hijo cuando regrese de ese peligro? El paso de cada cuenta del rosario, era el ruego de que una voluntad secreta te acompañase a lo largo de la vida, que siguieses un punto, una palabra, que tuvieses siempre una obsesión que te llevase siempre a buscar lo que se manifiesta y lo que se oculta. Una obsesión que nunca destruyese las cosas, que buscase en lo manifestado lo oculto, en lo secreto lo que asciende para que la luz lo configure. Eso es lo que siempre pido para ti y lo seguiré pidiendo mientras mis dedos puedan recorrer las cuentas de un rosario. Con sencillez yo le pedía esa palabra al padre y al espíritu santo, a tu padre muerto y al espíritu vivo, pues ninguna madre, cuando su hijo regresa del peligro, debe de decirle una palabra inferior. Oyeme lo que te voy a decir: No rehuses el peligro, pero intenta siempre lo más difícil. Hay el peligro que intentamos como una sustitución,

hay también el peligro que intentan los enfermos, ese es el peligro que no engendra ningún nacimiento en nosotros, el peligro sin epifanía. Pero cuando el hombre, a través de sus días ha intentado lo más difícil, sabe que ha vivido en peligro, aunque su existencia haya sido silenciosa, aunque la sucesión de su oleaje haya sido manso, sabe que ese día que le ha sido asignado para su transfigurarse, verá, no los peces dentro del fluir, lunarejos en la inmovilidad, sino los peces en la canasta estelar de la eternidad.³

La política es –¿quién lo podría negar?– un compromiso ético pleno; en épocas como la nuestra, en que se ha acabado la subjetividad arcónica y protagónica, la de pretensiones hegemónicas de dominio –incluso a nombre de la democracia–; decapitada una subjetividad de tales características, podemos esperar que la política no sea ámbito en el que quepa pensar en *más héroes y más milagros*, no hay cabida para que aparezca el sumiso rebaño que sigue a pie juntillas caudillos o próceres; es, en cambio, el tiempo en que cada quien tiene que descubrir que su ser es lo que es en intersubjetividad, en la relación con los otros. No basta, pues, con que se piense la política como panorama externo, sino como *vivencia propia* y como *compromiso subjetivo*.

Ese descubrimiento de ser cada quien lo que es en la relación con los otros nos sitúa frente a lo que llamamos filosóficamente (fenomenológicamente): *personalidades de orden superior*. Haré mención rápida de algunas: la amistad, la relación de pareja (matrimonio), la sociedad civil, el Estado, la unión de naciones (Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Pacto Andino, entre otras).

Son, pues, *personalidades de orden superiores* esferas del mundo cotidiano con las que nos relacionamos como *entidades abstractas* que, no obstante, tienen el sentido de dimensiones con carácter y con significado estricto en el ámbito de nuestra experiencia.

Lezama Lima en *Paradiso* da cuenta de un tema que considero central para pensar la política, a saber, el dirigir la palabra relativa



3. José Lezama Lima, *Paradiso*, Ed. Fundamentos, Caracas, 1976, pp. 245-246.

al otro, con sentido, desde el ámbito de intimidad. Rialta, en esa *personalidad de orden superior* que es la familia, insta a José Cemí a que piense en *presente*, dicho filosóficamente: en su *presente viviente*, lo que ha sido y lo que puede ser.

Para nuestra actualidad es, ni más ni menos, que una búsqueda que tiende a democratizar la vida cotidiana; un proceso en el que se quiere que la persona tenga la oportunidad de aclarar su poder ser a partir de su posibilidad.

Ese estilo de democratización de la vida cotidiana, en el que hay espacio para que el sujeto se *sitúe* frente a su pasado y frente a su porvenir, parece no dar cabida a la concepción de quienes han constituido la política en espacio de su afirmación psicológica. Democratizar la vida diaria, no obstante, en orden de la experiencia comunitaria implica llegar a comprender que la existencia misma es un riesgo o, como lo llama Lezama Lima, un peligro. Sitúo como ese peligro la capacidad de construir sentido o de sucumbir impotentemente ante la tarea.

En fin de cuentas, el sentido radica en que la vida propia pueda hacerse fuente de construcción de la experiencia de los otros; y que los otros, a su vez, posibiliten nuestra propia subjetividad. Lezama pone en boca de Rialta la pregunta a José Cemí por su capacidad de conjugar tradición y ruptura; tradición porque es a partir de lo posibilitado que podrá construir nuevas perspectivas de ser; ruptura porque tendrá que hacerse más claro para sí mismo Cemí: si asume ese sedimento o busca variarlo.

Así, pues, el descubrimiento de la subjetividad tiene que ver con el previo reconocimiento del entorno que lo posibilita. Por supuesto que en más de un caso se puede pensar que la categoría intersubjetividad, en el caso americano, sea vista como —si es posible la expresión— *nosotridad*. No es que la intersubjetividad no sea experimentada en nuestro contexto, sino que ella no es un descubrimiento académico que se alcanza al final de la reflexión que partiera en la Modernidad del yo—cartesiano—y deviniera filosóficamente en concepto hasta la reflexión contemporánea exigiendo la comprensión del yo en medio de los otros.

Lo que ha sucedido en América es muy diferente. Como lo expresa bellamente Da-

niel Herrera Restrepo, cuando Colón descubrió América otra costa tocaba la filosofía: la subjetividad; lo que habitaba en este continente eran comunidades sin yo; vividas como un *nosotros*; lo que se descubría en Europa era la afirmación del *yo*.

Es cierto que desde la posición hegemónica se pensó en que la cultura americana tendría que llegar al día en que cada quien se expresara como yo, en el modo de individuo, hasta conformar incluso una expresión cultural del individualismo; dio origen esta pretensión a la reinterpretación de la justicia como equidad, como redistribución.

América —me refiero, es claro, sólo a la latinoamericana—, en cambio, ha tenido una peculiar forma de comprensión de la ética en el orden de la justicia entendiéndola como *reciprocidad*. Tal vez de ahí proviene el hecho de que es más sencillo pensar como *nosotros* que como *yo*.

¿Qué tiene que ver todo esto con la política? En síntesis, el proceso dado en Europa, desde los griegos, puede describirse como un recorrido que quiere llegar a la construcción de *polis* desde los individuos; mientras es de la esencia americana el llegar a construir subjetividad a partir de la *polis*.

Caciques y caudillos podrían presentarse como la negación de la tesis anterior. No obstante, para negarlo habría que llegar a pensar esas dos expresiones como fruto de la concepción formal de la política. Entre tanto, se sabe, en las comunidades —del presente y del pasado americano— los sujetos toman posición con respecto a los problemas del diario vivir desde la solidaridad.

Más de una expresión pudiera dar cuenta de lo que argumento (“no soy un hombre, soy un pueblo” era el modo como se expresaba Jorge Eliécer Gaitán). Que el recurso a la expresión en que se habla desde el nosotros se pudiera pensar como un artificio retórico, se puede llegar a aceptar. Pero que en el diario vivir usemos cotidianamente más la expresión *nosotros* que *yo* descuenta esa perspectiva.

Esto significa que la comunidad ha sido y es la fuente de construcción de la subjetividad y que en ella los valores de solidaridad y reciprocidad han sido una fuente para definir el ámbito cotidiano de la *polis*. Esos dos valores mencionados no actúan como



CLAY FIGURE, TARASCAN



POTTERY DESIGNS, TOLTEC



América Pintoresca - Ensa

un abstracto que adquiera el *status* jurídico; sin embargo, desde ellos se hace posible entender cómo se alcanzan altos niveles de movilización, toda vez que se requiere solventar a los más desprotegidos.

Nuestra tesis, pues, con respecto a la política –vista a partir de Lezama– es que en ella se construye subjetividad a partir de la comunidad; que por esa primacía del *nosotros* sobre el *yo* se configura una dimensión mítico-poética-política.

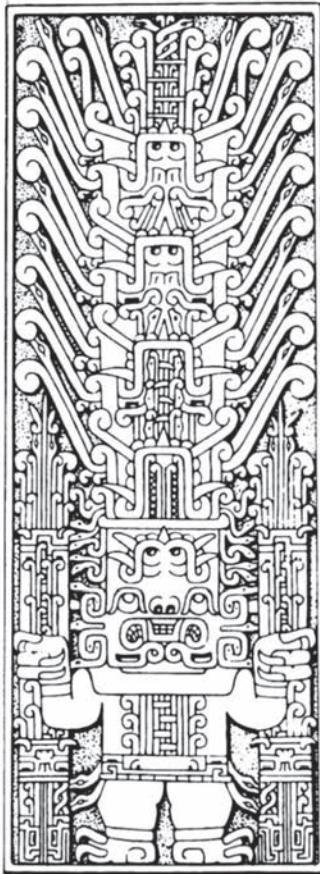
La imagen

Un mito es una imagen participada y una imagen es un mito que comienza su aventura, que se particulariza para irradiar de nuevo. Nosotros los americanos, en realidad, tenemos la ventaja sobre las antiguas culturas que tanto mito como imagen parti-

cipan en una devoradora resistencia que desconocemos, que muy pronto se convierte en una sustancia inexistente, donde lo invisible y las ausencias destilan como una gota en el tiempo, como un tic tac que es como un ritmo que entreabre el diálogo. [...] Nosotros vamos por la imagen proyectada sobre la futuridad haciendo mito. [...] para nosotros, americanos, el mito es una búsqueda, una anhelante persecución. Mito y lenguaje están para nosotros muy unidos, no pueden ser nunca recreación, sino verbo naciente, ascua, epifanía.⁴

¿Cómo nos situamos en la vida cotidiana si no es a través de imágenes? La pregunta con que inicia esta parte de la reflexión tiene que ver con la manera como nos representamos nuestras posibilidades y no obstante cabe decir con Silvio Rodríguez, buscamos “lo imposible, porque de lo posible se sabe demasiado”.

4. José Lezama Lima, *Esferaimagen. Sierpe de don Luis de Góngora. Las imágenes posibles*, Tusquets, Barcelona, 1979, p. 17.



Nuestra experiencia puede verse como un desplazamiento en las márgenes del *deseo de ser*. Esto se puede caracterizar desde la comprensión de lo que implica para nuestra vida diaria la *intuitividad*. A partir de unas cuantas intuiciones, de una intervención, relativas a lo que puede ser nuestra perspectiva de realizar nuestra experiencia de mundo, nos damos a la tarea de llenar de contenido las expectativas.

Característico del latinoamericano y del colombiano es que decide y define el horizonte de su realización más a partir de los horizontes que de una comprensión absoluta de los planes que tendría que trazarse para alcanzar sus metas.

En buena medida, orientamos más nuestra vida por el *saber* que poseemos sobre nuestra expectativa íntima que por un *conocimiento* exhaustivo de la condición en que nos hallamos o por una racionalidad estratégica.

Consecuencia de este estilo de ser y de actuar es que nuestra vida llena de razones, justifica, lo que pretendemos; no es que haya un proceso completo de exploración previa acerca de lo que pueden ser nuestros objetivos y sobre el conjunto de dispositivos que podrían conducir a la realización de éstos, por el contrario, tenemos unas *intencionalidades* en las que –por cierto– pervive nuestro pasado y se *abre el mundo* de nuestras posibilidades.

Así, la imagen y el mito no son una racionalidad para nosotros, como tampoco lo ha sido en su historia para Occidente; pero a diferencia de lo que pasa en éste, en la vida práctico-existencial, nosotros lo tomamos como un fundamento no fundamentado de la experiencia que pretendemos realizar; este fundamento no fundamentado, no obstante, tampoco es un vacío; tiene el sentido de lo que se entrevé, de la intuición.

Realizamos, pues, un desplazamiento en el que constituimos sentido a partir de la experiencia y es regresivamente como podemos dar cuenta más detenidamente de lo que hemos intencionado; cuando pensamos el futuro –en un análisis progresivo, que también lo hacemos– procuramos hacer cada vez más explícito el *deseo de ser*; cuando realizamos un análisis regresivo –que tam-

bien lo hacemos– procuramos hacer visible lo intencionado y el modo como ha llegado a su realización.

Por supuesto, juzgado con el concepto de *racionalidad* –sea en su uso estratégico-funcional o en su estilo explicativo-causal o en su modalidad hermenéutica– se ve que es necesario corregir nuestro *modo de ser*. Sin embargo, una investigación que busque hacer más comprensible nuestra perspectiva de mundo apelará más que a la *racionalidad a la razonabilidad*, al estilo de comprensión en que sea posible hacer visible en nuestro estilo más que una *falla*, un modo alternativo de realizar y de obrar la comprensión.

¿Qué implica esto en el orden de la política? Que es tiempo de atemperar desde nuevas categorías la concepción estratégica –que no se trata de ignorar o de desvalorizar sin fundamentos– de la construcción de la *polis*. Tal atemperamiento tiene que implicar que este estilo de comprensión asume la posibilidad de que el ejercicio de la *polis* se oriente a hacer más las veces de contexto para la construcción de *subjetividad* a partir de la *nosotridad* –ya referenciada–.

Para concluir cito, una vez más, al maestro Daniel Herrera Restrepo, quien al hablar del ser humano (en su escrito *El derecho al trabajo. Una aproximación fenomenológica*, 1988) lo define como: “Un ser cuyo ser es deber ser”. Este aporte a la reflexión implica que la *polis* en América Latina tiene que obrar como espacio para la construcción de subjetividad a partir de la alteridad.

En política también los actores se han convertido en personajes que no tienen tiempo (como en el estilo alemán, bien podrían decirle a sus interlocutores: *Ich habe keine Zeit*, yo no tengo tiempo); entre tanto, todos los otros tenemos tiempo para todo, para amar y para soñar, para producir gozando. Aquéllos han adoptado una racionalidad pragmática que no corresponde a nuestra historia, nosotros –los otros, los que tenemos tiempo– entre tanto obramos sin renunciar al goce cotidiano de la existencia.

Nuestra experiencia política tiene que realizarse, quizás, como es en su estructura la construcción literaria del *Paradiso*: una vuelta y revuelta del tiempo sobre sí mismo

en la experiencia del narrador-protagonista; la eternidad contiene el pasado y futuro; el sentido de ser que procuramos realizar yace ya en nuestra alma, en nuestra autopercepción. Esta autopercepción se sucede como la de un *yo* siendo *nosotros*, la de un *yo* que se entiende y realiza cuando entra en contacto con los demás. Como en el *Paradiso*, al mismo tiempo se trata de *ser uno mismo, pues en eso consiste la tarea* –como bellamente lo retoma Heidegger en su interpretación de *Hölderlin y la esencia de la poesía*–; pero ello implica un volverse hacia sí viendo como también los otros esperan, creen y sueñan sobre nosotros y sobre sí mismos a nuestro lado.

En fin de cuentas, aparece como resultado de toda esta exploración que

la política es el momento en que –por vía de mito e imagen– suscribimos la irrenunciable posibilidad de la utopía de que cada quien sea sí mismo, sujeto del mundo, y en esa su proyección de vida abra la posibilidad propia reconociendo la de los otros.

Cuando este estilo de la política tome raíz en nuestro suelo vital, con seguridad, no se harán consignas que digan que ha llegado el tiempo de la masa anónima; sino que se recurrirá a la invocación de la posibilidad de cada quien, en primera persona; reconociéndolo como intencionalidad única de la experiencia histórica. No será, el tiempo de los héroes del relato, sino en que cada persona se experimente como una irrenunciable vocación de vida que admite y construye desde la diversidad●

*Nuestra experiencia política tiene que realizarse, quizás, como es en su estructura la construcción literaria del *Paradiso*: una vuelta y revuelta del tiempo sobre sí mismo en la experiencia del narrador-protagonista; la eternidad contiene el pasado y futuro.*



Fundación Foro Nacional por Colombia

La Fundación Foro fue constituida hace 12 años, como respuesta a las necesidades de transformación democrática de la sociedad colombiana. Realiza desde entonces un trabajo ininterrumpido en áreas como la descentralización, la participación comunitaria, la subnormalidad urbana, estudio y apoyo a los movimientos sociales y actividades varias de educación para la democracia. También contribuye a la divulgación del moderno pensamiento social, a través de la **Revista Foro** y de libros especializados.

Foro tiene competencia para adelantar estudios, acciones de formación y educación, asesorías y consultorías en las siguientes áreas:

- Gestión pública local y participación comunitaria.
- Educación para la democracia.
- Desarrollo social (salud, educación medio ambiente, género).
- Investigación social sobre subnormalidad urbana, vivienda social, procesos de concertación, movimientos sociales descentralización y desarrollo regional.
- Edición de la **Revista Foro** y de diversos textos de ciencias sociales.

Sede Nacional

Carrera 4A No. 27-62 - Tels: 2822550 - 2835982 - Fax: 2861299
Ap. Aéreo 10141 - Santafé de Bogotá

Seccional Valle del Cauca

Calle 4 No. 24C-29 - Tel 5563378 - 5586534
Santiago de Cali

Seccional Costa Atlántica

Carrera 47 No. 76-138 - Tel: 455153 Barranquilla

Ciret - Foro

Calle 7 No. 4-44 Tel: 610960 - Ibagué

Desde el 19 de septiembre de 1993, Jorge Enrique Hardoy no vuelve más por el puerto a ver partir las gaviotas, ni se ocupa de pensar y repensar los problemas de los miles de habitantes de las urbes latinoamericanas. Después de 68 años, regresó a la tierra. Hardoy, arquitecto urbanista y especialista en planeación, al morir trabajaba en el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América Latina. Era colaborador de varias publicaciones y fue corresponsal en Buenos Aires de la Revista Foro desde su fundación, pretexto para sostener una regular y cálida comunicación.

Fabio Velásquez encontró entre sus papeles esta reflexión, que data de marzo de 1992 y que ofrecemos a nuestros lectores a modo de evocación de sus lúcidos aportes.

El futuro de la ciudad en América Latina

Jorge E. Hardoy

El origen de la gran ciudad en América Latina

Hasta hace un siglo, las ciudades de América Latina tenían una superficie y una población insignificantes. Sólo Buenos Aires y Río de Janeiro superaban los 500 mil habitantes en 1890. Nueve más superaban los 100 mil. Doce capitales nacionales tenían una población menor, entre las cuales varias no llegaban a los 50 mil habitantes. A pesar del explosivo crecimiento demográfico de algunas de ellas durante las décadas de 1870, 1880 y 1890, eran ciudades pequeñas y pobres donde comenzaban a mostrarse los contrastes entre la opulencia de unos pocos y la pobreza de muchos. Ricos y pobres vivían en estrecha cercanía.

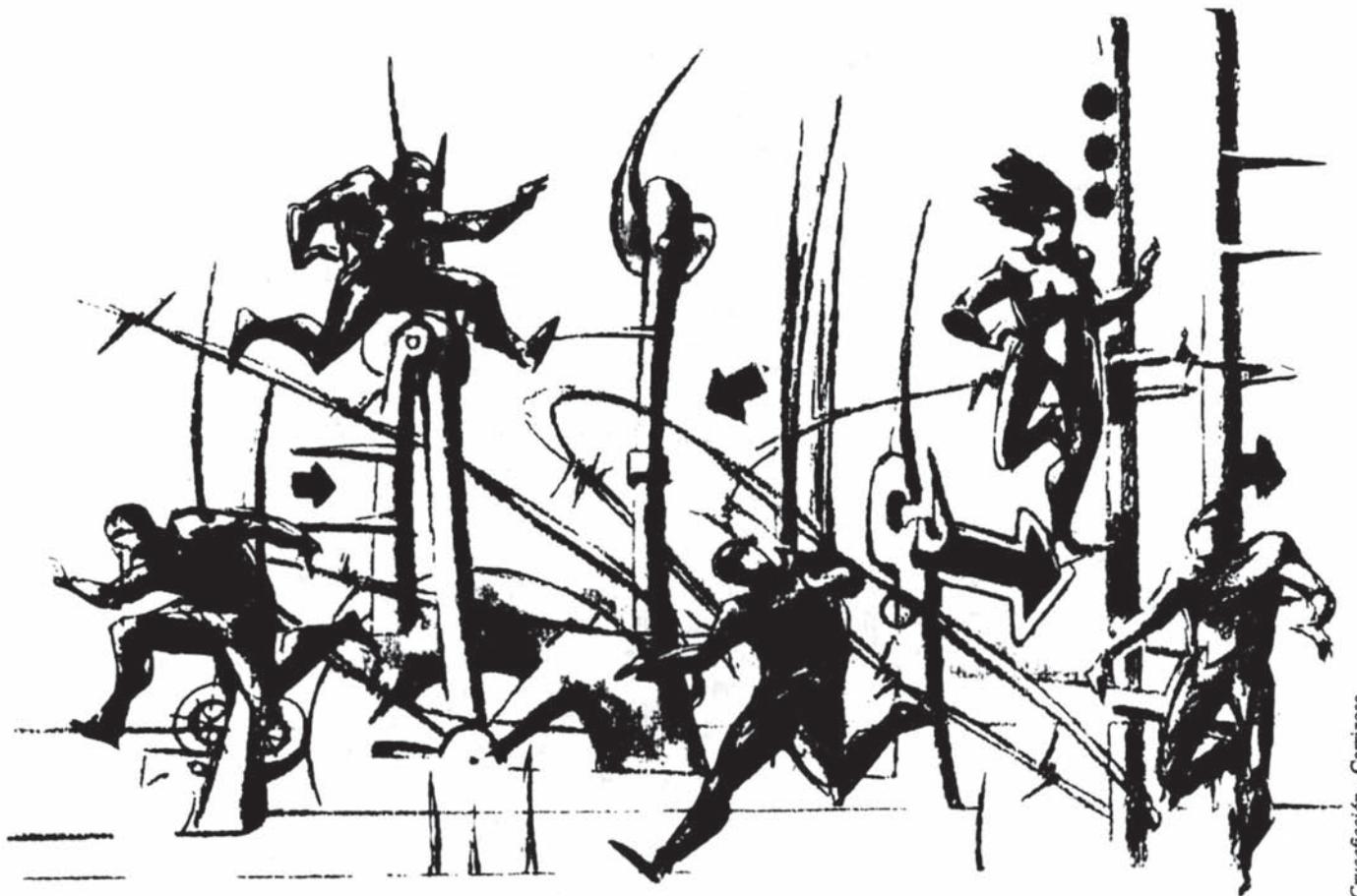
Los espacios urbanos mantenían cierta coherencia. Los Estados no eran aún protagonistas. Sólo en algunas ciudades aparecían muestras de una incipiente industrialización orientada,

en gran parte, a sustituir las importaciones de bienes de consumo. La mayoría de la población urbana con ingresos estaba formada por trabajadores por cuenta propia, desempeñándose en una variedad de servicios y en pequeños talleres y en la construcción de obras públicas y de viviendas privadas.

En esas décadas y en los años siguientes comenzó a discutirse la ciudad, como consecuencia de una mayor preocupación por su higiene y por las urgencias de aglomeraciones que crecían rápidamente, en condiciones de vida cada vez más deplorables para los trabajadores. La falta de adecuadas condiciones sanitarias afectaba también a las clases adineradas que comenzaron a desplazarse hacia nuevos barrios, mejor ubicados y equipados y con densidades menores. Existía la creencia de que un grupo de personas de buena voluntad iba a transformar los países de América Latina en sociedades que se beneficiarían de una abundancia y de un crecimiento económico

sin precedentes. Existía también el convencimiento de que la nueva ciencia urbanística que se estaba desarrollando en París y en Viena, en los planes de extensión urbana para las ciudades alemanas, en Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos, iban a modificar totalmente a las ciudades de América Latina si se introducían sus principios teóricos y su práctica, reducida al principio a fijar normas de construcción e incorporar servicios públicos básicos, pero experimentando también con nuevos suburbios residenciales y barrios obreros.¹

1. Las ideas de Ildefonso Cerdá, el principal urbanista teórico de mediados del siglo XIX en Europa, no tuvieron influencia en América Latina. "Cerdá, como su contemporáneo Haussmann, veía a la ciudad como una totalidad y propuso descentralizar el antiguo centro de Barcelona mediante una equilibrada distribución de los servicios y funciones urbanas en el área entera de la ciudad en forma tal que fuesen accesibles a toda la población"; Jorge E. Hardoy, "Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América Latina", en Hardoy, Jorge E. y Richard M. Morse (comp.), *Repensando la ciudad de América Latina*, IIED-América Latina y GEL, Buenos Aires, 1988.



Cruceficción - Carrizosa

Se tenía una gran confianza en las posibilidades que abrían los conocimientos científicos desarrollados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Era ya posible vencer la fiebre amarilla, el cólera y la difteria, las tres grandes plagas de la población urbana que afectaban, sobre todo, a los pobres. La tuberculosis, otra de las enfermedades urbanas de la época, podía ser controlada si se tomaban los descansos adecuados en un clima sano y con una buena nutrición, condiciones que escapaban a las posibilidades de los pobres. Comenzaba a comprenderse, siguiendo las inquietudes europeas, que las carencias alimenticias y el alcoholismo debilitaban a los seres humanos que al vivir hacinados y en medio de la suciedad se contaminaban con facilidad. Fue el período de oro del urbanismo a la europea, impulsado por intendentes municipales influenciados por la teoría y la práctica

que prevalecía en los países más avanzados e industrializados de Europa.

En esa etapa autocrática pero con inquietudes humanísticas, se discutía a Owen, a Fourier y a Proudhom y a la ciudad higiénica. Se trataba de imitar, aunque en una escala muy modesta, al Barón Haussmann, a Otto Wagner, a Ebenezer Howard o a Camillo Sitte. Médicos higienistas, ingenieros sanitarios y urbanistas reivindicaban una ciudad más sana y menos congestionada, una obra de arte que también incorporase la salud y el bienestar, si no para esa generación, sí para las futuras. Se intentaba crear naciones que incluyesen un mensaje de promesa y de preocupación para las futuras generaciones. Esa etapa perduró hasta la primera guerra mundial. Se intentó planificar Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo, La Habana, Santiago de Chile y otras ciudades siguiendo principios que pocos se atrevían a

cuestionar, y arquitectos e higienistas comenzaron a analizar a la ciudad como una categoría homogénea pero sin matices. Comenzaron así a perfilarse ciudades con marcadas diferencias sociales, reflejadas en barrios, bien o mal ocupados, con buenas viviendas y otras donde sus habitantes vivían hacinados y casi sin servicios. En esos años comenzaron a desarrollarse en Buenos Aires, Río de Janeiro, Rosario y otras ciudades, las primeras *favelas* y las primeras *villas miserias*.

Habían pasado los largos períodos de guerras civiles que plagaron el siglo XIX y principios del siglo XX, se afianzaban en algunos países procesos electorales e instituciones cívicas que alentaron leyes de contenido social y la incorporación de las masas a la actividad pública. Entraban masivamente en los países poco poblados y más accesibles de América Latina capitales extranjeros que se volcaron

hacia obras de infraestructura y servicios urbanos, proyectos regionales de transporte y comunicaciones o en préstamos a los gobiernos. El sistema parlamentario adquirió mayor fuerza, las universidades atrajeron a un número creciente de profesionales y se valorizó la educación como un medio de ascenso social y también para integrar a la ciudad al gran número de inmigrantes extranjeros y a un número creciente de migrantes rurales. No todo resultó como se esperaba.

En esos países vacíos, de población y de obras, comenzó a consolidarse el poder económico, político y cultural de las capitales nacionales. Allí, y en unas pocas ciudades de provincia, se afianzaron las élites económicas apoyadas en la minería en Bolivia, Chile y Perú; en el latifundio ganadero en la Argentina, Ecuador, México y Uruguay; en las plantaciones en Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. En las capitales nacionales estaban las sedes de las empresas extranjeras, que controlaban la comercialización de las exportaciones a través de sus personeros elegidos entre las élites económicas y sociales de cada país.

No todos los países de América Latina avanzaron con igual rapidez hacia una etapa predominantemente urbana en la distribución espacial de su población. Primero lo hicieron, los países de la costa atlántica de América del Sur y Chile, recibieron el influjo mayor de los capitales y de los inmigrantes europeos; luego en Cuba, después de su independencia, de los capitales de los Estados Unidos. La mayoría de los países, en cambio, recién comenzaron a convertirse en sociedades predominantemente urbanas después de la Segunda Guerra Mundial. En poco más de una generación, entre 1880 y 1910, se pasó en Brasil, Argentina y Chile de la gran ciudad a la metrópoli y de ésta a incipientes conurbaciones, en una realidad que escapó a la intervención de los gobiernos y no fue claramente comprendida por los arquitectos y urbanistas.

Junto a las ideas del urbanismo tradicional comenzaron a analizarse las de Le Corbusier, Loos y los CIAM, que vinculaban a la ciudad con una revolución tecnológica que transformaría el paisaje urbano y mejoraría la calidad del hábitat, frente a la nostalgia de la ciudad preindustrial. Ninguno de ellos entendió a las ciudades del Tercer Mundo. Muy pocos se dieron cuenta que la ciudad no tiene nunca una forma final, definitiva. Aún menos comprendieron que la pobreza y la marginalidad era ya una limitante fundamental al desarrollo de sociedades que no alcanzaban a transformar a masas de pobladores en verdaderos ciudadanos. La ciudad, cuando se la estudiaba con una gran dosis de superficialidad para sustentar un plan regulador –como se lo llamaba en esos años–, era analizada con una visión optimista, generalizadora y compacta, que impedía entender las necesidades particulares de cada grupo y en cada espacio social. Inmersos en el sueño de una utopía tecnológica, no aceptaron que el costo de construir y mantener las ciudades, la situación laboral y la creciente marginalidad de la población trabajadora requería soluciones muy distintas a las que proponían. Sin duda, las propuestas de los urbanistas tradicionales, como las de los maestros del racionalismo, no fueron cuestionadas con propuestas alternativas. La perplexidad que producía ciudades que duplicaban o triplicaban su población en menos de una generación, a veces, en quince años o menos, impidió su análisis en función de hechos comprensibles y controlables.

Comenzó a perfilarse lo que ha sido llamada urbanización prematura o ciudad prematura, que actuaba como centro de recepción de inmigrantes que no alcanzaban o no deseaban radicarse en los pueblos y áreas rurales, o huían de ellas ante sistemas de tenencia del suelo y explotación laboral injustos. Las ciudades no hacían más que reflejar las dificultades de países pobres, aunque algunos ricos en recursos

para desarrollarse, con mercados internos reducidos y con escaso poder adquisitivo, y una distribución del capital y de los ingresos que favorecía cada vez más a las minorías que controlaban la economía y la política de cada país.

Un siglo de urbanización continua

Mucha gente cree que los países de América Latina continúan y continuarán urbanizándose rápidamente. En realidad, todos los países de América Latina continúan urbanizándose. Los más urbanizados, como Argentina, Uruguay y Chile, a tasas inferiores al 1,7% anual; los menos urbanizados, como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, a tasas superiores al 4% ó al 4,5% anual; Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela tienen tasas intermedias. En casi todos los países las tasas anuales de crecimiento de la población urbana serán, en la década del 90, inferiores a las de la década del 80 y se espera que continúen declinando. La urbanización en los primeros es ya, en gran parte, consecuencia del crecimiento natural de la población urbana; las migraciones rurales juegan un rol declinante ya que esos países pierden población rural en cifras absolutas desde hace años. En los países menos urbanizados, las migraciones rurales son aún importantes. América Latina como conjunto, no atrae población de fuera de la región, más bien la expulsa hacia los países desarrollados de América del Norte y Europa Occidental.

A pesar de esto, América Latina en su conjunto agregó 9.5 millones de nuevos habitantes urbanos por año durante la década de 1980. En la década de 1990 pueden llegar a ser algo más de 10 millones y medio por año: 3.3 millones solamente en Brasil, 1.8 millones en México, 0.6 millones en Colombia, 0.6 millones en Perú, 0.5 millones en Venezuela y otro tanto en

Fotografía de Gloria Upegui



La urbanización prematura (ciudad prematura) actúa como centro de recepción de inmigrantes que no alcanzan a radicar en los pueblos y áreas rurales

Argentina. La mayoría de los nuevos habitantes de cada país, se piensa, se fijarán en las principales áreas metropolitanas y en la periferia de las grandes aglomeraciones. Tal vez no sea así.

La rápida urbanización del pasado, el rápido aumento en la proporción de la población viviendo en áreas urbanas, fue consecuencia de la concentración de oportunidades en las áreas urbanas. Si una o, a veces, dos o tres ciudades llegaron a dominar el sistema urbano de un país, fue porque las oportunidades de empleo y las posibilidades de sobrevivir eran mejores en ellas. Sao Pablo y Río de Janeiro; Bogotá y Medellín; Quito y Guayaquil; Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; La Paz y Santa Cruz de la Sierra; Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, Ciudad de Guatemala, San José, Santo Domingo, Santiago de Chile y Asunción llegaron a dominar los sistemas urbanos de sus respectivos países porque en ellas se concentraron las actividades económicas, las oficinas públicas, los servicios y las inversiones. Es decir, esas aglomeraciones que

dominan económica y políticamente a cada país, continuarán urbanizándose rápidamente en las próximas dos o tres décadas sólo si siguen concentrándose en ellas las mejores oportunidades de empleo y de sobrevivencia.

Hay varias razones para creer que los factores económicos y políticos que impulsaron esa rápida urbanización están cambiando. El crecimiento sin precedentes de la economía mundial y de la economía de muchos países de la región durante las décadas de 1950, 1960 y los primeros años de la década de 1970 impulsó la rápida urbanización. Nadie prevé un retorno a un crecimiento económico tan generalizado y rápido.

La historia nos alerta también sobre la irreabilidad de creer que las tendencias del pasado determinan el futuro.² El futuro urbano dependerá de los cambios sociales, económicos y políticos en cada país y de los cambios que se están produciendo en el orden económico mundial: el auge del Japón, la declinación relativa de los Estados Unidos; la creación de un nuevo mercado mundial con la OECD, cons-

truyendo una gran muralla alrededor de Europa; la carrera de las empresas para localizarse detrás de esa muralla y el auge de la informática tendrán mucha influencia en la situación laboral de las ciudades de América Latina. Los últimos 30 años son, por lo tanto, una muy pobre guía sobre lo que ocurrirá en los próximos 30 años. Sin duda los gobiernos pueden estimular la urbanización, especialmente si asocian el buscado dinamismo de la economía nacional con la vitalidad potencial de las economías urbanas, lo que constituye una opción válida, por lo menos a corto plazo. Pero los datos recogidos de los pocos censos nacionales de población realizados en 1990 y 1991, reflejan una disminución en las tasas nacionales de urbanización, así como en las tasas anuales de crecimiento de la población de las grandes ciudades. Seguramente deben vincularse esas tasas de declinación con el

2. Si el crecimiento de Sao Pablo entre 1886 y 1916 hubiese sido extrapolado al año 1990, esta ciudad tendría hoy 110 millones de habitantes y no alrededor de 20 millones.

estancamiento de las economías y la creciente pobreza urbana, que desalienta las migraciones a las ciudades y, en algunos casos, como en Buenos Aires y Montevideo, impulsan la emigración de parte de sus habitantes hacia otros puntos del interior.

Con todo, estas últimas tendencias no son motivo para alegrarse. Muchas aglomeraciones de América Latina agregan por año 50 mil, 100 mil o más habitantes por lo menos y entre ellas, cuatro o cinco agregarán 200 mil o más por año durante la década de 1990. Nadie sabe cómo servir las demandas de empleo, ingresos, servicios, viviendas e infraestructura urbana de crecimientos demográficos tan importantes. En cierto modo, áreas metropolitanas como Santo Domingo, Managua, Ciudad de Guatemala, Puebla, Ciudad Juárez, Curitiba, Manaos, Coiania, Barranquilla, Guayaquil, Quito, Lima-Callao, Arequipa, Valencia, Asunción y muchas más, que duplicaron su población en veinte o quince años o menos, son ciudades nuevas. Como las zonas periurbanas de las áreas metropolitanas de mayor tamaño, donde aparecen, alrededor de Ciudad de México, Sao Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Caracas, municipios que también duplican su población cada diez, quince o veinte años.

La construcción, mantenimiento y administración de aglomeraciones que crecen con esa intensidad en tan pocos años, en países cuyo futuro desarrollo es incierto, plantean interrogantes de casi imposible respuesta. Goiania, en el Brasil, que tenía 131 mil habitantes en 1960 y se piensa tendrá más de 2.500.000 en el año 2000, no es una aglomeración veinte veces mayor en cuanto a población y muchas más veces mayor en cuanto a extensión, sino algo cultural e institucionalmente tan distinto y con tan rápido cambio, que cuesta entender de qué manera puede guiarse su desarrollo. Hay muchas situaciones parecidas.

Cuando se analiza la ciudad contemporánea de América Latina con

frecuencia se recurre a comparaciones con las ciudades del mundo desarrollado. No sólo las diferencias de sus tasas anuales de crecimiento de población son enormes, sino aún mayores las diferencias entre la capacidad de inversión en proyectos urbanos que existe entre los países industrializados y los que no lo son.

La población urbana que accede a ingresos informales en los países industrializados del Norte es, en muchos casos, numéricamente importante, pero en ningún caso llega a representar el 50% o más de los ingresos, como en una ciudad latinoamericana. Los pobres en Latinoamérica no tienen cobertura social ni subsidios por desempleo. La educación no les garantiza empleo. Jubilarse significa aceptar un estado de indigencia. Las diferencias son, entonces, cualitativas y cuantitativas. Aun dentro de América Latina las diferencias culturales y su desarrollo institucional deben hacernos reflexionar en que no existe una ciudad latinoamericana sino varias ciudades latinoamericanas con algunos aspectos comunes: la proliferación de la pobreza, servicios que funcionan mal o casi no existen, gobiernos locales débiles y un deterioro creciente del medio ambiente, especialmente de los múltiples microambientes donde viven los pobres. Son ciudades descapitalizadas que funcionan muy mal y cuyo futuro es incierto, porque no existe una reacción colectiva ni el liderazgo político, empresarial, profesional y sindical necesario para construirlas y administrarlas mejor.

La pobreza es la causa y también la consecuencia de lo que Gunnar Myrdal llamó "el Estado blando". Para los políticos es más fácil definir políticas para Estados prósperos o que se creen llegarán a ser prósperos a corto plazo, que políticas para eliminar la pobreza o para aliviar sus peores efectos. Creo que, en buena medida, se debe a la escasa capacidad colectiva de los pobres para sostener sus derechos. Para los pobres sobrevivir es obviamente más urgente, y su escasa preparación y

la fragmentación y discontinuidad de muchos de los esfuerzos populares limitan sus acciones. Los ricos, en cambio, tienen los recursos y los medios para hacerse oír y cambiar las políticas que rechazan.

Un continente en continua transición que no llega a encontrar su rumbo

Hace algunos meses conversaba con un grupo de amigos, todos ellos representativos del pensamiento más avanzado sobre la ciudad, y coincidíamos en que los países de América Latina vivían una etapa de transiciones múltiples y encadenadas en varios aspectos esenciales para comprender su futuro. Reflexionaba después, que si por transición entendemos el paso de un modo de ser o de estar a otro distinto, la década de 1980 fue una década –no una época– de transición, con avances y también con retrocesos. Tal vez hay sido, más bien, el inicio de una nueva época de transición, pero para que ello sea así, es necesario tener pautas claras que nos permitan comprender el mundo que queremos dejar y el mundo al que aspiramos. Reflexionar sobre el futuro de nuestros países y de sus ciudades es un ejercicio que no hemos iniciado.

Lo más importante que ocurrió durante la década que acaba de terminar es un cambio en el clima político. Un aumento de los procesos de democratización en muchos de los países de la región y en sus instituciones, parecería haber debilitado las fuerzas de civiles y militares inclinados a los regímenes dictatoriales. Sin embargo, estamos lejos de alcanzar una mayor fusión entre múltiples intereses encontrados. La transición política no se está produciendo en un clima de ideas y está siendo conducida por grupos minoritarios que excluyen a los pueblos urbanos y rurales. Para enfrentar la llamada crisis de la deuda externa y la caída de los precios de los productos básicos de la región, los gobiernos

lanzaron sucesivos planes, programas y políticas recessivas y con un consenso muy frágil. Ante las situaciones económicas que prevalecen, la democracia política encuentra dificultades para consolidarse.

Lo más grave es que lo social es un tema postergado, si no abandonado. Me pregunto si es posible construir naciones cuando la gran mayoría de la población no llega a convertirse en ciudadanos con sus derechos respetados. El desarrollo es para todos. La ciudad es para todos sus habitantes y el equilibrio de oportunidades debería ser una meta de las políticas nacionales de educación, salud y vivienda y la base de sistemas comprensivos de apoyo a quienes más lo necesitan para integrarlos a la vida de sus países. Como decía Gregorio Weinberg en un seminario reciente, el peligro de esta transición, como se está conduciendo, es convertir al pueblo en público, al trabajador en un instrumento y a la cultura en un término sin sentido, adulterado por un sistema de educación en crisis y por medios masivos de comunicación que falsifican los valores.³

Sin duda, los nuevos espacios de libertad que se han ganado facilitan la sobrevivencia de las mayorías. Pero, ¿qué pretenden las élites económicas y políticas, crear naciones y ciudades de sobrevivientes? Presionado por las políticas de reajuste económico que los gobiernos se sienten obligados a aceptar al actuar de manera individual, el Estado se retira cada vez más del financiamiento e implementación de políticas sociales. La descentralización de los programas de educación, salud y vivienda crean incertidumbres y una disminución de su calidad.

En América Latina se vive también otro tipo de transición, de características y proporciones dramáticas. La pobreza no es ya un problema exclusivamente rural, como solía creerse. Las concentraciones de pobreza están hoy en las grandes áreas metropolitanas, pero afectan igualmente a las ciudades grandes e intermedias. Nadie sabe el

número de pobres e indigentes que existen en América Latina. El Banco Mundial informaba en 1985 que el 19% de la población total (70 millones) estaba por debajo de la línea de pobreza y el 12% (50 millones) por debajo de la línea extrema de pobreza. Creo que las cifras son más altas. Si ser pobre significa tener una mala nutrición, estar mal vestidos, tener un bajo nivel de alfabetización y con frecuencia una mala salud y habitar viviendas precarias, en terrenos con tenencia ilegal o cuestionada y sin los servicios básicos, el número de pobres es bastante más alto. Seguramente el número de pobres urbanos solamente, cabezas de familia y sus dependientes, con ingresos que no les alcanzan para cubrir los gastos que demanda la canasta familiar, debe llegar a 140 millones de personas. A ellos se agrega la mayor parte de la población rural.

¿Quiénes son los pobres urbanos? En muchas ciudades de América Latina ha nacido la cuarta generación de *villeros*, o sea, de habitantes de villas miserias o *favelas* o *callampas*. Son inmigrantes rurales y otros nacidos en las ciudades y sus descendientes, a los que se han unido los "nuevos pobres", familias que han visto declinar sus niveles de vida rápidamente porque se han jubilado, están enfermos o no pueden enfrentar los gastos esenciales de comida, alquiler, transporte y salud. De esos 140 millones de pobres urbanos, tal vez la mitad sean niños y adolescentes menores de 14 años.

Todos coincidimos en el diagnóstico y en las causas de la pobreza: desempleo o ingresos muy reducidos y necesidades básicas insatisfechas. Todos coincidimos en que son rasgos comunes a las ciudades de América Latina. Pero hasta ahora nos hemos concentrado en el diagnóstico de lo que ha pasado y no en el futuro. Caeamos en generalizaciones, pero para actuar sobre la pobreza no es lo mismo pensar en programas para una familia numerosa, con ambos padres, que para una familia encabezada por una mujer

sola, o para una pareja de ancianos, o una familia con el padre enfermo, o desvalido, o para niños o adolescentes.

Las masas pobres urbanas de América Latina constituyen el mayor desafío a la legitimidad de los gobiernos democráticos. Ya son un desafío al poder económico. Ni los gobiernos electos en la última década ni el poder económico se deciden a actuar. Tampoco los investigadores, los colegios profesionales, los sindicatos y la Iglesia se han lanzado a buscar soluciones de fondo porque las soluciones de fondo afectan sus intereses. Nadie está dispuesto a ceder nada. En este contexto, los pobres buscan sobrevivir dentro o fuera de la ley y no esperan planes, en los que ya nadie cree, y presionan al Estado para que ajusten sus políticas a la situación real.

Es alarmante que en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires realizadas en octubre de 1991, el candidato de la extrema derecha, un militar forzosamente retirado por intentar varias veces golpes contra un gobierno recientemente electo, recogiese más del 8% de los votos, especialmente entre la gente humilde de las villas miserias. Igualmente alarmante es que el gobierno de Venezuela, ante un golpe militar anunciado con mucha anticipación, intentase hacer desaparecer formas abiertas de expresión e instituciones democráticas una vez controlada la situación; una encuesta publicada por el diario *El Nacional* de Caracas el 15 de marzo de 1992, señalaba que un 61% de los entrevistados calificó a los militares sublevados como "unos idealistas que buscaban el bienestar del pueblo" y

3. En octubre de 1990, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América Latina, organizó un seminario sobre el tema "El futuro de la ciudad de América Latina". Participaron Gregorio Weinberg, Richard Morse, Paul Singer, Susan Eckstein, Joseph Tulchin, José Luis Coraggio, Luis Alberto Romero, Augusto Ortiz de Zevallos, Néstor García Canclini, Patricio Gross, Margarita Gutman, Pedro Pérez, Alfredo Stein, Amilcar Herrera, Oscar Moreno, Rosario Aguirre, Cuauhtémoc Cárdenas y Jorge E. Hardoy.

sólo un 17% los definió como “ambiciosos que buscaban el poder”. La población comprende que los partidos políticos no son entidades democráticas y los cuerpos legislativos que se eligen –concejos deliberantes, congresos nacionales y provinciales– no son representativos de la población, sino opciones cerradas y preparadas por los partidos para cada elección.

El crecimiento de la pobreza urbana y la falta de respuesta a sus necesidades básicas han tenido una gran influencia en los procesos de urbanización más recientes. Estamos en medio de una acelerada transición en la distribución espacial de la población en cada país de América Latina.

En la década de 1990 ó a principios de la década siguiente, América Latina como conjunto comenzará a perder población rural en cifras absolutas. El número de habitantes rurales comenzó a declinar en Argentina y Chile en la década de 1950, en Uruguay en la década de 1960, en Brasil, Cuba y Venezuela en la de 1970; en otros países latinoamericanos la población rural ha dejado de crecer. Aún así, la tasa anual de crecimiento de la población urbana que se espera para América Latina como conjunto, durante la década de 1990, será superior al 2,5%.⁴

El crecimiento de la población urbana es ya el resultado del crecimiento natural de las ciudades. Crecen, a veces muy rápidamente, los suburbios más alejados y se detiene el crecimiento de las ciudades centrales y de muchos de los municipios que forman el primer anillo alrededor de ellas. Crecen más rápidamente muchas áreas metropolitanas de tamaño medio que las grandes áreas metropolitanas de cada país: Curitiba y Goiania crecen más rápido que São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y Recife, las cinco áreas metropolitanas más pobladas del Brasil en 1980; Mendoza, Jujuy, Tucumán y Neuquén que Buenos Aires, Córdoba y Rosario; Ciudad Juárez y Tijuana que Ciudad de México; Arequipa y Trujillo que Lima. En

todos los países hay ciudades de tamaño medio que presentan tasas aún más altas que las áreas metropolitanas de segundo rango, como las mencionadas. A pesar de ello, es tal el peso demográfico, económico, político y cultural de la principal aglomeración de cada país, que esa espontánea descentralización es más aparente que real.

Desde la década de 1950 ó 1960 comenzó la ocupación de espacios de muy baja densidad en cada territorio nacional. La urbanización ha llegado hasta ecosistemas desocupados o poco ocupados durante el período colonial y el primer siglo y medio de vida independiente: a la Amazonía brasileña, colombiana y peruana; a la Guayana venezolana; a la Patagonia argentina y chilena; a la región oriente de Bolivia y noroeste de Paraguay, y a la costa del Caribe en los países de América Central y a los estados del norte de México. Ciudades con unas decenas de miles de habitantes en 1950 ó 1960 tienen hoy cerca de un millón de habitantes; pueblos con unos pocos miles de habitantes en esos años tienen hoy cien o doscientos mil habitantes. La ciudad, en estas fronteras internas, presenta problemas muy distintos de sustentabilidad, pero aún no los discutimos.

Estamos demasiado acostumbrados a vivir en espacios territoriales conocidos y no nos planteamos los problemas de construir y mantener ciudades en ecosistemas recientemente ocupados, a pesar de que en esos ecosistemas se están produciendo las más altas tasas de crecimiento de la población y de la población urbana. Estos cambios en la distribución espacial de la población en cada país no están realmente orientados por los gobiernos. Creo que debemos buscar en las múltiples y diferentes situaciones de pobreza rural y urbana una explicación. Montevideo pierde población; el distrito federal de Caracas se ha estancado; por primera vez en su historia la tasa anual de crecimiento demográfico del área metropolitana de Buenos Aires está

por debajo de su tasa anual de crecimiento natural. Cuando conozcamos los resultados de los censos de población de la década de 1990, sabremos si es ésta una tendencia más generalizada o si es sólo una situación propia de los países más urbanizados.

Lo que sí es cierto, es que cada vez es más difícil vivir en las grandes ciudades. La población no viene o se va porque son más caras, la calidad de los servicios sociales no son ya, como antes, una atracción, y porque cada vez es más difícil encontrar en ellas ingresos y, desde hace tiempo, empleos estables. Además, son ámbitos cada vez más peligrosos para vivir. Hasta hace unas décadas esas ciudades eran espacios más o menos coherentes. Desde hace unos años la urbanización se desurbaniza extendiéndose interminablemente. La ciudad compacta ya no existe.

Algunos se preguntan, ¿cómo haremos para vivir en aglomeraciones despedazadas, de 25 ó 30 millones de personas? Nadie sabe cómo construir y administrar ciudades que agregan centenares de miles de habitantes cada año. Los gobiernos no saben, no pueden, o no quieren, mantener ciudades que año tras año pierden buena parte del capital instalado en obras públicas, en fábricas y en edificios construidos con fines sociales. Son cada vez más aglomeraciones con culturas discontinuas, atadas con telas de araña, donde hasta las sólidas sociedades barriales parecen debilitarse.

Las aún débiles democracias políticas tratan de consolidarse en medio de una crisis económica, cuyo impacto se hará sentir en las sociedades latinoamericanas y en sus ciudades por muchos años y, especialmente, en los grupos pobres. Vivir en democracia sigue siendo la aspiración de la mayoría de la población. La crisis económica hace más vulnerable las de-

4. En contraste, la que se espera para Europa Occidental como conjunto y para la misma década es del 0,24%.



mocracias, sometidas a presiones internas y externas que recargan su recuperación en los grupos más pobres.

Un país moderno es el que se preocupa por su población. Y es en las ciudades, que han sido siempre el motor del desarrollo de la región, donde se decidirá el futuro económico y político de la región. Pero América Latina no está aislada del mundo. Su impredecible futuro está condicionado por las estructuras políticas, económicas y tecnológicas internacionales. Su impacto en el medio ambiente, en el sobreconsumo de unos y en la pobreza actual de muchos, ha erosionado a la ciudad. Los gobiernos y las élites dirigentes no tratan problemas para los que no están dispuestos a encontrar respuestas. Tampoco los centros de enseñanza universitaria y de investigación parecen interesados en integrarse y definir la factibilidad del desarrollo de cada país y del conjunto de

la región, considerando sus oportunidades y limitaciones. El desarrollo es impensable si se mantienen las actuales desigualdades socioeconómicas con los modelos de crecimiento que conducen a un aumento de la pobreza, del atraso y de las desigualdades y a la degradación ambiental,⁵ pero no tenemos modelos alternos que puedan negociarse con los centros mundiales del poder. Es éste un debate necesario y urgente.

Comenzando a pensar la ciudad del futuro

La ciudad del futuro como proyección de la ciudad actual

Podemos pensar en la ciudad del futuro como una proyección de las tendencias y características más salientes de la ciudad que se construyó du-

rante las últimas décadas. Esta visión tendencial se basa en la aceptación de que los países de América Latina mantendrán los estilos de desarrollo actuales. El cuadro que se presenta es tan inhumano, ambientalmente tan insostenible, económicamente tan ineficiente y políticamente tan vulnerable que cuesta creer que las sociedades de la región no tengan capacidad para reaccionar. De seguir así, existirán en esas ciudades decenas de millones de niños y adolescentes viviendo en las calles; centenares de millones de pobres viviendo hacinados en villas miserias sin acceso al agua potable, a los servicios primarios de salud y a otros servicios básicos para mejorar la calidad de sus vidas; millones y millones de desocupados y de enfer-

5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Banco Interamericano de Desarrollo, *Nuestro futuro común*, Nueva York, 1990.

mos, con una educación precaria, y un número cada vez mayor de madres totalmente desprotegidas como cabezas de familias. En todos los países de América Latina de los que tengo información, el porcentaje de hogares urbanos bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia al promediar la década de 1980 era superior que en 1970.⁶

Nuestra manera de pensar la ciudad del presente está influenciada por nuestras formas de pensar la ciudad del pasado. Los gobiernos anuncian periódicamente soluciones parciales, muchas de las cuales nunca llegan a ponerse en práctica. La idea oficial de la ciudad refleja una grave inercia ante los problemas que plantea la ciudad contemporánea y la incapacidad para reemplazar una aparente visión totalizadora, por otra que descubra y rescate los múltiples matices que tiene. En esa ciudad, la pobreza es presentada como una situación uniforme cuando en todas hay pobrezas, no una pobreza. La pobreza es presentada como la falta de los pobres y rara vez introducida como una condición impuesta por los modelos económicos de las élites dirigentes. La crisis urbana es, por una parte, una crisis de operatividad, pero la ciudad es también una incógnita en la que los problemas para los que no hay respuesta no se tratan.

Nunca en los países de América Latina existió una desigualdad material tan grande entre ricos y pobres. Nunca fue tan grande la desigualdad entre países ricos y pobres en el mundo. Países con los niveles de pobreza y los niveles de vivienda, servicios y salud que existen en las ciudades de América Latina no pueden progresar. La pobreza es el primer enemigo del progreso, del mismo modo que una población sin salud y sin educación, no puede desarrollarse.

Resulta muy difícil visualizar cómo pueden sobrevivir países cuyas ciudades están cayéndose a pedazos por falta de mantenimiento y en las cuales nadie sabe dónde se instalarán y de

qué vivirán los centenares de miles o decenas de miles de personas que se agregan a muchas de ellas todos los años. 350 personas llegan diariamente a Lima. Lima, decía Ortiz de Zevallos, es invadida por el país pagando el precio del centralismo: la mitad de los limeños no son limeños. Lo mismo puede decirse de otras ciudades. Siempre puede esperarse que encontrarán ingresos en una economía informal que con sus características actuales ya tiende a saturarse, pero esa espera no tiene fundamentos sólidos.

Mediante el urbanismo y la arquitectura oficial, y el intencionado control que tratan de ejercer los partidos políticos y las instituciones oficiales sobre las iniciativas de base, no hay solución para la ciudad. Todavía muchos creen que grupos de personas con buenas intenciones, llamados planificadores, pueden introducir cambios, hacer cosas, pero no quieren comprender que una ciudad permanentemente informal y crecientemente pobre no puede planificarse con conceptos extraños a ella.

No es necesario emprender investigaciones detalladas para darse cuenta de que existe una inmensa brecha entre el crecimiento de la población urbana de América Latina y el de sus necesidades básicas insatisfechas, y los proyectos e inversiones emprendidos por los gobiernos y el sector privado para satisfacerlas y para apoyar el crecimiento de las economías urbanas. El deterioro es visible y tiene un impacto negativo en casi todos los habitantes pero, esencialmente, en las condiciones de vida de los pobres, incluyendo a decenas de millones de niños y adolescentes, y en el funcionamiento de las ciudades. El deterioro es visible en: 1) la decadencia de la infraestructura urbana, de las calles, accesos, servicios públicos y de la vivienda; 2) en los procesos sin control, mediante los cuales se expanden las áreas urbanas, especialmente a través de ocupaciones ilegales de terrenos, de la ocupación de tierras inconvenientes y

hasta peligrosas para la población que las ocupa, y de urbanizaciones ilegales; 3) el rápido crecimiento de las villas miserias y de formas ilegales de ocupación y su hacinamiento cada vez mayor en las diversas formas de viviendas baratas alquiladas, como son los conventillos y las pensiones; 4) una constante y creciente competencia entre los grupos de bajos ingresos por conseguir un lugar en un ómnibus o en un tren subterráneo; en la proliferación de las actividades informales, que, con frecuencia, proveen a más de la mitad de la población de una ciudad, con algunos y muy diferentes ingresos; en la competencia por un terreno cercano a una línea de transporte público que pueda ser invadido o de un lugar en una vereda o en una plaza para vender algunos productos. Si profundizamos nuestro análisis encontraremos que la competencia es enorme por acceder al agua potable, a un sitio donde arrojar la basura, por una cama en un hospital y por un banco en una escuela; que el deterioro de la calidad ambiental general y en especial de los barrios pobres es ya enorme, y que las diferencias son cada vez mayores entre la ciudad de los ricos y la de los pobres, entre la de los pobres y la de los más pobres. En otras palabras, entre la ciudad legal, construida de acuerdo a las normas oficiales, y la ciudad ilegal, levantada por la población misma, fuera de toda norma oficial.

Nada, en la suma de los programas y proyectos oficiales, con o sin préstamos multilaterales y bilaterales, permite suponer que esta situación pueda ser revertida en las próximas décadas. Es posible que en algunos países se fortalezcan los gobiernos locales, que comiencen a ensayarse con créditos directos a las comunidades y sus organizaciones, que comiencen a controlarse mejor los aspectos más visibles

6. Centro Económico para América Latina y el Caribe, Informe presentado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL a la Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Guadalajara, México, junio 18-19, 1991.

del deterioro ambiental y se apliquen normas y legislación que ya existen y que pocos respetan. Aun reunidos estos programas y proyectos tendrán, en el mejor de los casos, efectos superficiales. Nada permite suponer que alcanzaremos pronto ciudades participativas, más democráticas, más igualitarias, compatibles con el medio ambiente y que incluyan estrategias generosas y amplias que respondan a las demandas sociales. Sugerir propuestas diferentes es muy difícil en países que nunca tuvieron políticas científicas, económicas, sociales y ambientales a largo plazo.

Cada país debe encontrar sus propias soluciones urbanas utilizando mejor lo que tiene. No pueden basarse en una supuesta ayuda internacional. Sirva como ejemplo que la suma de los préstamos multilaterales y bilaterales para proyectos de desarrollo urbano y para satisfacer las necesidades básicas de la población representaron, para la totalidad de América Latina, 3 dólares por año y por habitante para el período 1980-1989 a valores constantes del dólar en 1985. Además, una estimación de los costos que costaría dotar a una familia pobre con vivienda y servicios básicos sugieren que no existe posibilidad alguna de cambios durante la década presente, pero también sugieren que es posible comenzar a revertir algunas tendencias negativas y mejorar las características más degradantes, con un adecuado liderazgo político y utilizando mejor los recursos de cada país y de cada ciudad.

La pobreza es el problema más serio de América Latina. Su futuro depende de la solución de esta situación ancestral. En las ciudades de América Latina viven millones de pobres e indigentes. En muchas, los pobres e indigentes constituyen el 50% o más de la población de la ciudad. Una familia pobre es aquélla que con sus ingresos no puede adquirir la canasta básica de alimentos que necesita para subsistir; es decir, una familia que carece de ingresos adecuados y también de bienes muebles y de capital.



Fotografía Gloria Upegui

Los miles de migrantes siempre esperan encontrar un ingreso en el sector informal, pero éste tiende cada día a su saturación.

Contrariamente a lo que se cree, los pobres contribuyen muy poco a la degradación del ambiente urbano y de los suelos y fuentes de aguas de una región. En primer lugar, consumen muy poca agua. Una familia pobre que vive en una villa miseria puede utilizar entre 100 y 200 veces menos agua que una familia rica del mismo tamaño. En segundo lugar, por lo general, los pobres ocupan tierras de muy poco valor, con frecuencia terrenos que se inundan periódicamente o las laderas de colinas que son arrasadas por deslizamientos o terrenos degradados por residuos industriales; además, en relación a su número, ocupan un porcentaje reducido de un área metropolitana o de una gran ciudad, ya que suelen vivir hacinados en conventillos ubicados en los distritos centrales o en villas miserias de alta densidad que ocupan

terrenos invadidos. En tercer lugar, utilizan muy poca energía eléctrica y casi no contribuyen con sus actividades a la contaminación del aire, que proviene esencialmente de las industrias, los escapes de los automóviles y de usinas termoeléctricas. En relación con su número, tampoco contribuyen proporcionalmente a la congestión del tráfico y al ruido que causa, ya que se movilizan mediante el transporte público o en bicicleta y caminan largas distancias para ahorrarse el transporte. Los hijos de los pobres ocupan superficies reducidas en los edificios escolares y las familias pobres son atendidas en hospitales con frecuencia anticuados, mal equipados y con un elevado hacinamiento. Una familia pobre produce mucho menos basura que una de ingresos medios o una familia rica, y la basura que produce es en propor-

ción alta biodegradable. Es cierto que en algunas ciudades medianas consumen leña como combustible, contribuyendo a la degradación de los ríos y arroyos que cruzan una ciudad al arrojar en ellos sus residuos.

En otras palabras, los pobres casi no contribuyen en relación con su número a la degradación ambiental, sino que son los más afectados por ella. Esto se nota en la salud de los pobres, afectada por la presencia de patógenos y poluciones en los lugares de trabajo y en sus viviendas que constituyen una amenaza a su salud y a sus vidas. Es natural esperar que la degradación ambiental contribuya a exacerbar la pobreza. Es difícil combatir ciertas enfermedades sin agua para higienizarse y es difícil superar la desazón que produce vivir en barrios sin agua y con poca luz, donde la basura no es recogida y los pozos ciegos se rebasan. Para los pobres, movilizarse a los lugares de empleo o de ingresos informales demanda cuatro o más horas diarias hacinados en autobuses y a un precio que muchas veces no pueden pagar.

Es importante comprender estas diferencias entre la ciudad de los ricos y la de los pobres, entre la ciudad legal y la predominantemente ilegal, entre la ciudad del alto consumo y la ciudad de quienes tratan de sobrevivir, para delinear la futura ciudad. No hay una pobreza urbana generalizable, hay distintos tipos de pobreza interactuando y compitiendo por espacios y servicios cada vez más alejados.

Comenzando a construir la ciudad deseable

I Cómo pasar de un manejo destructivo de la ciudad, a un manejo conservativo, y de éste a un manejo constructivo y sustentable? ¿Cómo pasar de un manejo que por falta de mantenimiento y por falta de inversiones básicas contribuye al estancamiento de las economías urbanas y a la descapitalización de la ciudad, a otro manejo que co-

mience por estabilizar lo que existe, frente a las necesidades básicas insatisfechas, para pasar luego a un manejo constructivo y sustentable que maximice los recursos de la ciudad, de la región y del país?

En un seminario organizado por la institución que presido y en el que participaron directores de planificación de dos áreas metropolitanas de gran tamaño, investigadores y políticos latinoamericanos, llegamos a la conclusión de que la clave está en maximizar el uso, en cada ciudad y en cada país, de lo que existe. Pero, ¿qué existe en cada ciudad y en sus barrios, que pueda utilizarse de forma inmediata, iniciando así una alternativa a la ciudad que se autodestruye al descapitalizarse continuamente?

No son iguales los recursos, la demanda y el potencial de Sao Pablo, la única ciudad de América Latina que se está adaptando a la Modernidad en los medios de transporte, en las comunicaciones y hasta en los empleos industriales, que Lima cuya población crece rápidamente pero que declina económicamente, o que Port-au-Prince, uno de los resultados más patéticos de la región de la anarquía política, la ineficacia administrativa y la represión. No son iguales las urgencias de México Metropolitano, declarada el 17 de marzo pasado por tercera vez en pocos meses en situación de emergencia ambiental, debido a índices de ozono que alcanzaron la cifra de 398 puntos, provocando la suspensión de las clases en todas las escuelas del Estado de México, la supresión del 50% de las actividades de industrias con chimeneas y el retiro de la circulación de más de un millón de vehículos, que las urgencias del Área Metropolitana de Buenos Aires: una región abierta y con vientos suaves continuos, donde las urgencias mayores residen en los bajos niveles de servicios públicos que afectan a casi el 50% de su población. Tanto Buenos Aires como México enfrentan serias situaciones de subempleo e ingresos reales declinantes.

La ciudad no es en América Latina un tema de discusión. Su futuro no figura en las agendas de los concejos deliberantes y de los congresos nacionales. Su elaboración tampoco forma parte de los temas de las direcciones de planeamiento urbano, presionados por encontrar soluciones a problemas que se presentan diariamente, y de los políticos y sus partidos, sumergidos en los tiempos electorales y sin interés en preparar una agenda urbana con una visión de largo plazo.

Esta es una era de grandes contrastes. Es una era de cambios. Pero los cambios deben ser conducidos con una visión correcta de lo que necesitamos y deseamos y de lo que podemos alcanzar. Deberíamos preguntarnos continuamente, especialmente en una era de cambios, qué clase de naciones deseamos y en qué tipo de sociedades aspiramos a vivir. Presionados por la recesión, déficits en las balanzas comerciales, deudas crecientes, presiones inflacionarias y economías que crecen lentamente o se han estancado, la mayoría de los gobiernos, de los grupos empresarios y de los líderes sindicales parecen incapaces de ponerse de acuerdo y formular las propuestas correctas. Todos buscan solucionar a corto plazo sus problemas. La situación económica refuerza el individualismo. Nadie discute el futuro. El resultado está a la vista: el 30% ó el 40% de una ciudad la construyen los ricos, pero también la construyen, como pueden los pobres, porque también ellos tienen que vivir en algún lugar.

¿Es posible discutir la futura ciudad de América Latina en este contexto? Creo que es imperativo. Tal vez sea la necesidad más urgente, porque la ciudad del futuro ya comenzó a construirse y afectará directamente a las vidas de tres de cada cuatro latinoamericanos nacidos en este año, porque de la evolución de las economías urbanas depende en gran parte la reactivación económica de cada país y porque de los servicios que incluyan dependerá la salud y los niveles de educa-



Cruceficación - Carrizosa

ción de sus habitantes. Creo que podemos influenciar muy poco los aspectos cuantitativos de la urbanización, pero estoy convencido de que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en influenciar sus aspectos cualitativos.

Debemos comenzar a pensar en la ciudad deseable, aunque a muchos les cueste visualizarla. Es una ciudad donde los derechos humanos deberían ser aceptados como un aspecto fundamental de nuestra civilización, donde la ley sea aplicada sin diferencias de clase, y donde el concepto de equidad intergeneracional adquiera tal fuerza que nuestras decisiones contemplen una visión del futuro legado que recibirán nuestros hijos. En otras palabras, o aprendemos a vivir y a pensar inteligentemente o la vida seguirá aplastándonos con un ritmo que ya no seremos capaces de detener.

Las ciudades de América Latina están ubicadas en ecosistemas distintos. En cada uno de ellos las economías urbanas son ya los motores del

desarrollo regional. Todas están ubicadas en ecosistemas que han sido modificados por el hombre a lo largo del tiempo. Las de mayor tamaño han alterado profundamente el ecosistema original porque, gradualmente al principio pero muy rápidamente en las últimas décadas, han extraído, cada vez a un costo mayor y en áreas cada vez más extendidas, sus recursos de agua, tierras, bosques, canteras y otros recursos renovables y no renovables. La ciudad le devuelve al ecosistema sus desechos industriales y domiciliarios, los modifica o destruye con su expansión sin control, transformando áreas a veces muy productivas en paisajes erosionados, moribundos.

Si el objetivo de la ciudad es incorporar dignidad a la vida de sus habitantes y su meta inmediata es salvar vidas humanas, eso significa, ante todo, satisfacer sus necesidades básicas. El efecto más perverso de las actuales políticas es apoyar el rol de minorías aisladas y pequeñas que pri-

van a la población de sus roles como ciudadanos de naciones democráticas.⁷ Esas élites apoyan la idea de que mercados autorregulados solucionarán los problemas de los precios de los alimentos, de los salarios mínimos y del acceso a la tierra, la vivienda y los servicios urbanos. No existen precedentes en América Latina de que esto haya ocurrido alguna vez, aun en los largos períodos de rápido crecimiento económico de la década del 60 y comienzos de la del 70. Por el contrario, se produjo una mayor concentración del capital y de los ingresos en el 5% o en el 10% con los ingresos más altos en cada país.

Ciudades como las que he descrito sólo pueden construirse bajo gobiernos democráticos y representativos. Una herencia de los gobiernos dictato-

7. Jorge E. Hardoy, "Building and managing cities in a state of permanent crisis", en *Working Paper No. 187*, Wilson Center, Latin American Program, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 1990.

riales y de los gobiernos elegidos pero no representativos, ha sido la disminución en los roles que cumplen las organizaciones comunitarias y un aumento de la inestabilidad social. Ciudades que se gobiernan verticalmente, con las mayorías segregadas en barrios sin servicios o deteriorados, son cada vez más violentas e inestables. Casi ninguna ciudad de América Latina escapa a estas características.

Si no tenemos capitales para construir las ciudades que imaginan los políticos y los tecnócratas, parecería lógico dedicar los recursos que existen y no utilizamos, y los que puedan atraerse para apoyar, por un lado, una multiplicidad de proyectos de escala mediana y pequeña con base comunitaria, y por el otro, inversiones en proyectos y programas que actualicen y modernicen el equipamiento de la ciudad, siguiendo una estrategia que responda a las demandas sociales y a sus más urgentes necesidades de funcionamiento.

Reforzar los procesos democráticos es fundamental y los proyectos con base comunitaria pueden convertirse en escuelas de democracia a nivel comunitario y local. Es decir, reunir a la gente de diferentes grupos sociales a conversar para comprender sus mutuos problemas, para organizarse y participar, para desarrollar juntos su capacidad para reforzar los gobiernos locales. Creo que es la única forma de rechazar las actitudes paternalistas, clientelistas y asistencialistas favorecidas por los partidos políticos y los gobiernos.

La construcción de las ciudades es responsabilidad de todos, pero las mayorías rara vez comprenden cómo su participación puede ayudar. Simplemente no se las deja realmente participar. Hace más de cuarenta años, el urbanista norteamericano Henry Churchill tituló uno de sus libros *La ciudad es su población*. En su país como en los nuestros, eso no es aún así. Por eso hay que pelear sin pausas por espacios de libertad, por espacios

que nos permitan pensar y reflexionar sobre lo que es necesario hacer.

Pueblos con confianza en sí mismos deberán detener en las calles a los intendentes, a los concejales y a los miembros del Congreso e interrogarlos sobre sus promesas incumplidas, cuestionar sus decisiones cuando las timan sus intereses y no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Uno de los personajes de una obra de Brecht, decía: "El pueblo está contra el gobierno" y el burócrata le respondía: "Hay que cambiar al pueblo". Los gobiernos no son las únicas fuentes de sabiduría. Creer que un país puede desarrollarse impulsado desde arriba es un concepto falso. Esperar que la salud, la educación, la vivienda y los programas sociales sean incorporados para todos, una vez que los países de América Latina crezcan económicamente, no tiene en América Latina precedentes históricos.

Las élites económicas dicen que las democracias de América Latina son lentas y los gobiernos electos son inefficientes. Los pobres tienen una visión distinta. Se mueven en un mundo de escasas posibilidades. Son realistas y persistentes, y son astutos en la elección de los caminos que pueden seguir para lograr sus objetivos. No son conservadores, sino pragmáticos. Están muy conscientes del contraste que existe entre gobiernos que reciben grandes sumas para emprender proyectos sin tener planes, y su falta de acceso al crédito para sus comunidades a pesar de tener proyectos y planes.

Pensar la ciudad del futuro significa discutir el tipo de profesionales y técnicos que ayudarán a construirla y administrarla. Latinoamérica necesita profesionales y técnicos distintos, no los planificadores, arquitectos, urbanistas, científicos sociales, médicos y abogados que estamos produciendo, menos aún necesita los cuerpos de tecnócratas tradicionales. Necesitamos gente de éstas y otras profesiones que se conviertan en reales gestores socia-

les, que trabajen con las comunidades y sus organizaciones, que sepan administrar programas y proyectos basados en el mejor uso posible del conocimiento, las habilidades y el entusiasmo de la población organizada, dependiendo poco o nada de conocimientos, equipos y asesores importados. Poco a poco, de esa visión actualmente fragmentada, irá surgiendo una nueva teoría y práctica del urbanismo, de la arquitectura, de la educación, de la sanidad, de la economía y de la ley.

Las herramientas que desarrollamos en el pasado para planificar la ciudad son estáticas. No nos sirven para conducir el crecimiento de ciudades tan dinámicas y empobrecidas. Tampoco nos sirven para renovar y actualizar plantas urbanas que se utilizan cada vez más intensamente, pero que no se renuevan. Aumenta así el divorcio entre los optimistas objetivos de un plan y la realidad. José Luis Romero llamó *ciudad aluvional* al Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando la inmigración europea duplicaba su población cada diez o quince años, transformándola totalmente. Montevideo, São Paulo y Río de Janeiro, entre otras, eran también ciudades aluvionales en esos años. Lima, Manaos, Goiania, Curitiba, Ciudad de México, Ciudad Juárez, y muchas otras, incluso São Paulo y Caracas, son hoy ciudades aluvionales. Lo han sido durante las últimas décadas. ¿Cómo se planifica una ciudad aluvional? No lo sé muy bien. Ciertamente no se gobierna con normas, reglamentos y planes refinados que tratan de guiar un futuro con modelos funcionalistas sin replantearse los hechos.

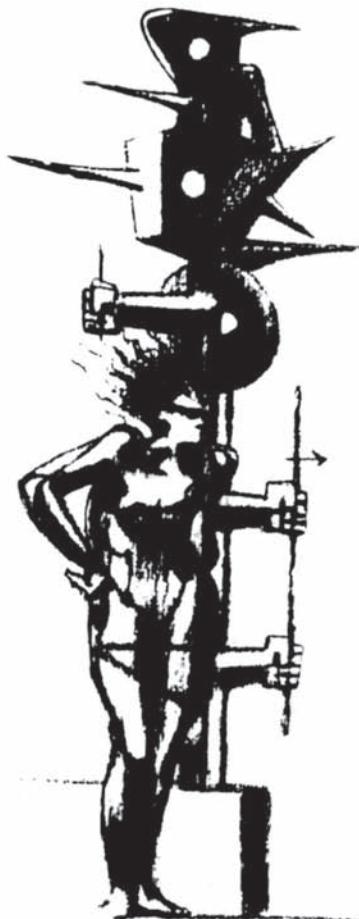
Conclusiones

El problema que primero deberíamos analizar es el de definir la problemática de la urbanización de América Latina y de cada ciudad. Creo que el problema esencial no es un crecimien-

to urbano rápido, sino el crecimiento y el cambio de la población urbana en cada país y en sociedades que están mal preparadas y pobremente equipadas para enfrentar las situaciones que acompañan rápidos cambios urbanos. Dicho en otras palabras, son los cambios demográficos, económicos, políticos y sociales los que exceden a la capacidad actual de las sociedades latinoamericanas para hacer frente a las consecuencias que tales cambios tienen en las economías, las sociedades y el medio ambiente de las ciudades y especialmente en su población de bajos ingresos.

El tema del desempleo y de los bajos ingresos, por lo general declinantes, es prioritario. Quienes conducen las economías de nuestros países se aferran a indicadores macroeconómicos para evaluar su *performance* y se despreocupan de las economías informales que tienen una incidencia cada vez mayor, aunque difícil de precisar, en la formación del producto bruto de cada país y de cada ciudad y en aliviar situaciones de pobreza. En las economías urbanas que se expanden, el sector informal recibe estímulos directos e indirectos. Entre estos últimos, aumenta la demanda de servicios personales y de una variedad de otros servicios –alimenticios, de abastecimiento general, de transporte de pasajeros y cargas livianas, de construcción, entre muchos otros–. Entre los primeros, aumenta la demanda de la producción de pequeños talleres, muchos de ellos trabajando para pequeñas y medianas industrias. La demanda aumenta y se expande físicamente sobre la ciudad. Pero en economías urbanas estancadas o en declinación, con ingresos familiares decrecientes, la vulnerabilidad del sistema capitalista se agudiza y muchas actividades informales alcanzan distintos grados de saturación. Esta última es la situación que parece predominar.

Es previsible que las empresas privadas convencionales jueguen un rol declinante en el futuro y que los Estados se desprendan de sus empresas y



Crucifixión - Carrizosa

de un importante número de funcionarios, pero poco o nada se ha hecho para remover las barreras legales e institucionales que inhiben a los grupos pobres de conseguir ingresos, adquirir o construir una vivienda y tener acceso a la infraestructura y servicios básicos. Las ciudades de América Latina necesitan la mano de obra, los bienes y servicios que proveen los grupos de bajos ingresos, pero la legislación laboral y la legislación sobre la propiedad les niega sistemáticamente el acceso a la tierra en la cual ya viven y a organizar mejor sus empresas informales. Es como si quienes dirigen la economía y la política en cada país negasen la existencia de esas situaciones.

La ciudad que ocupan los ricos puede construirse y renovarse utilizando mejor sus impuestos y evitando el despilfarro, con normas y planes convencionales. La ciudad que auto-

construyen los pobres ocupa municipios periféricos, que son los más débiles económica, política y técnicamente. Son estos municipios los que crecen más rápidamente. Si no se crean mecanismos redistributivos de los ingresos de los municipios ricos a los pobres, o si no se los apoya desde los niveles más altos de gobierno, la situación de los municipios y de la población pobre seguirá deteriorándose.

Ante esta situación han surgido nuevos actores. La ciudad futura será en gran parte planificada, financiada, construida y administrada por gente con bajos ingresos. La expansión futura de la ciudad será influenciada por los lugares donde los pobres puedan obtener tierra y desarrollar sus actividades, legal o ilegalmente. En cualquier ciudad de América Latina, las pequeñas inversiones de muchos residentes pobres, incluido su propio esfuerzo, representan sumas muy superiores a las que invierten en ellas los municipios, los gobiernos centrales y hasta el sector privado reconocido. Respetar y alentar esos esfuerzos sería una estrategia sabia y realista para los gobiernos, sin tratar de cooptar sus organizaciones. En la ciudad del futuro de América Latina, las organizaciones comunitarias, formadas por grupos de bajos ingresos, estarán entre los agentes que le darán forma y una gran dinámica si no son debilitados por los gobiernos y los partidos políticos.

¿Cuáles son los roles de los gobiernos? La ciudad de América Latina mantendrá sus contradicciones y sus redes de interrelación y de diferencias. Si los políticos, los tecnócratas y los empresarios sólo se preocupan de ampliar la infraestructura, regular la construcción en una fracción porcentualmente cada vez menor e iniciar programas y proyectos de renovación urbanas para los distritos consolidados, se olvidarán de la gente y de los ambientes de vida y trabajo, que mal o bien, crean por fuera de los planes y normas oficiales. Si no integran a los pobres, sus barrios y sus actividades,

estarán olvidándose de aspectos esenciales de la vida de una ciudad. La integración de la ciudad legal e ilegal, de las formas capitalistas y precapitalistas de producción es esencial, pero requiere un respeto muy grande para no romper redes de cooperación esenciales entre los grupos de bajos ingresos. Requiere una actitud diferente de los gobiernos. Es un enfoque distinto de la planificación, basado en una honda preocupación humana y en una mayor reciprocidad. Las estrategias que se elijan deben, ante todo, reflejar la variedad de puntos de vista que existen dentro y entre los grupos que forman sociedades tan ricas y heterogéneas. Pero me temo que durante la década de 1990, los gobiernos y las élites dirigentes estarán más interesa-

dos en discutir los aspectos más inmediatos de la economía y del ambiente, que en reflexionar sobre el futuro de nuestros países y de sus ciudades y en crear las precondiciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El futuro de la ciudad de América Latina está comenzando a discutirse, pero de manera tan difusa que por ahora no constituye un aporte real. En cierto modo y a una escala de reflexión y acción aún muy reducida, la discuten algunas organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y centros de investigaciones con contactos discontinuos o escasos entre sí y con pocos contactos con los gobiernos, las agencias internacionales y los medios de difusión. Si no somos capaces de ampliar la discusión

y oír a la gente y analizar la ciudad con ellos, podemos pasar otra generación construyendo y administrando ciudades como en el pasado: los gobiernos, anunciando proyectos grandiosos y un mejoramiento de sus ineficientes burocracias; los pobres, tratando de subsistir mejor, y en el medio, una minoría sacando todas las ventajas de economías que premian la especulación y no la producción. También existirán millones de vidas grises y anónimas, aceptando pasivamente los empleos, viviendas y servicios que les ofrecen. El único problema es que en una generación muchas ciudades habrán duplicado su población y sus problemas no serán doblemente serios, sino tan distintos que no alcanzo a pensar cómo podrán ser. ●



Un modelo de hábitat urbano para el desarrollo de la vivienda de interés social

Affiliados a: Fedevivienda y Camacol

AVP ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA

Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar

Avenida 39 No. 14-66 Tels.: 287 2213
245 3382 Fax: 288 3281 Santa Fe de Bogotá



*Tenemos una empresa:
pensar y construir la democracia.
Participe de ella.*

¡SUSCRIBASE!

Valor del ejemplar	\$ 3.500.00
Suscripción por un año (4 números)	12.000.00
Suscripción por dos años (8 números)	22.000.00
Promoción: números 8 al 15 y 17 (hasta agotar existencias)	15.000.00
Promoción más suscripción por un año	22.000.00
Promoción más suscripción por dos años	33.000.00

Suscríbase, a partir del número 20,
consignando el valor correspondiente a nombre de **Revista Foro**
en la cuenta 03901016-9 del Banco Comercial Antioqueño, sucursal San Martín en Bogotá
y envíe la copia con los siguientes datos:
Nombre, cédula o NIT, dirección, teléfono, ciudad, y a partir de cuál número hace la suscripción.



Ediciones Foro Nacional por Colombia

Cra 3A No. 26-52 - Teléfonos 2840582 - 2433464 Fax: 2861299 Apartado Aéreo 10141 - Santafé de Bogotá



Patricia Cubillos, 1994.